

Ecuador cara y cruz

Del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana

Ecuador cara y cruz

**Del levantamiento del noventa
a la Revolución Ciudadana**

Tomo I

Una década de luchas sociales
(1990-2001)

Kintto Lucas

EDICIONES
CIESPAL

Ecuador cara y cruz

Del levantamiento del noventa
a la Revolución Ciudadana

TOMO I

Una década de luchas sociales
(1990-2001)

Kinto Lucas

CIESPAL

**Centro Internacional de Estudios Superiores
de Comunicación para América Latina**

Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín • Quito, Ecuador

Teléfonos: (593 2) 254 8011

www.ciespal.org

<http://ediciones.ciespal.org>

Noviembre de 2015

Quito, Ecuador

Primera edición

ISBN:Obra Completa: 978-9978-55-129-5

ISBN Tomo 1: 978-9978-55-130-1

Edición

Guillermo Maldonado

Diagramación

Arturo Castañeda Vera

Ediciones CIESPAL, 2015

Los textos publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.



Reconocimiento-SinObraDerivada

CC BY-ND

Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.

*Kintto Lucas me enseñó a querer al Movimiento Indígena
ecuatoriano. Yo aprendí sobre su historia y su realidad por él.*

Eduardo Galeano

*Me gustaría conocer del Movimiento Indígena todo lo que Kintto
Lucas conoce.*

Jorge Enrique Adoum

*Hay algo que siempre me llama la atención en los análisis de Kintto
Lucas: su insistencia de no detenerse en la coyuntura y mirar
estratégicamente.*

Alejandro Moreano

Introducción

No es un libro de historia, es un libro periodístico que hilvana la historia contemporánea. Se puede leer de corrido o por partes. Se puede asumir de forma vertical en orden cronológico o de forma horizontal partiendo de un tema y siguiendo el hilo del mismo en el transcurso de los años para entender mejor el vínculo entre determinados hechos. Es un reportaje pero es también una novela de la realidad. Es una crónica de la historia, pero pueden ser muchas crónicas. Son 25 años de historia, narrados en diversos géneros, que se integran en el relato.

Se cuentan los hechos a veces mediante crónicas, otras a través de entrevistas o análisis. Es la memoria de una época del Ecuador marcada por múltiples cambios, a veces narrada en primera persona, otras en tercera, utilizando distintos tiempos, integrando hechos globales y detalles, en un relato que mantiene el interés permanente del lector.

Será difícil encontrar otra obra en la que se haya sistematizado tanta información de los hechos que marcaron al Ecuador y, en parte, a América Latina, entre 1990 y 2015. Kintto Lucas nos entrega un relato, a veces como protagonista directo, y otras mirando desde el ejercicio periodístico, pero siempre comprometido con el momento histórico que le tocó vivir y asumiendo una mirada estratégica.

Los levantamientos indígenas, las luchas y el papel de los movimientos sociales, el feriado bancario, las consecuencias de la crisis económica, la imposición de la dolarización, las caídas de presidentes, el conflicto colombiano en Ecuador, el Plan Colombia, la Base de Manta, la influencia de Estados Unidos, los intentos de firmar Tratados de Libre Comercio, el quiebre de los partidos políticos tradicionales, los dilemas y los miedos de las izquierdas, el papel de los medios de comunicación, el contexto andino y latinoamericano, la influencia de Hugo Chávez, el surgimiento de Rafael Correa, el bombardeo de Angostura, la Asamblea Constituyente, el intento de Golpe de Estado de 2010, luces y sombras de la Revolución Ciudadana.

La realidad social, política y económica del Ecuador en los últimos 25 años narrada con un estilo ágil y atractivo, para no perder la memoria. Cuatro capítulos integrados en tres tomos que facilitan la lectura. El tomo I recoge el período que va desde 1990 a 2001, relata la irrupción del Movimiento Indígena en la política ecuatoriana y la crisis del neoliberalismo (1990-2001), También desarrolla y analiza el nuevo modelo geoestratégico de Estados Unidos para Ecuador y la región y el cambio geopolítico que se empieza a procesar en América Latina (1998-2001). El tomo II refiere a un momento histórico de muchas contradicciones en el ámbito nacional y regional, en el cual la población ecuatoriana vivió entre la esperanza de un cambio político, económico y social, y la decepción de ver que sus expectativas no se cumplieron (2001-2006). El tomo III describe las luces y las sombras de la denominada Revolución Ciudadana (2007-2015), desde la elección de Rafael Correa, pasando por el proceso constituyente, las contradicciones del proyecto político y las perspectivas de futuro.

En síntesis, este es un ajedrez que nos hace caminar por un tablero en el que la partida no tiene principio ni fin, aunque inicie en 1990 y haga una pausa en 2015. Como este juego nunca termina, el rey y el peón nunca vuelven, ni volverán, a la misma caja.

Este tomo contiene los dos primeros capítulos del libro *Ecuador cara y cruz* –del levantamiento del noventa a la Revolución Ciudadana–, que recogen el período que va desde 1990 a 2001. Relata la irrupción del Movimiento Indígena en la política ecuatoriana y la crisis del neoliberalismo (1990-2001), desarrolla y analiza el nuevo modelo geoestratégico de Estados Unidos para Ecuador y la región y el cambio geopolítico que se procesa en América Latina (1998-2001).

Índice

- 19 **Irrupción del Movimiento Indígena
y crisis neoliberal (1990-2001)**
- 21 Mayo 28 de 1990 (lunes). El Levantamiento del Inti Raimy.
- 23 Mayo 12 de 1994 (jueves). Sixto Durán Ballén
abre la puerta al caos financiero.
- 25 Junio 15 de 1994 (miércoles). Ley Agraria
y nuevo levantamiento.
- 27 Septiembre 20 de 1994 (jueves). De la sucretización a Dahik.
- 30 Marzo 2 de 1995 (jueves). Tiwintza y un final con empate.
- 32 Mayo 17 de 1996 (viernes). La fuerza electoral
del Movimiento Pachakutik.
- 36 Febrero 6 de 1997 (jueves). Balada para un loco
con ‘incapacidad para gobernar’.
- 36 Febrero 8 de 1997 (sábado). Los motivos detrás de la destitución.
- 41 Mayo 20 de 1997 (martes). La comunidad
y el mito constitucional.
- 43 Mayo 31 de 1998 (domingo). Nina Pacari
y la participación indígena en el Congreso.
- 49 Diciembre 3 de 1998. El poder financiero gobierna el Ecuador.
- 49 Marzo 14 de 1999 (sábado). El feriado bancario.
- 52 Marzo 16 de 1999 (martes). Choferes bloquean carreteras.
- 54 Marzo 18 de 1999 (jueves) Movilizaciones en campo y ciudades.
- 56 Marzo 19 de 1999 (viernes).
- 57 Marzo 22 de 1999 (lunes). El sistema financiero en bancarrota.
- 59 Marzo 25 de 1999 (jueves). Resurge el peligro de balcanización.
- 62 Abril 25 de 1999 (domingo). Los plaguicidas causan estragos.

- 64 Abril 27 de 1999 (martes). Iglesia Católica pide condonación de deuda externa.
- 66 Mayo 5 de 1999 (miércoles). La tristeza de los kichwa.
- 69 Mayo 6 de 1999 (jueves). Contaminación en la Amazonia.
- 72 Mayo 10 de 1999 (lunes). ¿Cómo transformar la cangahua en tierra fértil?
- 74 Mayo 12 de 1999 (miércoles). Ecuador capitula en las negociaciones frente a Perú.
- 75 Mayo 14 de 1999 (viernes). Celam también pide condonación de deuda externa.
- 77 Mayo 23 de 1999 (domingo). Escuadrón de la muerte aterroriza Guayaquil.
- 79 Mayo 24 de 1999 (lunes). Una decena de hipótesis para el asesinato de Jaime Hurtado.
- 82 Mayo 25 de 1999 (martes). Asesinato de Hurtado, impune pese a compromiso de Mahuad.
- 85 Junio 18 de 1999 (viernes). Sube el desempleo y el subempleo.
- 88 Julio 1 de 1999 (jueves). Cáncer en zonas petroleras.
- 90 Julio 2 de 1999 (viernes). Sangre indígena en venta.
- 92 Julio 6 de 1999 (martes). Movilización nacional contra Mahuad.
- 95 Julio 9 de 1999 (viernes). Indígenas cortan señales de radio y televisión.
- 97 Julio 10 de 1999 (sábado). Amenaza de levantamiento total.
- 99 Julio 11 de 1999 (domingo). El arte y la lucha de Tigua en la marcha.
- 101 Julio 12 de 1999 (lunes). Militares disparan contra la protesta.
- 103 Julio 16 de 1999 (viernes). Indígenas llegaron a Quito.
- 106 Julio 17 de 1999 (sábado). Indígenas y taxistas llegan a un acuerdo con Mahuad.
- 109 Julio 19 de 1999 (lunes). Indígenas entre logros y protesta.
- 111 Julio 27 de 1999 (martes). Base Militar de Estados Unidos en Manta.
- 114 Agosto 6 de 1999 (viernes). El Comando Sur en la Amazonia.

- 116 Agosto 20 de 1999 (viernes). Entre la deuda externa y la hiperinflación.
- 120 Octubre 15 de 1999 (viernes). Crece acoso de profesores a las estudiantes.
- 123 Octubre 20 de 1999 (miércoles). ¿Devaluación incontrolable o provocada?
- 126 Octubre 22 de 1999 (viernes). Los banqueros de Mahuad.
- 129 Octubre 26 de 1999 (viernes). Mahuad se rinde ante Fujimori en Quito.
- 131 Octubre 27 de 1999 (sábado). Mahuad involucrado por la justicia en escándalo financiero.
- 135 Diciembre 28 de 1999 (martes). ¿Regresará Abdalá Bucaram?
- 137 Enero 4 de 2000 (martes). Mahuad quiere imponer la dolarización.
- 140 Enero 7 de 2000 (viernes). Viene un nuevo levantamiento indígena.
- 143 Enero 9 de 2000 (domingo). Mahuad decreta la dolarización.
- 147 Enero 10 de 2000 (lunes). Campesinos interceptan barco con transgénicos.
- 149 Enero 11 de 2000 (martes). Se instala el Parlamento de los Pueblos.
- 152 Enero 12 de 2000 (miércoles). Exigen revocatoria de los tres poderes.
- 156 Enero 14 de 2000 (viernes). Documento del Banco Central contra la dolarización.
- 159 Enero 15 de 2000 (sábado). Movilizaciones en todo el país.
- 161 Enero 17 de 2000 (lunes). Marcha indígena hacia Quito.
- 163 Enero 18 de 2000 (martes). Mahuad sigue los pasos de Menem.
- 166 Enero 19 de 2000 (miércoles). El país semiparalizado.
- 171 Enero 20 de 2000 (jueves). Indígenas rodean el Congreso.
- 173 Enero 21 de 2000, 10h00 (viernes). Indígenas y militares ocupan el Congreso.
- 175 Enero 21 de 2000, 11h00. Recuerdos de la biopiratería.
- 178 Enero 21 de 2000, 16h00. Piden la renuncia de Mahuad.

- 179 Enero 21 de 2000, 18h00. Mahuad deja la Casa de gobierno.
- 180 Enero 21 de 2000, 20h00. Líderes del levantamiento en Casa de Gobierno.
- 182 Enero 22 de 2000, 1h00. Mandos militares y vicepresidente dan Golpe de Estado.
- 183 Enero 22 de 2000, 12h00. El Congreso consolida el golpe.
- 185 Enero 22 de 2000, 23h00. Indígenas en la clandestinidad.
- 193 Enero 23 de 2000 (domingo). Indígenas rechazan primeras decisiones de Noboa.
- 196 Enero 24 de 2000 (lunes). El triste papel de algunos periodistas.
- 198 Enero 25 de 2000 (martes). Entre la persecución y el diálogo.
- 198 Enero 26 de 2000 (miércoles). Indígenas dispuestos al diálogo.
- 201 Enero 27 de 2000 (jueves). Remezón a los políticos.
- 205 Enero 28 de 2000 (viernes). Reflexión y autocrítica indígena.
- 207 Febrero 15 de 2000 (martes) Proponen un referéndum.
- 210 Febrero 25 de 2000 (viernes) La provocación de las cartas bomba.
- 213 Febrero 28 de 2000 (lunes). Estados Unidos juega su partido en Ecuador.
- 214 Febrero 29 de 2000 (martes). Los indígenas y el poder como concepto colectivo.
- 218 Marzo 1 de 2000 (miércoles). La necesidad de repensar la democracia desde la diversidad.
- 223 Diciembre 24 de 2000 (domingo). El regreso de los guerreros amazónicos.
- 227 **Plan Colombia: un nuevo modelo geoestratégico para la región (1998-2001)**
- 229 Febrero 15 de 2000 (martes). Se inicia el Plan Colombia. ¿Hacia un Kosovo andino?
- 236 Mayo 13 de 2000 (sábado). De las provocaciones a los decires del canciller Moeller.
- 240 Junio 2 de 2000 (viernes). ¿Hacia la reestructuración de las Fuerzas Armadas?

- 244 Junio 22 de 2000 (jueves). Buque de Estados Unidos intercepta pesquero con emigrantes.
- 249 Junio 30 de 2000 (viernes). Justificativos para involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano.
- 253 Julio 20 de 2000 (jueves). Estados Unidos abre la puerta al fuego.
- 259 Julio 22 de 2000 (sábado). En el país de las FARC.
- 263 Julio 23 de 2000 (domingo). Las historias de Manuel Marulanda.
- 266 Julio 24 de 2000 (lunes). Raúl Reyes y los posibles bombardeos a las FARC.
- 276 Julio 27 de 2000 (martes). Las FARC descubren la sociedad civil.
- 283 Septiembre 1 de 2000 (viernes). Hegemonía estadounidense en duda.
- 289 Septiembre 6 de 2000 (miércoles). Los mensajes de Bill Clinton en Colombia.
- 291 Septiembre 20 de 2000 (miércoles). El conflicto colombiano y la irrupción de Venezuela en la geopolítica latinoamericana.
- 297 Octubre 22 de 2000 (domingo). Intento de regionalizar el conflicto no tiene muchos adeptos.
- 304 Octubre 25 de 2000 (miércoles). Las armas del petróleo.
- 309 Octubre 30 de 2000 (lunes). La importancia económica de la coca para América Latina.
- 318 Noviembre 2 de 2000 (jueves). El saldo de la guerra en Colombia.
- 324 Noviembre 7 de 2000 (martes). El reto de conquistar la paz.
- 329 Noviembre 9 de 2000 (jueves). Ecuador, un trampolín para la guerra.
- 333 Noviembre 14 de 2000 (martes). Manta, ojos y oídos del Plan Colombia.
- 338 Noviembre 16 de 2000 (jueves). Primeros efectos del Plan Colombia.
- 346 Noviembre 20 de 2000 (lunes). ¿Paramilitares en Sucumbíos?
- 349 Noviembre 27 de 2000 (lunes). ¿Limosnas a Ecuador para involucrarse en el Plan Colombia?

Irrupción del Movimiento Indígena y crisis neoliberal (1990-2001)

Mayo 28 de 1990 (lunes). El Levantamiento del Inti Raimy. Representantes de organizaciones indígenas y de organizaciones populares de Quito se tomaron la Iglesia de Santo Domingo y enviaron una carta al Presidente de la República, Rodrigo Borja, estableciendo demandas sobre el derecho a la tierra y críticas al modelo económico. En principio, el hecho pasa casi inadvertido en los medios de comunicación que no entienden de qué se trata. El gobierno tampoco entiende, acordona la iglesia con militares e impide la comunicación hacia el exterior. A lo largo de los años que vendrán, ni los medios ni los sectores políticos y sociales de izquierda y derecha alcanzarán a entender al Movimiento Indígena. Esta nueva forma de lucha social inaugura una década de protestas contra el neoliberalismo en su momento más fuerte, y cuando la clase obrera se debilita aceleradamente.

Una semana después de la toma, se inicia el primer levantamiento indígena de la historia contemporánea. Unidos en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) creada pocos años antes, ocuparon carreteras, entraron en latifundios, detuvieron soldados, no sacaron productos al mercado, tomaron oficinas públicas, realizaron movilizaciones y concentraciones en pueblos y ciudades. Como reacción inmediata el Ejército salió a la calle, hubo algunos enfrentamientos, penetró en las comunidades, golpeó y baleó defendiendo a los terratenientes, a pesar de que el presidente socialdemócrata, Rodrigo Borja, se muestra partidario del diálogo. Además de transformarse en un hecho simbólico porque es la irrupción indígena en la política moderna, este levantamiento provoca un remezón interno en las Fuerzas Armadas que inician un proceso de acercamiento con el pueblo indígena a partir de un trabajo social de sus oficiales y tropa más vinculado a la comunidad.

El Levantamiento del Inti Raymi, denominado así por las fechas en que se realiza, demuestra una capacidad política y organizativa del Movimiento Indígena que provoca asombro en Ecuador y otros países de América Latina.

La semana del 4 al 8 de junio, la Sierra ecuatoriana se mantuvo paralizada. Para los medios de comunicación, algunos voceros políticos de

la derecha, los hacendados y agroexportadores, se trata de una movilización organizada por el ‘comunismo y la subversión internacional’ que se escondía detrás de sectores vinculados a la teología de la liberación.

Borja, no podía entender, según sus declaraciones, cómo los indígenas se levantaban en contra del gobierno que más había hecho por ellos. Creía que la ‘entrega’ de títulos de propiedad a comunidades ancestrales que siempre habían habitado esos territorios, era una demostración. Sin embargo, la Conaie ponía en el centro del debate nacional, el modelo económico neoliberal que se reflejaba en lo agrario. A pesar de la confusión inicial, el mandatario aceptó dialogar sobre las reivindicaciones indígenas.

Monseñor Alberto Luna ha estado vinculado a las luchas indígenas y sociales del Ecuador. Con Monseñor Leonidas Proaño, el ‘Obispo de los Indios’, inician dentro de la Iglesia Católica una práctica comprometida con los pobres. Con su inmenso compromiso, Luna explica que:

El Movimiento Indígena ecuatoriano en los meses de mayo-junio de 1990 dignifica la historia de lo indígena en la sociedad. A la autenticidad mostrada, que se manifiesta en la identidad entre el ser humano y la tierra, la persona con el paisaje, el individuo con la comunidad y la comunidad con el universo, hay que añadir su lucha por el reconocimiento como pueblos diferentes. Es un movimiento de carácter social, con una organización de base de profundo sentido humano y cultural, que mantiene la fuerza de la unidad en la diversidad.

Así, pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, y cuando muchos sectores de izquierda tradicional todavía lloran el fin del ‘socialismo real’, un movimiento de nuevo tipo demuestra que la historia no ha terminado y hay muchos motivos para seguir luchando.

Pero la historia del Movimiento Indígena ecuatoriano se remonta a las primeras rebeliones contra la conquista, y aparece Rumiñahui que dirigió la resistencia contra la invasión española en 1535, o Jumandi que lideró la rebelión de los nativos de la Amazonia en 1578. Ya en época republicana se recuerda a Daquilema, que en 1871 inició el levantamiento de

toda la provincia de Chimborazo, en la Sierra central, contra el gobierno conservador del presidente Gabriel García Moreno. Pero es en el siglo XX cuando los indígenas de distintas regiones del Ecuador comienzan a integrarse, y en las primeras décadas se destacan mujeres como Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña, quien creó el primer sindicato agrícola del país, dirigió la primera huelga campesina indígena en 1944, participó en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios e inició las escuelas campesinas en las que por primera vez se enseñó en kichwa. Por esa 'osadía' fue perseguida y encarcelada.

De 1944 a 1990, tuvo que pasar más de medio siglo para que el Movimiento Indígena volviera a irrumpir con firmeza en la vida nacional. Dos años después, en octubre de 1992, con la consigna "No bailaremos sobre la tumba de nuestros abuelos", los indígenas caminaron desde distintos puntos del país para recordar en Quito los '500 años de resistencia indígena'. De allí en más, el Movimiento Indígena ecuatoriano se convierte en el movimiento social de mayor trascendencia en Ecuador y uno de los mejor organizados de América Latina. El único capaz de paralizar totalmente el país de un día para otro, y referencia obligada en la vida política ecuatoriana. La realidad plural del país se manifiesta cuando el indígena surge como actor importante en la vida sociopolítica del Ecuador. Se asume que el 'otro' existe y que tiene sus diferencias y derechos.

Mayo 12 de 1994. Sixto Durán Ballén abre la puerta al caos financiero.

Sin mucha difusión, el gobierno de Durán Ballén sienta las bases para una futura crisis financiera al aprobar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que suplantaba a la Ley General de Bancos de 1974 que mantenía ciertos controles a los bancos. Para derogarla utilizaron el argumento de que no precautelaba los intereses del sector bancario y debía adecuarse a la globalización y la liberalización internacional.

Era necesaria una Ley dedicada a los banqueros, y así ocurrió. La Ley de Durán Ballén y Dahik liberalizó las tasas de interés, permitió la libre circulación de capitales y eliminó la facultad de intervención de la

Superintendencia de Bancos y Seguros en las entidades financieras y estableciendo su autorregulación.

Una de las causas principales de la crisis bancaria futura, será la falta de control de la Superintendencia en el otorgamiento de créditos vinculados, especialmente a compañías fantasmas que en muchos casos eran propiedad de los mismos banqueros o de sus familiares. Según la reseña histórica del propio Banco Central del Ecuador, publicada en su página web, a principio de la década del noventa “con la tutela del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial”, se tomaron medidas acordes a la época para reorientar la economía “bajo un nuevo paradigma económico”, refiriéndose al neoliberalismo. Agrega que en mayo de 1992 se expidió la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado que buscaba “darle ‘autonomía’ al BCE”. Además, lo autoriza a operar como prestamista de última instancia del sistema financiero. “A la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de 1992, se suma la Ley General de Instituciones Financieras de 1994 y la Constitución de 1998, que juntas completaron la autonomía del BCE y la liberalización de los mercados financieros”, afirma la reseña.

Pero la historia del sistema financiero en el mundo, en América Latina y en Ecuador en particular, tiene muchos lados oscuros. Durante los años veinte, por ejemplo, las acciones de determinados bancos, luego de lograr poder político y económico, generaron una grave crisis que trajo como consecuencia la protesta social y posterior represión que tuvo uno de sus puntos máximos en la masacre de trabajadores del 15 de noviembre de 1922. Ese período, conocido como la ‘Plutocracia bancaria’, desembocó finalmente en la Revolución Juliana, de julio de 1925, que a su vez provocó la fundación del Banco Central en 1927 y de la Superintendencia de Bancos en 1928. A fines de la década del sesenta se produce una crisis en el Banco de Guayaquil. En los años setenta la crisis es en el Banco La Previsora. Mala cartera crediticia, préstamos vinculados, posterior salvataje asumido por el Estado y reprivatización. En la década del ochenta fueron el Banco de Descuento y otras instituciones. Todos estos casos se dieron a consecuencia del mal manejo de los banqueros,

pero las pérdidas fueron asumidas por el Estado. Nadie fue sancionado y se transformará en antecedente de la crisis bancaria que ocurrirá a fines de la década del noventa.

Con la Ley de Instituciones Financieras aprobada, el gobierno intentará aprobar la Ley Agraria que busca imponer el neoliberalismo en el campo ecuatoriano, pero el Movimiento Indígena no lo permitirá.

Junio 15 de 1994 (miércoles). Ley Agraria y nuevo levantamiento.

Cuatro años pasaron del Levantamiento del Inti Raimy y se produce otro momento de quiebre en la relación Movimiento Indígena-poder, con la aprobación de una Ley Agraria promovida por sectores terratenientes, la derecha liderada por Jaime Nebot, y asumida por el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik. La propuesta central establece el libre mercado de tierras, incluidas las comunitarias, y la privatización de los recursos naturales, principalmente del agua. En respuesta, la Conaie realiza un segundo levantamiento. Entre el 15 y el 24, la movilización paraliza la Sierra, los mercados de las principales ciudades quedan desabastecidos, se agota el combustible y escasea el gas de uso doméstico; algunas industrias quedaron sin insumos. El gobierno retrocede y se inicia un diálogo hasta que finalmente acepta modificar los términos de la ley según las reivindicaciones indígenas.

El sociólogo Andrés Guerrero, uno de los mayores investigadores del proceso indígenas resalta la estrategia indígena de movilización-diálogo que será permanente en la actuación de la Conaie. En una crónica relata esas conversaciones:

Apenas normalizada la vida del país, levantadas las barricadas y limpiadas las carreteras, las imágenes y las palabras que difunden los medios de comunicación captan a la opinión pública [dice Guerrero en una parte de su crónica]. Las reuniones cotidianas del grupo de negociación, bautizado de 'comisión mixta' en un lapsus de inconsciente de ultra realismo político puesto que resalta un corte étnico (blancos-indios en lugar de gobierno-Conaie), se prolongan casi un mes. El teatro de la acción se desplaza de las carreteras a la capital: día tras día, la televisión, las radiodifusoras y las

primeras planas de los periódicos siguen los meandros de los debates hasta entrada la noche; se crea expectativa. Crónicas, entrevistas e imágenes impregnan a los espectadores, radioescuchas y lectores: actualizan en la opinión pública el acervo de esquemas de percepción sobre 'el indio'. En efecto, en las pantallas los ecuatorianos observan primero un indígena saraguro en poncho y con sombrero que sube la escalinata del palacio presidencial: es el Dr. Luis Macas presidente de la Conaie. Días luego descubren a una mujer: es la Dra. Nina Pacari que le substituye (un gambito de la Confederación) y conduce la ardua negociación hasta el final.

Por su parte el sociólogo indígena Floresmilo Simbaña, si utilizamos el lenguaje del ajedrez, "esta coyuntura dejó en tablas el conflicto entre el Movimiento Indígena y las fuerzas neoliberales del agro, junto al capital internacional". Además argumenta que hasta ese levantamiento, la dinámica política del Movimiento Indígena por el conflicto de la tenencia de la tierra y territorios provocó el enfrentamiento directo con el capital nacional y el Estado. Explica también que cuando nace la Conaie en 1986, como representante nacional de las doce nacionalidades indígenas existentes en el país, lo hace asumiendo la herencia sociopolítica y orgánico-estructural de las luchas del mundo rural que enfrentó las dos 'reformas agrarias' de 1964 y 1973.

A partir del levantamiento de 1990 asume la lucha antineoliberal en el marco general del campo popular, asegura Simbaña. Hasta mediados de los años noventa la Conaie despliega sus fuerzas para resolver los conflictos de tierras y territorios que venían desde los años sesenta; todos o casi todos entrabados en largos, costosos y conflictivos procesos sociales y judiciales. En medio de un proceso extendido y sostenido de movilización y negociación la mayoría de estos conflictos se fueron resolviendo en diferentes dimensiones y condiciones.

El modelo neoliberal se va consolidando y empieza a quedar en evidencia la profunda crisis económica de orden estructural, pero sus bases fueron implantadas años antes, durante el gobierno de Oswaldo Hurtado.

Septiembre 20 de 1994 (jueves). De la sucretización a Dahik. Para convencer a los demás preparan un buen discurso, dicen que la burocracia atormenta, que las empresas del Estado dan pérdidas, que es necesario modernizarnos. Crean lindas palabras en el interior de sus pensamientos, las adornan y luego les dan vida a través de todos los medios de comunicación, que son muchos. Y esas palabras se van transformando en verdades indiscutibles.

Su paso se hace firme y se suceden privatizaciones de las empresas públicas a lo largo de América Latina. Telefónicas, de agua potable, de electricidad, petroleras, puertos, aeropuertos, carreteras, seguridad social, líneas aéreas, seguros, salud, educación y más. Donde no se puede privatizar directamente primero se dividen en empresas regionales para que sea más fácil privatizar después. Donde la resistencia impide llegar a la privatización, se facilita la entrada de grandes empresas extranjeras en la misma área para que finalmente asuman el control del mercado.

Las teorías de Milton Friedman están siendo llevadas a la práctica, y sus seguidores se ríen. Asumen incluso una postura arrogante, que como toda postura arrogante finalmente se volverá contra ellos. Como todo discurso único, su discurso es monótono.

La idea es mostrar que con la venta de determinadas empresas entraría mucho dinero al Estado y se podrían hacer escuelas, hospitales y mucho más. Tratan de aparecer convincentes y repiten que la única salida es achicar el enorme monstruo del Estado. Y lo repiten una y otra vez por los canales de TV, las emisoras de radio y los diarios y periódicos autodenominados independientes. En realidad, los medios de comunicación también privatizaron la palabra con espacio solo para un sector dominante. Son los nuevos videntes-visionarios de fin de siglo. Están en todas partes, en todos los países de Latinoamérica, visten parecido, se muestran eficientes y sonríen ante las preguntas de los periodistas. Hablaban de la inflación, el déficit fiscal, la renegociación (siempre favorable) de la deuda externa y las privatizaciones como quien habla de uno mismo. Se conocen todos los números y las matemáticas, pero se olvidaban de la gente. No son personajes del cine (aunque sí de la TV), son los 'modernizadores'.

A pesar de tener el monopolio del discurso y de la difusión de los símbolos, la gente no se convence totalmente. Por su parte, los movimientos sociales que ya le pasaron por encima a los partidos y organizaciones políticas, enfrentan con su lucha en la calle el accionar, el discurso y los símbolos de estos sectores dominantes. Las políticas neoliberales y el 'libre mercado' llevarán también a una profunda crisis a la región, que profundizará las contradicciones sociales, pero al menos por un tiempo, el 'Dios Mercado' será el gran triunfador. En Ecuador Alberto Dahik que en 1992 fue elegido vicepresidente en la fórmula con Sixto Durán Ballén, es y será el mejor alumno en aplicar las teorías neoliberales.

Sin embargo, fue Oswaldo Hurtado el que, años antes como presidente, inició el proceso de implantación del modelo neoliberal en el país y sentó las bases para las futuras crisis económicas del país. Sus medidas tuvieron como objetivo principal ubicar a Ecuador dentro los países que cumplían las normas establecidas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial. En ese sentido, Hurtado promovió algunas bases legales que abrieron la puerta al caos financiero. La denominada "sucretización de la deuda externa privada" fue uno de los ejemplos fundamentales para entender su política económica, mientras que la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas explica su política universitaria. Con la 'sucretización', Hurtado traspasó las deudas en dólares de grupos económicos privados, a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador. De esa forma el Banco asumió el compromiso de pagar en dólares a los acreedores internacionales, mientras los deudores le pagaban en sucres. Así las deudas externas privadas pasaron a ser parte de la deuda pública externa. También fue denominado por algunos economistas un proceso de socialización o estatización de las deudas privadas.

Como otras medidas aplicadas en torno al endeudamiento externo:

La 'sucretización' fue una imposición externa aceptada de buena manera por el gobierno de Hurtado. Como consecuencia del proceso de negociaciones de la deuda externa, iniciado el año 1982, los acreedores plantearon la transformación de las deudas externas privadas en deuda pública [argumenta el economista Alberto Acosta en un artículo sobre el tema]. Así

se cumplió una de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, que argumentaban –no solo para el caso ecuatoriano– que el Estado es mejor garante para atender estos créditos que los particulares. Esto configura otro ejercicio de colusión abusiva y dolosa, en beneficio de los acreedores privados.

Señalaba además que “la ‘suetización’ benefició a un reducido número de personas naturales y jurídicas, muchas de las cuales han sido actores de primera línea en un complejo y añejo proceso de ‘privatización’ del Estado” y que “en el Estado, como parte de este proceso social de larga data, han intervenido directa o indirectamente, en calidad de actores y de beneficiarios, los grupos financieros más poderosos”. De esa forma a partir de 1983, la mayoría de la deuda externa privada ecuatoriana pasó a ser deuda pública, o sea de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Con esta medida Hurtado abrió la puerta al caos financiero. Hurtado favoreció a grandes empresas privadas y bancos en detrimento de toda la población. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República en el gobierno de Hurtado, aseguró que la ‘suetización’ tenía una ‘naturaleza fraudulenta’ y “se convirtió en un mecanismo de impúdico beneficio para decenas de personas dada la falta de control del Banco Central una vez que se procedió a su aplicación”.

El gobierno León Febres Cordero continuó el trabajo de Hurtado ampliando las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa ‘suetizada’. Los US \$ 1.371 millones suetizados en 1983 y 1984, se transformaron para el Estado en US \$ 4.462 millones, de los cuales US \$ 1.557 millones obedecen a pérdidas por diferencial cambiario en la conversión de la deuda contraída en divisa extranjera a sucres, moneda nacional de la época. US \$ 1.238 millones fueron pagados: US \$ 575 millones por amortización y US \$ 662 millones por intereses, durante el período 1983-94. Los US \$ 1.371 millones restantes correspondían al saldo de capital e intereses atrasados registrados en 1994. Como no podía ser de otra manera, tras el beneficio recibido con la suetización, varios representantes de la banca y empresarios señalaron que la medida de Hurtado fue “correcta, adecuada y sabia”. A la generosa ayuda de Osvaldo Hurtado

a los grupos económicos que se beneficiaron con la 'sucretización', se sumó luego otra de León Febres Cordero. Durante su gobierno el Banco Central del Ecuador autorizó la compra de cuentas en divisas, en particular al sistema financiero. Los grupos privados, que habían comprado papeles de la deuda externa ecuatoriana con un importante descuento en el mercado, los convirtieron en sucres al 100%. Por ejemplo, quien compró un papel de deuda ecuatoriana valorado en US \$ 100 mil, con un descuento de un 70%, pagó US \$ 30 mil al acreedor internacional, pero lo transfirió al Banco Central en el 100% de su valor en sucres. Pero además, el dinero para realizar la compra de los papeles era prestado por el Banco Central. Era la privatización del estado sin necesidad de privatizarlo. Otro gran negocio para unos pocos, que usufructuaban del Estado.

Marzo 2 de 1995 (jueves). Tiwintza y un final con empate. Como consecuencia del conflicto entre Ecuador y Perú se utilizó mucho la palabra soberanía. La utilizaron en Perú para justificar la agresión a Ecuador y la utilizaron en Ecuador para justificar la resistencia del Ejército ecuatoriano a los ataques de las fuerzas peruanas. ¿Pero qué es la soberanía? ¿Qué verdad o mentira define esa palabra que tanto se ha menospreciado durante la historia de la América? ¿Para qué sirve la soberanía en el libre mercado? ¿Cómo se la defiende y cómo se la olvida? ¿Qué intereses hay detrás de ella? ¿Significa lo mismo para ricos que para pobres? ¿Hay una educación para la soberanía? Estas y otras interrogantes me surgen en aquellos momentos. ¿Se respeta la soberanía cuando se asume el modelo neoliberal? ¿Se hace una guerra para defender la soberanía cuando se privatiza todo lo que pueda dar ganancia a lo largo de la América entregando áreas importantísimas de la economía nacional a capitales extranjeros como ocurrió en Argentina con la telefónica, la empresa aérea, etc.? ¿Se quema la selva con bombardeos y lanza llamas pensando en la soberanía, cuando se venden a precios de bananas el petróleo, los puertos, las telecomunicaciones, áreas estratégicas para la sobrevivencia como países? ¿Se convocan pueblos para defender la soberanía, cuando millones de personas son excluidas del mercado que tanto defienden? ¿Se reivindica la soberanía privatizando

la educación? ¿De qué soberanía hablan los gobernantes ecuatorianos y peruanos imponiendo el modelo de Milton Friedman?

Si bien el ‘socialismo real’ fracasó en Europa, no es menos cierto (muchos lo dijeron antes) que en América Latina fracasó el ‘capitalismo real’. Y sigue fracasando. Los gobiernos latinoamericanos –al decir de Mario Benedetti– no se atrevieron ni siquiera a insinuar una alternativa al capitalismo salvaje de Estados Unidos.

Desde mucho antes de la caída del muro de Berlín, el capitalismo norteamericano había sido el paradigma impuesto, la fórmula dominante en la región. ¿Entonces, de qué soberanía hablábamos? ¿Qué dignidad había, cuando a lo largo de la historia de América Latina la aplicación constante –por medio de los frentes económicos– de las recetas venidas de Estados Unidos, habían dejado secuelas sociales como las poblaciones marginales (favelas, callampas, villas miseria, cantegriles), los altos índices de mortalidad infantil, la deficiente atención de la salud pública que casi dejó de existir, los secuestros y asesinatos de niños mendigos, el creciente abismo entre ricos y pobres, la degradación ambiental? “Ha sido el capitalismo y sus filiales quien nos arrastró a estas desgracias, a través de la implacabilidad económica y el insolidario pragmatismo. Si la Europa del este fue el espejo (hoy roto en mil pedazos) del ‘socialismo real’, la dependiente y sojuzgada América Latina es el vidrio azogado que indeliberadamente refleja la índole del ‘capitalismo salvaje’”, dice Benedetti. Yo le agregaría que sus gobiernos reflejan la índole del olvido permanente de la soberanía, una ‘soberanía de papel’. Y no hay bombazos ni lanza llamas que destierren esta realidad, sino todo lo contrario... Y finalmente, ni García Márquez hubiera imaginado un final como el que tuvo el conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. Con ‘dos’ Tiwintza. Un final con ‘empate’. Un final digno del mejor realismo mágico. Pero esta realidad novelesca no solo rodea el final. En Méndez (donde estaban apostados periodistas nacionales y extranjeros) sucedieron muchos hechos garcíamarquianos. Mientras en la televisión se hablaba de los shuar ecuatorianos que ‘defendían la patria’, la radio de la Federación Shuar, en sus transmisiones escuchadas en ambos lados de la frontera, pedía disculpas a sus hermanos de Perú por estar comba-

tiéndolos (algo así como decir ‘perdón por matarte’). Los camarógrafos y fotógrafos, como no podían ir a los destacamentos donde se desarrollaba la guerra, hacían que los conscriptos se arrastraran por el pasto del parque o se pusieran en ‘pose de combate’ para hacerles tomas, eso era lo que luego salía por TV ‘desde algún lugar de la frontera’; y el tercero es que mientras la creatividad de la gente buscaba formas de contrabando que le permitieran llevar tanques de gas del Ecuador a Perú por distintos puntos fronterizos, el cura de Méndez pedía por el altoparlante de la iglesia “por favor hermanos, ahorremos el gas”. Claro que lo más jocoso, sino fuera triste, fue ver a Fujimori mojóndose los pies en el río y diciendo que “Tiwintza, destacamento recuperado por el Ejército peruano estaba a pocas horas de ahí”, mientras las Fuerzas Armadas ecuatorianas llevaban a los periodistas de todo el mundo para ver el verdadero Tiwintza.

En todo caso, mientras el conflicto se desarrollaba, Sixto Durán Ballén salía al balcón a decir “ni un paso atrás” y Alberto Dahik se movía en las sombras para implantar con más fuerza el modelo neoliberal, la gente sobrevivía, así sea contrabandeando. A lo largo de la historia la gente se da modos para sobrevivir y resistir, aunque siempre le toque cargar con la piedra más pesada. ¿Cuál sería la piedra que pedirían a los pueblos de Perú y Ecuador que sostengan terminado el conflicto para implantar definitivamente las bases del modelo neoliberal? En todo caso, como la piedra de la guerra, la de la postguerra y las privatizaciones también sería cargada por los más humildes. El proceso electoral de 1996 traerá algunas sorpresas y será el inicio de la crisis en los partidos tradicionales.

Mayo 17 de 1996 (viernes). La fuerza electoral del Movimiento Pachakutik. El poder de convocatoria y la creciente influencia que fue tomando el Movimiento Indígena en sectores no indígenas hizo madurar la idea de participar electoralmente. Las discusiones sobre el tema en las comunidades duraron más de un año entre 1995 y 1996. Hubo ciertas dificultades en ponerse de acuerdo debido a que había posiciones encontradas. Desde quienes querían transformar a la Conaie en un partido político, hasta los que no estaban de acuerdo en embarcarse en

las elecciones porque se podía desdibujar el papel del Movimiento Indígena y dejar de lado su lucha centrada en el trabajo organizativo desde las comunidades, la toma de tierras, la reivindicación cultural y étnica, y los levantamientos como medidas de protesta. Luego de grandes debates y discusiones se decidió participar en el proceso electoral a partir de una estructura organizativa que pusiera de manifiesto la alianza de los sectores indígenas con otros movimientos sociales del campo y la ciudad.

Así, en las elecciones de 1996, nació el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que en principio presentaría candidatos a escala local y a diputaciones provinciales. Luego, las organizaciones sociales y las propias comunidades indígenas propusieron concurrir a la diputación nacional (hasta 1998 el Congreso unicameral incluía diputados provinciales que duraban dos años y nacionales que duraban cuatro como el presidente electo). Para eso había que participar también en la elección presidencial y como el movimiento no era un partido político, para cumplir con los requisitos electorales e inscribir las candidaturas nacionales debía presentar 100.000 firmas.

Los candidatos se nombraron luego de una larga Asamblea y las firmas se juntaron en una semana, algo sin precedentes en Ecuador. Las organizaciones sociales propusieron como candidato a la presidencia al periodista Fredy Ehlers, quien tenía una trayectoria vinculada a sectores progresistas, y como primer candidato a la diputación nacional a Luis Macas, presidente de la Conaie y uno de sus fundadores.

Consultado sobre las razones del Movimiento Indígena para participar en esas elecciones, Macas señala que era una forma más de lucha. “Para las organizaciones hay varias formas de pelear por sus reivindicaciones –argumentó–. Están los levantamientos, a los que recurrimos cuando son necesarios, la educación bilingüe kichwa-español para rescatar nuestro idioma y las elecciones son una forma más de lucha. Hasta ahora no se había visto la necesidad de participar electoralmente porque el proceso de organización no estaba consolidado. Ahora decidimos enfrentar el reto”.

Macas explica que la esencia de Pachakutik es la unidad en la diversidad: “Dentro de él están los trabajadores de la ciudad, los campesinos no indígenas, los ecologistas, los sectores afroecuatorianos, los indígenas”.

En las elecciones Ehlers queda tercero tras el populista Abdalá Bucaram, y el derechista Jaime Nebot. Macas logra aglutinar el voto indígena, un sector que generalmente no concurría a votar por no sentirse representado y el de los sectores progresistas y de izquierda de las ciudades. Su campaña electoral fue puerta a puerta recorriendo comunidades y barrios. Las dificultades económicas no permitieron a Pachakutik hacer propaganda televisiva y optó por la publicidad en radio. Sin embargo obtuvo el 10% de la votación.

Según cifras extraoficiales, en Ecuador, unos 3 millones de personas son indígenas, pero muchos que viven en las ciudades no se reconocen como tales. La mayoría viven en áreas rurales y se reconocen como pueblos y nacionalidades. La principal es la kichwa que habita en la región de la Sierra y la Amazonia u Oriente. Las nacionalidades awa, chachi, epera y tsáchila residen en la costa del océano Pacífico. Las cofán, siona, secoya, huaorani, achuar, shuar en la Amazonia.

Los indígenas se basan en determinados valores ancestrales, como al modelo comunitario y solidario que se practica hace cientos de años. Cuando una familia de la comunidad está en situación difícil, todos se unen para ayudarla. Además, reivindican la ‘minga’, como denominan el trabajo conjunto para construir una carretera o una casa o cosechar. Por eso señalan que su movimiento está en ‘minga por la vida’. En cuanto a la experiencia electoral, destacan la gestión de las alcaldías. Una característica son las asambleas municipales, donde representantes de las comunidades analizan el presupuesto, priorizando necesidades y realizando un control y seguimiento de las inversiones.

La Constitución de 1998 reconoció los derechos colectivos de los pueblos y el carácter pluriétnico y multicultural del país. Junto con las reformas constitucionales se aprobó el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Los principios básicos del convenio son el respeto a las culturas y a las formas de vida y de

organización tradicionales de los pueblos y su participación efectiva en las decisiones que les afectan.

Según el Convenio 169, los jueces que traten infracciones cometidas por indígenas en juzgados comunes tienen la obligación de acudir a normas, costumbres y a la cultura indígenas para que sirva de atenuante a la hora de sentenciar. Además, se asume que los pueblos indígenas pueden, a través de sus autoridades, ejercer funciones jurisdiccionales, resolver conflictos y administrar la justicia basados a su tradición comunitaria. Fue necesario armonizar las leyes y establecer niveles de competencia para que no se interpongan o contradigan las leyes indígenas a las nacionales.

También se reconoce el uso oficial de los idiomas. Si un indígena debe hacer un trámite en una oficina pública y no sabe el castellano, los funcionarios tendrán que atenderlo en su idioma. “Hemos tenido avances en lo cultural y político, pero en lo económico seguimos postergados. En el marco de una orientación plural del Estado, se debe reorientar los fondos públicos hacia la economía de los sectores populares y los pueblos indígenas”, comenta Miguel Lluco, que como diputado de Pachakutik promovió la ratificación del Convenio en el Congreso.

Pachakutik se ubica a la izquierda del espectro político, según Lluco, que de inmediato aclara que la organización no tiene nada que ver con la izquierda tradicional, porque esta siempre tuvo su mirada fuera del país y no entendía al Movimiento Indígena. “Somos pueblos que estamos en lucha por consolidar una propuesta distinta que es la construcción del estado Plurinacional”, asegura.

El pedido del Ecuador como país plurinacional ha sido interpretado por algunos sectores como la división geográfica en varios Estados. Los dirigentes dicen que el Estado Plurinacional es uno solo, con pluralidad jurídica en los territorios donde están asentados las nacionalidades indígenas y su derecho a decidir política, económica, cultural y socialmente. “No se desestructura el territorio nacional, pero otorga a nuestros pueblos otros niveles de decisión y autonomía, como establece el Convenio 169”,

comenta Llucó. En el camino el Movimiento Indígena se encontrará con las peripecias de Abdalá Bucaram.

Febrero 6 de 1997 (jueves). Balada para un loco con ‘incapacidad para gobernar’. Ayer las calles de las diferentes ciudades ecuatorianas fueron tomadas por la gente, las carreteras fueron cortadas por los indígenas, catedrales y edificios estatales fueron ocupados por los sectores populares y todo el Ecuador paró en una protesta sin precedentes en este país andino. Era el comienzo de la caída del presidente Abdalá Bucaram.

A la paralización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabajadores, se sumaron rápidamente los partidos políticos de oposición, las cámaras de industria y comercio y la mayoría de los alcaldes del país, entre ellos los de Quito (Jamil Mahuad) y Guayaquil (León Febres Cordero), principales ciudades ecuatorianas. Fue la primera vez en más de cincuenta años que fuerzas políticas de distintas tendencias se unieron para exigir la salida de un presidente. Se dice que solo en Quito más de un millón de personas participaron en los caceroleos y movilizaciones organizadas en los distintos barrios. En el medio rural, las carreteras del país fueron obstaculizadas por miles de indígenas y campesinos que no permitieron el tráfico de vehículos ni la salida de productos agrícolas a los mercados, por lo que las ciudades se vieron desabastecidas. Tras esa demostración popular, hoy el Congreso Nacional (Unicameral), destituyó a Bucaram por “incapacidad mental para gobernar”, invocando el artículo 100 de la Constitución, que permite tal medida con mayoría simple. De esa manera, los legisladores de oposición con 44 votos destituyeron al presidente y nombraron de interino hasta 1998, a Fabián Alarcón, quien hasta el momento era presidente del Congreso, aunque su partido tenía solo dos votos. Tras la resolución, la vicepresidenta, Rosalía Arteaga que desde el comienzo del nuevo gobierno estuvo enfrentada con Bucaram, se autoproclamó nueva presidenta de la República por considerarse sucesora legal del presidente. Por su parte Abdalá Bucaram se negó a reconocer la resolución del Congreso

pero no intentó disolver debido a que no contaba con el respaldo total de las Fuerzas Armadas. Desde ese momento, y al mejor estilo del realismo mágico, Ecuador tenía tres presidentes, aunque ninguno tenía poder.

Dentro de la confusión creada, se esperó un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, en apoyo de uno de los tres “presidentes”. Sin embargo, los militares a través del Jefe del Comando Conjunto, general Paco Moncayo, señalaron que no podían “estar con ninguna de las partes, ni asumir el poder, porque sería Golpe de Estado”. La resolución de las Fuerzas Armadas mostró la división existente en sus filas. Una rápida definición podía provocar un enfrentamiento en su interior y la pérdida del prestigio ganado tras el último conflicto armado con Perú.

Ante la falta de decisión de los militares, los sectores opositores a Bucaram, que iban desde la derecha (Partido Social Cristiano de Febres Cordero y Jaime Nebot) hasta la izquierda (Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, que agrupa a todas las organizaciones sociales y al Movimiento Indígena), pasando por la Democracia Cristiana de Oswaldo Hurtado y Jamil Mahuad e Izquierda Democrática del ex presidente Rodrigo Borja, convocaron a los habitantes de las distintas ciudades a mantenerse en las calles.

Febrero 8 de 1997 (sábado). Los motivos detrás de la destitución. Ayer en Quito, unos cien mil manifestantes marcharon hacia las cercanías del Palacio de Carondelet (Casa de Gobierno), y fueron reprimidos por el Ejército con bombas lacrimógenas, provocando varios heridos. A las 20h00 Bucaram y todos sus colaboradores directos dejaron la Casa de Gobierno y viajaron rumbo a Guayaquil. Los manifestantes estallaron en un grito de júbilo. Sin embargo al llegar a la ciudad costeña, Bucaram declaró que no había dejado el gobierno y seguía siendo el presidente. Hasta ese momento todavía contaba con el apoyo de cierta parte de las Fuerzas Armadas.

Pero en la tarde de hoy, los militares aceptaron la resolución del Congreso de destituir a Bucaram y reiteraron el apoyo al ex presidente. Esta actitud fue cuestionada por algunos oficiales, aunque ya estaba

claro que había triunfado la posición de los uniformados contrarios a Bucaram. La suerte de este estaba echada.

El desenlace de los hechos deja un saldo positivo en el sector popular. Por un lado se nota un alza muy importante del nivel organizativo y de participación de las organizaciones sociales, y un aumento de su capacidad de incidir políticamente con medidas de fuerza. Por otro, los congresistas de Nuevo País, integrantes de la mayoría que destituyó a Bucaram, lograron diferenciarse de los otros sectores, marcando un perfil propio y exigiendo que en el mandato de destitución se incluyeran ciertas reivindicaciones populares, como por ejemplo el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien las movilizaciones en la ciudad tuvieron todo el éxito debido al apoyo de los empresarios que se sumaron al paro, se notó la fuerza del Movimiento Indígena, paralizando carreteras, y demostrando que sin su participación no hubiera sido posible la caída de Bucaram. Elegido presidente en la segunda vuelta electoral, Abdalá Bucaram iniciará un proceso destinado a fracturar al Movimiento Indígena ofreciendo cargos y dinero a algunos dirigentes regionales, lo que provocó una reacción inmediata de la Conaie que se transforma en factor importante de las movilizaciones previas a su destitución. El diputado, Miguel Lluco, junto a otros dirigentes populares ocupará la Catedral de Quito en una acción que se transforma en el inicio del fin de Bucaram.

Tras posesionarse el gobierno interino de Fabián Alarcón, integrantes de los sectores populares asumieron la representación directa en el manejo de determinadas provincias donde hay clara mayoría de población indígena. Sin embargo, la promesa asumida por el nuevo gobierno de hacer cumplir el mandato popular quedó solo en palabras y los distintos partidos volvieron a la repartija habitual. El único sector que mantiene su posición de principios es el Movimiento Pachakutik-Nuevo País. Desde esa realidad se podría decir que la gente fue burlada una vez más. Pero parece ser que los ecuatorianos sacaron su propia lección de lo ocurrido y ya empiezan a demostrar un rechazo a los partidos tradicionales.

Admirador de Hitler, pero autodenominado ‘centroizquierdista y antioligarca’, Abdalá Bucaram ganó la segunda vuelta de las elecciones en mayo de 1996 frente al candidato Social Cristiano, Jaime Nebot, con un alto índice de popularidad y contra todos los pronóstico de las encuestadoras. Tras asumir en agosto, logró mantener esa popularidad durante tres meses con algunas medidas de carácter populista, como la leche Abdalact a menos precio, destinada a sectores populares aunque muy pocas veces llegó a esos sectores y su constante incursión en los medios de comunicación, ya sea cantando junto a los Iracundos, ya esa jugando fútbol. No obstante, los escándalos de corrupción en los distintos ámbitos del gobierno, el intento de dividir al Movimiento Indígena mediante la ocupación de su sede por partidarios gobiernistas, la disolución de gremios estatales, la persecución y detención de alcaldes pertenecientes a partidos opositores provocó un rápido descenso del apoyo popular. El paquete económico de corte neoliberal impulsado a comienzo de este año, también causó un estallido social, con manifestaciones de protesta constantes durante todo enero en distintas ciudades del país. Las encuestas en los primeros días de enero marcaban que el 92% de los ecuatorianos rechazaban su gobierno, denominado por la oposición de Bucaramato.

Si bien los gremios empresariales de la Sierra se veían un tanto desplazados por un mayor apoyo gubernamental al empresariado de la Costa, los empresarios estaban contentos. En un comienzo se mostraron preocupados ante el discurso populista del nuevo gobierno pero enseguida que se anunció que el plan económico era instrumentado por Domingo Cavallo, quedaron tranquilos. Y cuando fueron pasando los días se tranquilizaron más al ver las medidas económicas de corte neoliberal que se iban tomando. Tal vez el mayor descontento de los empresarios era cierta inestabilidad financiera debido a que mientras se ponía en práctica un modelo económico determinado, Bucaram anunciaba por los medios de comunicación la derogación de ese modelo, creando inestabilidad en el sistema cambiario. Sin embargo, hasta el 5, no habían mostrado descontento con el programa económico gubernamental, ya

que les favorecía. Se sumaron a la protesta luego de constatar que era mejor sacarse de encima Bucarán, porque con el rechazo que tenía en lugar de poder poner en práctica el plan privatizador, podría provocar un estallido social que al final iría contra ellos. Era mejor sumarse a tiempo y controlar la protesta, que llegar tarde.

Por otra parte, Bucaram pertenece a la lumpen burguesía de Guayaquil, surgida de los grandes contrabandistas y su partido, para muchos está fundado dentro un alto nivel de corrupción, que los afectaba directamente. Si bien muchos señalan que el porcentaje de coima en cualquier transacción que involucra a instituciones del Estado con empresas privadas siempre fue del 10%, se quejan que en este gobierno se habrían incrementado mucho más. El propio embajador de Estados Unidos denunció que en la privatización de la Telefónica podrían existir más de US \$ 1.000 millones en coimas que irían a parar a los integrantes del gobierno de Bucaram. De esta forma las reglas de juego dejaban de ser claras. A todo esto hay que sumar el descontento en la clase media quiteña que se vistió de negro en muchos casos y se movilizó masivamente en rechazo a Bucaram por su forma de ser y su procedencia que por una razón económica. De esta forma, varios elementos coadyuvan para que todos estén de acuerdo en la destitución. La izquierda estaba siendo constantemente atacada por el manejo populista que intentaba diezmarla totalmente incluso dividiendo a los indígenas comprando dirigentes y prometiendo cosas que nunca cumplirían. El Partido Social Cristiano que representa a la derecha más radical con más fuerza vio la posibilidad de que en una elección próxima su candidato Jaime Nebot, pueda triunfar. Los otros partidos denominados de centro izquierda, siempre oportunistas, vieron en la posibilidad de conseguir determinados puestos durante el interinato, una razón para sacarlo del gobierno. En todo caso, las movilizaciones, el trabajo organizativo y la participación popular dejan una experiencia importante a tener en cuenta en el futuro y en el resto de países de América Latina. Un desafío es la Asamblea Constitucional que redacte la nueva Constitución, ya que la correlación de fuerzas parece favorable a los sectores neoliberales.

Mayo 20 de 1997 (martes). La comunidad y el mito constitucional.

Faltando cinco días para el referéndum sobre el llamado a una Asamblea Constitucional que modificará la Constitución ecuatoriana en un momento de auge neoliberal es importante analizar las posibles consecuencias constitucionales en pueblos y nacionalidades indígenas. Andrés Guerrero es uno de los sociólogos ecuatorianos más reconocidos en el exterior. Obtuvo su maestría de Sociología en la Universidad de París, ha realizado investigaciones en distintos países de América Latina y Europa y es profesor visitante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha publicado varios libros sobre la realidad campesino-indígena del Ecuador, con la que convivió durante largo tiempo. Entre sus obras más destacada están: *El campesinado huasipunguero en Ecuador*, *La hacienda precapitalista en Ecuador*, *Estrategias campesino-indígenas de reproducción*, *De la economía a las mentalidades: estructuras y conflictos agrarios*. En su libro *La semántica de la dominación: el concertaje de indios*, aporta una investigación en la que desentraña la problemática agraria vinculada a la reforma agraria en Ecuador. Desde 1994 se dedicó a investigar las relaciones de dominación a través de las distintas constituciones ecuatorianas y la relación de las leyes del país con la realidad indígena.

Mi interés era saber cómo se establecieron (a partir de la constitución del Ecuador como República) relaciones de dominación étnica muy fuertes encubiertas por la 'Constitución de una República de los libres e iguales ciudadanos', [asegura]. El Ecuador sigue los modelos de las revoluciones francesa y norteamericana, que están basados en el estado de libres ciudadanos que viven en 'libertad e igualdad'. También se marca la homogeneidad, ya que todos los ciudadanos tienen que ser culturalmente iguales y ahí empieza el problema.

Para el sociólogo se podría decir que en Ecuador la Constitución ha sido una obra de ficción. "El mito de la Constitución sirvió para que se constituyera un Estado nacional llamado Ecuador, en un territorio que era de la Real Audiencia de Quito, con una población que desde 1830 se

autobautiza como ecuatoriana”, argumenta. Mis investigaciones siempre apuntaron a saber de qué forma este mito fundador (la Constitución de República) encubría relaciones de dominación, ya que pasados 170 años, uno sale a la calle y se encuentra con que el “ciudadano ecuatoriano, libre, igual y homogéneo” no existe. No solamente existen las diferencias de clase, que de alguna manera está previsto en la Constitución ya que se establece que “los ciudadanos pueden ser diferentes en cuanto a fortuna”. Pero el país está integrado por blancos e indios y la Constitución no solamente encubrió sino que también reprodujo las relaciones de dominación étnicas. Las organizaciones indígenas nos mostraron la realidad de que el estado nacional de ‘libres e iguales’ era una ficción”.

Explica también que cuando se discute sobre la reforma de la Constitución como si fuera a cambiar una realidad social, económica y simbólica se construye la ficción. “Mientras la Constitución es algo abstracto que trata de formular el ideal de sociedad a la cual quieren llegar algunos, las leyes administrativas son más pragmáticas, reglamentan lo inmediato para que se transforme en la realidad”, afirma. Lo interesante, es que la parte administrativa no considera la existencia del ciudadano. Es decir, en ningún momento se les consulta a los ciudadanos sobre la conveniencia o no de adoptar una ley. Se la adopta sin que nadie pueda discutir. Mientras se llama a referéndum para cambiar algo abstracto como la Constitución, se pasa entre gallos y medias noches una ley que puede transformar efectivamente cosas muy importantes. “No hay sistema democrático si se mantiene por un lado la cara de ciudadanía que es un derecho abstracto, y por el otro la administración de población que es un hecho real de la relación Estado-población”.

Para Guerrero, cuando los indígenas reivindican la plurinacionalidad y dicen que quieren otro tipo de formación política, en la cual tengan cabida como ciudadanos diferentes, con sus nacionalidades, se colocan en contra del proceso histórico que asoció la ciudadanía y la administración de población. “Hasta ahora esta administración ha tratado de socavar el funcionamiento de las organizaciones indígenas porque reivindican como punto esencial el sistema comunal. Yo no quiero idealizar

para nada el sistema comunal, ni mucho menos, pero sí constituye un elemento crucial de reivindicación para las organizaciones indígenas”, argumenta.

Uno de los puntos de unión del ordenamiento simbólico de los indígenas es la comunidad, es algo mitológico.

En el ámbito doméstico, interdoméstico y parcialmente comunal existen relaciones de solidaridad que no son mercantiles. Eso crea una solidaridad que tiene un efecto de cohesión política, cultural y simbólica. El ideal de algunos sería que los indígenas dejen de pensar en eso y se transformen en compradores y vendedores. Los indígenas saben manejarse muy bien en dos códigos: el mercantil hacia afuera y el de la reciprocidad y solidaridad comunal hacia adentro. Si se acaba el aspecto comunal se desintegra la solidaridad. Si se desintegran las formas de solidaridad puede haber una situación de violencia generalizada.

A la campaña electoral, para elegir a los assembleístas, se da un proceso participativo interesante de los movimientos sociales. Más de 10.000 indígenas de todo el país marchan hacia Quito para instalar junto a campesinos y movimientos urbanos la Asamblea Popular encargada de elaborar un proyecto constitucional que será asumido por los representantes de Pachakutik.

Pero como se esperaba, en la Asamblea Constitucional la correlación de fuerzas será favorable a los sectores neoliberales que harán una Constitución a la medida. Aunque habrá avances en los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución dará sustento al modelo neoliberal y la futura quiebra bancaria.

Mayo 31 de 1998 (domingo). Nina Pacari y la participación indígena en el Congreso. Luego de la primera vuelta electoral realizada este día, el demócrata-popular (democratacristiano) Jamil Mahuad y el magnate bananero Álvaro Novoa disputarán la presidencia el 12 de junio en la segunda vuelta.

El Movimiento Pachakutik, esta vez logra seis escaños en el Congreso. La lista a la diputación nacional fue encabezada por Nina Pacari, quien se eligió con una votación muy representativa y al instalarse el nuevo legislativo será nombrada vicepresidenta del Congreso.

Pacari pertenece a la nacionalidad kichwa, nació en 1961 en Cotacachi, provincia de Imbabura, es abogada, fue dirigente de tierras y territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En 1997 fue nombrada Presidenta del Consejo Nacional de Planificación de los Pueblos Indígenas y Negros (Conpladein), que fuera creado con el objetivo de definir políticas de Estado para los pueblos indígenas y negros, así como planificar y ejecutar proyectos para su desarrollo, y más tarde se transformó en el Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe).

En noviembre de 1997 salió electa para integrar la Asamblea Constitucional. Instalado el nuevo Congreso, en agosto de 1998, fue elegida vicepresidenta del mismo, cargo que nunca había ocupado una indígena.

Comenta Pacari:

Para el Movimiento Indígena, este hecho es histórico porque hasta el momento ni un solo compañero y menos una mujer indígena ocupó alguna dignidad del Parlamento. Pero el hecho de haber logrado la segunda vicepresidencia movió un poco el piso al interior del país porque no estamos acostumbrados a ver una indígena en la dirección de un poder tan importante como la Legislatura. En el marco internacional también causó impacto. El Ecuador debe irse acostumbrando a ver indígenas y mujeres en espacios de decisión sin perder su identidad ni el compromiso con los sectores a los que representan.

A la hora de hacer un balance de la actuación de los alcaldes indígenas que fueron elegidos en la elección municipal de 1998, la diputada destaca una gestión que fue dada como ejemplo por los distintos sectores del país: la de Guamote, provincia de Chimborazo.

Allí el 98% de la población es indígena lo que de cierta forma hace que todos apunten a un proyecto común, pero obviamente sin excluir a la minoría mestiza. Allí se organizaron comisiones de desarrollo cantonal con participación ciudadana. Por otro lado se instrumentaron asambleas donde los representantes de las comunidades analizan el presupuesto municipal, priorizando los requerimientos y realizando un control y seguimiento de las inversiones. Con esa gestión participativa no solo se democratizó el Municipio sino que han logrado optimizar los pocos recursos que llegan a la Alcaldía desde el gobierno central. La cogestión permite hacer muchas más cosas que las estipuladas en el presupuesto.

En Cotacachi, un sector donde la población indígena no es tan mayoritaria como en Guamote, la actuación del alcalde indígena contribuyó para que se vayan eliminando las fronteras con el mundo blanco-mestizo.

El alcalde está llevando adelante su gestión para todos los habitantes con un nivel muy alto de participación de los empresarios, los artesanos, las mujeres no indígenas conjuntamente con nuestras comunidades. La gestión ha servido para aumentar la integración con los no indígenas y el respeto de éstos hacia nuestros hermanos. Las asambleas que planifican el desarrollo cantonal están integradas en forma plural y la gran participación de todos los sectores ayudó a detectar las mayores necesidades y cómo atacarlas. Estas dos modelos de participación y cogestión en poderes locales le pueden servir al país en general. Es parte del aporte indígena a la sociedad ecuatoriana.

El Parlamento es una instancia muy complicada en la que se mueven muchos intereses. Sin embargo los indígenas apuestan a que sus propuestas se puedan desarrollar en ese ámbito. “El escenario legislativo es diferente al de los poderes autónomos locales pero no deja de ser importante para el desarrollo de la propuesta indígena [comenta Pacari]. Queremos ser propositivos no solo en los temas sociales sino en los temas económicos donde hemos presentado nuestras alternativas”.

En el periodo anterior, los diputados indígenas fueron ejemplo de ese espíritu propositivo al presentar varios proyectos de Ley de interés

para las zonas rurales como el de la creación de la Corporación Financiera del Campo (Corfinca), pero lamentablemente no fueron tratados. “No hay garantía de que no ocurra lo mismo, tenemos que intentar acuerdos que nos permitan llevar a cabo nuestras propuestas, pero sobre todo debemos lograr que la opinión pública las conozca. Nosotros tenemos el cometido de expresar la voz indígena y de los sectores populares en el escenario parlamentario, incluso siendo minoría”.

Consultada sobre si los dirigentes indígenas no corren el riesgo de burocratizarse en el Parlamento, ella dice que hay que hacer todo para que eso no ocurra y enfatiza:

Si bien el legislador no puede estar en la organización indígena, no puede perder su vinculación y coordinación con ella. Por un lado están las visitas constantes a las comunidades y por otro la creación de mecanismos de articulación. Mi equipo asesor se integra en tres áreas fundamentales: una que tiene que ver en lo organizativo social, otra que tiene que ver con lo político estructural y otro que tiene que ver eminentemente con lo técnico. En lo político organizacional se articula las propuestas de las organizaciones con la defensa de estas propuestas en el Parlamento. Un equipo está a tiempo completo trabajando esas propuestas a través de talleres y reuniones para luego proponerlas en el Congreso. Lo mismo ocurre con la temática de la mujer. Nosotros como diputados nos insertamos en un proceso y recogemos las propuestas que vienen de los movimientos sociales. El equipo político estructural está ligado a Pachakutik que es el movimiento político orientador y al que respondemos. El equipo técnico es el sustento para actuar al interior del Congreso. Esto sumado a las visitas constantes y la permanente comunicación con información enviada desde aquí hace que no sé de una desarticulación.

Nina Pacari resta importancia a ciertas divisiones de carácter regional entre serranos y amazónicos, o de visión política que se dan a veces en el Movimiento Indígena. Sobre ese tema señala que si bien hay una unidad fortalecida en la Conaie:

Los pueblos indígenas no son uniformes. Somos once nacionalidades con visiones distintas, procesos y estrategias diferentes, porque eso depende hasta del medio geográfico. Por ejemplo, no se puede pedir que en la Amazonia se instrumenten las mismas formas de reivindicativas que en la Sierra. En todo caso, con respeto de las particularidades se van llegando a consensos. Tenemos que tener presente que el hecho de tener criterios diversos al interior del movimiento no es sinónimo de división sino de pluralidad.

En los últimos ocho años las nacionalidades indígenas del Ecuador han obtenido grandes logros: por un lado, ya están solucionados el 80% de los conflictos de tierras, por otro se logró poner en el debate nacional el tema de la plurinacionalidad, el de la educación intercultural bilingüe, el de la pluralidad cultural y jurídica del país.

La nueva Constitución reconoció los derechos colectivos de los pueblos, y el carácter pluriétnico y multicultural del país. En el caso de la medicina indígena se reconoció el derecho a la práctica de esta como tal. En una de las disposiciones se señala que contará con apoyo estatal en cuanto a recursos para impulsar su desarrollo. Hasta que fueron reconocidas las reformas constitucionales, nuestros yachas o shamanes eran perseguidos e iban a la cárcel, ahora ya no. De hecho hay que establecer normas porque deben ser controlados los abusos cometidos por parte de gente no indígena que dice manejar nuestra medicina.

Paralelamente a las reformas constitucionales se dio la aprobación del Convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.

Su aprobación por parte del Congreso en el período anterior fue un logro importantísimo para el Movimiento Indígena porque nos dio bases jurídicas. Ahora queda claro que los jueces que tratan infracciones cometidas por indígenas, tienen la obligación de acudir a normas, costumbres y cultura indígena para que sirva de atenuante a la hora de sentenciar. Además se reconoce que los nuestros pueblos pueden, a través de sus autoridades, ejercer atribuciones jurisdiccionales, resolver conflictos, administrar la justicia en base a nuestra tradición. Así se está reconociendo el ejercicio simultáneo del derecho indígena. En este caso es necesario armonizar las

leyes y establecer niveles de competencia para que no se interpongan o contradigan las leyes indígenas a las nacionales. El reconocimiento al sistema jurídico indígena es un aporte fundamental para el buen desarrollo de la propia cotidianidad en las comunidades y la resolución de muchos conflictos internos. También se reconoce el uso oficial de los idiomas para los pueblos indígenas y en ese sentido el Estado se compromete a respetarlo. Si el indígena debe hacer un trámite en una oficina pública y no sabe el castellano es obligatorio que lo atiendan en su idioma.

Según la diputada, las normas jurídicas indígenas responden a los tres principios básicos de no mentir, no robar, no matar, y es una justicia colectiva. El proceso siempre se inicia en el consejo de la familia, luego en un consejo comunitario, después pasa al cabildo, y es toda la comunidad la que decide la sanción tras el juicio. La diputada asegura que el castigo o la sanción impuesta por los indígenas ecuatorianos siempre tiene que ver con una limpieza corporal, espiritual.

La vicepresidenta del Congreso ecuatoriano se muestra confiada hacia el futuro. Destaca como un paso importante que la nueva Constitución diga: Los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades son parte constitutiva del Estado ecuatoriano. De esa forma se aceptan las nacionalidades.

Un Estado que involucre esa participación se irá transformando en plurinacional y eso tiene que ser evidente a nivel institucional y estructural. Con un Parlamento, por ejemplo, que permita la representación de los distintos pueblos. Ahora hay indígenas, fundamentalmente kichwa, pero no significa una representación pluriétnica. Algunas personas pensaban que plurinacionalidad era separatismo. Está claro que nada tiene que ver con eso, lo nuestro es unidad en la diversidad. Pero son períodos, frente a la uniformidad de los años ochenta, hoy hemos pasado a la pluriétnicidad, la pluriculturalidad. Tal vez que de aquí a unos años Ecuador pueda asumirse como plurinacional. Ojalá que la experiencia en los poderes locales y en el Congreso aporte hacia la construcción de un Estado Plurinacional, cuya estructura y administración evidencie la pluralidad del país, involucrando a los pueblos indígenas y negros.

Más allá de la actuación indígena, el nuevo gobierno consolida su alianza con el sector financiero, importadores, agroexportadores y la derecha tradicional. El modelo neoliberal se consolida y paralelamente se profundiza la crisis.

Diciembre 3 de 1998. El poder financiero gobierna el Ecuador. Como en épocas de la ‘plutocracia bancaria’, los bancos vuelven a regir el destino del país. Mientras se conoce que el banquero Fernando Aspiazu del Banco del Progreso ha financiado la campaña de Jamil Mahuad, otros banqueros forman parte de su gabinete. Con ese poder en la sombra, el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria consolidan políticas de protección a la banca y el ‘salvataje bancario’ que permiten la entrega de créditos millonarios a través de instituciones públicas.

En el Congreso Nacional, la denominada ‘aplanadora’, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, aprobó en 1998 la Ley de la AGD (Agencia de Garantía de Depósitos) para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada legalmente. El 30 de noviembre se aprobó la Ley, el 1 de diciembre entró en vigencia y ayer la Junta Bancaria colocó a Filanbanco en proceso de ‘reestructuración’ pasando a manos del Estado por medio de la recién creada AGD.

Hoy, la Agencia pidió al Ministerio de Finanzas que emitiera bonos de deuda interna para pagar los créditos de Filanbanco con el Banco Central y capitalizar al banco con un monto inicial de US \$ 540 millones. Finanzas, por su parte, notalizó la emisión de bonos de deuda a favor de la AGD, triangulando la operación con el Banco Central para evitar la quiebra de Filanbanco. Mañana, la Junta Bancaria nombrará y posesionará al nuevo equipo gerencial de Filanbanco, en reemplazo de sus antiguos dueños. El 5 de diciembre, iniciará el salvataje estatal de ese banco. Entre el 8 de diciembre de 1998 y el 12 de marzo de 1999, cerrarán varios bancos.

Marzo 14 de 1999 (sábado). El feriado bancario. Ecuador vivió cuatro días de incertidumbre. Feriado bancario, estado de emergencia nacional,

paro general de dos días y anuncio de nuevas medidas económicas fueron los hechos que marcaron esta semana del país.

En menos de dos meses quebraron cinco bancos y el Estado asumió sus deudas desembolsando más de US \$ 1.500 millones. Muchos pensaron que el sistema financiero quedaba saneado. Sin embargo, el lunes 8, Banco del Progreso, el más importante de la Costa, tenía problemas de liquidez.

Según fuentes extraoficiales, el gobierno no tenía dinero en caja para salvarlo, pero la quiebra podía provocar una demanda inusitada de dólares. Ese hecho incrementaría el precio de la divisa norteamericana en un 100%, como había sucedido la semana anterior.

Con ese temor y la presión de los grupos financieros de Guayaquil para que el gobierno salvara el banco, el presidente de la República, Jamil Mahuad, decretó un feriado bancario y anunció que el jueves 11 daría a conocer nuevas medidas económicas para supuestamente paliar la crisis, aunque el costo será asumido por la clase media baja y los sectores más pobres.

Surgieron rumores sobre un posible autogolpe de Estado como salida política y la implementación de la convertibilidad o la dolarización como salida económica. La incertidumbre aumentó cuando el mismo lunes, el presidente decidió extender el feriado bancario hasta el martes 9 y decretó el estado de emergencia nacional, prohibiendo toda movilización de protesta. Con ese telón de fondo, el miércoles 10 se inició un paro general de 48 horas convocado por organizaciones sociales, sindicales y el Movimiento Indígena, y apoyado por partidos políticos de oposición. El gobierno declaró dos días de feriado nacional, y extendió así el cierre de bancos hasta el jueves.

Las ciudades más importantes del Ecuador permanecieron paralizadas los días 10 y 11. Los huelguistas realizaron marchas de protesta que fueron reprimidas, produciéndose enfrentamientos con la policía. En el medio rural, las carreteras de las regiones de la Sierra fueron cerradas por indígenas.

La Coordinadora de Movimientos Sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los partidos de izquierda y centroizquierda convocaron a un Congreso del Pueblo que el jueves 11 reunió a 3.000 personas.

El Congreso realizó una propuesta para salir de la crisis económica. En lo fiscal planteó restituir el impuesto a la renta; eliminar las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), excepto para alimentos y medicamentos; crear un impuesto progresivo a los vehículos privados de lujo, aviones y yates particulares.

También promovió la eliminación de exenciones aduaneras, racionalizar el gasto público y suspender temporalmente el servicio de la deuda externa.

Por la noche del mismo jueves, el Presidente de la República anunció las medidas del gobierno, enfatizando que “la gran batalla que debemos librar es contra la hiperinflación”. Se destacó la subida de los precios de los combustibles en un 163%. También el anunció envió urgente al Congreso de diez proyectos de ley. Uno de ellos incrementa el IVA de 10 a 15% y crea un impuesto a los autos valuados en más de US \$ 15.000. “Es mejor subir un impuesto a que el dólar se triplique”, señaló Mahuad.

El Parlamento tratará además con carácter urgente otros proyectos enviados por el Ejecutivo que allanan el camino para la inmediata privatización de las empresas de teléfonos, electricidad, petróleo, puertos y correos. El feriado bancario se extendió hasta el lunes. Para evitar un retiro masivo del dinero el gobierno congeló depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorros y plazo fijo, en sucres y dólares. El gobierno prohibió retirar por un año 50% del saldo en cuentas superiores a US \$ 200 y el total de los depósitos en cuentas en moneda extranjera mayores a US \$ 500.

Antes de terminar su intervención, Jamil Mahuad afirmó que este paquete económico “sentará las bases para implantar una futura convertibilidad, o directamente dolarizar la economía ecuatoriana”. El ex presidente socialdemócrata, Rodrigo Borja, discrepó con el plan anunciado

por Mahuad y dijo que “no se podrá combatir la inflación si se sube los combustibles más del 100% y se mantiene un presupuesto desfinanciado”.

Miguel Lluco, dirigente indígena y Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional-Pachakutik Nuevo País (brazo político del Movimiento Indígena y los movimientos sociales), dijo que las medidas eran un golpe a la clase media y a los pobres. “Congela los depósitos desde US \$ 150 afectando a los que menos tienen. Sube los combustibles provocando el alza en los precios de los artículos de primera necesidad. Mantiene el salvataje de bancos aunque el déficit fiscal se deba en gran parte a eso”, comentó Lluco.

Las organizaciones sindicales e indígenas convocaron a la desobediencia civil y anunciaron movilizaciones de protesta para los próximos días con cortes de carreteras. Además amenazaron con un paro indefinido.

Un día después de anunciar las medidas, la popularidad de Jamil Mahuad llegó a su nivel más bajo. Así, en siete meses cayó 52 puntos: de 66% que tenía cuando asumió el gobierno a 14% que tiene hoy.

Marzo 16 de 1999 (martes). Choferes bloquean carreteras. Camioneros y choferes de buses bloquearon carreteras del Ecuador al sumarse a la huelga iniciada ayer por los taxistas, que mantienen cortadas las calles de la capital en protesta contra el alza de la gasolina en medio de un incierto panorama político y económico.

Mañana comenzará, además, un levantamiento indígena. Miles de personas saldrán de sus comunidades para tomar las carreteras del país, y también interrumpirán el ingreso de productos agrícolas al mercado, lo que puede provocar, como en otras oportunidades, desabastecimiento en las ciudades. El presidente Jamil Mahuad presentó el jueves pasado un nuevo paquete económico en el que se destacaba la subida de los precios de los combustibles en un 163% y la congelación de los depósitos bancarios. “Con el precio de la gasolina no podemos trabajar. Si subimos las tarifas la gente no paga. Esto y el alza del dólar nos afecta. Muchos nos endeudamos al comprar automóviles nuevos con el dólar a 6.500

sucres y en tres meses se fue a 11.000”, comentó Pedro Álava, dirigente de los taxistas.

Los quiteños debieron concurrir ayer y hoy a sus trabajos caminando o en bicicleta. Ni buses ni automóviles particulares pudieron circular debido al bloqueo realizado por los 9.000 taxistas de la capital. En otras ciudades del país también se interrumpió el tráfico, si bien no tanto como en la capital ecuatoriana. El gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas que retiraran los taxis de las calles, sobre la base del estado de emergencia nacional que rige en el país desde la semana pasada. El ministro de Defensa Nacional, general José Gallardo, acusó a los taxistas de causar caos y anarquía. “Eso no será permitido por las Fuerzas Armadas, que se encargarán de mantener el orden del país”, comentó.

Los dirigentes de la Unión Nacional de Taxistas se reunieron el lunes con el ministro de Gobierno Vladimiro Álvarez, pero no llegaron a un acuerdo. La huelga se mantiene con carácter indefinido. Este martes se sumaron los conductores de ómnibus urbanos e interprovinciales y los de transporte pesado, cortando algunas carreteras. Con la protesta de los taxistas se inició una semana en la que distintos sectores sociales llamaron a la “desobediencia civil” para exigir al gobierno que revea parte de las medidas económicas. “Hicimos propuestas para salir de la crisis a los diputados del gobierno y a los ministros del área económica, pero nunca fueron tenidas en cuenta”, dijo Antonio Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

El Movimiento Indígena es el sector social con mayor capacidad de movilización en el país. Una escala del 70% de la producción agrícola se cultiva en las pequeñas parcelas de sus comunidades. “Ante medidas económicas que solo golpean a los pobres, se imponen los hechos. Al gobierno no le importan nuestras opiniones, pero las nacionalidades indígenas y los movimientos sociales siguen abiertos al diálogo”, dijo Vargas. La ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, señaló que “las medidas no se van a rever porque son fundamentales para salir de la crisis”. Sin embargo, aseguró que “el gobierno siempre ha estado abierto al diálogo”.

El levantamiento indígena sigue a la realización del Congreso del Pueblo, en el que representantes de movimientos sociales y partidos políticos de oposición elaboraron una propuesta económica alternativa que fue entregada al gobierno.

Ecuador está semiparalizado. La crisis económica y las protestas sociales colocaron en jaque al gobierno de Mahuad, que se encuentra a un paso de la ingobernabilidad. Los rumores de la posible disolución del Congreso por parte del poder Ejecutivo son insistentes. Sin embargo, el gobierno realizó una reunión urgente con los jefes de la oposición para pedirles propuestas destinadas a superar la crisis. El general Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual diputado de la socialdemócrata Izquierda Democrática, valoró la apertura del presidente al diálogo con la oposición. Reclamó la eliminación inmediata del estado de emergencia y la rebaja del precio del combustible para que se restaure la paz social, de modo de instrumentar luego medidas alternativas que saquen al país de la crisis.

Marzo 18 de 1999 (jueves). Movilizaciones en campo y ciudades. El presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, se comprometió ante la oposición a suprimir el estado de emergencia y a corregir a la baja el decretado aumento de los combustibles, para enfrentar la crisis y las movilizaciones de protesta. Mahuad explicó este jueves que el acuerdo alcanzado es producto del diálogo y que el hecho de ceder posiciones apunta a “parar la amenaza de un enfrentamiento entre ecuatorianos, pues los niveles de violencia llegaron a límites inimaginables”. “Yo no quería causar problemas a nadie. Solo buscaba una salida a la crisis fiscal que vive el país. Esperamos que con este acuerdo, volvamos a llevarnos unos con otros”, dijo el presidente.

El gobierno, puesto en jaque por movilizaciones de protesta que paralizaron el país durante cuatro días, resolvió derogar parte de las medidas de ajuste decretadas la semana pasada. Mahuad realizó su anuncio cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabaja-

dores radicalizaban su movilización en todo el país. Mientras, las Fuerzas Armadas aclararon en un comunicado que se oponían a incrementar la represión y que rechazan “cualquier salida que vaya contra el sistema democrático”.

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Leslie Alexander, también dijo a Mahuad que su gobierno no apoyaría ninguna salida dictatorial y lo instó a que negocie con la oposición para salir de la crisis. Estas declaraciones estarían evidenciando el hecho de que Mahuad tendría la intención de dar un autogolpe de Estado. En ese escenario, legisladores oficialistas y opositores negociaron una resolución para compatibilizar el ataque al déficit fiscal con algunas aspiraciones de los sectores sociales. El gobierno aceptó rebajar el precio de los combustibles, pero sin llegar al nivel previo de las medidas de ajuste. El incremento de los combustibles fue una de las principales causas de la reacción popular. También se comprometió a flexibilizar el congelamiento de fondos bancarios, a retirar todos los proyectos de ley de privatización de activos del Estado y admitió las propuestas de la oposición en materia tributaria.

Se eliminan las exoneraciones al impuesto al valor agregado, con excepción de las previstas para alimentos y medicamentos, y se crean impuestos a las utilidades bancarias, a los vehículos de lujo y al patrimonio de las empresas.

“Hemos demostrado el poder indígena. Hay que ver si el gobierno cumple con poner impuestos a las utilidades bancarias, a los vehículos de lujo y al patrimonio de las empresas. Hay que ver si cumple con impuestos a los que más tienen como acordó”, señala Ricardo Ulcuango, dirigente de la Conaie.

Las ciudades más importantes fueron paralizadas por la falta de transporte público, el bloqueo de calles con taxis y barricadas y la movilización de los ciudadanos. En el medio rural, miles de indígenas y campesinos ocuparon carreteras y detuvieron a soldados del Ejército que solo fueron liberados en canje por manifestantes detenidos días atrás. Los campesinos retuvieron producción y ya hay síntomas de desabastecimiento en los supermercados de las ciudades. Los vehículos que

transportan productos agropecuarios hacia los centros urbanos están detenidos en las carreteras y los alimentos perecederos comenzaron a perderse. Los productores lecheros no pueden llegar a las plantas pasteurizadoras por lo que ya comienza a faltar leche en algunas ciudades. Habitantes de los barrios de la populosa zona sur de Quito se enfrentaron con el Ejército, incendiaron un vehículo blindado e impidieron que los soldados despejaran los obstáculos al tránsito. Mientras, pobladores de barrios periféricos de la ciudad portuaria de Guayaquil, principal centro comercial del país, resistieron la intervención de la policía y del Ejército y saquearon comercios.

En Cuenca, la tercera ciudad de país, más de 30.000 personas marcharon por las calles con pancartas exigiendo la eliminación del paquete de ajuste y la destitución de Mahuad. A pesar del pacto entre la oposición y el gobierno, los indígenas mantienen sus medidas de resistencia “como una forma de garantizar que los acuerdos no se transformen en una componenda política y olviden a los sectores sociales”. Los transportistas también decidieron seguir con el paro. Exigen que el precio de la gasolina sea congelado y se conviertan a sucres las deudas que contrajeron en dólares al comprar sus automóviles.

“La movilización nacional en el campo y la ciudad hizo ceder al gobierno. Los posibles acuerdos solo serán aceptados por el pueblo si reflejan su voluntad”, advirtieron dirigentes indígenas. Por su parte, el ex presidente Rodrigo Borja aumentó la incertidumbre al aclarar que su partido, la opositora Izquierda Democrática (ID), no ha llegado a ningún entendimiento con el gobierno. Borja exigió la rebaja de la gasolina al precio que presentaba antes de las medidas dictadas la semana última. De otro modo, agregó, los diputados de ID no votarán los impuestos proyectados y no habrá mayoría legislativa para aprobarlos.

Marzo 19 de 1999 (viernes). Miles de indígenas mantienen hoy la ocupación de rutas y pueblos del Ecuador en protesta por las medidas económicas del gobierno, pese a que el presidente Jamil Mahuad recibió a sus representantes para dialogar sobre sus reclamos. La movilización

indígena se mantendrá hasta que se formalice en el parlamento un acuerdo con el poder Ejecutivo que atienda los reclamos que dieron origen a las protestas, en especial el descongelamiento de los depósitos bancarios. Hasta ahora, el gobierno y el Congreso legislativo unicameral acordaron la rebaja del precio del combustible, lo que permitió el levantamiento de la huelga de transportistas encabezada por los taxistas.

Grupos indígenas tomaron este viernes a la madrugada una central hidroeléctrica en la provincia de Tungurahua y cortaron la luz de varias zonas. El gobierno, puesto en jaque por movilizaciones de protesta que paralizaron el país durante cuatro días, resolvió derogar parte de las medidas de ajuste decretadas la semana pasada. Mahuad realizó su anuncio ayer, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabajadores radicalizaban su movilización en todo el país. La capacidad de movilización de los indígenas hace que sea una referencia obligada en la agenda política del país en los últimos años.

Marzo 22 de 1999 (lunes). El sistema financiero en bancarrota. La crisis financiera del Ecuador se profundizó hoy con la quiebra del Banco de Progreso, el más importante de Guayaquil, la capital comercial del país, y el octavo que cae en cuatro meses. El gobierno de Jamil Mahuad se hizo cargo de la deuda del Banco del Progreso a través de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). El presidente del banco, Fernando Aspiazu, acusó al poder Ejecutivo de haber retirado los fondos estatales de la entidad ahora en quiebra y aseguró que se intenta perjudicar a la banca de la región de la costa del Pacífico. Las afirmaciones de Aspiazu fueron apoyadas por el alcalde de Guayaquil, el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), quien el jueves había realizado la misma afirmación, y exacerbaron el sentimiento regional en sectores de la población de Guayaquil. Unas 2.500 personas entre, clientes del banco, empleados de las empresas de Aspiazu y otros ciudadanos marcharon hasta la alcaldía en apoyo de esa denuncia. Las cámaras de industria y comercio de Guayaquil exigieron la semana última a Mahuad un 'mejor trato' a su región. Aspiazu y

Febres Cordero exigen que la AGD no se haga cargo del saneamiento del Banco del Progreso, sino de su reestructuración. El saneamiento exige la quiebra y cierre definitivo del banco, pero la reestructuración significa una inyección de dinero.

El economista Alberto Acosta señaló que, en un sistema de economía abierta como el ecuatoriano, cuando un banco quiebra habría que dejarlo quebrar. Acosta cree que el gobierno cometió un error al intervenir en apoyo de otros bancos en problemas y ahora está obligado a salvar también al de Progreso. “Hemos vivido la mayor audacia de la historia del sistema financiero: un banquero cierra las puertas de su banco y luego sale en manifestación a reclamar ayuda del Estado”, comentó. Acosta advirtió que no se puede caer en ‘la trampa’ del regionalismo tratándose de la quiebra por mala administración de un banco que concentra los créditos en pocas manos y en empresas vinculadas a sus propietarios. “El Banco del Progreso tiene la mitad de sus clientes en la Sierra y la otra mitad en la Costa. Sin embargo, otorga la mayoría de sus créditos a clientes costeños”, observó. Acosta también cuestionó la afirmación de Aspiazu de que el gobierno no lo favorece. La empresa eléctrica Emelec, también de Aspiazu, “es totalmente ineficiente y se mantiene gracias a que cobra la energía al Estado”, señaló. La AGD fue creada por ley en noviembre, ante la bancarrota de algunas instituciones financieras. La iniciativa fue votada por los diputados oficialistas y por los representantes del Partido Social Cristiano, de Febres Cordero.

El jefe del bloque oficialista en el Congreso, Ramiro Rivera, señaló en aquella oportunidad que la ley aprobada fortalecía el sistema financiero ecuatoriano. “La Agencia establece una seguridad para los depositantes, genera estímulos a la fusión de bancos y reactiva el sistema productivo”, dijo entonces Rivera.

Varios bancos recurrieron en los meses siguientes a la AGD para evitar su hundimiento. Fidel Egas, propietario del Banco del Pichincha, el mayor de la Sierra, comentó entonces que algunos banqueros se habían ‘engolosinado’ con ‘el dulce’ que la Agencia les brindaba.

El caso más importante es el de Filanbanco, que fue asistido con más de US \$ 540 millones mientras su principal accionista vendía otro banco de su propiedad en Miami por US \$ 240 millones. “Nadie le pidió cuentas de esa venta para que sirviera como contraparte del dinero invertido por el Estado en Filanbanco. Los banqueros deberían responder ante la AGD con todo su patrimonio como garantía”, dijo Acosta. Los problemas de iliquidez del Banco del Progreso no son de los últimos días. El 8 de este mes circularon rumores sobre su mala situación financiera. Ante la falta de fondos para apoyar al banco guayaquileño, Mahuad decretó una semana de feriado bancario, que fue preámbulo de nuevas medidas de ajuste y del congelamiento de los depósitos de ahorristas y titulares de cuentas corrientes.

El presidente del Banco Central, Luis Jácome, renunció junto con tres vocales tras el feriado bancario en desacuerdo con la política del poder Ejecutivo frente a las instituciones financieras en dificultades. Jácome explicó haber propuesto que solo se permitiera la reapertura de las ‘instituciones viables’. Pero “el gobierno decidió que se abrieran tanto los bancos solventes como los otros”, y por eso hubo que “utilizar la política monetaria para entregar recursos”. “Una economía que no tiene saneado el sistema bancario va a enfrentar problemas para la ejecución de su política monetaria”, advirtió el ex presidente del Banco Central. Habrá presiones sobre el tipo de cambio y los precios y “dificultades para crecer”, explicó. Hasta el momento, el Estado ecuatoriano ha desembolsado más de US \$ 1.500 millones para respalda a bancos quebrados y, según fuentes financieras, todavía quedan algunos con problemas de liquidez.

Marzo 25 de 1999 (jueves). Resurge el peligro de balcanización. El riesgo siempre latente de una balcanización del Ecuador resurgió esta semana, tras el cierre y posterior salvataje del Banco Progreso, el más importante de Guayaquil.

El dueño de la institución financiera, Fernando Aspiazu, y el alcalde de la ciudad, el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), acusaron

de la quiebra al centralismo de Quito y exigieron al gobierno que saliera en apoyo del banco, lo que finalmente ocurrió.

Las cámaras de industria y comercio de Guayaquil se sumaron al reclamo y también pidieron al presidente Jamil Mahuad un 'mejor trato' a la región, y que no se les cargue con los impuestos a la renta y al patrimonio.

Estos hechos exacerbaron el sentimiento contra el centralismo que abriga desde el siglo pasado la región de la costa del Pacífico, lo que llevó a unas 8.000 personas a manifestar en las calles portando banderas de Guayaquil y pancartas que pedían la autonomía de la provincia de Guayas.

En los automóviles se colocaron pegotines con consignas similares y cientos de viviendas fueron embanderadas con los símbolos de la provincia y de la ciudad. Febres Cordero instó a los guayaquileños a no dividir políticamente el país, luego de que el Banco Progreso fuera salvado. Sin embargo, advirtió que la ciudad estaba en pie de lucha y la mecha quedó encendida. Para algunos analistas se utilizó la quiebra de un banco mal administrado y la exigencia de los empresarios guayaquileños, que nunca quieren pagar impuestos, para exaltar el viejo sentimiento regionalista.

El regionalismo y el antagonismo entre Quito y Guayaquil, el principal centro comercial del país, han marcado la historia del Ecuador. El líder anticolonialista Eugenio Espejo señalaba en tiempos de las luchas independentistas que los guayaquileños eran enemigos irreconciliables de los serranos. Ecuador, que estuvo dividido en cuatro regiones autónomas hasta 1869, fortaleció desde entonces su organización unitaria en un Estado nacional. Sin embargo, en los últimos años se comenzó a cuestionar ese modelo, debido al olvido del poder central hacia a las distintas regiones. Los primeros en cuestionar el Estado nacional fueron los indígenas, que llamaron a construir otro plurinacional. Esta propuesta fue criticada por los sectores políticos de derecha, tanto serranos como costeños, con el argumento de que sería la ruptura del país.

Con su propuesta, los indígenas separan la reivindicación de su pueblo de aquellos que exacerban el regionalismo, quienes lo hacen por intereses particulares. Para la Conaie, el Estado nacional no reconoce a los indígenas como pueblos. Sus normas son parte de un sistema de supervivencia que no tiene nada que ver con las leyes occidentales. En ese sentido argumenta que la plurinacionalidad asume a Ecuador como un país con varias nacionalidades pero como Estado unitario.

Por su parte, el ex alcalde de Guayaquil y ex gobernador de la provincia de Guayas, Rafael Guerrero, sostuvo que las autonomías regionales pueden ser una salida para evitar la disolución del país. Guerrero explicó que no hablaba de federalismo “sino de autonomía, donde las regiones pueden recaudar sus propios impuestos y contribuir a mantener el Estado”. Condenó el regionalismo como una enfermedad que perjudica la unidad nacional, pero reclamó una mayor atención a las provincias de la Costa.

“Hasta ahora no se reparó ni un metro de las carreteras de esa zona, que fueron destruidas por los efectos del fenómeno climático de El Niño”, comentó. El escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja, quien ha investigado el tema del regionalismo, señaló que el problema del Ecuador es que vive una identidad esquizofrénica que puede llevar al país a caerse en pedazos. “Vivimos ensayando, tratando de determinar hasta qué punto podemos provocarnos serranos y costeños sin llegar al rompimiento final. Ese tironeo, es tan peligroso como caminar por el filo de una navaja”.

Fernando Carrión, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), afirmó, a su vez, que lo mejor para superar el conflicto regional es sacarlo a luz y replantear la organización del Estado ecuatoriano. “Hay un agotamiento del modelo que tiene como centros a Quito y Guayaquil, y las autonomías regionales pueden transformarse en la posibilidad de mantener la unidad en la diversidad para que cada uno pueda aceptar al otro sin ser enemigo”. El director de Flacso agregó que no se puede copiar el modelo autonómico de España o de otros países porque el proceso histórico ecuatoriano es muy distinto. “Ecuador tiene

sus particularidades y hay que atenderlas. Para ir a posibles autonomías también se debe tener en cuenta a los sectores étnicos, con sus especificidades, y a las identidades culturales de las regiones”, afirmó Carrión

Abril 25 de 1999 (domingo). Los plaguicidas causan estragos. La utilización de agrotóxicos en las provincias del norte del Ecuador causa severas distorsiones en el ambiente, problemas de salud en los campesinos y empobrecimiento de la tierra. Las mayores zonas productoras de tomate del Ecuador, ubicadas en la provincia del Carchi, limítrofe con Colombia, fueron invadidas por un insecto conocido como palomilla blanca.

Hace 15 años esa plaga era insignificante, pero en los últimos tiempos quien recorre la zona puede observar nubes blancas que corresponden a las palomillas. Según biólogos que investigaron el fenómeno, la utilización indiscriminada de químicos hizo que el insecto genere defensas contra los pesticidas y crezca a niveles no imaginados.

Ximena Santacruz, experta de Fundación Natura, señala que el exceso de agrotóxicos destruye a los insectos benéficos que controlan las plagas y cuando eso sucede se desata una explosión de determinadas especies como ocurre con la palomilla. “Las defensas que van creando las plagas obligan a que cada vez se utilice más pesticidas para controlarlas y por lo tanto aumente la contaminación. Es una historia de nunca acabar”, alertó. Como consecuencia, el agua, el aire y la tierra se contaminan más. Se cortan los ciclos naturales y hay una distorsión ambiental que se torna difícil de controlar.

Raimundo Rojas, uno de los pequeños productores de la zona, explica que hace diez años curaba sus tomates solo tres veces al mes y en la actualidad los cura 18 veces.

Eso también le acarreo problemas de salud, ya que la aplicación de los químicos la hace sin ninguna protección, como la mayoría de los agricultores del lugar. “A pesar de todas las curas que les hago, hay días que las tomateras anohecen bien y amanecen quemadas por la lancha”, comenta Rojas. Para tratar de combatir la lancha los cultivadores de

tomate utilizan una combinación de varios pesticidas que empeora la situación.

Portavoces del Servicio de Sanidad Vegetal señalan que la mayoría de los agricultores no está preparada para asegurar un buen uso de los plaguicidas. “Los campesinos se desesperan al ver que sus cultivos se pierden y hacen combinaciones prohibidas. Para eso es necesario por lo menos que sepan cuáles productos químicos son compatibles y cuáles son antagónicos”, comentan. Pero el problema no es solo del campesinado. Ni siquiera los vendedores de plaguicidas de la zona saben cuáles serán las consecuencias de usar mezclas prohibidas que a menudo recomiendan solo por vender sus productos.

Fernando García, presidente de la Asociación de Importadores y Fabricantes de Insumos Agropecuarios, reconoce que la mala aplicación de pesticidas está produciendo graves problemas. García cree que ahora es mucho más necesario que antes que los almaceneros estén capacitados para guiar al agricultor y para que eso ocurra hace falta un mayor control de esos locales por parte de las autoridades. “Además, hay que tener en cuenta que muchas veces los agricultores son analfabetos, por lo que no saben leer las indicaciones que vienen en las cajas de los productos”, dice.

En Ecuador, la falta de control trajo como consecuencia que solo en la zona productora de tomates se hayan utilizado todos los pesticidas registrados en el país, lo que constituye un récord nacional si se toma en cuenta la extensión del lugar. Raimundo Rojas señala que las plantas de los pies le arden intensamente, algo que ocurre con otros agricultores de la zona que también han tenido convulsiones. “Ya estoy envenenado, pero si no hay producción ¿de qué vivo?”, se pregunta Rojas. “Los fosforados se absorben por las vías respiratorias y con el tiempo causan severas intoxicaciones”, señala Patricio Nieto, del Departamento de Epidemiología de la Dirección de Salud Provincial.

Para combatir la intoxicación con plaguicidas, los fumigadores utilizan ampollas de atropina, un antídoto que contrarresta los químicos ingeridos. Para prevenir, la Dirección de Salud pide que durante la jornada de fumigación los campesinos se cubran con ropas especiales, eviten

el contacto directo con los químicos y luego de la faena se laven bien el cuerpo. Eso se torna difícil porque las ropas especiales son muy caras, por lo cual los agricultores prefieren aplicar los químicos con vestimenta común.

Otro que sufre las consecuencias de la utilización de agrotóxicos es el consumidor final. Miguel Lozada, gerente general del laboratorio Rhone Poulenc, asegura que cuando se utilizan fosforados la cosecha debe realizarse veinte días después de la última aplicación. De no ser así, el consumidor del tomate presentará un primer síntoma de diarrea. Con el paso del tiempo, si sigue consumiendo productos contaminados podrá desencadenar un cuadro cancerígeno.

En 1986, Ecuador importó más de US \$ 85 millones en pesticidas y, si bien no hay datos ciertos, se presume que en los dos últimos años esa cantidad se incrementó. “Es un círculo vicioso: los suelos pierden fertilidad porque los pesticidas destruyen lombrices y organismos fertilizantes. Entonces se utilizan fertilizantes artificiales, y así todo depende de los químicos, tanto para fertilizar como para atacar las plagas”, dice Ximena Santacruz. Para la experta de Fundación Natura, la única forma de cambiar esta realidad es utilizando fertilización orgánica, rotación de cultivos y aplicando un control biológico de las plagas. “Si no la situación seguirá empeorando y no habrá salida, ni para el ambiente, ni para la salud de los agricultores y los consumidores”, concluye.

Abril 27 de 1999 (martes). Iglesia Católica pide condonación de deuda externa. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) pidió un acuerdo con los acreedores para suspender el pago de la deuda externa, de modo que el país pueda superar su “peor crisis económica de los últimos 50 años”.

El secretario de la CEE, el obispo José Eguiguren, dijo que hay que luchar agresivamente para disminuir al menos el peso de la deuda en la economía del Ecuador. “Nosotros hemos contraído la deuda y hay que pagarla, pero debemos trabajar insistentemente para que los países ricos paguen el servicio por un tiempo, para poder salir de la crisis económica

en que estamos”, comentó Eguiguren. El obispo agregó que es necesario que el país comience un proceso urgente de recuperación, consciente “de que se vive la mayor crisis de los últimos 50 años”. Eguiguren se declaró contrario al no pago de la deuda y cree que no es válido preguntarle al pueblo en una consulta nacional, si hay que pagar o no, porque la gente va a contestar que no. “Luego de eso, ¿qué? ¿Cerramos las fronteras y aquí no entra ni sale nadie?”, se preguntó Eguiguren, discrepando con su par, Luis Luna Tobar, también integrante de la CEE y arzobispo de la sureña ciudad de Cuenca.

Luna Tobar encabeza un movimiento de organizaciones sociales que impulsa una consulta a los ecuatorianos que, entre otras cosas, pregunta si están de acuerdo con invertir en obras sociales lo que hoy se destina al pago de la deuda externa.

El gobierno de Jamil Mahuad destinó 53% del presupuesto nacional al servicio de la deuda externa en el primer trimestre del año, pero no pagó los sueldos de los funcionarios públicos y tampoco entregó a las alcaldías el porcentaje presupuestal que les corresponde por ley.

La deuda externa ecuatoriana asciende a US \$ 13.000 millones, la más alta de América Latina en términos relativos, ya que representa 84% del producto interno bruto. La exhortación del papa Juan Pablo II a los países del Norte desarrollado para que acepten la condonación de la deuda de los países pobres es un hecho fundamental para que Ecuador asuma la propuesta, opinó. Asegura, además, que no pagar la deuda por un tiempo o crear un sistema que reduzca las exigencias le daría un respiro económico al país. “Hay quienes dicen que si se reduce la deuda perderemos toda credibilidad de honestos y limpios. Creo que declararse quebrados es lo más honesto, lo deshonesto es mantener una imagen de buen pagador estando en quiebra como Ecuador”, señaló Luna Tobar.

En la actualidad todos los sectores políticos y sociales se declaran favorables a una condonación de la deuda externa, pero existen matices que dependen de los intereses que representan quienes se pronuncian.

Las cámaras de Industria y Comercio de Guayaquil proponen que se destine parte de los ingresos petroleros a recomprar títulos de deuda

externa como una forma de condonación. Pero expertos recordaron que muchos de los poseedores de los valores son afiliados a esas asociaciones empresariales.

La Iglesia Católica también posee títulos de deuda, lo que provocó críticas de algunos sectores sindicales. Los cuestionamientos fueron refutados por Eguiguren, indicando que es normal que en el país existan tenedores de deuda.

Es la primera vez que un secretario de la CEE reconoce que la Iglesia tiene bonos de deuda externa ecuatoriana, que fueron adquiridos con el fin de obtener recursos para programas sociales. “Los bonos son como moneda. Lo que hay que ver es si la compra fue moral o inmoral, pero el hecho de tenerlos no es inmoralidad. A cambio de deuda nosotros hemos mantenido durante 15 años el desayuno escolar para 200.000 niños”, aseguró Eguiguren.

La posición de la jerarquía eclesiástica favorable a la condonación de la deuda se conoce en momentos en que la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, busca un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación del pasivo externo ecuatoriano. El 52% del total del adeudo es con bancos privados, 30% con organismos multilaterales y 18% con los países ricos nucleados en el Club de París.

Ecuador busca un acuerdo *stand by* (de contingencia) de 18 meses por US \$ 400 millones con el FMI, y renegociar la deuda con el Club de París. De acuerdo a la propuesta del presidente de Francia, Jacques Chirac, el Club de París debería condonar o al menos reducir la deuda de los países pobres. El subsecretario de Finanzas, Mauricio Pareja, dijo que la posición del Ecuador frente al FMI y al Club de París es clara: “no se puede pagar el servicio de la deuda mientras su monto represente buena parte del presupuesto nacional”.

Mayo 5 de 1999 (miércoles). La tristeza de los kichwa. La crisis económica que vive Ecuador hizo crecer los casos de depresión en Quito, Guayaquil y Cuenca, las principales ciudades del país, según concluyeron investigaciones especializadas. El aumento del desempleo, la congelación

de las cuentas bancarias por parte del gobierno y la inestabilidad que vive el país llevaron a que gran cantidad de ecuatorianos presenten síntomas depresivos. La enfermedad ataca a gente de distintas edades y clases sociales, y termina en muchas ocasiones de forma trágica porque lleva a un elevado número de ecuatorianos, sobre todo jóvenes, a intentar el suicidio. En los últimos seis meses se registraron más de 1.000 casos de intentos de autoeliminación.

Bernardo Arauz, psicólogo y miembro del Departamento de Salud Mental del hospital Voz Andes, advirtió que 80% de los suicidios reportados en esa casa de salud en los dos últimos años fueron cometidos por adolescentes.

El médico psiquiatra Luis Fierro explicó que la situación económica hace que la familia se desestabilice y pierda posibilidades de comunicación, un caldo de cultivo para la depresión. “En los últimos meses muchos padres de familia están preocupados en enfrentar la crisis y se despreocuparon de los hijos. Esa carencia afectiva hace que muchos jóvenes piensen en la alternativa loca del suicidio”, dijo.

En marzo, la inflación creció 13,8%, una cifra histórica, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el primer trimestre del año, el aumento acumulado de los precios al consumidor llegó a 20,2% y en los doce últimos meses a 54,3%. “La gente no sabe cómo responder a la crisis, y en los sectores de clase media se han dado casos de personas muy angustiadas por el congelamiento de sus cuentas bancarias”, comentó Fierro. Según las estadísticas, hasta el año pasado la mayor causa de depresión en las ciudades era la soledad. En los tres primeros meses de este año, el 70% de los casos se atribuyen directa o indirectamente a la situación económica. En las zonas indígenas de Los Andes ecuatorianos a las causas económicas hay que sumarle otras de carácter cultural. En una comunidad de Otavalo, dos horas al norte de Quito, en la provincia de Imbabura, Salvador me habla de la tristeza, de cómo es difícil espantarla de su mirada y de tantos de sus hermanos. Recuerda a un señor que había estado por esa zona investigando “por qué él era triste” pero se fue y nunca le dijo “si había descubierto el

origen de las lágrimas”. Si bien –como señalan algunos psiquiatras–, en los habitantes de la ciudad la depresión puede ser una consecuencia de la soledad, en los indígenas de origen kichwa como Salvador también habría que tomar en cuenta raíces culturales que se han ido traspasando de generación en generación.

El médico canadiense Michel Tousignant que ha vivido muchos años en Ecuador, donde realizó varios estudios con las poblaciones kichwa, fue uno de los primeros en marcar que la depresión tenía también rasgos culturales. Durante su estadía en el país realizó una investigación sobre el *llaqui* o pena, que afecta a las poblaciones kichwa y lo describió como una “ideología de la resignación, reflejo de la sicología de la marginalidad” y enfatizó en la importancia que adquiere lo cultural en esta enfermedad. Para esa conclusión sumó a sus estudios el decir de los propios indígenas, quienes señalan que desde tiempos ancestrales muchos padecen de esta “enfermedad de la tristeza” que, siempre ha sido tratada por los shamanes.

A pesar de lo singular del estudio, Tousignant nunca pudo profundizar lo suficiente y la mayoría de los psiquiatras nunca lo tomaron mucho en cuenta ni siquiera para continuar la investigación. Es así, que hasta hoy en Ecuador, se sigue hablando del *llaqui* como parte de la mitología del pueblo kichwa. Pero esa realidad comenzó a cambiar cuando el doctor Mario Maldonado (quien obtuviera una Maestría en Psiquiatría en la Universidad McGill de Canadá) se decidió a continuar el trabajo de Tousignant, aportando bases científicas a la investigación, y comprobando que el *llaqui* no tiene nada de leyenda, pues es lo que en la medicina occidental se conoce como depresión.

El trabajo, denominado *Llaqui y depresión: un estudio exploratorio entre los kichwa del Ecuador*, se llevó a cabo en la ciudad de Otavalo, al norte de Quito. Allí se realizó una investigación sobre las experiencias depresivas en distintos grupos. Finalmente se tomaron cincuenta personas que padecían el mal y se determinó el diagnóstico psiquiátrico. Para eso, Maldonado contó con la ayuda de diez shamanes o yachactaitas que ya habían implementado distintos tratamientos para sus pacientes y

desarrollaron ciertas teorías sobre la enfermedad. Hasta hace poco, para los psiquiatras ecuatorianos el *llaqui* era solo parte de la creencia popular, sin ninguna importancia clínica, por lo tanto, sin la necesidad de un tratamiento médico. Como consecuencia de ese pensamiento, cada vez que se presentaba un caso de *llaqui*, los médicos recetaban analgésicos o vitaminas, que eliminaban los síntomas pero no curaban la enfermedad.

Tras la investigación de Maldonado, que antes de sus primeras comprobaciones sobre la existencia de ‘la tristeza kichwa’ en el área rural de Otavalo, pensaba similar a sus colegas, se comprobó que las personas con *llaqui* necesitan realizar un tratamiento psiquiátrico pues “tienen desórdenes psicológicos”. Y según un estudio socioeconómico complementario, “el *llaqui* produce un impacto económico, psicológico y social muy negativo, ya no sobre el afectado sino sobre su familia e incluso sobre la propia comunidad, pues muchas veces este desiste del trabajo y se dedica a la bebida por lo que se hace necesario buscar formas de tratar la enfermedad de forma más efectiva”. Para poder lograr eso, el médico ecuatoriano recomienda que “los trabajadores de la salud que frecuentemente se encuentran con casos de *llaqui* no basen el tratamiento, solamente en lo que recomienda la psiquiatría y, se nutran más de las creencias kichwa que aportan todo un tratado cultural sobre la enfermedad y cómo tratarla”. Es la suma de la medicina occidental y la sabiduría indígena contra la depresión.

Mayo 6 de 1999 (jueves). Contaminación en la Amazonia. El dolor ancestral de los kichwa también se refleja en la tristeza moderna de las comunidades que nos son respetadas por el poder blanco-mestizo. Comunidades indígenas de la provincia de Napo, en la Amazonia del Ecuador, realizan hoy protestas por la contaminación del río Misahuallí, causada por la construcción de un oleoducto. En las últimas dos semanas causó alarma en los pueblos de esta zona petrolera el aumento de diarrea en los niños y la aparición de hongos en la piel de gran cantidad de personas. El análisis médico constató que estos síntomas eran consecuencia de enfermedades producidas por el consumo y utilización del agua del río.

La dirigente indígena Martha Tapuy dice que los niños están enfermos y carecen de medicinas, por lo que las comunidades piden “la intervención de las autoridades”. “El río es parte de nuestra vida. Si no tomamos el agua de él no tenemos de dónde sacarla”, afirma. La contaminación es atribuida a los desechos arrojados por la compañía Argep, constructora del oleoducto, que no utiliza tecnología adecuada para proteger las aguas, según los expertos.

Decenas de indígenas tomaron el viernes pasado un puente para impedir el paso de los trabajadores de la empresa y se enfrentaron con militares y policías antes de ser desalojados. En otra zona cercana, mujeres y niños de las comunidades se apoderaron de una retroexcavadora de la empresa y mantuvieron retenidos a los operadores, sin causarles daño.

Los indígenas exigen que la compañía detenga la construcción del oleoducto y descontamine el agua antes de continuar con las obras. Mientras eso no ocurra, piden tanques para proveerse de agua de lluvia destinada al consumo diario. Luego de las protestas, se instaló una mesa de diálogo entre el gobernador de la provincia de Napo, Edgar Santillán, dirigentes indígenas de la Amazonia ecuatoriana y ejecutivos de la compañía petrolera. La empresa se comprometió a cumplir con el pedido de las comunidades. Sin embargo, los dirigentes indígenas señalaron que se mantendrán a la expectativa y que, si no se soluciona el problema, emprenderán nuevas acciones, lo que podría trasladar el conflicto a las demás provincias amazónicas del Ecuador.

Turquino Tapuy, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo señala que el daño causado por las petroleras no es un problema nuevo. Por eso, “las comunidades no confían mucho en la palabra de los personeros de esas compañías”, dice. La organización ambientalista Acción Ecológica denunció que “la actividad petrolera en el oriente ecuatoriano está destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y amenaza seriamente la supervivencia de muchas comunidades indígenas”. Los problemas producidos por el petróleo no son de ahora. En la década de los años treinta la compañía Shell realizó las primeras exploraciones en la Amazonia, lo cual introdujo

enfermedades que provocaron la muerte de cientos de indígenas huao-rani por carecer de defensas para las mismas. Desde 1967 a 1990 la explotación petrolera en la Amazonia fue realizada únicamente por Texaco Petroleum Company y más tarde por la empresa estatal Petroecuador y diez compañías extranjeras.

Al retirarse Texaco, varios pueblos indígenas apoyados por organizaciones ecologistas, iniciaron en Estados Unidos una demanda contra la compañía por daños y perjuicios ambientales ocasionados durante los años en que explotó el petróleo en el lugar. Los demandantes demostraron que la empresa no utilizaba tecnología de protección ambiental de uso común en otros lugares donde se explota petróleo, lo que provocó la contaminación de ríos y daños irreparables en la flora y la fauna de la región. Los últimos gobiernos ecuatorianos, incluido el actual de Jamil Mahuad, no apoyaron las acciones legales contra Texaco y pidieron a los tribunales de Estados Unidos que rechacen la competencia y la transfieran a Ecuador, lo que fue apoyado por la propia petrolera. A pesar de eso, el proceso judicial sigue su curso y se espera que la justicia estadounidense obligue en los próximos meses a la empresa a descontaminar las zonas afectadas y a indemnizar a las comunidades indígenas.

Valerio Grefa, diputado indígena de la Amazonia, señala que es fundamental atender a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera. De lo contrario, advierte, podría registrarse una catástrofe sanitaria. “Además de que puede haber problemas irreversibles en la salud, hay un ataque a los símbolos de nuestros pueblos, a su mundo, y cuando eso sucede solo les queda luchar”. En estos días se conoció otra noticia alarmante para la Amazonia ecuatoriana. El delfín rosado, una de las especies más raras de la región corre peligro de extinción. La bióloga Judith Denkinger, especialista en delfines rosados señaló que estos animales podrían desaparecer si no se detiene la deforestación y la contaminación de las aguas de los ríos Cuyabeno, Aguarico, Lagarto y otros en los que estos acostumbran a cobijarse. Un derrame de petróleo en Shushufindi contaminó en 1993 el río Aguarico y produjo la muerte de decenas de delfines. En estos seis años otros derrames y la deforestación

provocaron la desaparición de más cetáceos, colocándolos al borde de la extinción. Los delfines que pudieron sobrevivir a la contaminación continua se refugiaron en ríos y lagos más inaccesibles en la frontera entre Perú y Ecuador, donde Denkinger instaló un observatorio para estudiar su comportamiento. Con la firma de la paz entre los dos países se anuncia una mayor explotación de la zona, extendiendo la amenaza de contaminación petrolera al último reducto del delfín rosado. Denkinger dijo que si no se para la deforestación y la contaminación petrolífera de los ríos, desaparecerá una especie única en el mundo. “Solo quedará la leyenda indígena según la cual los delfines rosados se transforman en hombre o mujer para encontrar su pareja en las comunidades ribereñas y que, cuando la encuentran, regresan con ella al río, donde los dos vuelven a ser delfines”, comentó la bióloga.

Mayo 10 de 1999 (lunes). ¿Cómo transformar la cangahua en tierra fértil? Obligados a vivir en lo alto de la montaña, en el páramo seco y árido, sin agua, sin servicios de salud, sin trabajo, con poca tierra, los campesinos de Licto, un pequeño rincón del Chimborazo, se vieron obligados a sobreexplotar cada pedazo de terreno. Esa fue su salida, pero también su perdición. La ciudad fue el otro escape. “Con el correr del tiempo la tierra comenzó a ponerse flaquita y ya no había casi lugar donde plantar. Unos se fueron a la ciudad a sobrevivir. Otros nos quedamos acá peleando por conseguir las tierras bajas que eran de nuestros antepasados, y haciendo todo para que las tierras altas produzcan un poquito”, comenta una indígena de la zona.

Y así, uniendo esfuerzos, los indígenas del lugar fueron venciendo adversidades y construyendo su historia y comenzaron a trabajar para recuperar tierras que estaban botadas en manos de la aridez. “Recuperar la tierra para nosotros es como recuperar cultura, recuperar nuestra vida y la de nuestros abuelos. Y ahí vamos yendo bien”, dice Emilio un dirigente del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), filial de la Conaie.

Con métodos tradicionales indígenas que habían dejado de utilizarse hacía décadas, terrenos que se habían tornado desierto comenzaron a producir. La dureza de la cangahua comenzó a transformarse en tierra fértil. La terraza, la pirca, la zanja, la protección de los árboles nativos. La agroforestación ayudó a los campesinos de Licto en su lucha por un pedacito de terreno para sembrar. “Nosotros hemos recuperado tierras que estaban improductivas en manos de los hacendados, gracias a la lucha. Pero además estamos recuperando suelos en los que nadie se imaginaba que algún día se pudiera plantar. Muchos decían que estábamos locos pero el tiempo nos dio la razón. Además demostramos que se puede producir colectivamente y lo estamos haciendo”, dice Emilio.

Además de utilizar técnicas andinas tradicionales para proteger los sembríos se comenzó a reforestar la montaña, que en cincuenta años había sido totalmente deforestada. El árbol nativo fue importante en la protección de los cultivos, no permitiendo la erosión y protegiendo los sembríos de la lluvia fuerte. Se instrumentaron dos viveros de árboles nativos que brindan los arbolitos necesarios para la reforestación de la zona. La minga, el prestamano, el trabajo colectivo, ayudaron a mantener unidas las diferentes comunas de Licto, ayudaron a resistir, a vencer las dificultades. “La minga es una forma de trabajo solidario que está arraigada a nuestra cultura. Es una forma que tenemos los indios de ayudarnos y ayudar a la comunidad. El trabajo de recuperación de tierras se hace en mingas con amplia participación de nuestra gente. Después los que se produce en esos terrenos es para todos”, dice Josefa, otra indígena.

En estos últimos años también se cumplió otro anhelo de las comunidades de Licto y del Chimborazo, con la implementación de un sistema de regadío que ayudó a mejorar la producción. Sin embargo, todavía el agua es poca para los campesinos del Chimborazo y otras zonas de la Sierra, y el páramo se quiebra. Pero a pesar de los dolores, los indígenas están convencidos de que es imposible ver la recuperación de suelos en forma aislada porque es solo una partecita de un trabajo integrado que involucra una forma distinta de ver el mundo, y la construcción de una vida mejor. Así, quebrando la aridez o peleando en los levantamientos

indígenas, así, en cualquier fecha, cualquier imagen, cualquier mirada, encontramos a los campesinos de Licto construyendo su destino. Lentamente, día tras día, caminamundos del futuro.

Mayo 12 de 1999 (miércoles). Ecuador capitula en las negociaciones frente a Perú. Una vergüenza para el país: lo que ganó en el Cenepa se pierde en las negociaciones. Los presidentes Jamil Mahuad, del Ecuador, y Alberto Fujimori, del Perú, declararán formalmente establecida este jueves la nueva frontera entre los dos países en una zona que estuvo en disputa durante más de 50 años. El acto se celebrará en la confluencia de los ríos Yaupi y Santiago, en la zona limítrofe donde los Ejércitos del Ecuador y Perú se enfrentaron en la última guerra entre ambos países en 1995, informó el canciller ecuatoriano José Ayala Lasso.

El funcionario destacó el ‘esfuerzo y la voluntad’ de los dos países para colocar en pocos meses los 27 hitos en la línea de frontera, pese a las adversas condiciones climáticas de la zona. La colocación de hitos incluyó 78 km que se mantenían sin demarcar en la cordillera del Cóndor, región selvática ubicada 350 km al sur de Quito y 950 km al norte de Lima que fue escenario de guerras entre los dos países en 1941, 1981 y 1995. Ayala Lasso también informó que en la ceremonia se suscribirá el acta final que formaliza la delimitación de la frontera y la aplicación del resto de acuerdos alcanzados en Brasilia el 26 de octubre. En cumplimiento del acuerdo de paz firmado por los dos países, el gobierno de Fujimori publicó hoy en el diario oficialista *El Peruano* el aviso oficial de la transferencia al Ecuador de la propiedad de 1 km cuadrado en la zona fronteriza peruana de Tiwintza. La transferencia se concretará definitivamente en la ceremonia de este jueves, cuando Fujimori entregue a Mahuad la escritura pública respectiva. Se trata de un terreno minado que no tendrá ningún valor en el futuro, y que será muestra de la capitulación del Ecuador, luego de haber mantenido una guerra en la que salió triunfante. En el conflicto de 1995, tropas del Ecuador mantuvieron su posición en Tiwintza sin ser desalojadas por las peruanas, lo que convirtió el lugar en un símbolo nacional ecuatoriano. Pero el kilómetro cuadrado cedido por

Perú no representa ni territorialmente ni simbólicamente a Tiwintza. El futuro finalmente lo demostrará.

Mahuad señaló que “Tiwintza es un símbolo para Ecuador”, mientras el historiador peruano Gustavo Pons Muzzo dijo que la transferencia, sea transitoria o perpetua, es un hecho “desagradable”.

Al delimitar la frontera, entrarán en vigor todos los convenios que contempla el acuerdo de paz firmado por Mahuad y Fujimori en Brasilia. El tratado de comercio prevé la creación de dos zonas francas ecuatorianas en territorio peruano, sobre los ríos Marañón y Amazonas. El Convenio de Integración contempla la ejecución de proyectos con financiamiento internacional, como la instalación de un parque ecológico. El tratado de confianza mutua crea una comisión mixta ecuatoriano-peruana, que será constituida este mismo jueves y cuya labor específica será implementar medidas de seguridad en el área militar.

Para muchos sectores de los dos países, la delimitación formal de la frontera es una apuesta a una mayor integración fronteriza para la que se deja totalmente de lado las viejas diferencias. El historiador peruano Manuel Aliaga cree que la libre navegación del Amazonas será una realidad, y que se profundizará el comercial entre todos los países que integran la cuenca de ese río, no solo entre Perú y Ecuador. Aliaga, incluso, propone la futura formación de una ‘República Andina’ que una a Bolivia, Ecuador y Perú. Para Aliaga, estos países son los más similares entre sí de América, al punto de que en la realidad representan a la misma nación y “unidos conformarían una unidad regional clave en la economía continental y en el proceso de integración americana”. Más allá de los acuerdos, todavía queda mucho camino por transitar.

Mayo 14 de 1999 (viernes). Celam también pide condonación de deuda externa. La asamblea del Consejo Episcopal para América Latina (Celam) reunida en la capital del Ecuador, resolvió pedir la condonación de la deuda externa de la región y condenar los excesos de la globalización. Esta resolución de la 27 asamblea del Celam demuestra que la Iglesia

Católica latinoamericana, al finalizar el siglo, centra hoy más que nunca su atención en el aspecto social, según varios obispos presentes en Quito.

El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mario Ruiz, dijo que el pedido de condonación realizado por el papa Juan Pablo II y asumido por el Celam, se fundamenta en que la economía debe estar al servicio del hombre para que contribuya a resolver los problemas sociales. Ruiz aseguró que la Iglesia Católica de América latina y el Caribe asumió la tarea de trabajar por la condonación no porque sea una solución a todos los problemas de los países de la región, sino como un aporte. Se trata de que los países industrializados y los organismos multilaterales tomen conciencia de que “la economía debe servir al hombre y no al revés”, comentó Ruiz. También indicó que el Celam decidió censurar los efectos negativos de la globalización, que “tiene cosas buenas y malas. Lo negativo está en que los pobres no pueden insertarse en ella”. Con estas resoluciones, la Iglesia Católica vela por las necesidades terrenales de los más pobres, porque “el cristianismo no es la religión de los angelitos, sino de hombres y mujeres que viven en un tiempo concreto con angustias y necesidades reales”, añadió el obispo.

Carlos Talavera, obispo de Coatzacoalcos (México), que limita con el sureño Estado Chiapas, señaló que esta reunión del Celam ratificó el compromiso de la Iglesia con la dignificación del hombre y el pedido de condonación de la deuda externa va en esa dirección. Los obispos de Chiapas han venido trabajando desde hace muchos años en esa línea, con el objetivo de resolver problemas concretos que atentan contra las personas de ese lugar, a las que se les impide desarrollarse como seres humanos. “La Iglesia puede mediar en esta clase de conflictos porque para la resolución de los problemas de Chiapas se necesita el diálogo. De la misma manera que puede mediar en las conversaciones hacia una condonación de la deuda. Pero la Iglesia sola no puede resolver los problemas de la gente”, añadió.

Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo metropolitano de Tegucigalpa y actual presidente del Celam, dijo que en los últimos cuatro años el organismo ha venido tratando como punto prioritario el problema de la

deuda externa y sus consecuencias sobre la realidad social de América Latina. Representantes del Celam ya conversaron con autoridades de las instituciones financieras internacionales para hacerles conocer la posición de la Iglesia Católica latinoamericana en cuanto al peso que significa la deuda para los países de la región, indicó. El obispo hondureño también señaló que está en marcha el proyecto Jubileo 2000, que involucra a toda la Iglesia Católica en el camino hacia la condonación de la deuda de los países pobres. “Hemos hablado con los miembros de las conferencias episcopales de los países que integran el Grupo de los Siete (países más industrializados), quienes mediarán en el tema», con los gobiernos de los países desarrollados”, informó. Durante la cumbre del Grupo de los Siete, que se realizará el 7 de junio en la ciudad alemana de Colonia, la Iglesia Católica alemana entregará a los gobernantes presentes “la mayor cantidad de firmas de la historia por la causa de la condonación de la deuda”, dijo el presidente del Celam. El 30% de la deuda de los países pobres corresponde América Latina y el Caribe, con una incidencia del servicio equivalente al 35% de sus exportaciones. Rodríguez Maradiaga aseguró que se necesitaban cambios en el actual sistema económico mundial, y señaló que “la ética tiene que entrar a la economía”.

Mayo 23 de 1999 (domingo). Escuadrón de la muerte aterroriza Guayaquil. Una organización de derechos humanos del Ecuador aseguró que un grupo de parapoliciales encapuchados asesinó al menos a 20 presuntos delincuentes desde comienzos de este año en la rica ciudad de Guayaquil. Ocho personas con antecedentes penales sufrieron ejecución extrajudicial solo en la última semana en Las Malvinas, área popular de Guayaquil, la capital comercial del Ecuador ubicada sobre el océano Pacífico. Esas ejecuciones se suman a las 12 ocurridas entre enero y abril, según un registro del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Algunos moradores de Las Malvinas llaman a sus autores ‘escuadrones de la muerte’, otros los bautizaron ‘grupos de ajusticiadores’, pero el CDH lo denomina ‘escuadrón de limpieza antidelinquencial’.

La organización de derechos humanos identificó a las últimas 14 víctimas, halladas en abril y mayo en una ruta cercana a Las Malvinas. Según testigos, el grupo parapolicial está integrado por hombres que se cubren el rostro con capuchas o pasamontañas y que se movilizan en una camioneta roja. Todos los asesinatos fueron ejecutados de madrugada, con pistolas nueve milímetros. En cuatro de los últimos siete asesinatos hubo disparos letales de remate en la cabeza. En dos casos, además, se irrumpió en la vivienda de las víctimas y se las ejecutó delante de sus familiares.

En el último asesinato, los paramilitares regresaron al lugar para ejecutar a la víctima porque en el primer intento solo lograron hierla. Algunos moradores de Las Malvinas creen que se trata de una operación de “limpieza dispuesta por un abogado”. Otros atribuyen los crímenes a la acción de pandilleros. “Son pandilleros. Se meten en las casas, se dan bala y el que tiene mala suerte, muere”, dijo Manuel Mina, padre de una de las víctimas. El jefe de la morgue municipal, Benito Estacio, dijo que entre abril y mayo realizó un promedio de cinco autopsias diarias, de personas asesinadas en atracos, asaltos y homicidios en la zona de Las Malvinas.

El gobernador de la provincia de Guayas cuya capital es Guayaquil, Guillermo Lasso, admitió que la frecuencia de los crímenes y sus características dan indicios de que podría haber un grupo dedicado a la acción represiva de forma ilícita, y enfatizó que “eso no será permitido”. Ante la posibilidad de que exista un ‘escuadrón de la muerte’ en Las Malvinas, se ejecutarán operativos conjuntos entre la policía y las Fuerzas Armadas. Una ley seca parcial rige en Guayas desde la semana pasada como parte del endurecimiento del estado de emergencia contra la escalada delictiva. La medida se combina con la prohibición de reuniones en parques o la vía pública después de las 22h00 horas locales. El control tendrá como respaldo el Código Penal Militar y no se reconocerán fueros, principalmente a quienes opongan resistencia a la detención. Según el decreto, nadie podrá negarse a que inspeccionen su vivienda o local comercial.

De paso por Guayaquil, el activista argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, se mostró preocupado por la presencia de un escuadrón de la muerte en esa ciudad porque “este tipo de grupos tiene un triste recuerdo”. “En América Latina existen grupos organizados para asesinar a delincuentes, niños de la calle o mendigos. La presencia de estos escuadrones es totalmente negativa para la sociedad. Un muerto más otro muerto, suman dos y, obviamente, no atacan las raíces del problema”, señaló.

El problema de la seguridad ciudadana no debe analizarse solo desde el punto de vista judicial, sino social, porque “aumentan los índices de delincuencia cuando hay más hambre, marginalidad y desempleo”, agregó. “La progresión es matemática: si la gente no tiene trabajo, la violencia se incrementa”. El activista argentino afirmó que los latinoamericanos ya no creen que “la violencia se solucione con escuadrones de la muerte, policías o Ejércitos represivos. La sociedad civil tiene que generar una conciencia social, sensible y propia”, concluyó.

Mayo 24 de 1999 (lunes). Una decena de hipótesis para el asesinato de Jaime Hurtado. El Parlamento del Ecuador considera una decena de hipótesis, tras desechar otras muchas, del asesinato del líder opositor Jaime Hurtado tres meses atrás, entre ellas la de una ejecución a manos de narcotraficantes.

“Hurtado realizó investigaciones sobre el tráfico de drogas días antes de morir, pero sería una irresponsabilidad asumir esa hipótesis como definitiva antes de terminar la investigación parlamentaria”, comentó Iván Rodríguez, diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) que Hurtado lideró en vida. Rodríguez integra la comisión parlamentaria que investiga el crimen cometido el 17 de febrero. Hurtado fue asesinado a tiros en Quito en pleno día, junto a su suplente Pablo Tapia y su sobrino Wellington Borja, cerca del Congreso legislativo y a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia. El crimen es atribuido por el gobierno ecuatoriano a la acción de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar liderado por el derechista Carlos Castaño. La supuesta

participación del embajador del Ecuador en México, Medardo Cevallos, en el asesinato, así como en operaciones de narcotráfico, causó sorpresa en medios políticos y periodísticos ecuatorianos. Según esa versión, difundida el martes por el diario *La Jornada* de México, Hurtado habría investigado días antes de ser asesinado “supuestos vínculos de Cevallos con el narcotráfico”.

Hurtado había solicitado entonces información relacionada con Bancomex, institución financiera de propiedad de Cevallos, pero las copias del pedido se perdieron en el Congreso, explicó Rodríguez. La comisión investigadora del asesinato también pidió información sobre algunas personas y empresas vinculadas a ese Banco. “*La Jornada* corroboró parte de nuestra información, pero no podemos acusar al embajador ni a nadie. Se está investigando y al final sabremos cuál es la hipótesis más confiable, entre las que también figura un posible crimen de Estado”, dijo Rodríguez. El informe de *La Jornada* también involucra al procurador general del Ecuador, Ramón Jiménez, por su sociedad con Cevallos en la empresa Aislantes Plumavit, acusada por la agencia anti-drogas de Estados Unidos (DEA) de fabricar cajas con doble fondo para empacar productos pesqueros y cocaína. La información vincula estos hechos con la posible extradición a Ecuador del ex ministro de Gobierno (interior) Cesar Verduga, hoy preso en México, país al que ha solicitado asilo político. Según *La Jornada*, bajo la gestión del procurador general Jiménez Carbo han sido liberados 17 miembros del cartel ecuatoriano conocido como Los Reyes Magos, detenidos en 1992 cuando Verduga actuaba por primera vez como ministro de Gobierno.

El periódico mexicano afirmó que, en caso de ser extraditado, Verduga podría ser recluido en la misma cárcel donde permanecen aún los hermanos Jorge y Ramiro Reyes, pertenecientes a Los Reyes Magos. Sobre Verduga pesa una orden de prisión por mal manejo de US \$ 6 millones de los fondos reservados del Ministerio cuando ocupó por segunda vez el cargo entre febrero de 1997 y enero de 1998, durante la presidencia interina de Fabián Alarcón. Si hay personas interesadas “en mezclar el caso de Verduga con el de Hurtado es porque no entendieron la

seriedad de la comisión investigadora o quieren desviar el caso Hurtado de la atención pública”, advirtió Rodríguez. “No digo que no pueda existir relación, pero una cosa es el asesinato de Hurtado y otra el mal manejo de los fondos reservados por parte de Verduga. Una cosa es llegar hasta el fin en las investigaciones sobre el asesinato y otra la extradición de una persona buscada por la justicia”, argumentó. En febrero de 1997, el entonces diputado del Movimiento Pachakutik Miguel Llucó denunció los montos de los fondos reservados utilizados por el ex ministro y las fechas en que habían sido desembolsados. Llucó señaló que el dinero fue utilizado en instancias preelectorales tales como el referéndum que ratificó al gobierno interino y la Asamblea Constituyente que reformó la carta magna, períodos en que el Ministerio de Gobierno contrató asesores internacionales expertos en mercadotecnia. En su declaración ante el parlamento, Verduga admitió esos gastos, y aseguró que gran parte del dinero fue utilizado en “estudios psicosociales de la población ecuatoriana”. Además de los fondos reservados, los diputados descubrieron que Verduga gastó más de US \$ 1 millón de fondos corrientes del Ministerio de Gobierno en encuestas sobre su popularidad y la de Alarcón.

Luego de algunas indagaciones, el 4 de abril de 1998, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero, decretó la prisión preventiva de Cesar Verduga, que se había fugado del país horas antes. Poco después, declaró a periodistas extranjeros que regresaría a este país para defenderse de esas acusaciones, a las que consideró “parte de un complot de enemigos políticos y del narcotráfico internacional”. Sin embargo, nunca regresó. Se instaló en México, donde trabajó como asesor del Ministerio de Comunicación y Transporte hasta el momento de su detención.

El procurador del Estado, Ramón Jiménez, y el hijo del embajador ecuatoriano en México, Medardo Cevallos (hijo), calificaron de ‘infundio’ la versión difundida en México. Jiménez hizo notar la coincidencia de que esa versión se difundiera 24 horas antes de que el subprocurador Leonello Bertini y la fiscal Mariana Yépez viajen a México para fundamentar el pedido de extradición de Verduga. El funcionario dijo no tener

conocimiento de la supuesta investigación de Hurtado sobre su vinculación con la empresa Aislantes Plumavit, de la que dijo ser presidente y tener una sola acción de 15 centavos de dólar. También admitió tener buena amistad con el gerente de esa compañía, Juan Carlos Chaparro, detenido en Guayaquil por acusaciones de narcotráfico. Mientras, Cevallos (hijo) dijo que sus empresas, relacionadas con los sectores pesquero, bancario y periodístico, “nunca han tenido nada que ver con narcotráfico y, mucho menos, con el asesinato de Hurtado”. Cevallos enfatizó que la intención es desprestigiar al régimen ecuatoriano para debilitar su posición frente al pedido de extradición.

Mayo 25 de 1999 (martes). Asesinato de Hurtado, impune pese a compromiso de Mahuad. El asesinato del líder izquierdista Jaime Hurtado, del Ecuador, sigue impune tres meses después de haberse cometido, mientras la hipótesis presentada por el gobierno, que involucra a paramilitares de Colombia, pierde asidero. El diputado Hurtado, líder del Movimiento Popular Democrático (MDP), fue asesinado a tiros en pleno día el 17 de febrero, junto con su diputado suplente, Pablo Tapia, y su sobrino Wellington Borja, a una cuadra y media del parlamento y a 30 metros de la Corte Suprema de Justicia. El crimen conmocionó el ámbito político. Dirigentes de distintos sectores deploraron el asesinato y exigieron justicia.

Paco Moncayo, líder del partido Izquierda Democrática en el Congreso legislativo, dijo que el crimen no podía quedar impune como también ha ocurrido con el del dirigente sindical Saúl Cañar, cuyo cuerpo apareció muerto con signos de tortura en diciembre.

El presidente Jamil Mahuad manifestó consternación el mismo día del asesinato de Hurtado, por cadena nacional de radio y televisión, al tiempo que comprometió a su gobierno a hacer todo lo posible para su esclarecimiento. Mahuad declaró tres días de luto nacional y recordó que ningún otro diputado había recibido tal honor, al tiempo que ofreció una recompensa de US \$ 140.000 a quien entregara pistas para hallar a los culpables. La Conferencia Episcopal manifestó que el asesinato de

Hurtado podría ser obra de grupos paramilitares que en otros países han demostrado actuar con “mucha violencia y poca inteligencia”.

Otra de las hipótesis manejadas fue la de un ajuste de cuentas a manos de importantes sectores económicos de Guayaquil, capital comercial de este país, a los que Hurtado había acusado de corrupción. También se mencionó la posibilidad de sicarios contratados por sectores vinculados al entonces cogobernante Partido Social Cristiano (PSC). Otra hipótesis sostiene que la violencia política interna podría convenir a sectores de las Fuerzas Armadas, que vieron recortado su presupuesto luego de firmada la paz con el Perú. Dos días después del crimen, el 19 de febrero, Mahuad y el ministro de Gobierno (interior), Vladimiro Álvarez, informaron sobre la captura de tres cómplices de los asesinos. El ministro citó declaraciones de Washington Aguirre, uno de los detenidos, al señalar que Hurtado había sido asesinado por un sicario colombiano conocido como ‘Victorino’, quien había recibido el apoyo de otro compatriota suyo, pero los dos escaparon por vía aérea a Bogotá antes de las detenciones. Según Aguirre, habían recibido la ayuda de Michel Oña, un funcionario del Congreso que fue asesor de diputados del MDP y el PSC, quien estudió los movimientos de Hurtado y anunció por teléfono celular a Victorino cuando el diputado se retiraba del edificio. La policía informó que Oña murió en un enfrentamiento con agentes cuando lo fueron a buscar a su domicilio, aunque los vecinos dijeron a la prensa que no había existido tiroteo. Aguirre afirmó que el trabajo les fue encomendado por un ecuatoriano de nombre Henry y un paramilitar colombiano de nombre Andrés, quien les habría dicho que querían ejecutar a Hurtado porque “estaba colaborando con la guerrilla colombiana” y estaba “formando una guerrilla en Ecuador”. Una encuesta realizada por la empresa Cedatos horas después de las declaraciones de Aguirre aseguró que 65% de los ecuatorianos no creyó en la versión presentada por el gobierno.

El hijo de Hurtado, Lenin Hurtado, señaló que había “muchos cabos sueltos en la información proporcionada por el ministro, y de los autores intelectuales, nada”. Días después, el gobierno aceptó crear una comisión investigadora independiente en la que participan Lenin Hurtado, la

religiosa Elsie Monge, de la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, el diputado Iván Rodríguez y Juan de Dios Parra, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Con el correr de los días fueron apareciendo nuevos elementos, entre ellos la certeza de que Aguirre era informante de la policía y de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y que, días antes del crimen, habría informado de la llegada de los sicarios colombianos a dos oficiales de la policía. El ministro Álvarez señaló que no se podía dar credibilidad a las declaraciones de Aguirre, lo cual contradujo la actitud del gobierno al usar esas declaraciones para vincular a Hurtado con la guerrilla colombiana.

Con el asesinato de Cañar, el gobierno también había deslindado responsabilidades y prometió encontrar a los culpables. Sin embargo, las investigaciones no arrojaron ningún resultado positivo y persiste la impunidad. Una nueva versión, difundida el martes por el diario *La Jornada* de México, acusa al embajador Medardo Cevallos de estar implicado en el crimen del líder del MDP, ya que Hurtado investigaba ‘supuestos vínculos’ del diplomático ‘con el narcotráfico’. Cevallos es dueño de la empresa Aislantes Plumavit, que, según *La Jornada*, fue acusada por la DEA de fabricar cajas con doble fondo para empacar productos pesqueros y cocaína. El diputado Rodríguez dijo que, tras desechar muchas hipótesis sobre el crimen, hay una decena que aún tienen asidero. “Entre esas posibilidades figura la de una ejecución por orden del narcotráfico por indagaciones que Hurtado venía realizando días antes de morir. Pero sería irresponsable asumirla como definitiva antes de terminar las investigaciones”, comentó Rodríguez. El legislador aseguró que Hurtado había solicitado información relacionada con Bancomex, institución financiera de propiedad de Cevallos, pero las copias de la solicitud se perdieron en el Congreso.

La comisión investigadora del crimen también ha pedido información sobre algunas personas y empresas vinculadas a ese banco. “La nota de *La Jornada* corrobora parte de nuestra información pero no podemos acusar al embajador ni a nadie. Se está investigando y al final sabremos cuál es la hipótesis más confiable, entre las que también figura un

posible crimen de Estado”, aseguró Rodríguez. También se quejó de la falta de apoyo a la comisión por parte de la justicia y la policía, aunque prometió “llegar hasta el fin de las investigaciones para que el asesinato del diputado Jaime Hurtado no quede impune”.

Junio 18 de 1999 (viernes). Sube el desempleo y el subempleo. El último informe sobre el mercado de trabajo del Ecuador realizado por la empresa consultora Cedatos, reveló que solo 27,5% de la población económicamente activa cuenta con un empleo de tiempo completo, un dato que contradice las promesas electorales del presidente Jamil Mahuad.

Desde que Mahuad asumió la presidencia en agosto de 1998 hasta fin de mayo de 1999, el desempleo subió de 13 a 18,1% y el subempleo se situó en el 54,4%. De la población económicamente activa de 3,5 millones de personas, “72,5% está desempleada o parcialmente ocupada, y la mayor preocupación de los que tienen trabajo es de perderlo”, señaló Córdoba.

Desde agosto de 1998 hasta mayo se quedaron sin empleo 141.000 personas, y durante este trimestre 22.000 ecuatorianos que ingresaron a la fuerza de trabajo no obtuvieron el que buscaban. Muchos de los considerados con empleo tienen contratos temporales, ya que la mayoría de las empresas decidió aplicar la flexibilización laboral y eliminar gran parte de los contratos fijos para no pagar los impuestos que genera el trabajador estable.

Jorge Vivanco Mendieta, analista político y subdirector del diario *Expreso*, uno de los más importantes del Ecuador, sostuvo que la crisis económica y su inferencia en el empleo se debe a la conducción político-económica de los últimos 20 años, a la que no escapa el actual gobierno. “Los principales personajes que han dirigido la política económica del país desde hace 20 años son los mismos”, comentó Vivanco. El periodista aseguró que un “reducido grupo de personajes ha manejado la dirección de los organismos financieros estatales representando intereses de grupos de poder cuya voracidad produjo una injusta redistribución de la riqueza y utilizó el fisco a su gusto”.

Las cifras indican que en 1998, el déficit comercial superó los US \$ 1.000 millones, revirtiendo la tendencia positiva que se mantenía desde 1979; la reserva monetaria internacional cayó de US \$ 1.837 millones en agosto de 1998 a 1.300 en mayo de este año. En marzo de 1999 se registró la mayor inflación mensual en muchos años, 13,5%, lo que llevó el aumento del costo de vida anualizado a 54,3%. El déficit fiscal llegó en 1998 a US \$ 1.200 millones, 6% del producto interno bruto, y se presume que en 1999 puede subir a 7,3%. Para 1999 se espera una caída de siete% del producto interno bruto, lo que agudizaría la tendencia recesiva.

El dólar pasó de 7.500 sucres en enero de 1999 a 10.300 sucres en la actualidad, con un pico de casi 19.000 sucres en marzo “la devaluación registrada equivale a 90%. Esta situación afecta a los agentes económicos endeudados en dólares, que constituyen 60% de los créditos, quienes ven una forma de reducir gastos en la reducción de personal”, comenta el economista Alberto Acosta. Según él, la crisis se debe en parte a los efectos del fenómeno climático de El Niño que, según la Comisión Permanente para América Latina (CEPAL), ocasionó pérdidas de US \$ 2.900 millones y egresos por más de 700; a la caída del precio del petróleo y de las exportaciones; al ingreso de productos asiáticos baratos por las devaluaciones y a la incapacidad del gobierno para saber contrarrestarla. “El ingreso de productos asiáticos produce un desempleo inmediato, ya que la industria nacional compite, reduce sus ventas y reduce personal”, comentó.

Otro peso es el servicio de la deuda externa que bordea la mitad del presupuesto estatal mientras los trabajadores de la salud, administrativos y profesores universitarios, maestros y otros empleados públicos no cobran sueldo hace dos meses. A los maestros se les pagó el sueldo de abril con cheques sin fondo. “El servicio de los Bonos Brady (deuda comercial) realizado en las primeras semanas de 1999 dejó vacías las arcas fiscales y obligó a suspender los sueldos del sector público durante el primer trimestre”, aseguró el economista.

Para Acosta, el manejo de la crisis por parte del gobierno de Mahuad fue negativo. “Prefirió atender demandas del capital financiero y dejó

que la crisis, en ciernes cuando empezó su gestión, germinara, alcanzado niveles sumamente preocupantes”, aseguró. También considera desestabilizante la aprobación de un presupuesto desfinanciado para 1999, la eliminación del impuesto a la renta y la creación del impuesto a la circulación de capitales que retiene 1% de toda transacción financiera. Asegura que el nuevo tributo agudizó las presiones especulativas en la medida que muchos agentes económicos optaron por comprar dólares y sacarlos del país para no pagarlo. “Además, incentivó la desintermediación financiera, porque muchos medianos y pequeños ahorristas optaron por no trabajar más con los bancos, con un impacto negativo en el debilitado sistema bancario”, confirmó.

Según Acosta, estas medidas se completan con el deseo de acelerar las privatizaciones de petróleo, electricidad, teléfonos y puertos. “En su afán por reducir el tamaño del Estado en el número de funcionarios y en su gestión, Mahuad eliminó entidades del sector público y dispuso la privatización de otras, que no necesariamente son deficitarias. Eso aportó al desempleo”, afirmó.

También aseguró que la congelación por un año de los depósitos bancarios fue fundamental para la caída del empleo, ya que provocó el cierre de empresas.

El 11 de marzo, el gobierno dispuso la congelación por un año de 50% de los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a US \$ 200 y el total de los depósitos en cuenta corrientes y a plazo en moneda extranjera mayores a US \$ 500. El congelamiento afectó US \$ 2.500 millones, propiedad de 3,5 millones de ecuatorianos con cuentas bancarias. “La congelación pretendió salvar al sistema financiero, tras pasando capital de trabajo y ahorros de los particulares a la banca, en vista de que el Estado no tiene recursos para sostener la crisis, con más de 10 entidades asistidas por quiebra”, aseguró.

Según el Ministerio de Trabajo, entre enero y abril quebraron más de 400 pequeñas y medianas empresas, lanzando a la desocupación a más de 90.000 personas. Fuentes empresariales aseguran que en abril cerraron 100 pequeñas y medianas industrias dejando desempleadas a

30.000 personas. Mientras, algunas empresas grandes como Jabonería Nacional, Sumesa y Grasas Unico, además de reducir personal, dejaron de producir hasta terminar sus existencias y dieron vacaciones a sus empleados. Vivanco no ve una salida al alcance de la mano, porque cree que “la conducción política y económica sigue dominada por los mismos grupos de poder. Allí estarán, mientras no aparezca un líder capaz de remover esta inercia política y cívica que es la base incommovible de la crisis que nos agobia”, afirmó.

Julio 1 de 1999 (jueves). Cáncer en zonas petroleras. Un informe médico revela que las comunidades indígenas del Ecuador que habitan en áreas de producción petrolera están afectadas por una alta incidencia de cáncer. La investigación se realizó en la zona petrolera de las provincias nororientales de Sucumbíos y Orellana, en la región amazónica fronteriza con Colombia. Los resultados indican que la población de esa zona enfrenta el riesgo de padecer cáncer en una proporción tres veces superior al de otras partes del país. Pero la situación se agrava más aún cuando se trata de determinados tipos de cáncer, como el de laringe cuyo riesgo de padecerlo es 30 veces mayor que en otros sitios del país, el de las vías biliares, 18 veces más, el de hígado y piel, 15 veces más, y el de estómago, cinco veces.

La investigación fue realizada por un equipo médico del Departamento de la Pastoral Social del Vicariato de Aguarico, con la colaboración de expertos de la organización Medicus Mundi y la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. El estudio, que se desarrolló durante seis meses, se basó en análisis del agua de los ríos, estudio de las poblaciones afectadas y en la investigación estadística del crecimiento de la incidencia cancerígena con relación al aumento de la explotación petrolera en los últimos 30 años. También se comparó la incidencia de cáncer en esta región con la de otras zonas no petroleras del país y se estableció una relación directa entre la aparición de la enfermedad y la contaminación por petróleo.

Miguel San Sebastián, de Medicus Mundi, atribuye la incidencia cancerígena a la elevada contaminación con tóxicos que ha sufrido esta zona en los últimos 20 años, y alerta sobre el riesgo para la salud que implica seguir explotando petróleo sin control ambiental. “Los ríos, habitualmente utilizados por los residentes del lugar, están contaminados con petróleo en una proporción 200 y 300 veces mayor al límite permitido para el agua de consumo humano”, señala San Sebastián.

Este es el primer informe médico donde se establece una relación real entre la aparición del cáncer en una zona donde antes no se daba y la contaminación por la extracción petrolera. “Es un toque de atención para las autoridades. Aporta pruebas de que mientras persistan las fuentes de contaminación la salud de esta y otras poblaciones similares seguirá gravemente afectada”, aseguró San Sebastián. En enero, el gobierno prohibió la extracción de crudo en 135.000 hectáreas de bosque húmedo tropical perteneciente a las reservas de Cuyabeno y Yasuní, ubicadas en el nororiente. Estas zonas declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como reservas de biosfera son consideradas frágiles, porque además de la biodiversidad, está en peligro la propia supervivencia de las comunidades kichwa, siona y cofán en Cuyabeno, y huaorani en el Yasuní.

Turquino Tapuy, dirigente indígena de la Amazonia, tiene dudas de que el decreto se cumpla, ya “que todos los gobiernos hacen este tipo de promesas y después sigue la explotación”. Por su parte, portavoces de la organización ambientalista Acción Ecológica indicaron que es necesario extender el decreto a otras zonas en riesgo, pero además hacerlo cumplir. “Solo el tiempo puede mostrar si la medida está siendo respetada”, señaló. Esta organización ha denunciado que “la actividad petrolera en el oriente ecuatoriano está destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y amenaza la supervivencia de muchas comunidades indígenas”.

Amoco-Mobil, Arco, City, CGC, Elf, Oryx, Pérez Companc, Santa Fe, Tripetrol y Tritón son las compañías extranjeras que operan en la región

amazónica extrayendo petróleo de zonas declaradas oficialmente como reservas naturales.

La investigación sobre la incidencia del cáncer confirma una realidad que ha sido denunciada en los últimos cinco años: la contaminación por efecto directo o indirecto de la explotación petrolera afecta a toda la Amazonia ecuatoriana.

A pesar de que el petróleo de la región amazónica ha contribuido enormemente a las finanzas del Estado, solo 3% del presupuesto se reinvierte en la zona, que a la vez registra los más altos niveles de pobreza del país.

Julio 2 de 1999 (viernes). Sangre indígena en venta. Pero las tristezas indígenas también vienen de afuera. Al menos diez muestras de sangre de indígenas ecuatorianos se encuentran en venta en las denominadas 'Boutiques del Genoma' en Estados Unidos. Esos comercios biológicos internacionales ofrecen muestras sanguíneas para la investigación científica en el área de la biogenética. De esa manera, los genes de los indígenas tsáchilas (colorados), chachis (cayapas), huaoranis y kichwa amazónicos traspasaron las fronteras del Ecuador. Sin embargo, estos pueblos nunca dieron su consentimiento para que se experimente con su sangre.

El Instituto de Investigaciones Médicas Coriell Cell Repositories exhibe una vasta colección de diversidad humana, en la que se encuentran muestras de distintos pueblos indígenas de América Latina. Los científicos del instituto se encargan de verificar el ADN para luego vender a laboratorios y universidades cada muestra a US \$ 100, ofreciéndolas incluso por internet.

Las muestras que ya fueron vendidas forman parte de los procesos de investigación del genoma humano que se desarrollan en Estados Unidos y Europa. Como ejemplo de esos estudios, se puede mostrar la evidencia de que en la investigación del tejido de los chachis se descubrió una característica genética de la inmunidad, conocida como HLA, y que es exclusiva de ese pueblo. El descubrimiento que podría ser sumamente importante para aumentar la inmunidad en enfermos de Sida, aparece citado en el texto "La caracterización genética de los

indios cayapas y su relación con otras poblaciones americanas”. El estudio fue dirigido por el departamento de biología de la Universidad de Estudios de Roma. ¿Cómo llegaron las muestras a estas instituciones o a las boutiques del genoma? Sobre eso existe muy poca información y la comunidad científica ecuatoriana dice que ni siquiera estaba al tanto de este tipo de estudios internacionales. Según las pocas informaciones que se conocen, las muestras fueron tomadas por integrantes de algunas sectas pentecostales, expulsadas hace algunos años del país. Las muestras de los indígenas ecuatorianos están junto a las de indígenas de Venezuela, Colombia, Panamá y Brasil. Los diputados indígenas de Colombia y Ecuador decidieron iniciar una acción judicial conjunta de carácter internacional para recuperar las muestras, y esperan el apoyo de las organizaciones ecologistas y de derechos humanos de otros países. Además están impulsando al interior de sus países una ley que proteja la biodiversidad. Por su parte distintos grupos de ecologistas, el Centro de Investigación de la Biopiratería de Canadá y la Fundación Internacional para el Desarrollo de las Poblaciones Rurales llamaron a “oponerse a este tipo de programas que demuestran el carácter racista de la ciencia en el primer mundo, ya que muchas de las experiencias están dirigidas a una supuesta mejoría de la raza humana”.

El dirigente indígena Ricardo Ulcuango asegura que “este hecho no solo atenta contra la diversidad biológica de nuestro país sino fundamentalmente contra los derechos humanos de los pueblos indígenas. Además no deja de ser un atropello de las naciones poderosas contra nuestros pueblos”.

Los ejemplos de explotación de los recursos biológicos del Ecuador sin beneficios para el país, también denominada biopiratería, no son pocos. Sin embargo, “nunca se había llegado al límite de que se llevaran la sangre de nuestros hermanos”, comenta Ulcuango.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptó la Declaración del Genoma Humano que establece los lineamientos éticos para la investigación genética. Esa declaración dice que “antes de cualquier investigación de esta clase se

debe realizar un completo estudio de riesgos potenciales y beneficios”. En otra parte señala que cualquier muestra debe ser tomada con el consentimiento de la persona, que tiene el derecho a decidir si quiere ser informada de los resultados del estudio o no. La misma declaración dice que el material genético en cada individuo es una herencia común de la humanidad, por lo cual no puede producir ganancias económicas.

Por su parte los Países del Pacto Andino deben atenerse a la resolución 391 del Acuerdo de Cartagena, que exige contratos bilaterales entre los gobiernos y las compañías interesadas en acceder a los recursos genéticos. Pero aclara que en el caso indígena se debe consultar primero a las comunidades. El Convenio sobre Biodiversidad, que tiene fuerza de ley internacional, dice que los recursos biológicos están en la órbita de la soberanía nacional. Además se plantea la necesidad del consentimiento y participación de quienes los poseen que, deben beneficiarse al compartirlos. El conocimiento, la participación y el acceso suponen que tanto el Estado como los pueblos indígenas conozcan el verdadero fin del trabajo de investigación y obtengan beneficios con esto. Para Santiago Carrasco, presidente de la Fundación de Ciencia y Tecnología del Ecuador (Fundacyt) hay “un principio inviolable que debe ser respetado cuando se trata de la investigación genética: el de la dignidad humana”. Para Carrasco, quien considera que ese principio ha sido violado, es “fundamental una legislación que proteja la biodiversidad del Ecuador”.

Julio 6 de 1999 (martes). Movilización nacional contra Mahuad. Los indígenas del Ecuador mantienen hoy la ocupación de rutas en protesta contra la decisión del gobierno de Jamil Mahuad de subir el precio de los combustibles e insistir en la privatización de las empresas públicas. Miles de personas salieron de sus comunidades para cortar el tránsito en las carreteras del país e interrumpir el ingreso de productos agrícolas al mercado, lo cual puede provocar el desabastecimiento de las ciudades. La protesta convocada por la Conaie se mantendrá hasta que el gobierno archive definitivamente la ley de privatizaciones.

Antonio Vargas, presidente de la Conaie, dice que al gobierno no le importa las opiniones indígenas, y ante el alza de los combustibles y la arremetida privatizadora no les queda otra posibilidad que protestar. “Las nacionalidades indígenas y los movimientos sociales siguen abiertos al diálogo, pero el gobierno de Mahuad no quiere escuchar. No queremos que se regale el patrimonio, como en Argentina y Chile, para después tener apagones”, aseguró Vargas.

El parlamento consideró la semana pasada un proyecto de ley enviado por el poder Ejecutivo, que otorga poderes especiales a Mahuad para decidir sobre la venta de las empresas estatales. La oposición se declaró contraria a aprobar esa facultad, pero el gobierno anunció que en dos semanas enviará otra nuevamente, luego de buscar acuerdos con sectores que aceptan la privatización pero discrepan con los poderes especiales.

Los indígenas ya anunciaron un levantamiento para los días que se trate el nuevo proyecto, pero la protesta social subió de tono el ayer cuando 45.000 taxistas se declararon en huelga contra el aumento de combustibles decretado el viernes por la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, y exigieron su renuncia.

Con la medida, 60% de las actividades del país fue paralizada y las calles de las principales ciudades permanecieron cortadas, por lo cual miles de personas debieron concurrir a sus trabajos los dos primeros días de la semana caminando o en bicicleta. En algunas provincias las comunidades indígenas se sumaron a los taxistas y bloquearon las principales vías de tránsito, precipitando el levantamiento decretado por la Conaie. El estado de emergencia rige en todo el país desde el lunes, lo cual implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión del derecho de reunión y asociación. Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía invadieron el lunes por la noche el local del Sindicato de Taxistas y detuvieron a quienes encontraron reunidos en el local.

Los dirigentes sindicales que no fueron detenidos pasaron a la clandestinidad y las fuerzas de seguridad ya apresaron a más de 80 manifestantes. El ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, dijo que no iba

a aceptar imposiciones de los huelguistas, porque quien gobierna en Ecuador es el presidente Mahuad

De esa forma puso énfasis en la autoridad presidencial, cuestionada por analistas y diputados del propio gobierno, para quienes está gobernando la ministra de Finanzas. Álvarez aseguró, además, que “el gobierno está abierto al diálogo” pero que no acepta discutir sobre la renuncia de Armijos.

Las clases están suspendidas en todos los centros educativos. Las protestas colocan nuevamente en jaque a Mahuad y Ecuador vuelve a estar semiparalizado como en marzo, cuando el gobierno decretó estado de emergencia, aumentó el precio de los combustibles, congeló cuentas corrientes y de ahorros mayores a US \$ 200 y envió al Congreso la Ley de Privatizaciones. En esa oportunidad, la reacción social fue contundente y las ciudades más importantes fueron paralizadas por la falta de transporte público, el bloqueo de calles con taxis y barricadas y la movilización de los ciudadanos. En el medio rural, miles de indígenas y campesinos ocuparon carreteras, detuvieron a soldados del Ejército y retuvieron la producción agrícola produciendo el desabastecimiento en los supermercados de las ciudades. Luego de una semana de protestas, esa vez Mahuad suprimió el estado de emergencia, corrigió a la baja el decretado aumento de los combustibles y retiró los proyectos de ley sobre privatizaciones. Mahuad explicó posteriormente que el hecho de ceder posiciones apuntaba a “parar la amenaza de un enfrentamiento entre ecuatorianos, pues los niveles de violencia llegaron a límites inimaginables”. Tras insistentes rumores de posible autogolpe, las Fuerzas Armadas aclararon también que se oponían a la represión y rechazaban “cualquier salida que vaya contra el sistema democrático”. Hoy los rumores de Golpe de Estado son más fuertes y fueron confirmados por monseñor José Eguiguren, secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), quien pidió que nadie piense en una salida dictatorial.

Eguiguren aseguró a radio *La Luna* de Quito que el país vive un momento dramático y que es necesario abrir espacios para un diálogo transparente, tomando conciencia de la profunda crisis económica que

enfrenta el país y la dura situación de las clases media y pobre. También dijo que se deben buscar soluciones más allá de las presiones de ciertos grupos poderosos que solo quieren beneficios para ellos, y puso énfasis en que sería gravísima una salida no democrática porque empeoraría la situación del país. “El gobierno debe tener el gesto de rever sus medidas. Es fundamental que demuestre sensibilidad con los más pobres, porque es alarmante ver que profesores y médicos no cobran sus sueldos de 1’500.000 sucres (US \$ 150)”, dijo Eguiguren. Sus palabras causaron preocupación en el ambiente político. Esos rumores se juntan con la presencia en el país de Charles Wilhelm, Jefe del comando sur del Ejército de Estados Unidos, que se reunió a puerta cerrada con representantes del gobierno. Ecuador enfrenta la peor crisis económica en 30 años, con un desempleo de 18,1% y un subempleo de 54,4%.

El gobierno debe desembolsar este año US \$ 2.400 millones para pagar los servicios de la deuda externa y US \$ 1.500 millones más para sanear el sistema bancario, que afronta una profunda crisis con la quiebra de 10 entidades en los últimos ocho meses que ya costaron al Estado US \$ 1.600 millones.

Para algunos dirigentes indígenas “la movilización nacional en el campo y la ciudad hizo ceder al gobierno en marzo y lo hará ceder ahora”. “Creímos que no sería necesario volver a realizar un levantamiento, pero el gobierno nos empuja. Ojalá la Conferencia Episcopal pueda mediar y haga sensibilizar a Mahuad, sino seguiremos en paro indefinidamente”, aseguraron.

Julio 9 de 1999 (viernes). Indígenas cortan señales de radio y televisión.

La protesta nacional contra el gobierno del Ecuador se radicalizó hoy, cuando más de 3.000 indígenas de la provincia de Tungurahua, en la Sierra central, ocuparon estaciones repetidoras de radio y televisión y cortaron la señal.

La medida es parte de la protesta nacional contra el gobierno de Jamil Mahuad, que comenzó el lunes con una huelga de taxistas y continuó con el levantamiento de los pueblos indígenas el martes. A estos

se sumaron los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes, que se movilizaron en varias ciudades del país.

Los huelguistas exigen que se deje sin efecto el aumento de combustible decretado la semana pasada por el gobierno, y se archive definitivamente la ley de privatizaciones. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Antonio Vargas, asegura que si el gobierno no rectifica, entre este fin de semana y el lunes se producirá un levantamiento total. Vargas dio a conocer un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se recomienda al gobierno un aumento del gas de 105%, y dice que si los militares reprimen la protesta habrá enfrentamientos.

“Han pasado cosas terribles como la subida de la gasolina, el documento de imposiciones del FMI y la insistencia en la privatización de las áreas estratégicas”, arguye Vargas, y señala que en marzo se discutió la toma de Quito por unos 100.000 indígenas, pero se decidió suspender la medida. Los indígenas y campesinos informaron que se proponen apoderarse de centrales hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, así como bloquear el paso de los productos de primera necesidad.

La primera medida fue el cierre de carreteras en distintas regiones, que impiden la realización de ferias agropecuarias y mercados agrícolas, y la salida de productos agropecuarios desde las comunidades hacia las ciudades, por lo que se comenzó a sentir el desabastecimiento. En Quito y Guayaquil, los precios de las pocas frutas y verduras que se encuentran en los supermercados están entre un 60 y 120% más caros que la semana pasada. También se comienza a sentir la falta de gas y en las próximas horas podría faltar gasolina. En Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades del país no hay servicio de transporte público, porque los propietarios de autobuses no sacaron sus unidades debido al paro de los taxistas, que mantienen calles cortadas. Desde el lunes rige en todo el país el estado de emergencia, que implica la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión del derecho de reunión y asociación.

Según la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía, desde el comienzo de la protesta hay 273 detenidos. El ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, ofreció a los transportistas un precio preferencial para los combustibles a cambio de que levanten la medida. Sin embargo, la ausencia de Pedro Álava, máximo dirigente de la Federación Nacional de Taxistas, no permitió que se llegue a un acuerdo.

Esa organización confirmó que no va a participar en las conversaciones hasta que no se levante el estado de emergencia y se libere a los taxistas detenidos y Álava aseguró desde la clandestinidad que los sindicatos del transporte que negocian con el gobierno el levantamiento de la huelga no son representativos. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana aceptó mediar en el conflicto a solicitud del gobierno y la Conaie. Vargas manifestó que la Conaie acudirá a las conversaciones con el gobierno y la Conferencia Episcopal, si se deja sin efecto el último aumento de combustibles, se deroga el decreto de emergencia y se libera a los detenidos en las protestas.

El parlamento no pudo reunirse para discutir el levantamiento del estado de emergencia por falta de quórum. El 76% de la población justifica el paro de taxistas y el levantamiento indígena, según una encuesta de la empresa Cedatos realizada esta semana en Quito y Guayaquil. La mayoría de las personas consultadas, no obstante, declararon que no participan del paro “por temor a perder el empleo” o porque salir a las calles a protestar “afectaría el presupuesto familiar”. Las protestas provocaron que la misión del FMI, que debía llegar a Ecuador, aplazara su visita hasta “que el ambiente político interno se normalice”, lo que obligaría a postergar la firma de una Carta de Intención con ese organismo, que el gobierno de Mahuad pensaba concretar el día 16.

Julio 10 de 1999 (sábado). Amenaza de levantamiento total. La Conaie aseguró que este lunes crecerá el levantamiento que encabeza en todo el país, complementado con actos de desobediencia civil en las ciudades. La protesta nacional contra el gobierno de Jamil Mahuad comenzó el lunes con una huelga de taxistas y continuó el martes con el levantamiento

de los indígenas, que exigen dejar sin efecto el aumento del precio del combustible decretado la semana pasada y el archivo definitivo de la Ley de Privatizaciones.

Desde el viernes, 8.000 indígenas de la provincia de Tungurahua, en la Sierra central, a 100 km de Quito, mantienen tomadas estaciones repetidoras de radio y televisión y cortaron la señal. Los indígenas subieron la montaña, a más de 4.200 m sobre el nivel del mar, y sin dar tiempo a los 12 cuidadores se apostaron en los alrededores. Un contingente integrado por 80 soldados del Ejército intentó subir para desalojarlos, pero se quedó a medio camino porque los manifestantes cerraron con árboles, piedras y zanjas todas las vías de acceso a las antenas. Los uniformados sobrevolaron luego la zona en helicóptero. Vicente Chato, dirigente de Conaie en la zona, relató que, al ver el artefacto, los indígenas se enfurecieron, alzaron sus machetes y cortaron los cables de las repetidoras, dejando sin emisión a varios canales y emisoras. Luego, los indígenas se organizaron en comisiones y delinearon la plataforma de lucha de tres puntos: derogación del incremento del precio del combustible, congelamiento del de la gasolina y el gas y liberación de los taxistas apresados durante esta semana. A 100 metros del lugar donde se encontraban los indígenas, comenzaron a descender del helicóptero militares armados que fueron rodeados por los campesinos, quienes les dijeron que si intentaban actuar podría registrarse un enfrentamiento. En el mismo helicóptero llegó el gobernador de la provincia y directivos de los medios de comunicación para negociar.

Los dirigentes aceptaron restablecer la señal pero aseguraron que no se moverían de ahí hasta que el gobierno derogue las medidas, al tiempo que anunciaron que ya preparan una marcha de miles de nativos de la región hacia Quito. A los taxistas e indígenas se sumaron en la protesta los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes, que se movilizaron en varias ciudades del país. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, dice que si el gobierno no rectifica, entre este fin de semana y el lunes se producirá un levantamiento total. A pedido de las bases, el viernes en

la noche el dirigente de los taxistas Pedro Álava se hizo presente en una reunión con Álvarez, acompañado del Defensor del Pueblo y representantes de organizaciones de derechos humanos. Tras la reunión tampoco hubo acuerdo ya que tanto taxistas como gobierno mantuvieron sus posiciones iniciales. Álava aseguró que concurrió a dialogar por pedido de los taxistas pero que “solo se llegará a un acuerdo cuando el gobierno levante las medidas”. Por su parte, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que aceptó mediar en el conflicto a solicitud del gobierno y la Conaie, no encuentra eco en las partes.

Julio 11 de 1999 (domingo). El arte y la lucha de Tigua en la marcha.

Decenas de comuneros de las cinco comunidades que forman parte del cantón Tigua, provincia de Cotopaxi, se preparan para marchar hacia Latacunga, capital provincial, donde se reunirán con otros miles para tomar la ciudad, dentro del levantamiento indígena que paraliza el país. La mayor parte de los 3.500 indígenas del lugar, sobreviven gracias a una actividad que reúne a toda la familia: la pintura. Cuando el hombre fue consciente de la belleza que lo rodeaba decidió estamparla en las paredes de las cuevas. El hombre grabando las montañas y la fuerza de los animales. El hombre mirando un mundo indescifrable donde las cosas no tenían nombre y descubriendo de pronto que podía dibujarlas, podía trasladarlas de sus ojos a la piedra. El árbol fue esa imagen, el agua ese movimiento, el viento un trazo furioso sobre la roca viva. El hombre cambió el oído por el ojo, y el ojo fue capaz de hacerle ver toda la magia del amanecer, el color del sol reflejando en la montaña y el salto de los animales corriendo por la selva.

Con el correr de los siglos el hombre fue perfeccionando su mirada y el mundo representado fue más vivo. Entonces, en cada rincón hubo un lugar para diseñar la realidad mediante el dibujo y la pintura. En América, los indígenas supieron tomar su mundo y llevarlo a la piedra, al cuero, a la madera. Así, el arte se hizo tradición en el camino del tiempo y se fue trasladando de generación en generación. Entre muchas geografías, Los Andes también fueron fuente del color.

En la zona central de la cordillera ecuatoriana, particularmente en Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, los indígenas decoraron durante muchos años los parches de sus grandes bombos con pinturas festivas. De esa forma, la montaña, los animales, las plantas, los ponchos, los sombreros, la cosecha, pasaron a ser parte de los tambores plasmando una costumbre ancestral. Pero era necesario difundir la creación más allá de la región, y comenzaron a pintar todo ese mundo en cuadros de cuero que luego se llevaban a distintas partes del país. Cuando uno recorre la zona de Tigua se encuentra con que mujeres, niños, hombres y ancianos se dedican casi enteramente a esta actividad.

Primero se sacan los cueros de oveja y luego se tensan uno tras otro sobre bastidores de madera. Cuando están secos es hora de llevar color al mundo que los rodea. Los paisajes de la zona, las ferias, las fiestas, la vida antigua de las haciendas, la misa, la vida de la casa, el trabajo de los pintores al hacer los cuadros, la lucha por la tierra, la lucha del Movimiento Indígena y tantas otras imágenes quedan estampadas en el cuero.

En las casas de los habitantes de Tigua nos encontramos con cuadros de todos los tamaños que luego serán llevados a Quito y otras ciudades para ser vendidos en las casas de artesanía que generalmente cobran buenos precios a los turistas. “A nosotros nos representa un buen ingreso, comenta Pedro un indígena artesano de Tigua. Si bien las casas de artesanía cobran mucho más de lo que nosotros le vendemos, es la venta más segura. Claro que si pudiéramos comercializar directamente al público, sería mejor, pero eso es difícil porque no tenemos locales en las zonas donde van turistas”.

Si bien la pintura de Tigua es una tradición arraigada en estas comunidades de la Sierra ecuatoriana, el arte se había desfigurado al poner énfasis solo en lo comercial. “El problema –dice Pedro– es que muchos artesanos mestizos de la ciudad se dedicaron a realizar obras semejantes a las de Tigua porque era buen negocio. Pero su mirada no era indígena, no tenía nada que ver con nuestras comunidades entonces dejó de ser arte indígena, inclusive, las ventas bajaron mucho”. Pero hoy no son muchos los que pintan, hay que marchar a Latacunga.

Julio 12 de 1999 (lunes). Militares disparan contra la protesta. El gobierno del Ecuador se encuentra acorralado por protestas que paralizan al país, en un clima de convulsión social similar al que se vivió en los días previos a la caída del ex presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997.

Ayer 10.000 indígenas tomaron la ciudad de Latacunga, capital de la provincia central de Cotopaxi, 70 km al sur de Quito, y cortaron el puente de entrada a la misma, para protestar contra el aumento del precio del combustible decretado la semana pasada y pedir que se archive la Ley de Privatizaciones. Horas más tarde llegaron 100 soldados del Ejército e intentaron dispersar a los indígenas con gases lacrimógenos, pero solo lograron enfurecerlos.

Los militares abrieron fuego contra la multitud e hirieron a 12 personas. Varias de ellas recibieron disparos por la espalda, como Segundo Bedoya, quien recibió una bala en la columna vertebral y corre riesgo de morir o quedar parálítico. El hecho provocó fuertes protestas callejeras de los habitantes de la ciudad, a quienes se sumaron numerosos indígenas llegados de las zonas aledañas. Los soldados huyeron en camiones, y aunque habían sido identificados como pertenecientes a un cuartel de la región, las autoridades señalaron que no eran de la zona, agregando que no sabían de dónde habían venido. Dirigentes de la Conaie informaron que iniciarán un juicio penal contra el gobierno por intento de asesinato y aumentarán las protestas. El dirigente indígena Ricardo Ulcuango, responsabilizó al ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, por el ataque de los militares a los indígenas.

“La represión militar fue contra una movilización pacífica y los disparos contra nuestros hermanos fueron por la espalda, como lo comprueba el parte médico. Eso tiene que explicarlo el ministro de Defensa”, señaló Ulcuango.

También dijo que no aceptará excusas ni “mentiras como las que saben inventarse en situaciones como esta”. “Queremos justicia”, subrayó.

Además de Latacunga, otros pueblos de la provincia fueron tomados para impedir que se realicen ferias y se saquen productos al mercado. En la provincia de Tungurahua, limítrofe con Cotopaxi, la situación es

similar. Desde el viernes están ocupadas las estaciones repetidoras de radio y televisión, cuyas emisiones interrumpieron. El gobernador de la provincia llegó al lugar en helicóptero, acompañado por directivos de los medios de comunicación y por militares armados. Estos últimos fueron rodeados por los campesinos, quienes les dijeron que si intentaban actuar podría darse un enfrentamiento.

Tras negociar con el gobernador, los dirigentes indígenas aseguraron que mantendrían la ocupación de las estaciones hasta que el gobierno accediera a sus demandas, pero aceptaron reanudar el funcionamiento de las emisoras. Luego, cuando se enteraron de los incidentes en Latacunga, volvieron a cortar las señales. En la mañana de hoy unas mil mujeres indígenas y campesinas de la provincia norteña de Imbabura, con la dirigente Blanca Chancoso al frente, iniciaron una marcha de 200 km hacia la capital, y prevén unirse con otras que saldrán de distintas provincias para ingresar a la ciudad. “Aquí está la mujer indígena peleando por mejores días”, comenta Chancoso.

“Los hermanos y hermanas vienen en marchas pacíficas, así que esperamos que no haya represión ni sean detenidos, porque están dispuestos a responder”, dice Antonio Vargas, presidente de la Conaie.

Al ver que el cerco comenzaba a cerrarse sobre el gobierno, el presidente Jamil Mahuad anunció la congelación del precio actual de los combustibles hasta el 31 de diciembre. Explicó que el precio del barril del petróleo había aumentado hasta superar los US \$ 15, y que eso permitía mantener el precio de los combustibles sin que aumentara el déficit fiscal.

Muchos se preguntan si las autoridades no sabían que el precio del barril de petróleo ya era US \$15 la semana pasada y creen este gobierno vuelve a mostrar negligencia. “¿Por qué esperó hasta ahora para anunciar el congelamiento de precios? ¿Quería que se llegara a esta situación?”.

Portavoces de diferentes organizaciones sociales dicen que no es satisfactoria la medida anunciada por Mahuad, y que demandan que los precios del combustible se congelen en los valores anteriores al último aumento. Algunos dirigentes y sectores piden la renuncia del presidente, pero otros como Miguel Llucop opinan que eso no sería una solución, pues

si Mahuad abandonara su cargo sería sustituido por el vicepresidente o el presidente del Congreso, a quienes considera peores. “La solución está en rectificar. Que cambie la política económica, sustituya a la ministra de Finanzas, se preocupe por la realidad de los pobres y deje de darles dinero a los banqueros corruptos. Si no el país se va prender fuego y no habrá quien lo arregle”, aseguró.

Todas las capitales provinciales del país están paralizadas, sin autobuses ni taxis, y comienza a sentirse el desabastecimiento de alimentos y de gas. Se espera que pronto comience a escasear la gasolina. Desde el lunes 5 rige en todo el país el estado de emergencia, con suspensión de los derechos de reunión y asociación. Las Fuerzas Armadas están movilizadas. Según la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía, desde el comienzo de las protestas hubo 320 detenidos. El ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, declaró que la situación no es comparable a la que precedió a la destitución del ex presidente Bucaram, a quien el parlamento declaró mentalmente incapacitado para ejercer el gobierno, tras una oleada de protestas contra su política económica.

Julio 16 de 1999 (viernes). Indígenas llegaron a Quito. Entre ayer y hoy llegaron a Quito en forma pacífica 15.000 indígenas de distintos pueblos para hacer sentir su protesta en la capital y advierten que permanecerán en la ciudad mientras no se atiendan sus reclamos. Los marchantes fueron objeto de dura represión a manos del Ejército, que mantiene las calles de Quito bloqueadas y rodea el Palacio de Gobierno, donde el presidente Jamil Mahuad conduce las negociaciones con los diferentes sectores en conflicto.

Varios indígenas fueron heridos de bala durante la llegada a la capital. En la entrada sur de la ciudad veo como los participantes de la marcha son recibidos por la población que les mostraba su apoyo, pero en pocos minutos llegaron más de 1.500 militares en camiones y helicópteros que lanzaron bombas lacrimógenas contra la multitud y realizaron disparos al aire. El Ejército logró retrasar la llegada a Quito de los indígenas, que, de todos modos, se las ingeniaron para ingresar a la ciudad

por zonas rurales, ya que todas las calles de entrada a la capital estaban tomadas por efectivos de las Fuerzas Armadas.

Ricardo Ulcuango se mostró indignado con la actitud del gobierno. “¿Dónde está la sensibilidad de Mahuad?”, se preguntó. El miércoles Mahuad se mostró dispuesto a rever el aumento de los combustibles y crear un Fondo de Desarrollo para las Nacionalidades Indígenas pero sin precisar cómo lo haría. Para Ulcuango, las palabras de Mahuad, presionado por las protestas que paralizan el país hace 12 días, abrieron una puerta al diálogo. Sin embargo, el ataque militar contra los indígenas parece cerrarla.

“El presidente está acostumbrado a mentir. Por eso, hasta que no se hagan efectivos los anuncios no le creemos. Además, no levantó el estado de emergencia, medida fundamental para iniciar cualquier diálogo”, dijo Ulcuango.

La protesta nacional contra el gobierno comenzó el 5 de julio con una huelga de los transportistas, que fue levantada hoy, y siguió al día siguiente con el levantamiento de los pueblos indígenas. A estos se sumaron los afiliados al Seguro Campesino, maestros, trabajadores petroleros y de la salud, vendedores ambulantes y pequeños productores bananeros. Los huelguistas exigían que se deje sin efecto el aumento de combustible decretado el 1 de julio por el gobierno, y se archive definitivamente la Ley de Privatizaciones.

Desde el día 5 rige en todo el país el estado de emergencia (estado de sitio), con suspensión de los derechos de reunión y de asociación, y las Fuerzas Armadas están movilizadas. Hasta el momento hay tres muertos y una cantidad indeterminada de detenidos. El parlamento unicameral ecuatoriano aprobó este viernes la amnistía para más de 500 presos, a propuesta del diputado Gilberto Talahua, del Movimiento Pachakutik, pero se estimaba que las liberaciones tardarían en concretarse. “El estado de sitio sigue. Hay dirigentes sociales presos y el Ejército reprimió violentamente a nuestros hermanos que vienen de todos los rincones en marcha pacífica”, comentó.

Ulcuango aseguró que el Movimiento Indígena mantiene el levantamiento y los campesinos que llegaron a Quito no dejarán la ciudad hasta que se libere a los presos. Desde que comenzaron las protestas, los indígenas tomaron ciudades, procesadoras de agua potable, centrales eléctricas, y repetidoras de radio y televisión en distintas provincias de la Sierra ecuatoriana, para el miércoles comenzar su marcha hacia Quito.

El ataque del Ejército contra los indígenas en distintos puntos de la Sierra dejó decenas de heridos de bala, uno de ellos en estado grave y a punto de quedar paralítico y una joven de 14 años muerta. Además, hubo casos de asfixia en todo el país y una niña alcanzada por una bomba lacrimógena quedó ciega.

Al menos 300 de los más de medio millar de detenidos en los 12 días que lleva la huelga contra del gobierno se hallan a disposición de los juzgados militares.

Entre ellos figuran 56 dirigentes de las manifestaciones. El resto son conductores de taxi, ciudadanos que obstaculizaron las vías y unos pocos empleados.

Para las organizaciones de derechos humanos, la actuación del gobierno en estas protestas confirma la ubicación del Ecuador entre los países donde se registran las mayores violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la estimación de Amnistía Internacional. La organización había denunciado la actuación del escuadrón de la muerte en Guayaquil, las torturas y el asesinato contra el sindicalista socialista Saúl Cañar, el asesinato del diputado izquierdista Jaime Hurtado a pocos metros del Parlamento, en el que intervino un colaborador de la policía. También se menciona la muerte de dos personas en la provincia de Manabí a manos de parapoliciales y policías activos, la detención y tortura de un columnista del diario *El Universo* y la violación sistemática de hogares de personas sin ninguna vinculación a la delincuencia en Guayaquil. Tras constatar esas violaciones a los derechos humanos, Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), dijo que estaba preocupada por la represión contra los indígenas y distintos movimientos sociales que protestan contra el gobierno.

“El gobierno está cometiendo graves violaciones de derechos humanos al haber dictado el estado de emergencia para frenar el malestar social que tiene su origen en las duras medidas económicas que afectan a la mayoría de la población”, señaló la religiosa.

Monge agregó que la declaración viola la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas “La militarización en los lugares con gran presencia, organización y unidad indígena ha dejado como saldo 17 ciudadanos heridos de bala y decenas de personas asfixiadas”, aseguró. Por otra parte, dijo que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para procesar a civiles mediante el Código Militar viola el derecho a ser juzgado por tribunales con independencia e imparcialidad. “Por un lado, las Fuerzas Armadas son actores activos durante el estado de emergencia y, por otro, los tribunales castrenses pasan a ejercer justicia sobre hechos que no son propios de la función militar y que afectan a civiles”, señaló. Según una encuesta dada a conocer hoy por la Empresa Cedatos, 87% de los ecuatorianos no creen en la palabra del presidente Mahuad y 84% desaprueban su gestión. Su popularidad, que hace un año estaba en 66%, ha caído a 11%.

Julio 17 de 1999 (sábado). Indígenas y taxistas llegan a un acuerdo con Mahuad. Ayer, luego de negociaciones, los transportistas llegaron a un acuerdo con el gobierno para levantar su protesta. Hoy, el presidente Mahuad se comprometió ante la dirigencia indígena a congelar el precio de combustibles y gas por un año al precio que regía antes de la última subida decretada el 1 de este mes. Con este convenio, decidieron suspender las protestas que llevaban a cabo en el país.

Dirigentes de la Conaie y representantes de distintas regiones del país se reunieron por más de nueve horas con Mahuad y varios de sus ministros en la Casa de Gobierno, para concluir el acuerdo recién a las cinco horas de hoy.

Los indígenas plantearon una serie de reivindicaciones que fueron aceptadas por el gobierno, luego de lo cual se redactó un convenio que fue firmado por Mahuad, el ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, el

canciller Benjamín Ortiz y los dirigentes indígenas Ricardo Ulcuango y Antonio Vargas.

Además de la congelación de los precios de combustibles y gas, el gobierno se comprometió a instalar en un lapso no mayor de 15 días una mesa de concertación con el Movimiento Indígena y otros sectores sociales. En esta instancia se discutirán la modernización del país sin necesidad de nuevas privatizaciones, la renegociación de la deuda externa y la posible negativa a la instalación de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano.

El gobierno aceptó no enviar ningún proyecto de ley ni emitir decreto que tenga que ver con esos temas, antes de que se discutan en la mesa de concertación. Mahuad señaló al término de la reunión que los acuerdos demostraban “la sensibilidad del gobierno para terminar con el enfrentamiento entre ecuatorianos”.

Ulcuango aseguró que el convenio era una victoria de todos los movimientos sociales, pero cuestionó que siempre tengan que obtener logros luego de levantamientos. “Ojalá que el gobierno se haya sensibilizado de verdad y no sea otra mentira para que no tengamos que levantarnos nuevamente. No puede ser que solo se nos escuche cuando nuestros pueblos salen de las comunidades a pelear”, comentó.

También se acordó este sábado un subsidio al consumo eléctrico en zonas indígenas, facturación especial a vendedores ambulantes para que no paguen el impuesto al valor agregado en ventas menores de un monto a convenir, indemnizar a heridos y familiares de muertos en las protestas y la creación del Fondo de Desarrollo Indígena. Mahuad aceptó descongelar las cuentas bancarias de organizaciones sociales y organismos no gubernamentales sin fines de lucro, congeladas el 11 de marzo. En esa fecha el gobierno prohibió retirar por un año 50% del saldo en cuentas superiores a US \$ 200 y el total de los depósitos en cuentas en moneda extranjera mayores a US \$ 500. “En las negociaciones demostramos la participación indígena. Allí estuvieron representantes de distintas regiones, no solo los dirigentes, y así demostramos nuestra unidad”, señaló Ulcuango. El acuerdo entre el gobierno y los indígenas

se firmó luego de que 15.000 campesinos llegaran a Quito en marcha pacífica entre el jueves y la madrugada del viernes para tomar de manera simbólica la ciudad.

Los manifestantes fueron duramente reprimidos por el Ejército, cuyos efectivos mantenían las calles de la capital bloqueadas y el palacio gubernamental rodeado. Desde el día 5 hasta hoy rigió el estado de sitio en todo el país, con suspensión de los derechos de reunión y de asociación, y las Fuerzas Armadas estuvieron todo el tiempo movilizadas. Durante los doce días de protestas se registraron tres muertos, decenas de heridos y más de 500 personas detenidas. El Parlamento aprobó ayer la amnistía para los presos, pero hasta este sábado todavía no se había concretado la liberación. “El viernes se votó la amnistía y este sábado el gobierno levantó el estado de sitio tras el acuerdo a que llegó con mis hermanos. Sin embargo todavía hay dirigentes sociales presos porque el Ejército no los deja en libertad”, asegura Talahua.

Desde que comenzaron las protestas, los indígenas tomaron ciudades, procesadoras de agua potable, centrales eléctricas y repetidoras de radio y televisión en distintas provincias de la Sierra ecuatoriana, para el miércoles comenzar su marcha hacia Quito.

El viernes en la tarde los choferes de cargas pesadas y autobuses, que también estaban en huelga, llegaron a un acuerdo con el gobierno renegociar las deudas que tienen en dólares a cambio de que levantarán la medida. Los dirigentes de los taxistas, en cambio, no aceptaron esa propuesta y anunciaron que seguirían el paro porque el convenio a que habían llegado los otros transportistas no representaba el sentir de las bases y había sido firmado por Judas.

En la mañana de hoy, tras el acuerdo que llegaron los indígenas con el gobierno, Pedro Álava, presidente del sindicato de taxistas, organizó la caravana de la victoria con 4.000 autos que recorrieron varios barrios de Quito. De esa forma agradecían a los indígenas por lo que llamó “un triunfo popular”. “Así damos gracias a la lucha de los indígenas que vinieron aquí a pelear por todos y conquistaron algo que no pudieron lograr los dirigentes del transporte”, aseguró.

Julio 19 de 1999 (lunes). Indígenas entre logros y protesta. El Movimiento Indígena del Ecuador es, como quedó en evidencia en las últimas semanas, el único sector popular capaz de obtener logros concretos a través de la protesta en un país donde los sindicatos carecen de representatividad. Nadie imaginaba que el gobierno de Jamil Mahuad accedería en puntos que una semana antes descartaba, como el congelamiento por un año del precio de combustibles y gas, pero se vio obligado a ello por el levantamiento organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La marcha de miles de indígenas hacia Quito entre el jueves y viernes pasados hizo cambiar la posición al parecer inflexible del gobierno, que tras reprimirla violentamente con más de 1.500 soldados terminó cediendo a los reclamos.

El levantamiento de 1990 fue el punto de partida para esta nueva etapa en la que el Movimiento Indígena considerado el mejor organizado de América pasó de actor social a actor político. El elemento étnico y la reivindicación del Ecuador como país plurinacional fueron, en principio, los factores de unión de las distintas nacionalidades, pero la Conaie decidió ir más allá y buscó alianzas con otras organizaciones sociales y sindicatos independientes para crear el Movimiento Pachakutik. “La importancia de Pachakutik está en que nace como una representación de los movimientos sociales, sin tutelaje de partido político. Ese factor sirvió para unir a los pueblos indios y no indios alrededor de un proyecto político alternativo”, dice Macas.

La fuerza inicial pareció entrar en crisis debido a las diferencias que surgieron en los últimos meses entre dirigentes indígenas. Unos apostaron a acuerdos con el oficialismo para lograr la vicepresidencia del Congreso legislativo o dirigir el Consejo de Desarrollo para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, organismo autónomo pero adscrito al poder Ejecutivo y cuya dependencia del gobierno pareció aumentar en los últimos meses. Mientras, Ecuarunari, organización integrante de la Conaie que agrupa a los pueblos de la nacionalidad kichwa de la Sierra,

los de mayor población, propuso marcar distancia con el gobierno, cuestionando la política económica.

La Asamblea Nacional de la Conaie aceptó en junio las propuestas de Ecuatorunari y el levantamiento, anunciado para el comienzo del debate de la nueva Ley de Privatizaciones, comenzó el 6 de julio, precipitado por el alza del combustible decretada el día 1 y la huelga general de taxistas convocada el día 5. Mientras, los indígenas de la Sierra tomaron ciudades, procesadoras de agua potable, centrales eléctricas, y repetidoras de radio y televisión para exigir la rebaja del combustible y el archivo de la ley de privatizaciones, los de la Amazonia creyeron que obtendrían más réditos no enfrentándose al gobierno y no se sumaron a las protestas.

Entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado, más de 15.000 indígenas llegaron a Quito en marcha pacífica para tomar simbólicamente la ciudad, pero fueron objeto de dura represión a manos del Ejército, que mantenía las calles bloqueadas. Reagrupados en Quito, los indígenas celebraron una Asamblea donde pidieron a la diputada Pacari que no participara hasta que las comunidades allí reunidas llegaran a un acuerdo con el gobierno. Además, exigieron a los partidos políticos que no intentaran conseguir réditos con el movimiento. Ante la negativa de diálogo por parte del poder Ejecutivo, en la tarde del viernes marcharon hacia la Casa de Gobierno, en cuyos alrededores fueron interceptados por policías que les hicieron saber que Mahuad recibiría a 20 dirigentes y enviaría un vehículo a recogerlos. Todos gritaron que debían ir representantes de las comunidades presentes, que sumaban unos 500, o que, de lo contrario, Mahuad debería ir donde estaban ellos.

Al final, fueron 70 indígenas entre dirigentes de la Conaie, Ecuatorunari y representantes de las provincias, quienes, después de nueve horas de conversación, llegaron en la madrugada del sábado a un acuerdo con el gobierno y levantaron la protesta. Según distintas empresas encuestadoras, la Conaie tenía hasta junio el tercer puesto entre las instituciones con mayor credibilidad en este país con un 14%, detrás de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas y por encima de los medios de comunicación que han venido bajando rápidamente en el último año. Algunos analistas

afirman que los logros obtenidos por los indígenas tras el levantamiento, el apoyo que recibieron de distintos sectores y la represión militar que sufrieron podrían determinar que ahora la Conaie tenga mayor credibilidad que las Fuerzas Armadas.

Julio 27 de 1999 (martes). Base Militar de Estados Unidos en Manta.

La instalación de una Base Militar de Estados Unidos en el puerto de Manta, Ecuador, cuenta con el aval del gobierno de Jamil Mahuad y la oposición del Movimiento Indígena, partes de la Iglesia Católica y grupos de derechos humanos. El gobierno ecuatoriano defiende tal destino para ese puerto sobre el océano Pacífico con el argumento de que servirá de respaldo a sus Fuerzas Armadas, y permitió que en mayo pasado se realizaran las primeras operaciones de aviones de Estados Unidos en la zona.

La necesidad inminente de un lugar para las fuerzas militares apostadas durante un siglo en el canal de Panamá llevó al gobierno estadounidense a acelerar las gestiones para trasladar sus bases a Ecuador, en América del Sur, y Aruba y Curazao, en el Caribe. Estados Unidos entregará el canal a la soberanía de Panamá el 31 de diciembre, en cumplimiento del tratado firmado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos.

Voceros indígenas y de otros movimientos sociales aseguraron que rechazarán la instalación de la base militar en la mesa de concertación con el gobierno que comenzará a sesionar la semana próxima. El gobierno accedió a crear esta instancia de diálogo en el acuerdo que firmó con la Conaie para poner fin al levantamiento que realizaron las comunidades este mes durante dos semanas. En la mesa de concertación se discutirán, entre otros temas, la modernización del país sin necesidad de nuevas privatizaciones, la renegociación de la deuda externa y la posible negativa a la instalación de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano. El gobierno aceptó no enviar al parlamento ningún proyecto de ley ni emitir decretos relacionados con estos asuntos antes de que se discutan, por lo que las gestiones en torno de la instalación de la Base de Manta están en suspenso. La base en Manta “es una ofensa muy grande

a nuestra libertad, nuestra autonomía y, sobre todo, nuestra soberanía”, dijo el obispo de la ciudad de Cuenca, monseñor Luis Alberto Luna Tobar.

El ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, percibe en la presencia militar estadounidense un respaldo para las Fuerzas Armadas ecuatorianas ante posibles incursiones de la guerrilla colombiana en territorio nacional.

Gallardo aseguró que a las Fuerzas Armadas le “preocupan profundamente” la presencia de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las plantaciones de coca en la zona del Putumayo, fronteriza con Ecuador. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos teme que el fuerte acento militarista puesto en el combate al narcotráfico y a la guerrilla de Colombia involucre a Ecuador en estrategias continentales que “redefinen el papel de los Ejércitos nacionales de la región”. Para la Cedhu, también debe tomarse en cuenta el posible impacto ambiental de la instalación de la base militar. “Se desconoce el tipo y la cantidad de explosivos y otros elementos contaminantes utilizados en las bases militares y en las prácticas de tiro, así como el costo de la tecnología para sanear totalmente estas áreas”, señaló el organismo humanitario.

En 1997, Rick Stauber, experto a quien el Departamento de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos encomendó un estudio sobre el impacto ambiental de las bases militares en el canal de Panamá, denunció que en el lugar se habían efectuado pruebas con armas químicas y uranio empobrecido. La Cedhu se preguntó “quién puede asegurar que no ocurrirá lo mismo en Manta” y “quién descontaminará después”

El jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Charles Wilhelm, se reunió en Ecuador hace tres semanas con el ministro Gallardo y otras autoridades militares de ese país. También condecoró al jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas del Ecuador, general Carlos Mendoza, “por su labor profesional desempeñada en la cooperación” entre los militares de ambos países. Wilhelm tomó contacto, además, con los resultados de las primeras operaciones aéreas realizadas en Manta y constató en persona el adelanto en las negociaciones con Ecuador. En

1998, el Pentágono proyectaba la realización de 186 operaciones militares en la región, de las cuales 21 ubicadas en Ecuador. A mediados de ese mismo año, militares ecuatorianos y estadounidenses participaron en ejercicios contra el narcotráfico en la selva amazónica. Hoy, las Fuerzas Armadas de ambos países construyen en conjunto un cuartel antidrogas y se anuncian otros tres para la Amazonia y siete para otras zonas del país.

El historiador ecuatoriano Jorge Núñez recordó que el interés de Washington por concesiones territoriales y facilidades para operar en Ecuador no es nuevo. “En 1812, Estados Unidos estableció en las islas Galápagos una primera base naval para atacar a los barcos ingleses en el Pacífico. Más tarde, intentó conseguir la venta o arriendo de las islas. En la Segunda Guerra Mundial levantó una base en el archipiélago, a la que abandonó en 1946”. También recordó que la flota estadounidense en el Pacífico Sur llegó en 1834 a Guayaquil “para apoyar al general venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador republicano, y aplastar la revolución popular de Chiguaguas”.

En 1986, la presencia en el país del general John Galvin, entonces jefe del Comando Sur, y la denuncia sobre un supuesto convenio entre las Fuerzas Armadas de los dos países para establecer la Escuela de las Américas e instalar bases militares despertaron manifestaciones de oposición. En 1987, durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), 6.900 militares estadounidenses supervisados por el Comando Sur integraron el grupo “Fuerza de Tarea 1169”, que durante seis meses participó en la operación militar “Abriendo Rutas” en la provincia amazónica de Napo.

Para el ministro Gallardo, la presencia militar estadounidense en Ecuador “no afecta a la soberanía del país” y es solo un acto de reciprocidad. “Nuestras naves militares pueden usar los aeropuertos militares estadounidenses, para abastecerse de combustibles y cambiar sus tripulaciones”, aseguró Gallardo.

El argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, expresó en una carta divulgada el jueves que una eventual intervención de Estados

Unidos en Colombia “incendiaria el horizonte en América Latina a fines del siglo”.

Agosto 6 de 1999 (viernes). El Comando Sur en la Amazonia. Un contingente de las Fuerzas Especiales Operativas del Comando Sur de Estados Unidos se halla en la región amazónica del Ecuador y Perú, en la frontera de los dos países con Colombia. Desde la base naval de Iquitos, en Perú, y de la Escuela de Selva de Coca, en Ecuador, se movilizan efectivos dotados de una avanzada tecnología en inteligencia de guerra, para neutralizar incursiones de la guerrilla y de narcotraficantes colombianos. Las dos bases, financiadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, comenzaron a funcionar en marzo, cuando los Ejércitos ecuatoriano y peruano desplazaron hacia la frontera norte los efectivos que empleaban en su ya superado conflicto de límites.

El general Barry McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, aseguró la semana pasada en Ecuador que Washington no intervendrá militarmente en Colombia. De esa forma, McCaffrey desmintió una versión del diario *La República*, de Lima, recogida luego por *ABC*, de Madrid, según la cual Estados Unidos promovía la intervención de tropas del Ecuador y Perú en el conflicto colombiano. Ese plan habría sido presentado hace un mes al asesor presidencial en seguridad del gobierno peruano, Vladimiro Montesinos, según la versión rechazada por McCaffrey. Pero el funcionario de la Casa Blanca no respondió cuando en conferencia de prensa se le preguntó si la caída hace dos semanas de un avión militar estadounidense RC-7B en la frontera colombo-ecuatoriana no demostraba una intervención encubierta de Estados Unidos en Colombia.

El accidente del RC-7B puso en evidencia la capacidad operativa de Estados Unidos en la zona, pues en pocas horas fueron movilizadas desde la Amazonia ecuatoriana 24 aviones para ayudar en la búsqueda del aparato, que se estrelló contra un cerro, señaló el diario *The Miami Herald*. Las Fuerzas Especiales Operativas estadounidenses asisten a las Fuerzas Armadas del Ecuador y Perú en operaciones combinadas,

planificación y con equipos de entrenamiento, explicó en abril el Departamento de Defensa al Congreso de Estados Unidos. El propósito es interceptar comunicaciones de los traficantes y de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según el Departamento de Defensa. La mayoría de los efectivos estadounidenses en Ecuador y Perú son pilotos calificados para operar estaciones de radar e interpretar imágenes de cámaras multiespectro del tipo de las que producía el avión RC-7B, que pueden identificar cualquier objetivo en la selva.

El general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, negó que este país fuera a participar en operaciones contra la guerrilla en Colombia, aunque dijo que en la frontera hay 5.000 soldados para impedir el paso de rebeldes colombianos.

Tropas ecuatorianas y estadounidenses realizaron 20 días antes del accidente del RC-7B la Operación Sucumbíos, para eliminar dos campamentos de entrenamiento de las FARC en territorio del Ecuador. Al mando de los efectivos estadounidenses estuvo el mayor Bernard Sparrow, comandante de la compañía C del Tercer Batallón del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, estacionado en Panamá. Ese batallón fue destacado por sus servicios en Colombia, según una publicación de mayo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. La última misión de los comandos de selva fue la ocupación de dos bases de entrenamiento de las FARC en suelo ecuatoriano, informó esta semana al diario *El Espectador*, de Bogotá, el coronel Iván Borja, portavoz del Ministerio de Defensa del Ecuador. La base naval peruana de Iquitos, que el 14 de junio recibió lanchas de combate de Estados Unidos, entregadas por el embajador Dennis Jett, tiene un grupo permanente de 33 asesores militares estadounidenses, que rotan cada 90 días, aseguró *El Espectador*. Militares brasileños, colombianos y ecuatorianos se entrenan en técnicas de combate en la selva en Coca, Ecuador, en función de un programa auspiciado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El programa de entrenamiento también se desarrolla en Iquitos, aunque en ese caso, para operaciones navales, de acuerdo con la información de prensa.

El Ministro de Defensa del Ecuador, general José Gallardo negó que la base de Coca sea plataforma para una eventual intervención militar en Colombia y aseguró que allí se entrenan oficiales de muchos países por el prestigio internacional de ese centro. “No hay nada misterioso. Vienen oficiales de otros países a entrenarse, de la misma manera que oficiales ecuatorianos van a otros lados. Es un intercambio común entre Fuerzas Armadas de distintas naciones”, señaló Gallardo.

En Ecuador, McCaffrey conversó con el presidente Jamil Mahuad y jefes militares acerca de la utilización de la base aérea del puerto de Manta, donde Estados Unidos tiene un Puesto de Observación Avanzada para Operaciones Regionales Antidrogas. McCaffrey destacó la importante ubicación geográfica de la Base de Manta, en un punto central de la costa del Pacífico, para la estrategia regional contra la droga, que se basa en el combate al cultivo, procesamiento, transporte y distribución de sustancias prohibidas.

El funcionario advirtió que el retiro de las fuerzas estadounidenses de Panamá, a completarse a fines de este año, debilita el control de las actividades de los narcotraficantes, y se pretende restablecerlo con bases en Manta, Curazao, Aruba y Honduras. En caso de concretarse el convenio para que Estados Unidos use la Base de Manta por 10 años, llegarían 200 hombres, entre agentes de la DEA (Agencia Federal Antidrogas), miembros del servicio de guardacostas y soldados. El proyecto de instalación de fuerzas de Estados Unidos en Manta tiene el aval del gobierno de Mahuad y la oposición del Movimiento Indígena, parte de la Iglesia Católica y grupos de derechos humanos.

Agosto 20 de 1999 (viernes). Entre la deuda externa y la hiperinflación.

El anuncio de una moratoria de la deuda externa del Ecuador hasta marzo de 2000 certificó la profunda crisis financiera que vive este país andino hace más de un año. Al principio, causó sorpresa que el gobierno ecuatoriano manejara esa hipótesis. Sin embargo, la posibilidad ya había sido manejada por analistas económicos internacionales hace un mes. El martes 13 de julio, el diario estadounidense *The Wall Street Journal*

publicó un informe premonitorio según el cual Ecuador amenazaba con convertirse en el primer país que, tras reestructurar su deuda externa bajo el esquema de Bonos Brady, puede irse a pique.

Según el periódico, Ecuador estaba obligado a reestructurar el pago de los Brady y eso arrastraría consigo el modelo entero, auspiciado con “tanto esmero por el gobierno de Washington”. “La reestructuración, aunque sea realizada por un país pequeño”, podría poner en entredicho “la capacidad de América Latina para superar su susceptibilidad al pánico financiero que llegó hasta aquí el año pasado procedente de Rusia y del este de Asia”, manifestaba el diario neoyorquino.

Si el pánico generado por la crisis ecuatoriana deriva en el derrumbe de los Bonos Brady, los inversionistas y tenedores de esos papeles pueden obligar a deudores mayores como Argentina, Brasil y Venezuela a pagar tasas de interés más altas para proteger sus colocaciones en América Latina, según analistas.

Esa realidad preocupó al propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que utilizó sus influencias ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que flexibilice su posición frente a la gravedad de la crisis económica ecuatoriana.

Eso se refleja en algunos documentos del FMI, según los cuales lo que más preocupa a los técnicos de ese organismo en sus negociaciones para firmar en breve una carta de intención con Ecuador es la crisis financiera de ese país y el creciente peso de la deuda externa en las finanzas públicas.

La crisis financiera ecuatoriana se profundizó en los últimos diez meses con la quiebra en cadena de 10 bancos y el posterior rescate efectuado por el gobierno, que desembolsó con ese fin más de US \$ 1.500 millones. Tras la realización de cinco auditorías internacionales se estableció que para salvar la bancarrota del sistema era necesario cerrar bancos y asistir financieramente otros, lo que significaría un nuevo desembolso de US \$ 1.400 millones.

De concretarse el acuerdo *stand by* con el FMI, Ecuador podría contar con US \$ 400 millones para fortalecer la balanza de pagos y US \$ 500

millones para iniciar la reestructuración del sistema financiero. Para algunos analistas económicos, el gobierno ecuatoriano debería tratar de sacar ventaja de los Bonos Brady. En ese sentido, el semanario “Líderes” del diario *El Comercio*, se pregunta si no es moralmente lícito recurrir a las armas que se tienen cuando el país está entre salvarse o derrumbarse. “Los Bonos Brady son el cuco feroz para los tenedores de deuda. Sin embargo, para el gobierno ecuatoriano pueden convertirse en su fantasma salvador”.

Las autoridades económicas y monetarias del país desmintieron que Ecuador vaya a declarar una moratoria unilateral de pagos de su deuda. Sin embargo, las explicaciones fueron algo contradictorias. Modesto Correa, uno de los directores del Banco Central, afirmó desconocer si la ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, llevó a su reunión con representantes del FMI en Washington la propuesta de diferir el pago de US \$ 94 millones de intereses de Bonos Brady, que vencen el 31 de agosto. “No puedo confirmar ni negar esa noticia, pues tal planteamiento es responsabilidad exclusiva de Finanzas y de la Comisión de Deuda que se conformó para que se encargue del tema. Lo prudente es esperar el retorno de la ministra, este domingo, para que aclare la situación”, recalcó. También admitió que se registró nerviosismo en el mercado, al que atribuyó a que los agentes económicos están bien informados sobre el estado de las cuentas nacionales. “Todos sabemos que dada la crisis no es fácil cumplir los compromisos de deuda, pero es necesario decirles que se hará todo lo posible para honrarla”, agregó.

En torno del pago que debe efectuarse la próxima semana, Correa explicó que en el fideicomiso de deuda Brady existe una ‘mora técnica’, que da al país la posibilidad de diferir 30 días el pago, contados desde la fecha de vencimiento.

Otra fuente del Banco Central señaló que los Bonos Brady se renegociarán mediante ‘mecanismos de mercado’ y anticipó que la ministra Armijos llegará a Quito este domingo desde Washington con novedades sobre la negociación.

El presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, afirmó que su gobierno busca soluciones alternativas al problema de la deuda. “Hay que analizar opciones alternativas. Queremos que sea una decisión que utilice mecanismos de mercado”, aseguró. A su regreso, Armijos se reunirá con Mahuad para informar de sus conversaciones con los organismos internacionales de crédito sobre la reprogramación de pagos de la deuda. Luego anunciará al país lo negociado en Washington y lo decidido por el gobierno ecuatoriano. Hasta que se haga efectivo ese anuncio, el Ministerio de Finanzas pagará, con dificultades, los US \$ 94 millones de intereses de los Bonos Brady que vencen a fin de mes.

Para el ex ministro de Finanzas Pablo Concha, diferir el pago de los bonos dentro de una reestructuración de la deuda es la única opción viable, porque significaría la liberación de recursos que hoy están comprometidos exageradamente frente a la realidad de la economía. Concha aseguró que Ecuador destina 54% del presupuesto al pago de deuda y que el próximo año destinaría más del 60%. También explicó que el impacto financiero del volumen de Bonos Brady no alcanza ni 1% del total de papeles que circulan en el mercado. “Lo que Ecuador puede renegociar es apenas US \$ 3.000 millones, es decir un 0,3%, insignificante en los mercados”, precisó.

El banco de inversión estadounidense Lehman Brothers recomendó al Ecuador reestructurar su deuda externa “organizadamente con el FMI y el Club de París”.

Según Lehman Brothers, Ecuador debe buscar alivio en las tasas de interés y no perdón de deuda. “La crisis fiscal y el servicio de la deuda ilustran la realidad y demuestran que Ecuador no puede salir de su crisis a través de acciones fiscales estándar, debido a la severidad de la recesión”, dijo la firma.

La aclaración de que Ecuador no declararían una moratoria unilateral transmitió cierta tranquilidad al mercado internacional. Bancos de inversión y analistas económicos plantean la posibilidad de que Ecuador reestructure su deuda, lo que se justifica por la situación económica que atraviesa este país.

Lehman Brothers indicó a través de un boletín de prensa que la mejor estrategia para el país sería una reestructuración ordenada de su deuda externa organizada por el FMI y el Club de París, que reúne a los países industrializados deudores. “La posición fiscal del Ecuador y lo que implica la dinámica en el servicio de la deuda ilustra un fuerte deterioro en el desempeño debido a la crisis. Específicamente, muestran que Ecuador no puede salir de su crisis a través de acciones fiscales estándar por causa de la severidad de la recesión”, dijo. Arturo Porzecanski, economista jefe para las Américas de ING Barings, calificó la situación del Ecuador como muy delicada, por lo que requiere la ayuda de la comunidad internacional. Por otra parte, llegó al país una nueva misión del FMI, encabezada por John Thonrton, para afinar los últimos detalles de la carta de intención que el gobierno y la entidad firmarían antes de fin de agosto.

Octubre 15 de 1999 (viernes). Crece acoso de profesores a las estudiantes. El 22% de las estudiantes de secundaria del Ecuador son víctimas de acoso sexual por parte de sus profesores, según una investigación realizada por un organismo dependiente de la Presidencia. El estudio, realizado por la Corporación de Promoción de la Mujer (Conamu) en 36 colegios privados y públicos, es el primero de este tipo que se realiza en Ecuador y el preámbulo de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para buscar mecanismos de sanción a los agresores. La investigación determinó también que el 38% de los estudiantes conocen hechos de abuso que afectaron a compañeros o compañeras, pero temen denunciarlo. Los jóvenes explican el acoso sexual como parte de las relaciones de poder que se establecen entre docentes y alumnas en la mayoría de los colegios. Varias estudiantes dijeron que muchas veces los profesores les ofrecen buenas calificaciones a cambio de acostarse con ellos.

Tatiana Cordero, una las investigadoras que realizó el informe, expresó que frente al acoso sexual, los docentes culpan a las víctimas y naturalizan el delito.

También aseguró que muchos colegios tienen estructuras discriminatorias que permiten a los agresores seguir ejerciendo, mientras las víctimas se ven obligadas a abandonarlo. “Hay ausencia o minimización de las sanciones, y casi siempre se privilegia la reputación del colegio por sobre los derechos de las víctimas”, dijo Cordero.

La presidenta de Conamu, Lola Villaquirán, indicó que el estudio fue el primer paso para que el Ministerio de Educación pudiera constatar la realidad de los colegios e implementar formas adecuadas para sancionar a los docentes. “No puede seguir habiendo niñas que van a los colegios confiadas por sus padres a los profesores, y ellos violen su dignidad personal”, señaló Villaquirán.

La máxima autoridad educativa de la provincia costeña de Guayas, la más poblada del país, fue la primera en pronunciarse a favor de normas que permitan castigar a los profesores que cometan cualquier tipo de violencia contra los y las estudiantes.

La subsecretaria de Educación de Guayas, Mariana Roldós, anunció que a partir de la investigación las sanciones serán mucho más severas y añadió que también deben establecerse ‘mecanismos de prevención’, porque no se debe esperar que los hechos ocurran para tomar medidas. Para Roldós el informe es la herramienta que faltaba para dar una visión más real de lo que está ocurriendo en las aulas. También aseguró que es necesario unificar criterios en cuanto a las normas legales a instrumentar y llamar a la participación activa de padres y madres. “Que padres y madres se involucren, porque muchas veces las cosas no se denuncian, se callan. Ellos tienen que dar confianza a sus hijos para que denuncien”, comentó.

De las 25 denuncias semanales que llegan a la Dirección de Educación de Guayas, dependiente de la Subsecretaría, al menos tres son sobre acoso sexual. Aunque no existen estadísticas sobre el número de profesores sancionados por esta causa, según el departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección, en los últimos nueve años solo 12 docentes fueron “destituidos de sus cargos por diferentes irregularidades”.

El proceso de investigación sobre denuncias de acoso sexual cometidas por los profesores lleva de tres meses a un año y requiere de confrontación de opiniones entre el acusado y la víctima, exponiendo demasiado a esta que muchas veces termina desistiendo en medio del proceso.

Otra traba es que muchos padres “temen que sus hijos sean sacados de clases o no les concedan matrículas”, dijo Graciela Mayorga asistente técnica de la Dirección de Educación provincial. Frente a esta realidad, la acción contra los culpables es casi nula. Villaquirán considera que el problema consiste en que no hay conciencia de que el acoso sexual sea un delito y las estudiantes resultan perjudicadas por los largos procesos administrativos, por lo que se debe acelerar esos procesos. El proceso comienza en el Departamento de Defensa del Educando, de la Dirección de Educación, que encarga a un funcionario la investigación por medio de encuestas en el colegio del profesor acusado.

Otros funcionarios entrevistan a las partes y a allegados. Después de meses de careos y comprobaciones, si los funcionarios involucrados en la investigación creen que existió acoso, inician un sumario administrativo a través del Departamento de Asesoría Jurídica.

La jefa de ese Departamento, la abogada Concepción Narváez, aseguró que “hay que actuar con cautela y primero comprobar el hecho”, porque el acoso sexual propiamente dicho no está tipificado en la Ley de Carrera Docente.

Para juzgar a un profesor por esa causa se invoca un artículo según el cual el docente puede ser sancionado por “conducta inmoral reñida con su función”.

De acuerdo a la gravedad las sanciones establecidas son amonestación, multa, suspensión y destitución del cargo. En caso de llegarse a la suspensión y destitución debe ser analizado en una Comisión de Defensa Profesional, donde se da oportunidad a que el profesor vuelva a dar sus explicaciones.

Esta comisión se conforma con tres delegados de la Subsecretaría de Educación, uno de la Unión Nacional de Educadores y otro de los profesores de la provincia donde trabaja el acusado. Jenny Romero, subdi-

rectora de Educación de Guayas y miembro de la Comisión de Defensa Profesional de esa provincia, asegura que a la hora de juzgar a un profesor se deja de lado la amistad o el espíritu de cuerpo, lo que muchos ponen en duda. Sin embargo, Pablo Pacheco, delegado de los docentes en la misma comisión, aseguró que muchas veces los profesores se valen de padrinos de alto nivel que dificultan la labor de investigación. Es una muestra más de la degradación social y la crisis ética que enfrenta el país, que también se evidencia en la educación.

Octubre 20 de 1999 (miércoles). ¿Devaluación incontrolable o provocada? La caída incontrolable del sucre frente al dólar hace temer en Ecuador un avance de los precios que derive en la hiperinflación. Aunque la tendencia alcista ya se evidenciaba la semana anterior, fue en los dos últimos días que el dólar tuvo un alza inesperada de 16.300 sucres a 17.500, debido a una demanda inusual de divisas. Lo que parece provocado a propósito por la especulación de agentes financieros y empresarios, con el objetivo de ir hacia la convertibilidad o la dolarización. Entre enero y octubre, el sucre se depreció 154%, mientras la inflación del período asciende a 50%.

Para algunos economistas, el alza del dólar también es producto de la compra de la moneda estadounidense realizada por los bancos para hacer frente el próximo miércoles al descongelamiento de cuentas de ahorros en dólares.

Tras las protestas sociales de julio, que paralizaron durante dos semanas al país, el gobierno acordó con el Movimiento Indígena el adelanto del descongelamiento de las cuentas corrientes en sucres y de ahorros en dólares. Las cuentas en sucres han sido descongeladas paulatinamente desde el acuerdo, mientras que las otras, que representan US \$ 200 millones, serán descongeladas la semana próxima. El gobierno, en cambio, atribuyó el alza del dólar a la falta de acuerdo parlamentario para aprobar el presupuesto de 2000, condición establecida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar un préstamo de US \$ 1.300 millones al país.

El proyecto de presupuesto enviado por el presidente Jamil Mahuad al parlamento asciende a US \$ 4.400 millones, de los cuales 2.408 corresponden al pago de intereses y capital de la deuda externa. El proyecto plantea aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) de 10 a 15% y llevar la base de cobro del impuesto individual a la renta de US \$ 500 mensuales a 190. También propone incrementar el impuesto a la renta de las empresas de 15 a 25% sin tener en cuenta su tamaño.

Mahuad descartó acuerdos con los partidos de derecha, el Social Cristiano del alcalde de Guayaquil y ex presidente León Febres Cordero (1984-1988) y el Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), que proponen la venta anticipada de petróleo para obtener recursos. Sin embargo, para muchos, son solo palabras, ya que el mandatario finalmente hace lo que impone la derecha y en particular Febres Cordero.

El gobierno y los partidos de centroizquierda aseguran que la venta anticipada de petróleo comprometería no solo el crudo extraído sino las reservas. El bloque de la socialdemócrata Izquierda Democrática del ex presidente Rodrigo Borja (1988-1992) acepta aumentar el IVA solo 2%, mientras el Movimiento Pachakutik no está de acuerdo en ningún aumento. Los dos sectores también exigen que se disminuya el porcentaje del presupuesto dedicado al pago de la deuda externa de 54 a 30%, así como reorientar la diferencia a gastos sociales. Pablo Better, presidente del Banco Central, señaló que la institución no podrá proteger al sucre si no existe un acuerdo político parlamentario para el presupuesto y la reforma tributaria. “Yo no puedo asumir, como [presidente del] Banco Central, la responsabilidad de lo que está pasando. Con la especulación política de si se aprueba o no el presupuesto, sube el dólar. Y el Banco Central no está interviniendo en el mercado”, señaló.

Según Better, el precio del dólar debería situarse entre 12.500 y 12.600 sucres, pero el alza se produce por factores que no se pueden controlar con la política monetaria. “Si llegamos hasta finales de noviembre y no tenemos una aprobación definitiva del acuerdo por parte del Directorio del FMI, yo veo la cosa terrible para el país, esto se va a deteriorar”,

dijo. Better también mencionó que no existe ningún plan económico alternativo para aplicar en caso de que no se apruebe el presupuesto tal como lo envió el gobierno, lo que impediría un acuerdo definitivo con el FMI. “Sinceramente, no tengo plan, y no creo que el Banco Central pueda hacer algo en política monetaria para controlar la inflación y el tipo de cambio”, aseguró.

El analista económico Alberto Acosta se mostró contrario a la tesis de que la única salida para el presupuesto es el alza del IVA y a la creencia de que la única salida del Ecuador es el acuerdo con el FMI. “Si se lo sube de 10 a 12% el fisco recaudaría unos US \$ 120 millones, menos que los 200 millones que perdemos al año por el petróleo que no se cobra a las petroleras privadas y mucho menos que los 240 millones presupuestados para cubrir futuras quiebras bancarias”, dijo. “Basta mirar cómo manejó el FMI la crisis en los países asiáticos, en Rusia, en Brasil, para ver con cuánta demagogia se tejen esperanzas alrededor de esa institución”, agregó. Aseguró además que el proyecto de presupuesto del gobierno desmorona la tesis que condujo a la suspensión del servicio de los Bonos Brady, sustentada en la incapacidad de pago, pues “dedica 54% de los egresos a la deuda”.

Algunos sectores cuestionan el hecho de que el gobierno siga salvando bancos quebrados y luego pida subir los impuestos. En las últimas semanas fueron rescatados dos bancos que, según el gobierno, no corrían peligro, con lo que en los últimos 12 meses ascendieron a 15 las instituciones financieras en bancarota. El presidente de uno de esos bancos era también presidente del gubernamental Consejo Nacional de Modernización, encargado de instrumentar la privatización de las empresas estatales. Luis Maldonado, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, aseguró que uno de los componentes más graves de la crisis es el manejo irracional de los recursos que se entregan “a una banca inmoral, usurera y absolutamente irresponsable frente al país”.

Algunos analistas aseguran que el descontrol del dólar es uno de los síntomas más graves de la crisis económica que vive el país. “El gobierno parece haber optado por dejar que las cosas lleguen a un punto del cual

ya no es posible volver, como una manera de forzar a que el país acepte el único plan de gobierno en que ha basado su gestión el acuerdo con el FMI”, aseguró un editorial del diario Expreso de Guayaquil. Raúl Mendizábal, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, aseguró que si se mantiene la tendencia alcista del dólar no descarta “el inminente cierre de unas 22.000 microempresas a nivel nacional”. “En cada empresa hemos tenido que reducir el personal a un 50%, y esto aumenta la crisis y el desempleo”, afirma Mendizábal. En medio de la crisis, la bonanza del mercado petrolero mundial ha sido lo único que le ha dado al país un respiro fiscal, pues de un precio de US \$ 8 por barril en marzo se alcanzó uno de US \$ 22.

Octubre 22 de 1999 (viernes). Los banqueros de Mahuad. El alcalde de la capital ecuatoriana y los empresarios propusieron disolver el Congreso del Ecuador, mientras el partido de gobierno es acusado de haber recibido más de US \$ 10 millones de los banqueros para la campaña que llevó a Jamil Mahuad a la presidencia. En medio de eso, el gobierno ecuatoriano que el mes pasado había declarado la moratoria parcial en el pago de los Bonos Brady también declaró su imposibilidad de pagar los eurobonos que vencían hoy y señaló que estos entrarían en la reestructuración de la deuda externa.

Para las Cámaras de Comercio e Industrias de Quito y otros gremios empresariales la culpa de la crisis económica que vive Ecuador es del Congreso por no aceptar el incremento de los impuestos, propuesto por el gobierno en la proforma presupuestal del año 2000. Aseguran que esa actitud ‘obstruccionista’ y el hecho de que todavía no se hayan podido instrumentar las privatizaciones es una muestra de la ‘ineficiencia’ de los legisladores. De esa forma se suman a las expresiones del alcalde de Quito, Roque Sevilla, quien también reivindicó el rompimiento del orden institucional.

El líder de la bancada de la Izquierda Democrática, Paco Moncayo, dijo tener la sospecha de que la ofensiva contra el parlamento busca desviar la atención sobre las denuncias de corrupción en el manejo del

dinero aportado por varios banqueros a la campaña de Mahuad. Moncayo se preguntó: ¿cómo puede ser independiente de los banqueros un partido que llega al gobierno con una campaña financiada por ellos? En marzo, ante la quiebra inminente del Banco del Progreso, uno de los más importantes del país, el gobierno dispuso el congelamiento por un año del 50% de los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a US \$ 200 y el total de los depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera mayores a US \$ 500. El congelamiento no sirvió de mucho porque un mes después el banco anunció su quiebra, y aunque se denunció un mal manejo de fondos por parte del presidente de la entidad, Fernando Aspiazu, el gobierno accedió a que el Banco Central le conceda un crédito y entrara en saneamiento.

En julio durante las movilizaciones protagonizadas por indígenas y taxistas, el gobierno dispuso la prisión de Aspiazu, en lo que muchos consideraron un golpe de efecto porque ocurrió tras la agudización de las protestas y luego de una dura represión a 15.000 indígenas que llegaban en marcha pacífica a Quito.

Se inició un juicio contra el banquero por haber recogido el impuesto a las transacciones bancarias de sus clientes y no volcarlos al Estado, algo que había sido denunciado muchos meses antes sin que se tomaran medidas. Esta semana, desde la prisión el banquero pidió cuentas sobre la utilización de US \$ 3'100.000 que afirma haber aportado para la campaña electoral de Mahuad, lo que cayó como una bomba en el ámbito político. Según las leyes ecuatorianas, terminadas las elecciones los candidatos presidenciales deben presentar ante el Supremo Tribunal Electoral, una declaración de gastos electorales con la justificación de la procedencia del dinero. El banquero asegura que de acuerdo a lo declarado por el partido de gobierno ante el Tribunal, estaría faltando su aporte y para demostrarlo enseña los comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Ramón Yulee, tesorero de la campaña y Secretario de la Presidencia hasta hace una semana. Aspiazu inició un juicio para que se establezca a dónde fue ese dinero donado para la campaña y brindó una lista de banqueros y empresarios que también habrían colaborado.

Álvaro Guerreño, presidente del Banco La Previsora, que entró en bancarrota hace dos semanas y fue asumido por un banco estatal, fue director hasta hace pocos días del Consejo Nacional de Modernización, entidad encargada de instrumentar las privatizaciones. Guillermo Lasso, del banco de Guayaquil, fue gobernador de la provincia costera del Guayas nombrado por el Ejecutivo y ministro de economía. Nicolás Landes, presidente del Banco Popular que también quebró hace dos semanas y fue salvado por el gobierno, se fue del país y días antes de que la justicia iniciara un proceso contra él por irregularidades en su banco. Medardo Cevallos, ex embajador del gobierno de Mahuad en México y accionista del Bancomex, otro de los bancos que entró en quiebra, quien también enfrenta un juicio ante la justicia.

Otro de los que habrían aportado es Javier Espinosa, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito, una de las entidades que piden la disolución del Congreso, hasta dos meses atrás cuando entró a formar parte del gabinete, primero como Ministro de Desarrollo y actualmente como Ministro de Economía.

Los empresarios que solicitan la disolución del Congreso, coinciden con el gobierno en afirmar que la especulación cambiaria que hizo trepar al dólar durante los tres primeros días de la semana también es causada por los legisladores. “De continuar la actitud obstruccionista del Congreso, ha llegado la hora de pensar en aplicar la Constitución y revocar el mandato legislativo por incumplimiento de obligaciones o por propiciar actos de corrupción como la especulación cambiaria”, afirmaron en un comunicado.

Para algunos analistas, la especulación ha sido provocada por los bancos que salieron a comprar dólares. El miércoles pasado, tras el alza del dólar, el superintendente de bancos Jorge Guzmán se reunió con los banqueros para analizar la crisis, al día siguiente bajó la demanda y el costo de la divisa norteamericana. Los analistas interpretaron la disminución de la especulación como una consecuencia directa de esa reunión. El diputado Antonio Poso del Movimiento Pachakutik aseguró que las afirmaciones de los empresarios y del alcalde eran parte de una

campana para desprestigiar al Congreso. “Quieren culpar al Congreso de una crisis engendrada por el gobierno tras haber gastado más de US \$ 2.000 millones en salvar 15 bancos durante el último año”, señaló Poso. Entre tanto, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Mendoza se mostró preocupado por la crisis económica que vive el país pero descartó que la salida pudiera ser un Golpe de Estado. Mendoza aseguró que “no existe posibilidad de que se rompa el sistema democrático”, pero señaló la necesidad de que “el Congreso y el Ejecutivo logren acuerdos”. En esta realidad, la moratoria de los eurobonos sumada a la anterior de los Bonos Bradys, parecen ser las únicas medidas gubernamentales que han logrado apoyo en los movimientos sociales. Sin embargo cuestionan la contradicción de tomar estas medidas y destinar en la proforma presupuestal para el año 2000 el 54% al pago de la deuda externa.

Octubre 26 de 1999 (viernes). Mahuad se rinde ante Fujimori en Quito.

El presidente de Perú, Alberto Fujimori, atribuyó hoy en Quito las críticas de sectores de su país al acuerdo de paz con Ecuador a la incompreensión del derecho de esta nación a la libre navegación por el río Amazonas. “Generalmente un acuerdo de paz se logra después de un conflicto. La historia recogerá este cambio y apreciará su valor”, dijo Fujimori. El jefe de Estado peruano se reunió este martes en Quito con su par del Ecuador, Jamil Mahuad, para celebrar el primer aniversario de la paz entre los dos países andinos y para firmar varios acuerdos binacionales en las áreas judicial, de cooperación científica y tecnológica y de sanidad agropecuaria. En las afueras del Palacio de Gobierno, Fujimori fue silbado por la multitud, que le arrojó monedas y tierra. Tras la reunión, Mahuad minimizó el hecho al señalar que se trató de una protesta aislada, y aseguró que en Ecuador quienes no están de acuerdo con la paz “integran una minoría que va contra la historia”. Al recordar las gestiones para llegar a la paz, Fujimori recordó los momentos de tensión que se vivieron en agosto del año pasado, dos meses antes del acuerdo. “Recuerdo una reunión con los mandos militares, viendo en el mapa las posiciones de

las tropas en la frontera y los riesgos que suponían sus desplazamientos y las precauciones que se debían tomar, porque un disparo de las partes podía generar la guerra total”, comentó. También aseguró que los jefes militares apoyaban una salida negociada, y que la contradicción radicaba en que un sector no militar del Consejo de Seguridad Nacional se inclinaba por llegar a la paz a través de las armas. “En realidad, el canciller Eduardo Ferrero estaba bastante pesimista de que podría llegarse a una negociación y luego a la paz. La visión que tenía era mantener una paz armada”, comentó. Fujimori acordó con Mahuad el apoyo de Perú para que Ecuador integre el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “Estamos haciendo gestiones para entrar y ya tenemos el apoyo de Chile, China y Perú”, comentó Mahuad.

La profundización del comercio entre los dos países y una mayor cercanía entre sus habitantes, que antes se encontraban divididos por el conflicto, es lo más importante en las relaciones bilaterales este año, según los analistas. Los créditos por US \$ 3.000 millones que ofrecieron los organismos multilaterales para impulsar el desarrollo en la frontera todavía no han llegado. “Los devotos se van de la iglesia cuando acaba la misa”, comentó irónicamente uno de los delegados peruanos a las conversaciones que precedieron a la firma de los tratados de paz, y señaló que ahora había que reclamar que cumplan sus compromisos para concretar los proyectos. Mahuad aseguró que la promesa de créditos es parte de un plan que se desarrollará en 10 años, a US \$ 300 millones por año, y justificó las dificultades iniciales. El plan incluye proyectos binacionales de desarrollo, entre ellos sobre riego y construcción de carreteras, que contarán con el apoyo del BID, que ya inició estudios de factibilidad. Otros proyectos se refieren al manejo conjunto de parques ambientales, a la interconexión eléctrica y de telecomunicaciones, a la creación de empresas binacionales para la explotación minera en la frontera y al fomento a la inversión privada en la producción. Más de veinte empresas ecuatorianas ampliaron este año su mercado hacia Perú, con un importante incremento de sus exportaciones.

La industria alimenticia Sumesa, por ejemplo, en su primera incursión en ese mercado, colocó productos de consumo masivo en los supermercados Wong y Metro, los más importantes de Perú. La empresa alemana Osram, que tiene su fábrica para el norte de América del Sur en Ecuador, también aumentó sus exportaciones a Perú de 300 mil focos incandescentes por año a 1 millón tras firmarse la paz. En 1998, el comercio entre ambos países vecinos no representaba ni 20% del intercambio que cada uno tenía con el resto de la Comunidad Andina de Naciones. En 1999, a pesar de la crisis económica que afecta a las dos naciones, se espera superar ese porcentaje, pero la idea del gobierno es llegar a 35% en los próximos años. Fujimori realiza su cuarta visita a Ecuador y permanecerá en este país hasta el jueves, con actividades en Quito, Guayaquil y varios puntos fronterizos. La extrema seguridad implementada se refleja en los operativos policiales y militares dispuestos por el gobierno ecuatoriano y en los cambios constantes en su agenda de actividades. El 26 de octubre de 1998, en Brasilia, se firmó el acuerdo de paz que puso fin a 50 años de conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú. El 12 de mayo de 1999 se terminó la demarcación de la nueva frontera común en la cordillera del Cóndor, zona fronteriza que fue escenario de guerras entre los dos países en 1941, 1981 y 1995.

Más que acuerdo de paz fue una rendición en la mesa del Ecuador. Tampoco se cerró la frontera marítima que recién en 2011 en el gobierno de Rafael Correa se logrará cerrar obteniendo todos los puntos de la reivindicación histórica ecuatoriana. Así, mientras Mahuad y su política exterior cedió en todo, Correa y su política exterior recuperará la dignidad en este tema.

Octubre 27 de 1999 (sábado). Mahuad involucrado por la justicia en escándalo financiero. El presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, fue involucrado por una jueza en un caso por supuesto mal manejo de los fondos de la campaña electoral que lo llevó a la jefatura del gobierno. La jueza Isabel Segarra ordenó remitir lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, pues los fueros de los que goza Mahuad como mandatario obligan a

que todo juicio en el que se lo involucre sea tramitado por el presidente del máximo órgano judicial. Segarra había ordenado el lunes la prisión de uno de los hombres fuertes del gobierno, Ramón Yulee, quien fuera tesorero de la campaña y secretario de la Presidencia hasta la semana pasada. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero Parducci, dispuso analizar la conducta de la jueza y sancionarla por haber involucrado a Mahuad en la causa sin tener potestades para eso, pero no se pronunció sobre el caso en sí, que sigue su curso. En medio del escándalo, se conoció el informe anual de la organización Transparencia Internacional, que clasifica a Ecuador entre los tres países de América Latina con mayor imagen de corrupción, solo superado por Honduras y Paraguay, y el decimoctavo en el mundo. La acusación contra Yulee fue presentada la semana pasada por el ex banquero Fernando Aspiazu, que pidió cuentas sobre la utilización de US \$ 3,1 millones que afirma haber aportado a la campaña electoral de Mahuad. El ministro de Gobierno (Interior), Vladimiro Álvarez, se manifestó extrañado por la rapidez con que la jueza ordenó la detención de Yulee y 24 horas después extendió el sumario al presidente Mahuad. Yulee acusó a Segarra de actuar así porque fue empleada de Carlos Navarrete, abogado de Fernando Aspiazu.

Las leyes ecuatorianas obligan a los candidatos presidenciales a presentar luego de las elecciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una declaración de gastos de campaña, en la que se justifique la procedencia del dinero. Aspiazu aseguró que en las cuentas presentadas por el partido de gobierno ante el Tribunal no consta su aporte, y para demostrarlo enseñó los comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Ramón Yulee. Él otras personalidades del gobierno señalaron que su partido, Democracia Popular, habría gastado cerca de US \$ 10 millones en las dos vueltas electorales, y que en esa suma figuraría el dinero aportado por el ex banquero. Sin embargo las cuentas de gastos electorales presentadas por todos los partidos al Tribunal Supremo Electoral ascienden a US \$ 8 millones, de los cuales 3,4 millones corresponden a la Democracia Popular. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Villaquirán, sostuvo que el organismo nunca se enteró del

aporte de Aspiazu porque no constó en la información suministrada por el partido de gobierno. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, creada para combatir irregularidades en la administración pública, tomará cartas en el asunto y se pronunció a favor de investigar la denuncia del ex banquero.

Carlos González, diputado de la Izquierda Democrática, pedirá a la Fiscalía General de la Nación una investigación de los donantes de la campaña electoral de Mahuad y no descartó llamar a juicio político al presidente del República. “Exigimos la aclaración del origen de esos aportes para saber si los donantes pagaron el impuesto a la renta y si esos recursos son lícitos. Es indigno recibir dinero de la banca corrupta para asegurar la Presidencia”, dijo el legislador.

Aunque el ministro de Gobierno todavía no ha dispuesto la detención de Yulee, la Policía Judicial “está atenta para detenerla”, aseguró su jefe, general Guillermo Salas. En marzo, ante la quiebra inminente del Banco del Progreso, uno de los más importantes del país, el gobierno congeló por un año 50% de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a US \$ 200 y el total de los depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera mayores a US \$ 500. El congelamiento no sirvió de mucho porque un mes después el banco anunció su quiebra. Aunque se denunció al presidente de la entidad, Fernando Aspiazu, de mal manejo de fondos, el gobierno accedió a que el Banco Central le concediera un crédito. En julio, durante movilizaciones lanzadas por indígenas y taxistas, el gobierno dispuso la prisión de Aspiazu, en lo que muchos consideraron un golpe de efecto porque ocurrió tras la agudización de las protestas y luego de una dura represión a 15.000 nativos que llegaban en marcha pacífica a Quito. Se inició un juicio contra el banquero por no haber volcado al Fisco el impuesto a las transacciones bancarias cobrado a sus clientes, algo que había sido denunciado muchos meses antes sin que se tomaran medidas. Ahora Aspiazu contraatacó, y además del juicio contra Yulee brindó una lista de banqueros y empresarios que también habrían colaborado con la campaña de Mahuad.

Alvaro Guerrero, presidente del Banco La Previsora, que entró en quiebra hace dos semanas y fue absorbido por un banco estatal, fue director del Consejo Nacional de Modernización, entidad encargada de instrumentar las privatizaciones, pero renunció tras la bancarrota de su entidad financiera. Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, fue gobernador de la provincia costera del Guayas nombrado por el Ejecutivo y ministro de Economía. Nicolás Landes, presidente del Banco Popular que también quebró hace dos semanas y fue rescatado por el gobierno, se fue del país días antes de que la justicia iniciara un proceso contra él por irregularidades en su banco. Medardo Cevallos, ex embajador del gobierno de Mahuad en México y accionista del Bancomex, otro de los bancos que entró en quiebra, también afronta un juicio ante la justicia. Javier Espinosa fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito hasta hace dos meses, cuando ingresó al gabinete, primero como Ministro de Desarrollo y actualmente como Ministro de Economía.

El manejo de los gastos electorales de la campaña de Mahuad se integra a una extensa lista de escándalos que ha afectado al país desde 1992. Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), el vicepresidente Alberto Dahik abandonó el país una hora antes de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su arresto por malversación de fondos públicos. Dahik, acusado de utilizar US \$ 5 millones de fondos reservados para comprar votos de diputados y pagar favores al gobierno, se asiló en Costa Rica y dijo ser víctima de una persecución política. Durán Ballén fue sucedido por Abdalá Bucaram (1996-1997), quien fue acusado, junto con otras figuras de su gobierno, de haber malversado más de US \$ 22 millones de fondos públicos. Tras Bucaram asumió como presidente interino Fabián Alarcón (1997-1998), quien fue acusado de contratar, cuando presidía el parlamento, a 1.119 empleados que percibían salario sin trabajar, para pagar favores políticos. Su ministro de Gobierno, César Verduga, huyó del país antes de que se dictara orden de prisión en su contra por mal manejo de US \$ 6 millones de fondos reservados de la cartera a su cargo. Una encuesta de la empresa Cedatos divulgada este miércoles señala que 77% de los ciudadanos cree que hubo malos

manejos en la campaña de Mahuad. El mismo sondeo indica que 26% de la población le cree al ex banquero Aspiazu, 12% a los portavoces del gobierno y 52% no le cree a nadie.

Diciembre 28 de 1999 (martes). ¿Regresará Abdalá Bucaram? Una reforma del Código Penal aprobada en Ecuador por iniciativa del presidente Jamil Mahuad permitirá anular juicios por peculado contra el ex presidente Abdalá Bucaram, quien podría regresar al país sin enfrentar cargo alguno. El Congreso ecuatoriano aprobó la semana pasada enmiendas planteadas por Mahuad al Código Penal. El nuevo texto establece, con efecto retroactivo, que un juicio penal solo puede iniciarse con la acusación de un fiscal, y que el poder Legislativo debe autorizar el juicio de ex presidentes. Los cinco juicios contra Bucaram se iniciaron sin la acusación previa de un fiscal y sin pedido de autorización al Congreso. El ex presidente y sus asesores fueron acusados de apropiarse de fondos públicos por valor de más de US \$ 22 millones durante el breve período de gobierno de Bucaram, entre agosto de 1996 y febrero de 1997, cuando el Congreso lo destituyó por “incapacidad mental para gobernar”.

La destitución fue precedida por movilizaciones de protesta que reunieron a millones de personas en todo el país, y Bucaram terminó huyendo a Panamá, donde aún reside. Ahora el ex presidente podría volver al país sin enfrentar cargo alguno. Un nuevo Código Penal había sido aprobado por el Congreso en noviembre de este año, y entonces se estableció un plazo de 18 meses para su entrada en vigencia, con el fin de que hubiera tiempo para que finalizaran los juicios contra Bucaram. Luego Mahuad puso a consideración del Congreso, mediante un veto parcial al proyecto aprobado, modificaciones para establecer su inmediata entrada en vigencia y darle efecto retroactivo.

Los analistas opinaron que esas propuestas fueron parte de un intercambio de favores entre el gobierno y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram, cuyos diputados votaron a fines de noviembre para aprobar el presupuesto del año 2000. En dos oportunidades diputados opositores de los demás partidos salieron de sala para dejar sin quórum

al Congreso e impedir la aprobación de las modificaciones planteadas por el presidente. Pero en la última sesión previa a la Navidad, el presidente del Congreso, Juan José Pons, modificó el orden del día sin aviso previo y en dos minutos hizo votar las enmiendas al Código propuestas por Mahuad.

La maniobra de Pons tomó desprevenidos a muchos diputados opositores, quienes no tuvieron tiempo de abandonar el recinto parlamentario y frustrar la aprobación de las modificaciones por parte de los diputados del gobernante partido Democracia Popular y del PRE. En los pasillos del Congreso, visiblemente molestos, algunos legisladores aseguraron que los habían ‘madrugado’. El jefe del bloque del partido Izquierda Democrática, general retirado Paco Moncayo, calificó lo ocurrido como una inmoralidad que restaba credibilidad al Congreso. José Cordero, presidente de la Comisión de lo Civil y lo Penal del Parlamento, fue uno de los tres diputados oficialistas que votó contra las enmiendas, y aseguró que renunciaría a su banca para expresar su desacuerdo con el pacto entre su partido y el de Bucaram. Susana Klinkicht, analista política y columnista del diario *Hoy*, de Quito, afirmó que lo más grave no era el retorno de Bucaram, sino que regrese “sin responder ante la justicia por sus actos de corrupción”. “Es necesario recordar lo que pasó hace tres años, cuando la indignación de la población culminó en la manifestación más numerosa que haya visto el país, cuyo único objetivo era sacar a Bucaram del gobierno”, señaló Klinkicht. Según la columnista, los ecuatorianos “sienten vergüenza” de que el gobierno haya aceptado “la imposición de Bucaram” para poder aprobar el presupuesto. “El presidente Mahuad, que ha puesto mucho énfasis en la buena impresión que causa su persona en el exterior, ya no podrá estar seguro de gozar de esas simpatías, porque es difícil que alguien entienda sus motivaciones para tamaña falta de ética”, añadió Klinkicht.

La otra sorpresa de este fin de año se produjo el mismo día en que se aprobaron las enmiendas del Código, cuando el superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, solicitó una orden de arraigo para los directivos del Banco La Previsora, que quebró en octubre y pasó a ser gestionado

por el Estado. La medida impide que esos directivos salgan del país hasta que se dilucide su responsabilidad en la quiebra. Guzmán se valió de una ley bancaria aprobada en noviembre, que facultó al Superintendente de Bancos a solicitar el arraigo de los ejecutivos de un banco que ingrese a un proceso de ‘reestructuración o saneamiento’ a cargo del Estado.

Entre los señalados como posibles responsables de irregularidades en el manejo de La Previsora están Álvaro Guerrero y Alfredo Arizaga, quienes eran presidente y vicepresidente de la institución en el momento de la quiebra. Arizaga es el actual Ministro de Finanzas y Guerrero fue director del Consejo Nacional de Modernización, encargado de implementar las privatizaciones, hasta pocos días después de la quiebra de su banco. Estaba previsto que Arizaga viajara la semana próxima a Estados Unidos para realizar gestiones sobre la renegociación de la deuda externa ecuatoriana. El ministro de Finanzas presentó descargos para que se levante la prohibición de salir del país, y opinó que la reacción que se pueda producir en el exterior ante este caso dependerá del ‘tono’ en que sea manejado por los medios de comunicación. Guerrero alegó por su parte que la nueva ley bancaria fue aprobada en noviembre después de la quiebra de La Previsora y no es retroactiva, por lo cual “no puede ser aplicada” en este caso, pero no negó las acusaciones que pesan en su contra. Algunos analistas piensan que la orden de arraigo contra Arizaga busca demostrar que el gobierno combate la corrupción, y así desvirtuar acusaciones en su contra por la posible anulación de los juicios contra Bucaram.

Enero 4 de 2000 (martes). Mahuad quiere imponer la dolarización.

La fuerte caída del sucre frente al dólar en Ecuador trajo el fantasma de la hiperinflación, ante lo cual el gobierno adoptaría un plan de libre convertibilidad similar al argentino o la dolarización de la economía ecuatoriana. La tendencia ya se evidenciaba la semana anterior, pero en los dos últimos días el dólar tuvo un alza inesperada, pasando de 20.000 a 23.000 sucres por unidad.

El operador de cambio Juan Padilla aseguró que ayer nadie sabía lo que pasaba en el mercado. “Hubo un momento en que solo se compraban dólares, pero nadie quería vender porque no sabía a qué valor cotizar, ya que su precio subía constantemente”, afirmó. Si bien el Banco Central no intervino directamente en ningún momento, las autoridades habrían presionado a las mesas de cambio para limitar las negociaciones y algunas instituciones dejaron de negociar divisas. Entre enero y diciembre, el sucre se depreció 164%, mientras la inflación en ese período asciende a 60%.

Operadores cambiarios y expertos económicos aseguraron que el comportamiento del dólar responde a una fuerte demanda de agentes económicos, que esperan para los próximos días el anuncio del programa monetario del gobierno para este año, en el que no se descarta la adopción de la libre convertibilidad del sucre o la dolarización. Por lo tanto, se estaría produciendo una especulación con la divisa norteamericana que provoca su alza. Pero los analistas también aseguran que el alza del dólar es producto de la libre emisión de moneda por parte del Banco Central para hacer frente a las deudas de los bancos asumidos por el Estado.

Una fuente de la Presidencia, consultada por la agencia de noticias Inter Press Service indicó que el presidente Jamil Mahuad estaría de acuerdo con adoptar la libre convertibilidad, si cuenta con un amplio acuerdo nacional. “La posibilidad de implantar la convertibilidad fue uno de los puntos centrales de la reunión que ayer mantuvo el presidente con su gabinete. La dolarización, sin embargo, se cree que en este momento sería un salto al vacío porque no habría condiciones para implantarla”, dijo la fuente, que prefirió no ser identificada.

Entre los defensores de la dolarización se encuentran los sectores políticos de derecha; los empresarios de Guayaquil, ciudad más poblada del país y el mayor centro comercial, ubicada sobre la costa del Pacífico; la mayoría de los banqueros del país, parte de los empresarios de la Sierra y directores de empresas multinacionales instaladas en el país. Según ellos, esa medida estabilizaría la moneda, mejoraría las condiciones de participación del Ecuador en el comercio internacional, reforzaría

el débil sistema bancario nacional y reduciría el riesgo inflacionario al requerir mayor disciplina fiscal.

Los dirigentes indígenas y de los movimientos sociales, políticos de izquierda y centro izquierda, representantes de las universidades, microempresarios y algunos industriales sostienen que aumentaría la dependencia externa del país.

El analista económico Andrés Hidalgo considera que no existe una fórmula mágica que solucione los problemas. “Cualquiera de estos esquemas se basa en un tipo de cambio fijo y para sostenerlos se requiere absoluto orden. En Ecuador no podría pensarse en esos esquemas a corto plazo porque hay problemas como el déficit fiscal y el endeudamiento, que hay que resolver antes”, aseguró.

Técnicos del Banco Central, aseguran que las medidas de política monetaria aplicadas en Argentina, Brasil, Bolivia y Perú se adoptaron cuando la inflación había sobrepasado el 5.000%, que no es el caso del Ecuador.

El ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo, que asesoró al ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, destituido por el Congreso en febrero de 1997, le recomendó la adopción de un plan de libre convertibilidad similar al argentino, que establece una paridad de uno a uno entre el peso y dólar. Pero la propuesta recibió un fuerte rechazo en medios políticos ecuatorianos. Según una encuesta realizada en Argentina, 54% sostienen que su situación personal empeoró a raíz de la convertibilidad, 16% la califica como positiva y el 30% no la considera relevante. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, Armando Tomaselli, subrayó que la inestabilidad de la cotización del dólar no se combate con una política monetaria y cambiaria sino con un manejo racional de la economía. “Todos los esquemas funcionaron bien cuando existió un manejo económico coherente, pero ocasionan problemas cuando las autoridades no conducen bien la economía”, comentó Tomaselli.

El tema más preocupante en la actualidad es la emisión monetaria para el salvataje bancario que se ha convertido en un elemento inflacionario y causa fundamental en la devaluación del sucre, aseguró. La semana

pasada surgieron diferencias entre el presidente del Banco Central, Pablo Better, y Jorge Guzmán, superintendente de Bancos y presidente de la Agencia de Garantía de Depósitos, que administra los 15 bancos quebrados en los últimos 14 meses.

Better se opone a continuar con la emisión monetaria, pero Guzmán considera que es la única forma de pagar las deudas de las entidades financieras.

Guzmán afirmó que la principal fuente de financiamiento de la Agencia de Garantía de Depósitos debe ser la venta de los activos de los bancos salvados, que bordea los US \$ 4.000 millones, pero eso tomará tiempo y “es absurdo decirle a los depositantes que esperen a vender los activos para poder recuperar su dinero”. “La Superintendencia de Bancos y la Agencia de Garantía de Depósitos enfrentaron la indignación, justificada, de personas que fueron virtualmente asaltadas por ciertos banqueros corruptos que les despojaron de su dinero”, arguyó. Durante 1999, la Agencia de Garantía de Depósitos recibió del Banco Central US \$ 1.540 millones para los bancos que administra.

Enero 7 de 2000 (viernes). Viene un nuevo levantamiento indígena.

La Conaie anunció una protesta nacional indefinida a partir del sábado 15 hasta lograr la renuncia del presidente Jamil Mahuad, el cierre del Congreso y la destitución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La Conaie propone formar “un gobierno patriótico de unidad nacional” en el que participen las Fuerzas Armadas, los sectores sociales y profesionales independientes. La protesta se llevará a cabo en medio de una inestabilidad política y económica marcada por la devaluación del sucre en 30% durante los primeros siete días del año, y rumores de un posible Golpe de Estado por parte de los militares. El rechazo al gobierno llega ya al 92% de la población, según algunas encuestadoras.

A la protesta indígena se sumarían parte de los transportistas y otros sectores sindicales y campesinos que ya paralizaron el país durante varios días en marzo y julio del año pasado. El dirigente indígena Miguel Llucó dijo que los ecuatorianos han perdido la paciencia ante la

pasividad del gobierno para resolver los problemas del país. “El Movimiento Indígena y otros sectores sociales le han dado muchas oportunidades al presidente, aportando soluciones que podían ser una salida, buscando el diálogo, pero nunca nos escucharon”, asegura Lluco.

Como ejemplo mencionó que, tras las protestas de julio pasado se formaron mesas de concertación entre los movimientos sociales y el gobierno para buscar salidas conjuntas a los problemas políticos, económicos y sociales, pero las autoridades nunca cumplieron sus promesas. Entre las traiciones gubernamentales, Lluco nombra el hecho de permitir la instalación de la Base de Manta sin abrir un debate en la sociedad, no poner impuestos a las utilidades bancarias, a los vehículos de lujo y al patrimonio de las empresas para recargar los tributos sobre los más ricos y no disminuir el pago de la deuda externa que en este momento representa el 54% del presupuesto del Estado. “El país se fue cayendo y el gobierno siguió dando los últimos sucses que tenía a los banqueros corruptos que se llevaron la plata de los depositantes. Lo que se explica al saber que fueron ellos los que financiaron la campaña electoral del presidente”, arguye. También aseguró que al Movimiento Indígena no le interesa un cambio de nombres “porque eso no cambiará nada como ocurrió cuando fue destituido Abdalá Bucaram para que asumiera Fabián Alarcón (1997-1998)”, entonces presidente del Congreso. “No creemos en nadie, por eso los diputados también tienen que irse a sus casas, pues salvando algunas excepciones también contribuyeron a profundizar esta crisis. Lo mismo ocurre con la Corte Suprema, víctima constante de la corrupción”, comenta.

Para suplantarse al Congreso, el miércoles 12 se instalará en Quito el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, que estará integrado por delegados indígenas, trabajadores, campesinos, profesionales, religiosos y microempresarios de todo el país. “El Parlamento elaborará y presentará un plan de cambios para sacar al país de la crisis y será el preámbulo del nuevo levantamiento indígena y popular”, afirma Lluco. También dice que los movimientos sociales no “servirán de escalera para

que asuma el vicepresidente o el presidente del Congreso, como quieren los sectores de derecha”.

Los dirigentes indígenas han mantenido en las últimas semanas reuniones con altos oficiales de las Fuerzas Armadas que estarían de acuerdo con su propuesta. Sin embargo, en la institución armada hay posiciones encontradas sobre el papel que debe jugar. Un sector apoya la propuesta del Movimiento Indígena, otro prefiere que Mahuad concluya su mandato y un tercero apoya la renuncia del presidente para que asuma el vicepresidente Gustavo Noboa, en coincidencia con la propuesta de los ex mandatarios Rodrigo Borja (1988-92) y León Febres Cordero (1984-88). En Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen prestigio en la población debido a no ser elitistas, su posición nacionalista, su trabajo de apoyo a los sectores sociales más desposeídos y por no haber participado en violaciones de los derechos humanos como en el Cono Sur americano. En julio pasado, tras la llegada de miles de indígenas en marcha pacífica a Quito, el gobierno ordenó al Ejército una represión que lo apartó de su comportamiento habitual y le significó una pérdida de popularidad. Luego de la acción y de recibir las condenas generalizadas, los militares dieron un ultimátum al gobierno para que llegara a acuerdos con los indígenas porque no estaban dispuestos a reprimir nuevamente. Sin embargo, este año volvieron a ser cuestionados cuando no se opusieron a la instalación de una base estadounidense en el puerto de Manta, sobre el Pacífico.

El jueves y este viernes los sindicatos nucleados en el Frente Unitario de Trabajadores, los maestros y otros sectores vinculados al izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD), realizaron manifestaciones de protesta, pero su convocatoria no contó con mayor acogida popular. Sin embargo, ante el solo anuncio de movilizaciones, Mahuad declaró el estado de emergencia o de sitio y suspendió todas las garantías individuales.

Para algunos analistas, la emergencia le da la posibilidad al gobierno de decretar la libre convertibilidad del sucre o la dolarización. Pero aún no se ha tomado medidas debido a serias discrepancias en el equipo

económico entre los partidarios de la libre convertibilidad y los que se oponen. También está la fuerte presión: ir a la dolarización, a pesar de los altos costos sociales que implicaría. Una fuente del gobierno aseguró que con Mahuad nunca se sabe.

El Partido Social Cristiano, la mayor fuerza de derecha fuera del gobierno con fuerte incidencia en la Costa, también presiona con la posibilidad de profundizar la autonomía de la provincia de Guayas, cuya capital, Guayaquil, es la mayor ciudad del país y el principal centro comercial. Los sectores empresariales de esa provincia, entre los que se encuentran los grandes exportadores, presionan para que se apruebe la dolarización. Y a esta altura parece claro que el alza del dólar se debe a la especulación con la divisa norteamericana por parte de los exportadores costeños y algunos banqueros.

Empresarios, banqueros y el Partido Social Cristiano parecen apostar a la salida de Mahuad para que asuma el vicepresidente, Gustavo Noboa, implemente medidas de ajuste drástico, profundice las privatizaciones y el modelo neoliberal. La idea es que pase algo semejante a lo que le ocurrió al ex presidente argentino Raúl Alfonsín. Entre tanto, Mahuad intenta reorganizar el tablero con un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Roldosista Ecuatoriano de Bucaram. De esa forma busca la aprobación de las reformas legales necesarias para privatizar los sectores de hidrocarburos, electricidad, telefonía, seguridad social y educación básica. En un mensaje desde Panamá, Bucaram anunció su apoyo a Mahuad y dijo que en febrero estaría de regreso en Ecuador, lo que para muchos es una broma más del ex presidente.

Enero 9 de 2000 (domingo). Mahuad decreta la dolarización. El presidente Jamil Mahuad respondió a la crisis del Ecuador con la dolarización de la economía y el pedido de renuncia a sus ministros, para renovar el gabinete, pero no pudo acallar las voces que exigen su destitución. “Tras dos meses de análisis, de reuniones y de escuchar a los expertos, he llegado a la conclusión de que la dolarización es un sistema conveniente y necesario para Ecuador”, afirmó Mahuad en un mensaje transmitido

hoy por cadena nacional de radio y televisión. El nuevo programa debe ser puesto en práctica por el Banco Central, entidad autónoma con directores elegidos por el Congreso Nacional. Pero la medida es resistida por la mayoría del directorio y el propio presidente del banco, Pablo Better, quien anunció que no renunciará. Ante ello, Mahuad convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para este martes, con el único propósito de plantear la destitución de la dirección del banco.

El mandatario aseguró que cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar nuevos directores afines a su idea, al sumar los votos de la gobernante Democracia Popular y los del Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram, destituido por el Congreso en febrero de 1997. Mahuad señaló que el acuerdo con el Partido Roldosista también le posibilitará aprobar varias leyes, en carácter de urgente, para introducir reformas constitucionales que permitan privatizar los sectores petrolero, eléctrico, telefónico y de seguridad social. Al acuerdo también se sumaría el Partido Social Cristiano, ferviente defensor de la dolarización, aunque sus dirigentes creen que sería mejor que renunciara Mahuad y la implementara el vicepresidente.

El plan de dolarización implica que el Banco Central utilice la reserva monetaria líquida de US \$ 500 millones para reemplazar a la moneda local, el sucre, en circulación. El Banco Central dejará de emitir moneda y cambiará toda la existencia del mercado por los dólares de la reserva, a una cotización de 25.000 sucres por unidad. Luego, sin la reserva de divisas en su poder, el Banco Central desaparecerá como organismo emisor y se transformará en un agente de reestructuración de la banca y de reordenamiento fiscal.

Una vez que esto acontezca, el sucre también desaparecerá, por lo cual los bienes, servicios y todo lo que es objeto de compra y venta tendrá valor en dólares. También los sueldos se pagarán en dólares, sin ningún incremento.

Para implementar el nuevo esquema monetario, además del consentimiento del Banco Central, es necesario realizar reformas constitucionales que permitan el cambio de moneda. También se deben modificar

las leyes que regulan el sistema monetario, las instituciones financieras y el régimen tributario para que se adapten a la dolarización.

El ministro de Finanzas, Alfredo Arizaga, ex vicepresidente del Banco La Previsora, gestionado por el Estado tras su quiebra el año pasado, aseguró que el proceso de sustitución del sucre por el dólar será paulatino. El presidente Mahuad explicó que la dolarización permitirá en un año llevar la inflación “a niveles internacionales de 10% o menos” al año, con lo cual se alejaría el fantasma de la hiperinflación, que se manifestó la semana pasada con la depreciación de 30% del sucre frente al dólar. Ricardo Ulcuango, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, dijo que la dolarización no es conveniente para un pueblo como el ecuatoriano que no tiene dólares sino devaluados sucres. Agregó que en los últimos días el gobierno dejó que suba el dólar a 25.000 sucres por unidad para ahora aplicar la dolarización. “Hace dos meses que (el gobierno) venía estudiando la medida y había llegado a la conclusión que para dolarizar era necesario establecer el dólar a 25.000 sucres, por eso lo dejaron subir en la última a semana de 18.000 hasta ese valor”, aseguró Ulcuango. Afirmó, además, que esta es una medida desesperada del gobierno para conseguir nuevamente el apoyo de los empresarios y los banqueros, que son quienes presionaban por la medida. “Se ve que se ha llegado a un acuerdo con los grandes empresarios, pero esto no beneficia al pueblo, porque los indígenas casi ni conocemos el color de los dólares”, indicó.

Ulcuango precisó que el Banco Central es autónomo, por tanto el gobierno no lo puede obligar a adoptar una decisión a su gusto, porque y banqueros, la consideran inviable en un país con un sistema bancario en quiebra, un desempleo del 18,1% y un subempleo del 54,6%, como Ecuador, y violaría esa autonomía. El banquero Antonio Acosta, por su parte, señaló que la medida de Mahuad es acertada, pero es necesario que esta semana se definan todos los acuerdos necesarios y las reglas de juego para ponerla en marcha. Mahuad también limitó la devolución de los depósitos bancarios congelados en marzo del año pasado. Los bancos podrán devolver el dinero de quienes tienen depósitos menores a

US \$ 4.000, mientras que quienes tienen más de esa cantidad deberán esperar hasta marzo de 2006 y de 2009. En los bancos que quebraron y fueron asumidos por el Estado la devolución se hará mediante bonos oficiales que podrán ser cambiados en la bolsa de valores, lo cual, según expertos, representará una pérdida para los ahorradores, ya que serán comercializados a un valor mucho menor.

El paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Mahuad coincide conceptualmente con la posición de las cámaras empresariales de la Costa y la Sierra ecuatoriana y del sector financiero, cuyos representantes se manifestaron complacidos. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Andrés Pérez, señaló que las medidas “son importantes, no solo para enfrentar la crisis que nos agobia, sino para lograr el crecimiento y bienestar a los que la sociedad aspira”.

Pérez se congratuló que el mandatario haya llegado finalmente a una posición firme de liderazgo sobre temas claves para el país, aunque lamentó que no lo hubiera hecho mucho antes. “Hoy podría ser, más que una reforma fundamental, un recurso desesperado para consolidar un gobierno debilitado”, aseguró.

El empresario declaró que, si bien el deteriorado nivel de credibilidad de Mahuad obliga a guardar un espacio de duda sobre la viabilidad de las medidas, la Cámara de Comercio de Quito será la primera en aplaudir en caso de que el gobierno tenga éxito en su implementación. En tanto, el analista económico Andrés Hidalgo consideró que no existe una fórmula mágica que solucione los problemas del Ecuador. “La dolarización se basa en un tipo de cambio fijo y para sostenerlo se requiere absoluto orden. En Ecuador no podría pensarse en ese esquema a corto plazo porque hay problemas, como el déficit fiscal y el endeudamiento, que hay que resolver antes”, aseguró.

El ex ministro de Economía argentino Domingo Cavallo, que asesoró al ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, recomendó entonces la adopción de un plan de libre convertibilidad similar al de su país, que establece una paridad de uno a uno entre el sucre y el dólar, para después adoptar la dolarización. En aquella ocasión la propuesta recibió un

fuerte rechazo en medios políticos y sociales ecuatorianos. El anuncio del presidente Mahuad, en lugar de aquietar los ánimos de los movimientos sociales, fue como echar más leña al fuego. La movilización de los indígenas y las protesta de diversos sectores sociales y sindicales, anunciadas originalmente para el próximo sábado, se adelantaron en todo el país quedará paralizado esta semana, con el corte del tránsito en carreteras y otro tipo de acciones.

Enero 10 de 2000 (lunes). Campesinos interceptan barco con transgénicos. Activistas y agricultores ecuatorianos interceptaron un barco estadounidense antes de su arribo al puerto de Guayaquil, para impedir el desembarco de una carga de 30.000 toneladas de soja transgénica. Cincuenta activistas de la organización ambientalista Acción Ecológica y miembros de la Coordinadora Nacional Campesina utilizaron dos pequeñas embarcaciones para interceptar el martes la nave *Frina*, abordarla e impedir que siguiera su marcha rumbo al puerto. Otros ambientalistas se introdujeron en la comandancia del puerto, junto al Defensor del Pueblo, Hernán Ulloa, y a un juez del fuero civil, para exigir a las autoridades portuarias que no permitieran ingresar al barco, a lo que estas accedieron. El juez pidió a los investigadores del Instituto Biológico Izquieta Pérez que analizaran muestras del producto para determinar si es posible permitir el ingreso de la soja, importada para elaborar alimento para animales. Los ambientalistas aseguran que la carne de animales alimentados con productos transgénicos representa riesgos para la salud de los consumidores.

Acción Ecológica había sido informada por organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos de la alteración genética de la soja transportada por el *Frina*. Ahora confía en que, una vez realizados los análisis, la carga del barco sea incinerada o devuelta a su punto de origen. “Esperamos que no haya corrupción y se cumpla la ley, que prohíbe la entrada de alimentos transgénicos en el país”, afirmó Jorge Loor, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina e integrante del Parlamento de los Pueblos del Ecuador que se instala mañana en Quito.

La manipulación genética de la composición de productos de origen animal o vegetal busca aumentar el poder nutricional de estos, su rendimiento y su resistencia a plagas y al almacenamiento prolongado. La bióloga Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica, comenta que los productos transgénicos son nuevos y que nadie, ni siquiera las empresas que los crean, pueden predecir sus efectos. “Las posibles alteraciones en la salud humana y ambiental son impredecibles”, aseguró Bravo. También advirtió las consecuencias socioeconómicas de estos productos. “Los campesinos se ven obligados a adquirir las semillas” manipuladas genéticamente “so pena de perder la carrera en la competencia comercial”, explica. “¿Quién asegura la bondad de las nuevas semillas?”, se pregunta.

La mayoría de los productos transgénicos comercializados son alimentos, semillas e insumos agrícolas y fármacos desarrollados por empresas multinacionales encabezadas por la estadounidense Monsanto y la suiza Novartis. Sus principales productos son soja, tomate, papa, tabaco, algodón y maíz resistentes a herbicidas y a plagas. La revista *Tribuna del Consumidor* advirtió hace algunos meses que podrían estar ingresando en Ecuador productos transgénicos sin que su presencia se notara, pues no tienen etiqueta que los identifique como tales. Bravo dice que también existe posibilidad de que soja importada de Argentina sea transgénica. “Aunque Ecuador importa poca soja, 80% de la que viene del exterior es Argentina y nadie puede asegurar hasta el momento que no sea transgénica, como gran parte de la que se produce en ese país”. Según Bravo, las papas importadas desde Estados Unidos por restaurantes de comida rápida de origen estadounidense podrían ser transgénicas, al igual que aceites comestibles y algunas materias primas para la alimentación de pollos.

La Constitución ecuatoriana aprobada en noviembre de 1997 encomendó a la Ley la Regulación del Ingreso de Productos Transgénicos. La norma constitucional solo puede ponerse en práctica mediante la aprobación de una ley complementaria en el Congreso o por decreto Ejecutivo. Los participantes en el I Encuentro Andino de Bioseguridad, realizado en junio en Quito, exhortaron a los países de la Comunidad

Andina a acordar mecanismos de seguridad ante los productos transgénicos. Expertos en bioseguridad, representantes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Cuba y Venezuela y de la Unesco, advirtieron en la misma reunión que quienes toman decisiones sobre productos transgénicos no tiene la formación necesaria para tratar el tema. Las autoridades de América Latina “que deciden sobre la introducción, uso y manejo de organismos vivos modificados por técnicas de biotecnología, requieren mayor capacitación”, señaló Arvelio García Rivas, de Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Santiago Carrasco, de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología del Ecuador, aseguró que es necesario crear en la región andina una cultura sobre la bioseguridad. Los ambientalistas señalan como ejemplo de los riesgos de los productos agrícolas genéticamente modificados el caso del polen del maíz transgénico Bt, que mata las larvas de la mariposa monarca, como comprobaron investigadores de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Los estudios dieron el alerta sobre los efectos del polen difundido desde los campos de cultivo hacia áreas naturales adyacentes en Estados Unidos, Canadá, Argentina y España, donde se produce y vende esa variedad de maíz.

Para Jorge Loor, la introducción de semillas transgénicas es otro de los tantos descuidos del gobierno de Mahuad y “una imposición más de empresas que solo les interesa lucrar, sin importar como afectan al campesino”.

Enero 11 de 2000 (martes). Se instala el Parlamento de los Pueblos. El Parlamento de los Pueblos integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló hoy en la capital del Ecuador para elaborar un plan de gobierno alternativo, mientras el presidente Jamil Mahuad logra derribar obstáculos a su proyecto de dolarización de la economía. El dirigente indígena Miguel Llucó asegura que elaborarán un programa de pautas económicas, judiciales y legislativas y pondrán en marcha un modelo participativo, que será la esencia de la democracia. “Nadie cree en la democracia que vivimos, entonces debemos rescatar la participación

desde abajo de la sociedad civil para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos”, señala. Llucó también dice que el Parlamento del Pueblo se pronunciará contra el proyecto de dolarización y privatizaciones que intenta implementar el gobierno, “porque beneficia solo a los banqueros y agroexportadores que son los que poseen de dólares en Ecuador”. “Como ya ha sido demostrado, fueron los banqueros quienes dieron el dinero para la campaña electoral de Mahuad y este los compensó entregando US \$ 2.000 millones para el salvataje de sus bancos. Ahora dolariza para que se sigan beneficiando, y así reconoce a quienes lo pusieron en la presidencia”, afirma.

Silvia Vega, de la Coordinadora Política de Mujeres, sostuvo que con la dolarización el presidente “ha declarado la guerra al pueblo” y señala que el Parlamento alternativo desconoce a los tres poderes del Estado.

El Parlamento de los Pueblos, en el que participan diferentes sectores sociales que van desde indígenas hasta empresarios y profesionales, plantea la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales. Antonio Vargas, presidente de la Conaie, dijo en su inauguración que el levantamiento indígena nacional previsto para este sábado tendrá un preludio provincial, cuando las comunidades indígenas decidan salir a tomar ciudades y carreteras. “El levantamiento ya comenzó y conocemos que por estrategia de nuestros pueblos se adelantan, por ser una decisión de cada provincia de acuerdo a la situación geográfica”, aseguró Vargas. El dirigente aseguró que los indígenas “lucharán hasta las últimas consecuencias hasta que Mahuad, su gabinete, los diputados y los miembros de la Corte de Justicia se vayan a su casa”.

El Parlamento de los Pueblos sesionará de modo indefinido durante las movilizaciones populares que ya se iniciaron y que tendrán su punto más alto con la protesta indígena nacional del sábado. El lunes, Guayaquil y sus alrededores permanecieron sitiados por vehículos de transportistas, quienes exigen pasar sus deudas en dólares a la moneda local, el sucre, antes que se dolarice la economía.

Mientras tanto, Mahuad ha logrado unificar tras la propuesta de dolarización a todos los sectores políticos de derecha y a los sectores financieros y empresariales, lo que no había logrado desde el inicio de su gobierno. De esa forma, logró la dimisión de las tres principales autoridades del Banco Central que se oponían a su plan económico, entre ellos el presidente de la entidad, Pablo Better, y despejar casi todos los obstáculos legales que frenaban la implementación de la medida. En los próximos días el unicameral Congreso Nacional aprobará varias reformas constitucionales para agilizar la aplicación del nuevo sistema monetario. Mahuad cuenta con el apoyo de su partido, la Democracia Popular; del derechista Partido Social Cristiano, con quien cogobernó los primeros meses de su mandato y luego se distanció; y del populista Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram, quien fue destituido por el Congreso en 1997 con votos demócrata-populares y socialcristianos. Portavoces gubernamentales aseguraron que esa alianza será suficiente para lograr las reformas constitucionales que requiere la dolarización, a la que se oponen el Movimiento Pachakutik, la Izquierda Democrática y el Movimiento Popular Democrático. Vargas criticó las alianzas del gobierno con el roldosismo y afirmó que “así trabajan los poderes del Estado, arreglándose para que Bucaram y todos los corruptos retornen al país”. Mahuad expresó este martes que su gobierno tomó una decisión histórica al decidir aplicar un sistema de dolarización para sanear la deteriorada economía, que en 1999 soportó una inflación de 61% y una depreciación monetaria de 197%. Apuntó que el gobierno y el Banco Central garantizan que tienen los dólares suficientes para que todos los sucres que están en circulación puedan ser retirados y canjeados por esa moneda. El presidente ecuatoriano planteó la dolarización a un tipo de cambio fijo de 25.000 sucres por unidad, en un mensaje transmitido el domingo pasado por cadena de radio y televisión. En tanto, el Fondo Monetario Internacional anunció el envío a Quito de una misión técnica con el fin de asistir al gobierno ecuatoriano en la adaptación de estrategias fiscales y bancarias al plan de dolarización.

“Una vez que se identifiquen las medidas apropiadas, el FMI está dispuesto a trabajar con las autoridades ecuatorianas para apoyar su programa económico”, dijo Michel Camdessus, director ejecutivo de ese organismo multilateral.

Según una encuesta de la empresa Market difundida casualmente el lunes, un día después del anuncio de Mahuad, 58% de la población apoya la propuesta de Mahuad, mientras que 41% la rechaza. Lluco afirmó que esa encuesta no es muy seria porque “el propietario de la empresa Market, Blasco Peñaherrera, venía realizando hace varias semanas una campaña a favor de la dolarización”. “Por algo se despacha con esta encuesta un día después que Mahuad anunció la medida”, argumenta el dirigente.

El diputado socialista y ex vicepresidente del Ecuador, León Roldós Aguilera, aseguró que la dolarización se venía preparando desde hace mucho tiempo.

“El gobierno anunció hace muchos meses que el dólar en diciembre no podía pasar de 13.000 sucres, pero se dio una especulación inusitada y la compra masiva de dólares en las últimas semanas de 1999 y la primera del 2000 para llegar a 25.000 sucres”, comenta Lluco. Roldós Aguilera agregó que “la impresión es que le dieron palo al dólar para que suba, y habría que ver quienes compraron divisas en esos días, ya que hicieron el negocio del siglo porque ahora valen 30% más”. Lluco coincidió con Roldós al indicar que no es casualidad que semanas antes de anunciarse la dolarización comenzara una campaña para desprestigiar al presidente del Banco Central por oponerse a la medida. “Hoy el PSC anunció que someterá a juicio penal a Pablo Better ‘por el daño que le ha ocasionado a la economía nacional al no adoptar medidas para frenar la escalada alcista del dólar’, lo que da más fundamento a nuestra sospecha de que hubo un complot para dolarizar”, arguye Lluco.

Enero 12 de 2000 (miércoles). Exigen revocatoria de los tres poderes.

La Conaie anunció que tomará el poder en 15 o 20 días, y reclamó a los organismos internacionales que vigilen lo que ocurra durante el levantamiento de los pueblos nativos, que comenzará el sábado próximo.

La movilización indígena por la revocatoria del mandato de los tres poderes del Estado cobró fuerza este martes con la instauración del Parlamento de los Pueblos y el respaldo de diversos sectores sociales al levantamiento indígena.

El arzobispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar, quien fue elegido por unanimidad presidente del parlamento alternativo, aseguró que “será el arma más eficaz con la que el pueblo combatirá la mentira, la corrupción y la falsedad”.

La instancia popular resolvió asumir plenos poderes en los ámbitos político, económico, administrativo y judicial, y convocó a la desobediencia civil en todo el país. Antonio Vargas, presidente de la Conaie y vicepresidente del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, dijo que este órgano será el verdadero Congreso Nacional, elegirá a la Junta de Salvación Nacional que sustituirá al actual gobierno de Jamil Mahuad e implantará un sistema de ‘justicia popular’.

El 53% de la población está de acuerdo con la renuncia de Mahuad y 42% es partidaria de que rectifique su gestión, según una encuesta de la empresa Cedatos divulgada este miércoles, que además desmiente la encuesta de la empresa Market difundida el lunes al informar que el 54% de la población estaría en contra de la dolarización.

Vargas informó que todas las organizaciones de la sociedad civil representadas en este Parlamento indígena-popular, están en plena desobediencia civil y aseguró que los movimientos sociales están listos para ‘la toma del poder’. “El pueblo va a gobernar el país de aquí a 8, 15 o 20 días”, aseguró el líder indígena, quien expresó que los ecuatorianos “tienen total soberanía para exigir la salida de los miembros de los tres poderes del Estado” e instó a las Fuerzas Armadas y a la policía “a que se unan al movimiento”. Previa a la instalación del Parlamento Nacional, la Conaie, los sindicatos, organizaciones de profesionales y no gubernamentales, empresarios y religiosos establecieron en diversas provincias parlamentos populares como autoridades alternativas. En la serrana provincia del Azuay, 500 kilómetros al sur de Quito, el parlamento popular presidido por el arzobispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto

Luna Tobar, se instaló el domingo, con la participación de más de 50 delegaciones. Esos parlamentos, que discuten los problemas regionales, elaboraron propuestas para presentar ante un parlamento nacional, que se instalará este martes en Quito. “El objetivo es presentar una propuesta de carácter político, económico y social”, y buscar “la mejor salida para beneficio del país”, afirmó el dirigente indígena Ricardo Ulcuango. Virgilio Hernández, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, señaló que el Parlamento del Pueblo tendrá plenos poderes para determinar “un programa de gobierno alternativo al poder de los sectores dominantes que han conducido el país a la mayor catástrofe de su historia”. Mientras, Ulcuango advirtió que los indígenas no permitirán la participación de miembros de ningún partido político en el Parlamento.

Las protestas, la instalación del Parlamento de los Pueblos y los pedidos de renuncia de los tres poderes del Estado se producen cuando se conoce una encuesta de la empresa Cedatos que parece demostrar la impopularidad del sistema democrático en general. En una calificación de 1 a 100, las personas consultadas por Cedatos dieron más de 50 puntos a la familia, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, las universidades, los movimientos sociales y los medios de comunicación. Por debajo de los 15 puntos aparecen la democracia, los bancos, el gobierno, el sistema judicial, el Congreso y los partidos políticos. “Todas las funciones del Estado: Ejecutivo, Congreso y el poder Judicial, no son en este momento de la confianza de la población”, dijo Polivio Córdoba, director de Cedatos. Asimismo, 92% de los consultados por Cedatos consideran que Mahuad debe renunciar o rectificar su rumbo, y solo 2% respondieron que debe continuar en el poder. “Cuando una evidente mayoría clama por la renuncia presidencial, debe el doctor Mahuad escuchar con atención las razones de esa rara unanimidad en una República que no se caracteriza precisamente por la facilidad con que logra grandes acuerdos”, señaló el analista Francisco Huerta Montalvo, subdirector del diario *Expreso*. Si Mahuad “escucha bien y es honesto consigo mismo, entenderá que él es quien está equivocado y no el pueblo”, dijo Huerta Montalvo, quien participó en la Comisión de Economía del Parlamento de los Pueblos y

se mostró totalmente contrario a la dolarización propuesta por Mahuad porque traería enormes costos sociales para el país.

El ministro de Defensa, general José Gallardo, declaró que las Fuerzas Armadas mantendrán el orden y aseguró que la insurgencia indígena “es uno de los fenómenos más dramáticos que ha ocurrido en los últimos años” en Ecuador.

Luna Tobar pidió a militares y policías que no repriman el levantamiento indígena, que ya se inició en varias provincias del país con el corte de carreteras, ante la vigencia del estado de emergencia y las amenazas del gobierno de que reprimirá cualquier movilización popular. “Es cierto que estamos en Emergencia, pero confío en que la fuerza pública sabrá manejar la situación y que no reprimirá con fuerza al pueblo descontento con la mala situación del país”, añadió Luna Tobar.

Vargas dijo que el levantamiento indígena tendrá carácter nacional indefinido, y se radicalizará hacia el próximo sábado con la toma de edificios públicos, ciudades y bancos. También pidió a los representantes de organismos internacionales presentes en el país que vigilen la actitud del gobierno en los próximos días para evitar una represión en masa del Movimiento Indígena.

En el Parlamento de los Pueblos están presentes, junto a representantes de comunidades indígenas, dirigentes de los trabajadores de la salud, representantes de organizaciones de mujeres, de defensa de los derechos humanos, comerciantes minoristas, universitarios, jubilados y campesinos.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Carlos Solórzano Constantine, encargado de redactar las bases jurídicas del Parlamento alternativo, aseguró que “esta instancia popular tiene su base legal, al ampararse en el artículo 1 de la Constitución que señala que la soberanía radica en el pueblo”. Luna Tobar dijo que el objetivo de ese Congreso paralelo es anunciar que “hay un pueblo libre y soberano que quiere hablar”. En cuanto a la opinión de la Conferencia Episcopal del Ecuador en el sentido de que como sacerdote católico no puede participar en política, señaló que no ha oído “que el derecho canónico le prohibía involucrarse

en una reunión como esta”. En tanto, el ex presidente del Banco Central, Pablo Better, quien renunció por no estar de acuerdo con la dolarización de la economía dispuesta por el presidente Mahuad, dijo que el gobierno cambió su decisión sin tomar en cuenta al instituto emisor, que “tiene privativa de formular la política cambiaria”.

En los últimos tres días, los precios de los alimentos se triplicaron a raíz del anuncio de dolarización de la economía y analistas económicos atribuyeron el fenómeno al clima de incertidumbre y confusión que vive el país. La población acudió en masa a los mercados ante el temor de que se agudice la escasez con las protestas indígenas, y en algunas ciudades como Cuenca ya se comenzó a sentir el desabastecimiento. En Guayaquil se mantiene el paro del transporte iniciado el lunes, pese a la detención de cuatro dirigentes sindicales y el desbloqueo de las calles por parte de militares y policías. Los comerciantes minoristas mantienen sus locales cerrados para participar en Parlamento Popular de Guayas y los trabajadores del seguro social tomaron este martes las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social e iniciaron un paro indefinido. Los hospitales estatales también paralizaron sus actividades.

Enero 14 de 2000 (viernes). Documento del Banco Central contra la dolarización. Un documento reservado del Banco Central del Ecuador advierte que la dolarización podría causar el caos económico, mientras los indígenas se aprestan a movilizar dos millones de personas contra la medida. El estudio, presentado al gobierno de Jamil Mahuad en diciembre, señala que no están dadas las condiciones para implementar el programa, que fue anunciado el domingo. Los expertos aseguran que, para adoptar la dolarización, se requiere refinanciar los pasivos del Estado y contar con un sistema financiero fuerte para enfrentar un retiro masivo de depósitos porque, de lo contrario, los depositantes quedarían sin el respaldo del Banco Central. También se dice que no habría reserva monetaria suficiente para comprar todos los sucres (la moneda local) en circulación, como dispone el plan de dolarización.

Un técnico del Banco Central que pidió el anonimato aseguró a la agencia de noticias Inter Press Service que al no existir reservas monetarias suficientes “se corre el riesgo de mantener una economía dolarizada para unos sectores y otra en sucres para otros, lo que provocaría el caos”. El documento reservado también señala que la dolarización restringe la posibilidad de utilizar la política monetaria para enfrentar eventuales crisis financieras mundiales o devaluaciones en países vecinos que restarían competitividad a los productos ecuatorianos. El técnico mencionado explicó que la situación económica del Ecuador es muy distinta a la que presentaba Argentina cuando adoptó el régimen de convertibilidad, similar a la dolarización, aunque más flexible. “Argentina era y es una economía mucho más potente, pero además hay que tener en cuenta que Ecuador ni siquiera ha podido consolidar una economía capitalista en muchos sectores indígenas y campesinos que no podrán acceder al dólar, y tal vez tengan que regresar al trueque”, destacó.

Según el técnico, si en una economía relativamente poderosa como la Argentina, “con la convertibilidad, que no es un camino de ida sin retorno, se pasó de 6% de desempleo a 18%, en Ecuador los efectos serían mucho más negativos”. El desempleo en Ecuador es de 18,1%, y el subempleo, “que en este país es casi lo mismo”, de 54,4%, y si esos dos indicadores aumentaran, “sería un caos social”, señaló.

El gobierno de Mahuad conoció el informe del Banco Central y sabe que el país no está preparado para la dolarización, agregó. “Sin embargo, de un momento a otro cambió de parecer, tal vez para superar su propia inestabilidad, logrando el apoyo de ciertos sectores políticos y empresariales partidarios de la medida”, afirmó. Un director y dos altos funcionarios del Banco Central presentaron renuncia cuando Mahuad resolvió imponer la dolarización de la economía.

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Falconí, y otros portavoces del gobierno, aseguraron que la dolarización fue resuelta tras un estudio detenido de su factibilidad y consecuencias, y que las reservas monetarias son suficientes.

En cuanto al documento del Banco Central, solo expresa una de las posiciones manifestadas en la discusión previa al anuncio de dolarización. El documento también destaca la necesidad de un programa económico integral en el corto plazo, sugiriendo que el gobierno nunca lo ha tenido. Además, señala que la dolarización es un esquema extremo de tipo de cambio fijo muy discutido en círculos académicos, así como en su momento se discutió la flotación o las bandas cambiarias, “pero hasta ahora, la propuesta tiene tintes básicamente experimentales”. También explica que en la discusión académica se señalan como ventajas del sistema la reducción de la inflación y de las tasas de interés, creando un ambiente de confianza para la inversión.

La fuente consultada por Inter Press Service observó que regímenes como la dolarización o la convertibilidad no determinan por sí mismos la recuperación de la confianza en la economía, aunque pueden lograr estabilidad de precios, como en el caso de Argentina. Algunos empresarios argentinos “prefieren invertir sus ganancias en bancos extranjeros, como los US \$ 7.000 millones que tienen en Uruguay, en lugar de tenerlos en entidades de su país o invertirlos en la producción, y se cierran industrias y aumenta el desempleo”, comentó.

El Movimiento Indígena y las organizaciones sociales decidieron responder a la dolarización con una protesta nacional por tiempo indefinido, exigiendo el cese de los tres poderes del Estado.

La Conaie empezó a bloquear carreteras y a impedir la entrada de productos agrícolas a las ciudades y prevé movilizar cerca de dos millones de personas entre este sábado y los próximos días. Más de 50.000 indígenas y campesinos marcharán hacia Quito para tomar simbólicamente la ciudad. Históricamente, la toma de la ciudad es un hecho simbólico indígena, que representa el acoso al poder. Napoleón Saltos, de la Coordinadora de Movimientos Sociales, manifestó que la protesta será masiva y pacífica. Informó que junto a indígenas y campesinos, participarán sindicalistas, transportistas, estudiantes, organizaciones barriales, profesionales y microempresarios. Aseguró que las protestas no cesarán hasta ‘frenar la dolarización’, e hizo un

llamado a la comunidad internacional para que vigile “el desarrollo de los acontecimientos” en Ecuador.

Varias ciudades amanecieron militarizadas este viernes y los edificios públicos custodiados por soldados y policías, ante la eventualidad de su ocupación por los manifestantes. Unos 25.000 efectivos están acuartelados para responder a la protesta, pero el ministro de Defensa y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Mendoza, se comprometió ante la Conaie a no reprimir el levantamiento si este se desarrolla de modo pacífico. Mendoza reemplazó el miércoles en el Ministerio de Defensa al general José Gallardo, que renunció al no tener apoyo suficiente de las Fuerzas Armadas.

Trescientos campesinos retuvieron este viernes en la ciudad de Tulcán, fronteriza con Colombia, a 20 funcionarios, entre los que figuran el gobernador de la provincia de Carchi, varios alcaldes, el Gerente General del Banco Nacional de Fomento y una diputada. También sigue la paralización del transporte en la ciudad de Guayaquil, principal centro comercial, ubicada sobre el océano Pacífico. Los dirigentes indígenas anunciaron que las movilizaciones aumentarán este sábado, cuando Mahuad presente su informe anual al Congreso Nacional. El presidente pidió a la población que acepte la dolarización como la única solución para evitar la hiperinflación. Sin embargo, el nuevo esquema de conversión monetaria ha provocado que el precio de los productos en los mercados aumentara entre 50 y 300% en apenas cinco días, mientras que la mayoría población se niega a utilizar el dólar como moneda.

Enero 15 de 2000 (sábado). Movilizaciones en todo el país. El Movimiento Indígena y otros sectores sociales del Ecuador iniciaron un levantamiento indefinido para exigir la renuncia de los tres poderes del Estado y se aguarda la paralización total del país. Las protestas, que habían sido anunciadas para el próximo sábado, fueron adelantadas como respuesta a la decisión del presidente Jamil Mahuad, tomada este domingo, de dolarizar la economía y de recurrir a la privatización de activos públicos para combatir una profunda crisis económica. La

dolarización demuestra que el gobierno solo escucha a los banqueros y a los grandes agroexportadores, que exigían esa medida, opinó la Co-naie. Los dirigentes indígenas anunciaron que la protesta nacional no se interrumpirá hasta la renuncia de Mahuad, el cierre del Congreso y la destitución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. También aseguraron que no aceptarán un simple recambio de autoridades nacionales, sino la instalación de un nuevo “gobierno que se preocupe por los intereses del pueblo”, con participación de las Fuerzas Armadas, de grupos sociales y de los profesionales independientes.

“Es posible que muchos ecuatorianos no estén de acuerdo con el planteamiento indígena de regresar a cero los tres poderes del Estado y reconstruir el poder desde su base”, comentó el analista Javier Ponce. “Es posible que [esa propuesta] no tenga viabilidad y presuponga una ruptura constitucional y el inminente peligro de la dictadura militar. Pero tiene la virtud de plantearse el cambio más allá de la simple destitución de Mahuad”, destacó Ponce. Los indígenas “no han hablado de tomar para sí el poder. Acusarles de eso y hacer mofa de supuestas pretensiones de Miguel Lluco o Nina Pacari (dirigentes indígenas) es una salida infantil del ministro de Gobierno (interior) Vladimiro Álvarez Grau, al borde de la desesperación”, agregó. “Pocos entienden que el indígena es un movimiento que, a partir de un discurso que puede parecer radical, fuerza lo posible. La posición de los indios llegará hasta donde pueda llegar por la fuerza que tiene y las posibilidades que encarna”, indicó.

Por su parte, Mahuad intenta apuntalar su gobierno con un acuerdo legislativo con el PRE del ex presidente Abdalá Bucaram, el respaldo de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas, aunque hay opiniones muy discrepantes entre los militares. El pacto con el roldosismo está orientado a consolidar una mayoría parlamentaria para impedir que el Congreso destituya a Mahuad como lo hizo en el caso de Bucaram en febrero de 1997. A cambio, el gobierno permitiría el regreso de este al país. El presidente también intenta asegurarse el respaldo de Washington. Al respecto, el poco creíble canciller Benjamín Ortiz aseguró que el gobierno de Bill Clinton gestionará ante el Fondo Monetario Interna-

cional la entrega de recursos a Ecuador, aunque pocos ecuatorianos le creen al ministro, muchos aseguran que es un invento más. Asimismo, las autoridades no descuidan el frente militar, entre versiones de que algunos oficiales simpatizan con las propuestas de los indígenas y fueron quienes retiraron su aval al ex ministro de Defensa, general retirado José Gallardo, obligándolo a renunciar. No obstante, el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado expresando su decisión de “rechazar todo intento de ruptura del ordenamiento jurídico”. Aunque para algunos analistas ese mensaje iría dirigido a Mahuad y alguno de sus ministros que habrían propuesto al general Carlos Mendoza que apoye a dar un autogolpe de Estado. El mismo Consejo exigió “a los poderes del Estado, a los partidos políticos y a la sociedad en general, solucionar la crisis dentro del marco constitucional y democrático”.

Enero 17 de 2000 (lunes). Marcha indígena hacia Quito. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, denunció la detención de tres dirigentes sindicales y anunció que entre martes y miércoles llegará a Quito una marcha de miles de indígenas. Ciro Guzmán, presidente nacional del Movimiento Popular Democrático, Luis Villacís del mismo sector y José Chaves del Frente Unitario de Trabajadores, fueron detenidos el sábado pasado en la casa del primero por un grupo de encapuchados que rodeó la vivienda y rompió puertas y ventanas. Vargas consideró que la “dolarización solo perjudica a los más pobres”, lo que ya se comenzó a ver con el aumento de los precios, y aseguró que “el gobierno, como ya no es gobierno, comenzó a reprimir”.

Ecuador está en estado de emergencia, con todas las garantías individuales suspendidas, y desde su declaración hace 10 días ya fueron detenidas más de 40 personas. El ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, fue llamado a la Comisión de Fiscalización del Congreso para que explique la violación de domicilio de los dirigentes sindicales, así como denuncias de malos tratos a ciudadanos detenidos durante las protestas. Varias ciudades y carreteras del país permanecen totalmente

militarizadas para impedir que los indígenas tomen carreteras y oficinas públicas. Las Fuerzas Armadas también tienen la orden de impedir el avance de miles de nativos hacia Quito, lo que ha retrasado la marcha hacia la capital.

En las provincias del Norte, a todos los indígenas que viajen en autobús comercial rumbo a la capital se les impide continuar en el vehículo, obligando a que sigan a pie y poniendo en práctica una especie de *apartheid* indio que demuestra el racismo latente en el país. Como parte de la protesta, los indígenas mantenían obstaculizadas este lunes algunas vías de la sudoriental provincia de Morona Santiago, en la Amazonia, fronteriza con Perú. También estaban cortadas las carreteras de Cañar, Azuay y Loja, provincias serranas del Sur, y algunos tramos de rutas en Chimborazo, en la Sierra central, y las provincias norteñas de Imbabura y Carchi. Unas 3.000 personas participaron el domingo en una marcha convocada por el Movimiento Indígena y los movimientos sociales en la ciudad de Ibarra, capital de Imbabura. En Cuenca, varios miles de mujeres realizaron una marcha de cacerolas vacías, anticipada por un repique de los campanarios de las iglesias. También hubo marchas de protesta en distintas ciudades medias de la Sierra y los mercados de productos agropecuarios cerraron en muchas provincias ante el temor de ser saqueados.

Vargas indicó que el bloqueo de las carreteras será progresivo hasta cortarlas totalmente, por lo que se teme desabastecimiento de los mercados de alimentos.

Los 6.500 trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) se sumaron este lunes al levantamiento indígena, amenazando con el desabastecimiento de combustible los próximos días. Los trabajadores petroleros amenazaron con dejar de producir petróleo en los cinco campos de operación estatal, no bombear el crudo de las distintas empresas desde la Amazonia hasta las refinerías de Esmeraldas, ubicada en la Costa norte sobre el océano Pacífico, y no embarcar petróleo para exportación. Se oponen a la dolarización, que también implica la privatización del sector de hidrocarburos. El presidente de la

Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Ecuador (Fetrapec), Enrique Barros, informó que durante el paro el Estado dejará de producir 210.000 barriles de petróleo, bombear 320.000 barriles y exportar 280.000 barriles de crudo al día. Barros no descartó que los trabajadores se sumen a la toma de pozos petroleros que realizarían algunas comunidades indígenas en el oeste del país. “El gobierno pretende entregar a la empresa privada su principal fuente de riqueza (el petróleo), que solo el año pasado entregó US \$ 1.375 millones al presupuesto general del Estado”, afirmó el dirigente petrolero. Mientras tanto, la revista *Líderes* dio a conocer este lunes un informe confidencial del Banco Mundial según el cual durante 1999 los indicadores sociales de indigencia del Ecuador empeoraron en forma alarmante y se mantiene la misma tendencia para este año. Según el estudio, Ecuador tiene 5,1 millones de personas pobres y 1,9 millones en condiciones de extrema pobreza. También asegura que para disminuir la desigualdad se requiere mejorar significativamente el acceso de los sectores pobres a servicios básicos de salud y educación.

Enero 18 de 2000 (martes). Mahuad sigue los pasos de Menem. El presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, consultó hoy a técnicos de la Fundación dirigida por Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Carlos Menem, para hacer los últimos ajustes a las leyes sobre la dolarización de la economía. En la reunión estuvieron presentes Guillermo Mondino y Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, José Luis Moreno, del Banco de Panamá, y Eugenio Pendaz y Pablo Guidotti, ex superintendente de Bancos y ex viceministro de Finanzas de Argentina, respectivamente. Durante varias horas analizaron los efectos económicos de la dolarización, junto a ministros, técnicos del Banco Central y el superintendente de Bancos del Ecuador. Mientras tanto, continúan las protestas contra la dolarización, organizadas por el Movimiento Indígena y organizaciones sociales, con cortes de carreteras y marchas en distintos puntos del país. En la madrugada de este martes llegaron a

Quito más de 8.000 indígenas para la toma simbólica de la ciudad y se espera arribo de otros 10.000.

Mondino y Vasconcelos, que llegaron a Ecuador el miércoles y han sostenido varias reuniones de trabajo con Mahuad y las autoridades del Banco Central, permanecerán en el país hasta que el conjunto de leyes estén listas.

Las autoridades analizaron la reserva monetaria disponible en este momento para comprar todos los sucres que están en circulación y liberar los depósitos bancarios congelados por el gobierno en marzo, aunque no informaron sobre las conclusiones. Los bancos podrán devolver el dinero de quienes tienen depósitos menores a US \$ 4.000, mientras que quienes superen esa cantidad deberán esperar entre siete y diez años. En los bancos que quebraron y fueron asumidos por el Estado la devolución se hará mediante bonos oficiales a 10 años, que podrán ser cambiados en la bolsa de valores, lo que según expertos representará una pérdida para los ahorradores, ya que serán comercializados a un valor mucho menor. Cavallo recomendó al ex presidente Abdalá Bucaram la adopción de un plan de libre convertibilidad similar al de Argentina, con una paridad de uno a uno entre el sucre y el dólar, pero la propuesta recibió un fuerte rechazo en medios políticos y sociales ecuatorianos.

Mahuad se opuso a la convertibilidad propuesta por Bucaram y desde la alcaldía de Quito contribuyó a su destitución en 1997. Algunos analistas consideran que el hecho de que solo ahora se esté consultando a técnicos extranjeros para las leyes de dolarización demostraría que el gobierno ha tomado la medida de forma improvisada. El empresario Andrés Vallejo, ex ministro de Gobierno durante la presidencia de Rodrigo Borja (1988-92), dijo que Mahuad adoptó la dolarización “como una medida que superara el pedido de renuncia que se generalizaba” y afirmó que el mandatario la calificó como un salto al vacío cuando la analizó con técnicos del gobierno. “Lo grave en este caso es que esa opinión de salto al vacío se produjo 48 horas antes de dar a conocer la dolarización, sin que ninguna de las circunstancias económicas pueda haber cambiado”, apuntó Vallejo.

El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michael Camdessus, desmintió este lunes la versión de portavoces del gobierno ecuatoriano que habían anunciado el apoyo del organismo multilateral a la medida. “La dolarización no es, debo ser franco, la clase de política monetaria que nosotros hubiéramos recomendado a Ecuador en esta etapa”, dijo Camdessus durante un receso de la reunión de jefes de Estado de África con el FMI, que se realiza en Gabón. El funcionario manifestó su sorpresa ante la medida, ya que técnicos del Fondo venían conversando con las autoridades económicas ecuatorianas para llegar a un nuevo acuerdo de contingencia y “nunca se habló de una posible dolarización de la economía”. En tanto, el semanario británico *The Economist* consideró a la dolarización en Ecuador en su edición del día 15 como “una jugada de un político desesperado”. “Envuelto en pánico, la propuesta fue pobremente planeada e ineptamente explicada”, señaló el semanario británico al describir la intervención de Mahuad. “Al día siguiente, los inversionistas todavía se preguntaban qué exactamente quiso decir el señor Mahuad con dolarización”.

The Economist advierte que se corre el riesgo de que la hiperinflación ocasione el caos total del sistema financiero si la dolarización no funciona y “Ecuador estaría entonces en una situación peor de la que está ahora”. Para hacer frente a la escasa reserva monetaria y sostener el esquema de dolarización frente a posibles choques externos, el gobierno decidió concretar una venta anticipada de petróleo por US \$ 300 millones y así obtener recursos en dos semanas.

Parlamentarios de la gobernante Democracia Popular realizan gestiones con otras fuerzas políticas para conseguir los votos necesarios para aprobar las leyes de la dolarización cuando el presidente las envíe al Congreso. El gobierno contaría con el apoyo del Partido Roldosista Ecuatoriano, de Bucaram, cuyos técnicos colaboran en la etapa preparatoria de la dolarización, y se espera que también el derechista Partido Social Cristiano (PSC), del ex presidente León Febres Cordero (1984-88), vote a favor de la medida. Todavía existen algunas dudas porque, según fuentes del entorno presidencial, el PSC presiona al gobierno para seguir

controlando la intermediación petrolera y la semana pasada los parlamentarios del PSC no aportaron la mayoría necesaria para nombrar a los directores del Banco Central, que se encargarán de implementar la dolarización, por lo que tuvieron que ser nombrados por decreto.

Enero 19 de 2000 (miércoles). El país semiparalizado. Ecuador está semiparalizado por protestas y cortes de carreteras, mientras 12.000 indígenas permanecen en Quito para impedir que se apruebe la dolarización propuesta por el presidente Jamil Mahuad, y exigir el cese de los poderes del Estado. Las Fuerzas Armadas movilizaron 25.000 efectivos para controlar las carreteras y no dejar pasar ningún vehículo particular o comercial que lleve nativos, lo que fue denunciado por organismos de derechos humanos como una actitud racista del gobierno. Los indígenas burlaron el control militar movilizándose en pequeños grupos, en camiones tapados con lonas por caminos secundarios y caminando a través del campo y las montañas. En Quito instalaron el campamento en el Parque del Arbolito, a tres cuadras del Congreso Nacional (Parlamento), vigilados de cerca por el Ejército. Sectores de pobladores y comerciantes minoristas se solidarizaron con los indígenas llevando alimentos. Según pude constatar en carreteras de acceso a la ciudad, la marcha rumbo a la capital no se detiene. Siguen llegando de manera constante cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños indígenas que cargan bolsas con papas y verduras para mantenerse en la capital.

Los nativos son recibidos por el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, que se conformó con 330 representantes de movimientos sociales, indígenas, religiosos, organizaciones humanitarias y no gubernamentales, pequeños empresarios, profesionales y comerciantes minoristas. Hasta la llegada de más indígenas, los que están en Quito realizan marchas por la ciudad midiendo fuerzas con los militares. Para la dirigente indígena Blanca Chancoso, la idea es reunir en Quito a más de 50.000 nativos para presionar al gobierno “directamente en su casa, sin descuidar la movilización en todo el país”. “Este levantamiento es como un parto. Acaba de comenzar, pero cuando el guagua (niño, en

kichwa) termine de nacer van a ver la fuerza que tiene, como ya lo está demostrando al paralizar gran parte del país”.

La sede del Congreso legislativo y la Casa de Gobierno están resguardadas por efectivos de la policía y el Ejército, y las calles aledañas protegidas con alambre de púa y vehículos antimotines. Hay uniformados apostados en azoteas con rifles de mira telescópica. Dos helicópteros sobrevuelan la ciudad vigilando y lanzando volantes que llaman a la población a no sumarse a la protesta. “Nuestros hermanos vienen marchando pacíficamente desde distintos rincones del país, a pie o en camiones, y aunque las Fuerzas Armadas intentan retrasar la llegada, sabemos que en los próximos días estarán acá. Es cuestión de tiempo”, aseguró el dirigente indígena Miguel Lluco.

Varias carreteras de la Sierra, la Costa y la Amazonia han sido cerradas con rocas y árboles, y los manifestantes abrieron zanjas paralizando el tráfico de vehículos. Las provincias sureñas de Azuay, Cañar y Loja están aisladas por tierra del resto del país. En las provincias amazónicas de Napo, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe las carreteras han sido bloqueadas y se han registrado numerosas movilizaciones. Mientras que en Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los pobladores cercaron el aeropuerto impidiendo el tráfico aéreo. Las ciudades andinas de Cuenca, Azoguez, Ibarra, Latacunga, Riobamba y Ambato están parcialmente aisladas por las protestas y el cierre de rutas. Cientos de campesinos de las provincias costeñas de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas encendieron neumáticos en las carreteras y se enfrentaron con policías y militares que intentaron despejarlas.

Los trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) dejaron de bombear crudo desde la Amazonia hasta las refinerías de Esmeraldas, en la Costa norte, no embarcan crudo para exportación y no distribuyen combustible, por los que se prevé desabastecimiento.

En la capital y en distintas ciudades se han desarrollado varias marchas de protesta. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, afirmó que las protestas serán progresivas y lentas. “Es una lucha de resistencia, que

no se sabe cuánto durará, pero estamos dispuestos a soportar el tiempo que sea”, señaló Vargas.

El ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, condenó el hecho de que los militares impidan el traslado de indígenas a Quito. “Es una medida de carácter racista totalmente repudiable”, arguyó.

Alexis Ponce, portavoz de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, aseguró que en los próximos días viajarán a Ecuador representantes de organizaciones de derechos humanos y parlamentarios europeos para verificar el maltrato a los indígenas y la prisiones que se registran. Ponce afirmó también que el estado de emergencia que rige en el país hace dos semanas, con suspensión de las garantías individuales, viola los principales derechos contemplados en la Constitución ecuatoriana. El activista recordó el allanamiento a domicilios de tres sindicalistas y su detención, realizada por policiales encapuchados el sábado. Se produjeron más de 100 arrestos de dirigentes desde el inicio de las protestas.

El portavoz presidencial Carlos Larreátegui aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar con los indígenas si dejan de lado la aspiración de que cesen los tres poderes del Estado. “Nosotros no dialogaremos con la Conaie mientras no renuncie a su pretensión”, dijo Larreátegui, modificando la posición inicial del gobierno en cuanto a que la movilización no tendría ninguna repercusión. El ministro de Desarrollo, Juan Falconí, se reunió con representantes de las cámaras empresariales en procura de detener el alza de los precios, que no paran de subir desde que Mahuad dispuso la dolarización de la economía el día 5. Los empresarios aseguraron que el alza “ha sido justa y se debe al incremento de los costos”, por lo que no harán caso a ningún pedido del gobierno. Falconí afirmó que el gobierno liberará las importaciones para contrarrestar el alza de los precios, lo que fue rechazado por los dirigentes empresariales. “No tenemos miedo a las amenazas, cuando quiera hacer algo que lo haga”, afirmó Gustavo Pinto, presidente de la Cámara de Industrias.

Jaqueado por las movilizaciones y el aumento de los productos de primera necesidad entre 50 y 300% en los últimos siete días, Mahuad

espera enviar este viernes al Congreso legislativo los proyectos de ley necesarios para imponer la dolarización de la economía. Los indígenas del Ecuador propusieron hoy a los mandos militares la instalación de un “gobierno de salvación nacional”, integrado por organizaciones religiosas, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Mientras, se radicalizan las protestas contra el gobierno de Jamil Mahuad. Este miércoles, 15.000 personas, entre indígenas, campesinos y residentes de Quito marcharon hasta el Ministerio de Defensa.

Un grupo de dirigentes mantuvo una reunión con el titular de la cartera y jefe del Comando Conjunto, Carlos Mendoza, para exigirle que los militares no repriman las movilizaciones y tomen una posición ante la crisis que vive el país.

Ricardo Ulcuango, dirigente de la Conaie, aseguró que pidieron a Mendoza “que cumpla el compromiso de no reprimir las protestas pacíficas y defina si el apoyo militar será para los corruptos que gobiernan el país o para el pueblo. Es un momento de definiciones y nadie puede tener una posición ambigua ante los ecuatorianos”.

También entregaron a Mendoza el plan para un gobierno popular elaborado por el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador. Mendoza dijo comprender los reclamos indígenas y la situación de pobreza que estos viven, pero aseguró que las Fuerzas Armadas respetan el orden institucional y aseguró que la corrupción está metida de arriba hacia abajo en el país. Además criticó a los movimientos sociales por entender que también había corruptos en sus filas. Sin embargo, abrió una interrogante sobre la conveniencia del plan de dolarización, anunciado por Mahuad la semana pasada, para superar la crisis económica que afronta el país. Mientras, unas 35.000 personas de distintos sectores sociales marcharon por el centro de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay y tercera ciudad del país, a 500 km de Quito.

El arzobispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar, que encabezó la marcha, aseguró que este era “solo el comienzo del triunfo”, y consideró que el hecho de que los militares no permitieran la llegada de los indígenas a Quito era “un acto de violencia y racismo pocas veces visto”. “El pueblo

no pide el quiebre de las instituciones. Solo pide que estas se pongan al servicio de las grandes mayorías para que sea una verdadera democracia”, señaló el religioso. Campesinos e integrantes de los movimientos sociales mantienen ocupada la gobernación de la provincia del Azuay. Luego de regresar con las manos vacías de la conversación en el Ministerio de Defensa, los indígenas que están acampando en el parque El Arbolito preparan la comida. Entre la gran mayoría de gente kichwa hay un shuar que participó en la Guerra del Cenepa. “Esta es otra guerra”, dice y recuerda unos versos de su pueblo:

En la tembladera de los cantos copiados / allá donde flotan los tsunki / allá
estoy temblando / todo, nada me es difícil / en los cantos encebrados estoy
/ allá donde las canciones están / estoy en donde nada es difícil / donde se
levantan los supai / allá en los cantos encebrados estoy.

Muchas veces las adivinanzas nos muestran la magia de una cultura, el ingenio con que se pueden adaptar las palabras a la realidad, las imágenes de un paisaje determinado, la vida del mundo que nos rodea. Algunos indígenas de Cotopaxi, en cambio, se entretienen realizando adivinanzas. Para los indígenas kichwa de Los Andes, las adivinanzas están indisolublemente ligadas a su cultura porque son una parte importante de su vida. A través de ellas podemos caminar por el mundo de Los Andes, y descubrir las creencias, la música, el mito, las fiestas de un ser humano mimetizado a su tierra. Las adivinanzas de los indígenas andinos pueden transportarnos en las alas de un colibrí, hacernos llegar a la luna, hipnotizarnos con una planta de maíz, escuchar el murmullo de un río que vaga por la montaña y descubrir el misterio de los altos nevados. Pero además nos recuerdan viejas tradiciones y, sobre todo, la cosmovisión de los pueblos indígena. Cuando alguien le pregunta sobre su recopilación, señala que en ellas “uno ve, oye, palpa, huele y saborea el significado que tiene su tierra para millones de campesinos e indígenas, desde la antigüedad hasta nuestros días”. Para Kley Meyer las adivinanzas de Los Andes son cortos poemas metafóricos. “Normalmente –comenta–, no

son chistes ni juegos de palabras, como en la cultura occidental, con las excepción de los que han sido prestados de esta cultura. Al oír una adivinanza del kichwa ecuatoriano o kichwa peruano-boliviano, hay una reacción de reconocimiento entre el que pregunta y el que responde. En lugar de un sentido de competencia o gracia entre los dos, la adivinanza andina es como si al amanecer alguien abre la ventana a otro”.

Su decir me viene a la memoria ahora en las afueras del Ágora de la Casa de la Cultura, cuando un grupo de indígenas se reúnen a contar adivinanzas. Miguel, pregunta a los otros: ¿Qué es un cielo sin estrellas? Pasan algunos minutos y no surge la respuesta correcta. De pronto Luis dice “el espejo”, a lo que Miguel asintió con la cabeza. Todos le preguntan cómo adivinó y este dice la siguiente respuesta: “Fue muy simple. Recordé que ayer habíamos estado conversando sobre la diferencia de este cielo lleno de edificios donde no podemos mirarnos a pesar de ser un espejo y el de Tigua lleno de estrellas”.

Imashi para los kichwa ecuatorianos, *watuchis* para los kichwa peruanos, las adivinanzas son un espejo de su cultura.

Enero 20 de 2000 (jueves). Indígenas rodean el Congreso. Unos 12.000 indígenas rodearon la sede del Congreso legislativo y la Suprema Corte de Justicia en Quito, mientras soldados y policías armados con fusiles, ametralladoras y gases lacrimógenos hacen un cerco para impedir que los nativos ocupen esos edificios. Funcionarios y diputados decidieron dejar la sede del poder Legislativo ante la eventualidad de que los indígenas logren ocuparlo. Varias carreteras de la Sierra, la Costa y la Amazonia han sido cerradas con rocas y árboles y los manifestantes abrieron zanjas, paralizando el tráfico de vehículos.

Las provincias sureñas de Azuay, Cañar y Loja están aisladas por tierra del resto del país. En las provincias amazónicas de Napo, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, las carreteras han sido bloqueadas, se han registrado numerosas movilizaciones y los mercados permanecen cerrados. En Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los pobladores mantienen cercado el aeropuerto impidiendo el tráfico aéreo. En Napo

fueron destruidos 300 m del acueducto que provee de agua a Tena, capital de la provincia, y falta agua en algunos barrios. Las ciudades andinas de Cuenca, Azoguez, Ibarra, Latacunga, Riobamba y Ambato están parcialmente aisladas por las protestas y el cierre de rutas y se comenzó a sentir el desabastecimiento de productos agropecuarios, gas y combustibles. Cientos de campesinos de las provincias costeñas de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas encendieron llantas en las carreteras y se enfrentaron con policías y militares que intentaron despejarlas. Los trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) mantienen la medida de no bombear petróleo desde la Amazonia hasta las refinerías de Esmeraldas, en la Costa norte, no embarcar crudo para exportación y no distribuir combustible. El desabastecimiento ya es perceptible.

La ciudad costeña de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, fue tomada simbólicamente por 4.000 campesinos procedentes desde distintas zonas, y varios municipios de la Sierra fueron tomados por agricultores. Ibarra, ubicada a dos horas de Quito, también fue tomada este jueves por 5.000 indígenas que llegaron de distintas comunidades para protestar frente a la gobernación.

La dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina, Rosa Criollo, señala que los campesinos de todo el país se mantendrán levantados indefinidamente junto con los indígenas. “Además del corte de carreteras, seguiremos con la ocupación de gobernaciones y municipios en todo el país”, asegura Criollo.

Este jueves se unieron a las protestas los sindicatos de la Empresa Eléctrica Nacional, y sus dirigentes no descartaron que en las próximas horas corten la energía en algunas zonas del país. Tras cinco días de iniciado el denominado levantamiento indígena y popular, ya han sido detenidas más de 200 personas y fueron heridos por la policía más de 20 manifestantes en todo el país.

Aunque el ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, había señalado que las protestas carecían de fuerza, voceros oficiales señalaron a la prensa la posibilidad dialogar con los indígenas para buscar una salida

a la crisis. Sin embargo, Jorge Loor, uno de los dirigentes del levantamiento, manifestó que la única salida a la crisis es la constitución de un gobierno de acuerdo nacional. “Ese gobierno debe poner énfasis en la soberanía monetaria del país dejando de lado la dolarización”, sostuvo. También afirmó que debe “fomentar al sector productivo, modernizar las empresas estatales para que sean eficientes sin privatizar, reducir el pago de la deuda externa, crear un fondo social de emergencia contra la pobreza y enviar a prisión a los banqueros que saquearon el país”.

Enero 21 de 2000, 10h00 (viernes). Indígenas y militares ocupan el Congreso. El cerco que rodea al Congreso cae. Luego del desconcierto inicial todos corren hacia dentro del edificio. Ya no hay alambre de púa, ni bombas lacrimógenas, ni fusiles que detengan esta marcha. Algunos miran asombrados. Entre los ponchos raídos camina un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas que está decidido a dar su aporte en la construcción de otro destino. Más de 2.000 indígenas apoyados por los militares ocupan el Congreso, desconocen el gobierno y designan una Junta de Salvación Nacional. Para muchos todo suena a utopía, pero a la utopía también hay que ayudarla. La junta está integrada por el coronel Lucio Gutiérrez, el dirigente indígena Antonio Vargas y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Solórzano.

Solórzano es reconocido porque en 1995 fue declarado personaje ecuatoriano del año por varios medios de comunicación por su actuación en el juicio al ex vicepresidente Alberto Dahik, que fue involucrado en denuncias de corrupción. Sin embargo, ahora esos mismos medios lo atacan por apoyar el levantamiento.

A las 10h30, Gutiérrez señala que se trata de una revolución contra la corrupción y la pobreza, y pide a la comunidad internacional el reconocimiento de ‘la soberanía’ del pueblo ecuatoriano: “Este no es ningún movimiento subversivo o trasnochado, ha sido pensado y planificado y estamos juntos los militares junto al pueblo indígena”, afirma Gutiérrez. También asegura que el papel de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía nacional y apoyar al pueblo en sus reivindicaciones más sentidas, en su

dolor... “No es papel de los militares defender un gobierno de banqueros corruptos con la excusa de mantener una institucionalidad que es violada a cada día por los que gobiernan”, dice Gutiérrez. En el Congreso se instaló también el Parlamento de los Pueblos del Ecuador, con participación de indígenas, campesinos, representantes de los movimientos sociales y de organizaciones no gubernamentales, de profesionales independientes y de microempresarios. La Junta emitió los primeros decretos pidiendo orden de arraigo de Mahuad, del presidente del Congreso, Juan José Pons, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Galo Pico. La orden de arraigo impide a los afectados abandonar el país.

Mientras, el coronel Gutiérrez declaró que se trata de un movimiento pacífico, que lucha por recuperar la autoestima y la dignidad de los ecuatorianos.

“Pueblo, levántate y lucha para eliminar la corrupción y la impunidad patrocinada por este gobierno, levántate para decir no al atraco del milenio, provocado por los bancos”, expresa Gutiérrez. También llamó a la unidad para “refundar la democracia con desprendimiento”, y así “sacar adelante el país”. El coronel exhorta a “los ex presidentes, a los políticos honestos, a los medios de comunicación y a todas las mujeres y hombres que amen este país”, a apoyar a la Junta de Salvación Nacional. “Estamos en un momento histórico. Debemos unirnos, pues si no lo hacemos, el país se desintegra”, advierte.

El presidente del Congreso, Pons, llamó a los legisladores a celebrar este sábado una reunión extraordinaria en el edificio del Banco Central, en la ciudad de Guayaquil. Pero los diputados del indigenista Movimiento Pachakutik y de la socialdemócrata Izquierda Democrática reconocieron la Junta de Salvación Nacional y pusieron sus renuncias “a la orden del pueblo”.

El general Paco Moncayo, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas durante la guerra que este país y Perú libraron en 1995 por problemas de límites, comentó que el levantamiento era previsible. “Cuando los mandos no se levantan para eliminar la corrupción que vive el país con este gobierno, aparecen los oficiales para

buscar salidas, como ocurrió en Venezuela, cuando se levantó (el ahora presidente) Hugo Chávez”. “Ecuador no tiene por qué ser distinto (al caso de Venezuela), un presidente medianamente sensible tendría que haber renunciado”, agrega.

El coronel Gutiérrez, que participó en la guerra contra Perú, fue comparado por una fuente militar con Chávez, por “su discurso bolivariano y su vinculación con los sectores más pobres de la sociedad”. Ya había protagonizado un episodio en las Fuerzas Armadas al exigir a los mandos que tomaran partido “contra la corrupción expresada en la quiebra bancaria y posterior salvataje (de bancos) por parte del gobierno”. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, uno de los líderes de la toma del Congreso, dice que los hechos de hoy son el resultado de “la insensibilidad” del gobierno. “Este levantamiento del pueblo ecuatoriano ha sido totalmente pacífico, y está siendo reconocido en todos los rincones donde la gente sigue levantándose, tomando gobernaciones y protestando contra el sistema que imperó hasta hoy”, asegura Vargas.

Enero 21 de 2000, 11h00. Recuerdos de la biopiratería. Un shamán bendice la toma del Congreso, espanta los malos espíritus y brinda ayahuasca. Al terminar la ceremonia tal vez vuela con su mente para recordar que unos meses atrás cinco shamanes de la región amazónica se fueron a Estados Unidos para pedir al gobierno de ese país que revoque la patente del uso de la ayahuasca. En noviembre de 1999 la Oficina de Patentes de Estados Unidos tuvo que reconocer su error y anular la patente de esta planta sagrada. Esta planta, que puede producir efectos alucinógenos, es considerada sagrada por los nativos de la Amazonia y se le atribuyen poderes curativos. La Oficina concedió una licencia al estadounidense Loren Miller para realizar experimentos medicinales con la ayahuasca y comercializarla, lo que fue repudiado por los pueblos indígenas de los nueve países amazónicos. La Amazonia incluye territorios de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Venezuela y Suriname. “Las plantas sagradas usadas en las prácticas

culturales colectivas no se pueden patentar, porque su comercialización ofende a los pueblos indígenas”, sostienen los shamanes.

El caso de la ayahuasca es uno de tantos de ‘biopiratería’ (apropiación de recursos biológicos) de las riquezas naturales de la Amazonia. En Ecuador, cuya diversidad biológica en relación con su área es la mayor de América Latina, se ha denunciado que muchas compañías extranjeras utilizan los recursos naturales para investigación genética. Ambientalistas señalaron que diversas empresas extranjeras organizan programas de investigación que emplean antropólogos y etnobiólogos para obtener recursos genéticos en la Amazonia. Uno de los ejemplos es el de la Compañía Petrolera Maxus, que hace pocos meses inauguró la estación científica de Yasuní en la Amazonia ecuatoriana. Según el convenio firmado con Ecuador, Maxus debería transferir al país su tecnología y repartir parte de las ganancias generadas con el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas que custodian la biodiversidad, pero no está cumpliendo ese compromiso. Algunas revistas científicas internacionales denunciaron que los recursos biológicos extraídos por Maxus son utilizados en la industria farmacéutica.

Hace dos años se sacaron del Ecuador 750 ranas vivas, cuya piel sirvió para reproducir un analgésico 200 veces mayor que la morfina, sin beneficio alguno para el país. Ese analgésico fue patentado en Estados Unidos por la compañía Shamán Pharmaceuticals, que según un informe del diario *Wall Street Journal* se fundó en 1989 sobre la premisa de que “el conocimiento de los shamanes acerca de las plantas medicinales podría ayudar a desentrañar compuestos curativos y ganancias”. Algo similar ocurrió con la quinua, una planta de la zona andina, de la cual se aislaron los genes que la hacen rica en proteínas, para incorporarlos a otras plantas. La comunidad indígena awa, que habita la Costa norte del Ecuador y algunas zonas de Colombia, colaboró con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos para la recolección e investigación de plantas que podrían emplearse en la producción de medicamentos contra el sida y el cáncer. Más allá de la importancia de esas investigaciones, los

indígenas ecuatorianos se preguntan qué beneficios obtendrán ellos y el Estado ecuatoriano por la entrega de sus recursos biológicos.

De acuerdo con el Convenio sobre Biodiversidad firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992, los recursos biológicos son parte de la soberanía nacional.

Esto implica que tanto el Estado como las comunidades indígenas deben conocer la finalidad de las investigaciones que empleen sus recursos biológicos, y obtener beneficios de ellas. Sin embargo, es muy frecuente que esto no suceda. El mismo Convenio establece que la investigación científica debe desarrollarse con los objetivos de conservar la diversidad biológica y promover su uso sustentable. A su vez, el Acuerdo de Cartagena, que creó el Pacto Andino, exige que cuando los países que lo integran (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) establecen contratos con compañías que investigan los recursos genéticos, las comunidades indígenas afectadas deben ser consultadas previamente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también ha protestado porque al menos diez muestras de sangre de indígenas ecuatorianos se vendieron en las denominadas “Boutiques del Genoma” en Estados Unidos.

Los genes de indígenas amazónicos chachi, huaorani, kichwa y tsáchila salieron del país sin que esos pueblos dieran su consentimiento para que se experimentara con su sangre. Las muestras ahora se emplean en investigaciones sobre el genoma humano que se desarrollan en Estados Unidos, y se ha descubierto que los chachi tienen una característica genética exclusiva de inmunidad. Esto podría ser muy importante para el tratamiento del sida, pero los indígenas ecuatorianos no aceptan que se les tome como cobayas.

Los diputados indígenas de Colombia y Ecuador iniciaron el año pasado una acción judicial conjunta de carácter internacional para recuperar las muestras, al tiempo que impulsan en sus respectivos países la aprobación de leyes que protejan la biodiversidad. El dirigente indígena Ricardo Ulcuango comenta que las investigaciones de la sangre de

comunidades autóctonas no solo atenta contra la diversidad biológica ecuatoriana, sino también contra los derechos humanos de esas comunidades. “Sabíamos del robo de animales y de plantas sagradas como la ayahuasca, pero no se había llegado al límite de que se llevaran la sangre de nuestros hermanos”, añadió.

Según el microbiólogo francés Albert Sasson, investigador de la Universidad de París, la investigación en biotecnología tiende a satisfacer las necesidades de los mercados internacionales y no las de los países en desarrollo. “Así se corre el riesgo de que la brecha tecnológica entre los países ricos y pobres aumente aún más. Hay que definir una estrategia para que los beneficios de la biotecnología se distribuyan equitativamente”, afirmó.

Enero 21 de 2000, 16h00. Piden la renuncia de Mahuad. Las Fuerzas Armadas del Ecuador piden la renuncia al presidente Jamil Mahuad, pero este desafía a sus adversarios a tomar el poder por la fuerza, tras asegurar que no dimitirá. “Le hemos pedido al presidente que renuncie por el bien del país, para evitar un estallido social”, informó el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto. Aseguró también que los militares están ‘monolíticamente’ unidos y exhortó al gobierno a ser ‘sensible’ ante la situación, marcada por la crisis económica y la movilización de fuerzas populares que pretenden la renuncia de los titulares de los tres poderes del Estado. Mahuad, en cadena de radio y televisión, afirmó que se asiste a una aventura golpista orientada a la implantación de una dictadura y que no aceptará su destitución. “Si se trata de dar un golpe militar y de tomar el poder por la fuerza, señores, tomen el poder por la fuerza”, dijo el presidente, para confirmar su voluntad de mantenerse en el gobierno.

El ex presidente Rodrigo Borja aseguró que ya no hay una salida constitucional y que Mahuad “debería irse, para evitar enfrentamientos entre el pueblo”.

Enero 21 de 2000, 18h00. Mahuad deja la Casa de Gobierno. Los jefes de las Fuerzas Armadas del Ecuador se instalan en la Casa de Gobierno, tras la partida rumbo a la base aérea del presidente Jamil Mahuad, y aguardan a los líderes del levantamiento popular para negociar una salida a la crisis institucional. Asimismo, el vicepresidente Gustavo Noboa llegó a Quito procedente de Guayaquil, en la Costa, respaldado por dirigentes políticos que invocan la legalidad constitucional para promoverlo como nuevo presidente.

Mahuad, antes de abandonar la sede del poder Ejecutivo, afirmó en un mensaje por cadena de televisión y radio que no renunciará, pese a la magnitud del movimiento cívico-militar que exige su sustitución por una Junta de Salvación Nacional y a la presión de las Fuerzas Armadas, que le pidieron la dimisión.

El presidente denunció un Golpe de Estado en gestación y desafió a quienes pretenden su renuncia a tomar el poder por la fuerza. Pero el líder indígena Antonio Vargas, uno de los tres integrantes de la Junta de Salvación Nacional, dio por concretado el fin del gobierno de Mahuad. Vargas anunció que la Junta, conformada también por el coronel Lucio Gutiérrez y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano, tomará la Presidencia.

La Junta de Salvación Nacional, creada en la sede del Congreso, tomado por la mañana por los indígenas y los oficiales militares que los apoyan, nombró nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sus partidarios comenzaron a concentrarse frente a la Casa de Gobierno, controlada por las Fuerzas Armadas. Mientras, los oficiales de los destacamentos militares de la provincia de Azuay y de otras regiones desconocieron a los mandos, plegándose a la Junta, y en Guayaquil la Marina aguarda el desenlace de los acontecimientos. La Junta pidió al Comando Conjunto militar, encabezado por el ministro interino de Defensa, general Carlos Mendoza, que la reconociera como autoridad legítima. Pocas horas antes, Mendoza había informado públicamente que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había pedido su renuncia a Mahuad “para evitar un estallido social”. Mientras, en Washington,

la Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró en sesión de emergencia para tratar la crisis institucional ecuatoriana. El secretario general de la OEA, César Gaviria, quien se hallaba en París, manifestó su “más enérgica condena a este acto (la sublevación en Ecuador) contrario a los principios democráticos actualmente vigentes en el hemisferio” americano. El Grupo de Río también expresó preocupación por “los acontecimientos que se desarrollan en Ecuador” y su “más enérgico rechazo a cualquier intento de vulnerar el orden constitucional y la institucionalidad democrática de ese país”. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos exhortó a todas las partes involucradas en la crisis ecuatoriana a respetar el orden constitucional, informó el portavoz de la Casa Blanca, Mike Hammer. Los 15 países miembros de la Unión Europea pidieron el respeto de la legalidad institucional en Ecuador, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España consideró especialmente “grave” la ocupación del Congreso, realizada por los indígenas y sus aliados militares. La embajada de Estados Unidos comenzó las presiones para que se posesione al vicepresidente Gustavo Noboa quien responde a ese país.

Enero 21 de 2000, 20h00. Líderes del levantamiento en Casa de Gobierno. Los líderes de la sublevación cívico-militar del Ecuador ingresaron en la Casa de Gobierno, para negociar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la solución a la crisis institucional. La Junta de Salvación Nacional, designada por indígenas, campesinos, dirigentes sociales y oficiales apartados de la cadena del mando militar, desconoce a los tres poderes del Estado y se presenta como única autoridad legítima, dijo Antonio Vargas, integrante de ese cuerpo.

Vargas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y los otros dos miembros de la Junta, el coronel Lucio Gutiérrez y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solórzano, llegaron al palacio de Carondelet acompañados de miles de manifestantes. Los integrantes de la Junta entablaron conversaciones en la sede del gobierno con el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y con otros altos oficiales. Los militares están

divididos ante la crisis, aunque Mendoza mantiene el control de la mayoría de las unidades. Miguel Lluco, también dirigente indígena, declaró que el gobierno está irreversiblemente disuelto.

Mahuad abandonó la Casa de Gobierno luego de que su gobierno fuera desconocido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pese a haber asegurado que no renunciaría. Se dirigió a la base de la Fuerza Aérea en Quito, al parecer con el propósito de viajar a Chile. Algunas versiones afirman que oficiales de la base aérea le impidieron salir del país, en cumplimiento del primer decreto de la Junta de Salvación que le prohibió viajar al exterior. Más de 20.000 personas rodean el palacio de gobierno con banderas nacionales, en respaldo de la Junta, que se propone designar este sábado su gabinete ministerial, tras haber nombrado un nuevo jefe del Comando Conjunto, no reconocido por los militares leales a Mendoza. La guardia militar y policial de la Casa de Gobierno se limitó a dejar pasar a la multitud y a los integrantes del triunvirato.

El vicepresidente Gustavo Noboa, llega a Quito procedente de Guayaquil, temeroso pero respaldado por dirigentes políticos de derecha y la embajada de Estados Unidos, que quieren promoverlo como nuevo presidente.

Los integrantes de la Junta conversan con el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y otros altos oficiales. Los mandos militares tendrían preparada una proclama dando a conocer al país su intención de declararse dictadores. Los dirigentes de la Conaie y los coroneles no están de acuerdo. Todos hablan de evitar enfrentamientos que pudieran dejar muertos. Se observa una división importante en filas militares, aunque Mendoza mantiene el control de la mayoría de las unidades, los sublevados reciben el apoyo de una parte del Ejército, el Movimiento Indígena y las organizaciones sociales, que continúan las protestas en las calles, con tomas de gobernaciones y edificios públicos en varias provincias. Los canales de televisión profundizan la campaña anti-gobierno popular iniciada en horas de la tarde con el desfile de políticos y empresarios que clamaban por un Golpe de Estado que coloque a Gustavo Noboa en el sillón presidencial para que la dola-

rización pudiera continuar. No faltan los que preparan sus maletas con temor de que posesionada la Junta los enviaran a la cárcel acusados de corrupción. Casualmente y en lo que parece una orden surgida desde algún alto funcionario todos los canales pusieron sus números telefónicos para que llamaran oficiales que no estuvieran de acuerdo con el levantamiento protagonizado por coroneles e indígenas. Mientras Mahuad se mantiene intransigente en su posición de no renunciar, comienza a caminar la conspiración pro Noboa.

Enero 22 de 2000, 1h00. Mandos militares y vicepresidente dan Golpe de Estado. Los mandos militares llegan a un supuesto acuerdo con los insurrectos mediante el cual se conforma una Junta de Gobierno integrada por el general Carlos Mendoza y Carlos Solórzano. Todos los que están en la Casa de Gobierno se toman de las manos y rezan un Padre Nuestro como forma de juramento. Mendoza se compromete a respetar el alzamiento popular y atacar la corrupción, y asegura que no habrá retaliaciones con los oficiales rebeldes. El general Telmo Sandoval, en nombre del alto mando militar, mantiene conversaciones con Gustavo Noboa y uno de sus allegados cercanos para explicarle que los acontecimientos se desarrollan a su favor, que pronto podrá estar en Carondelet.

A las 4h00 Mendoza recibe una llamada y sale de la Casa de Gobierno por el lapso de una hora y media. Cuando regresa anuncia a los otros dos integrantes del triunvirato que renuncia a la Junta porque se lo pidió su familia. Intenta darle la mano a quienes están presentes y nadie se la da, luego se va. De a poco los otros militares empiezan a abandonar Carondelet. Minutos después Vargas recibe una llamada del general Telmo Sandoval para que se traslade al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente de la Conaie, acompañado entre otros por los dirigentes indígenas Miguel Lluco, Luis Macas, Ricardo Ulcuango y Salvador Quishpe llegan al Comando donde Mendoza les informa que pidió su pase a retiro y reclama que el vicepresidente Gustavo Noboa asuma la Presidencia.

Ese pronunciamiento recibe el apoyo de los otros mandos de las Fuerzas Armadas, iniciándose así el proceso que impide la instauración en Ecuador de un gobierno cívico-militar respaldado por los sectores populares.

Los dirigentes indígenas reclaman a Mendoza ‘por su traición’ pero las cartas están echadas. “Mendoza traicionó al Movimiento Indígena y popular, y se puso al servicio de los corruptos que gobiernan este país”, comenta Vargas. “Luego de comprometerse a respetar la voluntad de un pueblo que pide en las calles terminar con los banqueros corruptos y los politiqueros de siempre, Mendoza dio marcha atrás ensuciando su traje militar, pero los indígenas mantendremos nuestra movilización y seguiremos vigilantes”, añade. Minutos después, Noboa asume la Presidencia en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La Embajada de Estados Unidos había cumplido su propósito. Después recibe el apoyo de Mahuad, que vuelve a decir que no había renunciado porque “un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo”. Horas después el coronel Gutiérrez es detenido por personas vestidas de civil que dijeron pertenecer a Inteligencia de Fuerzas Armadas.

Enero 22 de 2000, 12h00. El Congreso consolida el golpe. La negativa de Mahuad a renunciar hace necesario que el Congreso Nacional vote una moción indicando que había abandonado su cargo, lo que ocurre en Guayaquil, donde se reúne en sesión extraordinaria, por temor a reunirse en Quito. En la instancia, los partidos políticos de derecha encontraron el artículo preciso de la Constitución para apoyar a Noboa y justificar el Golpe de Estado en su favor como un restablecimiento de la institucionalidad que en el exterior del país nadie cree. “Al no renunciar Mahuad, técnicamente se produjo un Golpe de Estado que dejó vacante el cargo y llevó a la presidencia al vicepresidente”, dice un jurista y destaca la semejanza de la salida con “la que se produjo cuando el Congreso destituyó a Abdalá Bucaram, en febrero de 1997, por considerarlo mentalmente incapaz para gobernar”.

Solo votan en contra algunos diputados de la socialdemócrata Izquierda Democrática, mientras que los de Pachakutik no concurren a la reunión. En la mañana, indígenas y representantes de organizaciones sociales desalojan las instalaciones del Congreso, que mantenían ocupadas desde el viernes, pero aseguran que el levantamiento y el Parlamento de los Pueblos se mantendrán. En un primer momento, algunos oficiales desconocieron el nombramiento de Noboa “por ser parte del gobierno de Mahuad”, pero paulatinamente las distintas unidades militares se fueron poniendo a las órdenes del Comando Conjunto.

Los acontecimientos de ayer y hoy evidenciaron una ruptura entre la oficialidad joven y los altos mandos militares, y sobre todo el poder de convocatoria y movilización del pueblo indígena ecuatoriano. El intento de instalar en Ecuador un gobierno popular integrado por militares, indígenas y representantes de la sociedad civil abortó, pero una encuesta de la empresa Cedatos confirmó que el 71% de la población apoya el Movimiento Indígena y 64% respaldó el levantamiento cívico-militar.

A las 20h00, el general Carlos Mendoza, ex jefe del Comando Conjunto y ex ministro de Defensa del Ecuador, aseguró que el ex presidente Jamil Mahuad propuso dar un Golpe de Estado similar al de Alberto Fujimori en Perú.

Antes de proponer la dolarización de la economía ecuatoriana, hace dos semanas, Mahuad propuso a los mandos militares disolver el Congreso, declaró Mendoza. “Sin embargo, yo no acepté esa cantinflada que él [Mahuad] nos proponía para romper el orden constitucional y puse el cargo a disponibilidad. Pero el no tuvo la valentía de aceptarlo y seguir con el intento”, afirmó.

Las declaraciones de Mendoza tuvieron lugar en un momento en que Mahuad acusa al militar de haber protagonizado un Golpe de Estado para derrocarlo. Como consecuencia de un levantamiento popular protagonizado por el Movimiento Indígena y oficiales jóvenes, las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia de Mahuad, pero el ex presidente las desafió a que tomaran el poder por la fuerza y aseguró que no dimitiría. “Le hemos pedido al presidente que renuncie por el bien del país, para

evitar un estallido social”, informó públicamente Mendoza. Tras esas declaraciones, Mahuad abandonó el palacio de gobierno, mientras los jefes militares se instalaban en el lugar. Luego de conversaciones entre los insurrectos y Mendoza, se acordó que el jefe militar participaría en una Junta de Gobierno integrada también por el dirigente indígena Antonio Vargas y el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Carlos Solórzano. Sin embargo, tres horas después Mendoza anunció que renunciaba a la Junta, pidió su pase a retiro y reclamó que el vicepresidente Gustavo Noboa asumiera la Presidencia.

Algunos analistas atribuyeron la renuncia de Mendoza a la presión internacional, y en particular de la embajada de Estados Unidos, porque no estaba de acuerdo con un gobierno integrado por militares e indígenas. Las declaraciones de Mendoza pondrían en duda la vocación democrática de Mahuad, quien aseguró haber defendido siempre la democracia. Mientras tanto, las acusaciones del ex presidente abren una interrogante sobre el nuevo gobierno, que habría surgido en forma ilegal. Además, sacaron a luz la posibilidad de que los mandos militares hubieran utilizado la insurrección popular para luego desconocerla y dar un Golpe de Estado para colocar en el gobierno a Noboa.

Enero 22 de 2000, 23h00. Indígenas en la clandestinidad. Miguel Lluco Tixe es uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y participó activamente en el levantamiento de 1990. En 1995 intervino en la creación del Movimiento Pachakutik, que lo llevó un año después al Parlamento, donde permaneció hasta 1998. También participó de la ocupación de la Catedral de Quito, preámbulo de la movilización popular de febrero de 1997, que provocó el desplazamiento de Abdalá Bucaram del gobierno. El I Congreso Nacional de Pachakutik, en agosto último, lo confirmó por unanimidad en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de esa organización.

Para Lluco, la realidad plural del país se manifiesta cuando el indígena surge como actor importante en la vida sociopolítica. Se asume que ‘el otro’ existe y que tiene sus diferencias y sus derechos. Fue entonces

que la Conaie decidió buscar alianzas con otras organizaciones sociales y sindicatos independientes para crear en 1995 el Movimiento Pachakutik.

La importancia de Pachakutik está en que nació como una representación de los movimientos sociales, sin tutela de ningún partido político, afirma. Ese factor sirvió para unir a los pueblos indios y no indios alrededor de un proyecto político alternativo. La esencia de Pachakutik es la unidad en la diversidad. Dentro de él hay trabajadores urbanos, campesinos no indígenas, ecologistas, sectores afroecuatorianos, indígenas.

Según el dirigente, la participación de las organizaciones sociales del campo y la ciudad en la gestión política nos permitió ubicar los límites de esa actividad, evidenciados por la conducta de los políticos tradicionales. “Nos ha demostrado que para llevar adelante nuestras reivindicaciones y aspiraciones más sentidas es fundamental la participación vigilante de los sectores sociales organizados y el apoyo constante a sus representantes”, afirma. Pero a veces, la participación popular no se logra, por desinterés de la propia gente.

Nuestra tarea es demostrar a los sectores populares que su labor no termina cuando emiten el voto, asegura. Que la democracia no es eso solamente, y que ese modo pasivo de actuación es sumisión. La participación nos obliga a crear, a producir política. A ser sujetos del cambio. Debemos tener en cuenta que, como habitantes de este país, tenemos obligaciones y derechos, y uno de esos derechos consiste en exigir a quienes nos representan que mantengan su dignidad. Y si estos no mantienen su dignidad, la población debe movilizarse para revocarles el mandato, como ocurrió en el caso de Abdalá Bucaram o Jamil Mahuad.

Sin embargo, acepta que la gente se puede cansar de que la llamen a participar cada tanto. “Los ecuatorianos deben tener en cuenta que el ejercicio de la ciudadanía no es esperar a ser llamado, sino actuar cuando se crea necesario. No hay que dejar que la corrupción y las políticas contra los sectores más desposeídos de la población pasen fácilmente como esperan quienes manejan el poder”.

¿Actuar para cambiar un gobierno denunciado y desgastado, como el de Bucaram por ejemplo, para ser defraudados por el nuevo presidente, Fabián Alarcón? ¿No tiene derecho la gente a sentirse utilizada? “Sí, tiene ese derecho, responde. Pero, pese a todo, febrero (de 1997) marcó un hecho fundamental en la historia de nuestro país, porque la población demostró que no estaba dormida, que eran millones, sin distinción de clase o partido, los ecuatorianos y las ecuatorianas preocupados por la suerte del país. Había una aspiración de cambio en el pueblo. Sin embargo, mirando en perspectiva vemos que solo se cambió de personas, pues las estructuras siguieron siendo las mismas. Ahí está el error. Pero la responsabilidad no fue del pueblo, sino de sus dirigentes”.

Lluco participó en la toma de la Catedral de Quito y en la solución acordada por el Congreso para destituir a Bucaram, pero después tuvo que luchar contra la corrupción del gobierno de Alarcón que sustituyó al ex presidente. No rehúye a la respuesta.

Asumo la responsabilidad que me toca. En aquel momento también creí como tantos que la salida que se dio era la única posible. Tal vez si hubiéramos buscado otra (solución), por fuera de los partidos políticos tradicionales, la realidad habría sido otra y yo no habría tenido que denunciar hechos de corrupción. El valor que tuvo el pueblo para levantarse y el mandato que otorgó fueron burlados por los políticos tradicionales.

También le cuestiono que con Mahuad finalmente solo se dio un enroque entre presidente y vicepresidente, un cambio que no era el esperado por el movimiento popular.

Personalmente, cuando entraron en escena los mandos militares tuve muchas dudas si tendrían la libertad para pronunciarse a favor del pueblo, unos generales que en muchos casos pasan alejados del Ecuador profundo. Y bueno al final mostraron su mañosería. Es muy distinto el papel de un gran número de oficiales y gente de tropa, que siempre están más cercanos al pueblo indígena y por lo tanto conocen mejor sus

necesidades y saben del sufrimiento de nuestra gente. Son esos lo que tuvieron el valor de sumarse a la protesta indígena y popular, sin temor a las retaliaciones que podían venir, como efectivamente están ocurriendo.

Sin embargo, explica que no hay frustración ante el desenlace del levantamiento.

El Movimiento Indígena demostró que tiene una gran fuerza, porque puede movilizar a decenas de miles de personas y paralizar el país. Además, se vio la cohesión de sus instancias de dirección. Estas dos cosas le dan un poder que no tienen otros movimientos indígenas del continente. Salimos pacíficamente a cambiar la corrupción enquistada en el poder y se nos unieron sectores militares y policiales, de la iglesia, comerciantes minoristas, estudiantes, ciudadanos comunes. Nunca logramos un acuerdo social tan amplio y tan democrático. Por eso estuvimos más de una semana masivamente en las calles y carreteras, y logramos desenmascarar la hipocresía del poder. Además a través de los Parlamentos Populares en las provincias y el Parlamento de los Pueblos del Ecuador se elaboraron propuestas alternativas concretas que si bien los grandes medios no las recogen, no quiere decir que no estén ahí. Ahora, es claro que sí hay tristeza, cómo puede no haberla si el que pierde no es el Movimiento Indígena, el que pierde es el país, aunque esos mismo medios y los políticos de siempre quieran hacer ver lo contrario. Por lo tanto no siento frustración.

Le planteo la duda si no hubo ingenuidad en confiar en los mandos militares.

Tal vez –comenta–, pero también es verdad que los hechos fueron muy vertiginosos y creo que si los coroneles no aceptaban el pedido de los mandos de que participe Mendoza en la Junta, podría haber corrido mucha sangre, y nuestra protesta era y es pacífica. Nuestra protesta está basada en la no violencia activa. No hubiéramos soportado muertes sobre nuestras espaldas. En todo caso también sirvió para desenmascarar esa mañosa cúpula militar que tiene el país, y para que quede más claro que de un lado está el pueblo y los que luchan contra la corrupción y del otro los corruptos. Ese carácter pacífico del levantamiento también es una gran demostración que los medios ecuatorianos no resaltaron.

Cuando se le plantea la crítica de la derecha de que el levantamiento fue un atentado al sistema democrático, Llucó es claro.

Hay que ver lo que fue el gobierno del doctor Mahuad y el grado de rechazo al que llegó para ver que eso es mentira. Hay que ver el infame proceso de empobrecimiento al cual nos llevó, que se evidencia en la masiva emigración de compatriotas (no son pocos los muertos por ello), en el indignante número de mendigos, en el alarmante crecimiento de la delincuencia. Toda esta realidad obedece al capricho del doctor Mahuad de gobernar y amparar a un grupo de banqueros corruptos que se llevaron casi dos reservas monetarias internacionales sin responder con sus bienes ante el saqueo. Eso llevó a que se congelen los depósitos de miles de ecuatorianos, que miles de ecuatorianos pierdan sus ahorros de toda la vida y que todos paguemos la incapacidad y la pillería a través de una inflación galopante. Pillería que quiso culminar con un proceso de dolarización y privatización que acabe de una vez con el patrimonio y soberanía ecuatoriana. Todo este proceso no se podía dar sin la complicidad del Congreso ni de la Corte Suprema de Justicia. El banquero Aspiazú dio US \$ 3 millones para la campaña electoral del binomio Mahuad-Noboa. ¿Cuánto dinero más de los corruptos recibió ese binomio para ganar las elecciones? ¿Podremos saberlo? ¿Se terminará con esta gracia electoral de que ganan los que tienen dinero? ¿Cómo confiar en una Justicia en cuya cabeza está el principal acusado del festín del petróleo de los años setenta?

Para el dirigente indígena, la corrupción está enraizada en todo el poder actual.

Ante eso los movimientos sociales e indígenas y una oficialidad consciente no podíamos quedarnos callados e indolentes. Por eso establecimos una Junta de Salvación Nacional, que podría haber acabado de tajo con la corrupción de los poderosos y establecer un modelo de desarrollo que acabe con la indignante pobreza. Pero lamentablemente fue traicionada por una mañosa cúpula militar que traicionó a la honestidad, no a los sectores populares que simplemente canalizamos el descontento. Pero es bueno aclarar que antes que nosotros hubo otros que intentaron quebrantar el orden constitucional. Hubo un intento de autogolpe de Mahuad, según confesión del general Mendoza; hubo un congelamiento inconstitucional de los depó-

sitos de los ecuatorianos, y finalmente hubo un golpe de la cúpula militar ratificado por el Congreso Nacional. Son muchos los golpistas pero los medios prefieren no mostrarlos. No fuimos intransigentes, frente al régimen de Mahuad agotamos todos los mecanismos y espacios de negociación, pero nunca fuimos escuchados y no quisimos repetir el error del 5 de febrero de 1997 cuando tras la salida de Bucaram entregamos al Congreso Nacional nuestra lucha y la cura fue peor a la enfermedad, al colocar de presidente a Alarcón, también acusado de corrupción.

Sobre el futuro de los diputados del Movimiento Pachakutik en el Congreso Nacional, que habían puesto a disposición del pueblo sus cargos asegura que por el momento deben continuar porque es un espacio legítimamente ganado. “Nadie lo regaló ni se obtuvo con dinero de banqueros. Los diputados son un espacio de vocería pública y pese a que están en minoría numérica, por lo menos pueden dar el debate. Además que si los gobernantes mantienen el mismo programa económico de dolarización que limita la soberanía nacional y profundiza la pobreza, necesitamos mantener la lucha en todos los espacios posibles”. Al analizar el nuevo gobierno asegura que entró por la puerta de atrás.

Lo lógico hubiera sido que el Congreso ratifique a Mahuad si no quería ratificar el Golpe de Estado de la cúpula militar y sumarse al golpe. Tenemos reparos a que pueda encaminar al país. No obstante, y como siempre, estamos abiertos al diálogo, pero no a un diálogo de tontos en el que ellos dialogan después que ya tomaron todas las decisiones. Es necesario establecer un debate real con toda la sociedad para evitar las componendas y eso solo se puede lograr con una Consulta Popular. Que el pueblo decida.

Durante el levantamiento de julio de 1999, los indígenas cuestionaron a ciertos diputados de Pachakutik que buscaban dialogar con el gobierno sin que hubiera decisión del movimiento en ese sentido.

Estuvo bien, porque los diputados deben escuchar el mandato del pueblo indígena y deben saber que se les puede remover. Lo importante de Pachakutik es que sus legisladores están obligados a rendir cuentas a las

organizaciones que representan, si no tienen que irse. Eso fue entendido, asumieron sus errores y saben que son solo un apoyo de los movimientos, sus representantes en el Congreso, pero no pueden sustituir la representación directa de las organizaciones que dirigen un levantamiento y por lo tanto son ellas que deciden si conversan o no con un gobierno.

Le recuerdo que cuando fue diputado, presentó varios proyectos de ley que se demoraron en tratar, y a veces ni fueron tratados. Teniendo en cuenta esa realidad. Explica su experiencia legislativa.

Con el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo que algunos legisladores bloquean proyectos ajenos y esperan que se les ofrezca algo para ponerlos en marcha. Ofrecer algo no es necesariamente dinero, sino el intercambio de favores: yo te apoyo hoy y tú me apoyas mañana. Nosotros no estamos de acuerdo con esa actitud, que está institucionalizada en todos los poderes del Estado. Para cambiar esa realidad estamos luchando desde adentro, pero la solución no se logra de un día para otro. En todo caso, no todos los legisladores manejan esas prácticas institucionalizadas y por eso, es posible a pesar de todo lograr resultados.

La aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas por diputados de todos los sectores, también demuestra que muchas veces se pueden lograr acuerdos en temas que, como este, son muy importantes para amplios sectores del país.

Esta ratificación nos demuestra que todos los sectores políticos representados en el Congreso estamos de acuerdo con la plurinacionalidad, que es un tema muy sentido para los indígenas. Y es claro que también hay muchos asuntos en los que nos podemos poner de acuerdo para sacar adelante al país. Otro hecho importante es demostrar que el Congreso puede realizar una tarea fiscalizadora responsable, sin interés de figuración personal o partidista. Demostramos que es posible la lucha contra la corrupción sin que tome un tinte político, como cuando denunciarnos la utilización [irregular] de gastos reservados por parte del ex ministro de Gobierno César Verduga.

Uno de los temas fundamentales para el Movimiento Indígena es la independencia. Ante eso se impone una interrogante: en caso de que Pachakutik llegue al gobierno, ¿el Movimiento Indígena mantendría su independencia?

En realidad, Pachakutik apuesta mucho más a los poderes locales, donde ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas y obtener grandes logros para los sectores pobres de la población, aunque no escapamos a la posibilidad de ser gobierno. Desde el momento en que nos presentamos en las elecciones sabemos que hay posibilidades de ser gobierno, pero para llegar a eso hay que vencer los obstáculos de una democracia que solo da posibilidades a los ricos que pueden invertir en propaganda electoral y manejan los hilos de la comunicación y el poder. Estos hilos son esquivos para el Movimiento Indígena y los movimientos sociales, a no ser a nivel local en ciertas regiones. En cuanto a la independencia, Pachakutik fue creado por los movimientos sociales y a ellos se debe.

Otra crítica a Pachakutik es que parece existir un interés de ciertos sectores indígenas de plantear solo sus temas.

Existen dos corrientes en el movimiento. Por un lado, una corriente surgida de la intelectualidad indígena, que todo lo ve desde una lógica indigenista. Por otra parte, un sector que intenta consolidar un proyecto conjunto de todos los ecuatorianos, que no aísle al Movimiento Indígena, y es el que yo suscribo. También se podría hablar de una tercera actitud, no la llamaría corriente, y es la de aquellos que se alinean de acuerdo con sus intereses coyunturales, a veces electorales, a veces por ciertos beneficios que pueden obtener si se aprueba una propuesta concreta. Es una actitud que está muy vinculada a prácticas burocráticas de la vieja izquierda y que tiene espacio también en ciertos indígenas, pero creo que no tiene ninguna trascendencia ni poder dentro de Pachakutik. En todo caso, en el I Congreso de Pachakutik realizado en agosto de 1999 se impuso algo que ya estaba asumido por las comunidades y organizaciones: la lógica de un proyecto que no excluya a nadie, un proyecto amplio que se reflejó en último levantamiento y la insurrección popular.

Para Llucio, la esencia del Movimiento Indígena actual, sigue estando en sus valores ancestrales, como el modelo comunitario y solidario que se practica hace cientos de años. “Cuando una familia de la comunidad está en situación difícil, todos se unen para ayudarla. Además, está la ‘minga’, como se denomina el trabajo conjunto para construir una carretera o una casa o para cosechar. Por eso decimos que nuestro movimiento está en ‘minga por la vida’”. Una reivindicación fundamental es la declaración del Ecuador como Estado plurinacional. Eso ha sido interpretado por algunos sectores como la división geográfica en varios Estados. “Estado plurinacional es uno solo, con pluralidad jurídica en los territorios donde están asentados las nacionalidades indígenas y su derecho a decidir política, económica, cultural y socialmente. No se fractura el territorio nacional, pero se otorga a nuestros pueblos otros niveles de decisión y autonomía, como establece el Convenio 169”, concluye.

Enero 23 de 2000 (domingo). Indígenas rechazan primeras decisiones de Noboa. La Conaie, cuyos dirigentes permanecen ocultos desde el fin de la insurrección del viernes, rechazaron las primeras decisiones del nuevo gobierno, que confirmó el proyecto de dolarización y anunció un duro paquete económico.

Antonio Vargas, aseguró que el levantamiento indígena no ha sido un fracaso porque se ha confirmado la fuerza organizativa y el poder de movilización.

“Hemos demostrado que somos una fuerza. Recogimos varias enseñanzas de esta insurrección, por lo que no volveremos a cometer los mismos errores de creer en traidores como los mandos militares”, aseguró.

Vargas dijo que el Movimiento Indígena y los movimientos sociales están en total desacuerdo con el desenlace que tuvo la insurrección que protagonizaron el viernes junto con más de un centenar de oficiales del Ejército. “No aceptamos que se haya puesto en la presidencia al señor Noboa, que fue vicepresidente de Mahuad y asumió sin que este renunciara. Estaremos atentos a las medidas que tome”, señaló. Para Vargas, el solo hecho de ratificar la dolarización de la economía propuesta por

el ex presidente Mahuad, anunciar un duro ajuste y apoyar al Superintendente de Bancos, quien promovió el alza del dólar permitiendo la especulación de los bancos manejados por el Estado, es un signo negativo. Recurrió a una denuncia del diputado del partido Izquierda Democrática Carlos González, según la cual los bancos asumidos por el Estado especularon con cientos de millones de dólares en la última semana de diciembre y la primera de enero, ante la impasividad de Guzmán. “Esa especulación hizo subir el dólar desproporcionadamente, y el alza fue la excusa para dolarizar el país, una propuesta con la que no estamos de acuerdo porque solo traerá más hambre a los sectores pobres”, afirmó. El dirigente también dijo que la unidad y la paciencia del Movimiento Indígena demostraron que es posible un levantamiento totalmente pacífico para lograr cambios, aunque aseguró que no volverán a confiar en mandos militares. “No se puede confiar en quienes apoyaron la corrupción vigente en lugar de sumarse al cambio”.

Vargas también pidió por la vida del coronel Lucio Gutiérrez, detenido e incomunicado desde el sábado, y por los otros oficiales rebeldes. “Pedimos a los organismos defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional que vigilen lo que ocurre en el país. Nosotros estaremos expectantes y seguiremos luchando así nos persigan y nos quieran llevar presos”, arguyó.

El nuevo presidente Gustavo Noboa aseguró, tras tomar posesión del cargo, que entendía los reclamos indígenas pero que “equivocaron la táctica para lograr sus objetivos debido a la desesperación en que viven”. Noboa también aseguró que los coroneles insurrectos debían ser juzgados para que sirva de ejemplo. “Hay que poner disciplina en el país, no mano dura sino firmeza”, dijo.

El nuevo ministro de Gobierno, Francisco Huerta, que días atrás manifestó su apoyo al Movimiento Indígena y rechazó la dolarización en el Parlamento de los Pueblos del Ecuador y mediante pronunciamientos públicos, cambió abruptamente su posición y se mostró partidario de la medida. También dijo que era necesario iniciar un diálogo con el Movimiento Indígena, pero fue despectivo al señalar que “no vamos a

curar la República con brujerías ni con manifestaciones hostiles”. “La potencialidad de los indígenas no puede estar ni en el shamanismo ni en el alcohol”, advirtió. “Esa etnia es tan importante como la mía”, argumentó provocando vergüenza ajena.

Mientras, en una comunidad indígena de Cotopaxi, a dos horas de Quito, los comuneros que se reunieron para hablar del levantamiento mostraban su desazón por el desenlace de la insurrección. Mauricio Chilingua dijo estar triste porque tras haber logrado un gobierno popular “se dio una salida que beneficia a los políticos y poderosos de siempre”.

Mariano Guznai señaló que el gobierno de Gustavo Noboa era “más de lo mismo” y no le inspira confianza. “Noboa o Mahuad, es la misma cosa. Todos tienen que irse porque nadie le importa nuestra suerte y la suerte de los pobres de este país. Si les interesara ya hubieran olvidado el dólar [la dolarización] propuesto por los ricos”, se lamentó. “Nuestra victoria fue un fracaso, pero ya nada nos asusta y si antes peleamos contra los hacendados que nos explotaban para que nos devolvieran nuestra tierra, ahora seguiremos luchando contra los políticos y banqueros que nos roban”, argumentó.

El periodista Paco Velasco, director de radio *La Luna* de Quito, se mostró preocupado por el hecho de que se pretenda juzgar a los coroneles sublevados, lo que profundizaría aún más la herida abierta los últimos días. “Los rebeldes indígenas y militares realizaron la insurrección porque se vieron desesperados ante tanta corrupción y pobreza. Pueden haber equivocado el camino pero fue una lucha justa e idealista que, según las encuestas, gran parte de la población respaldó”, dijo.

Para Velasco es necesaria una amnistía general que cierre las heridas y permita ir hacia delante permitiendo el retorno de los oficiales rebeldes al Ejército. “Ahora muchos diputados, dirigentes políticos y empresarios se llenan la boca con la defensa de la democracia cuando poco o nada han hecho para defenderla y llaman golpistas a quienes mostraron total desprendimiento en defensa del Ecuador”, argumentó. Según el periodista, si hubiera que juzgar a todos los que propiciaron Golpes de Estado en Ecuador habría que juzgar a Mahuad, que fue denunciado de

haber estado preparando un 'fujimorazo'. "También se deberían juzgar a muchos políticos como el ex presidente León Febres Cordero (1984-1988), que dijeron conocer la gestación de un golpe, pero nunca hicieron nada por evitarlo porque tal vez esperaban un desenlace como el que finalmente se dio", arguyó. "Si todos tienen que ir presos, también le tocaría a los diputados que tras derrocar al ex presidente Abdalá Bucaram en febrero de 1997, en lugar de proceder a la sucesión presidencial, nombraron como presidente interino a uno de ellos, Fabián Alarcón, pisoteando la Constitución", argumentó.

Velasco se interrogó por qué la Constitución sirve cuando les favorece, y cuando no, la interpretan a su antojo. También manifestó dudas sobre la legalidad del actual gobierno, nombrado por el alto mando militar y ratificado por la mayoría del Congreso legislativo al considerar vacante el cargo presidencial por abandono del presidente Jamil Mahuad. Sin embargo, el ex mandatario nunca renunció y dijo que fue derrocado. Jorge Loor, dirigente de la Coordinadora Nacional Campesina y uno de los que participó activamente en las protestas de los últimos días, afirmó que para el Movimiento Indígena y campesino del Ecuador existen dos gobiernos: "Uno con legitimidad y representatividad que es la expresión del Ecuador profundo y de las grandes mayorías, que se puso de manifiesto en la Junta de Salvación Nacional". Para Loor también existe un gobierno "que dice ser legal que está presidido por el Gustavo Noboa apoyado por los partidos de derecha (Social Cristiano, Democracia Popular y Roldosista Ecuatoriano), banqueros y algunos empresarios".

Enero 24 de 2000 (lunes). El triste papel de algunos periodistas. Hacia el exterior, la firmeza indígena y la entereza de los coroneles ante la derrota, contrasta con un espectáculo casi tragicómico como el de ciertos políticos y periodistas aterrorizados por 'la pesadilla' de tener un indígena como gobernante. "Imagine que tendríamos que hablar en kichwa", dice algún despistado ex ministro.

Mientras estos se transforman en paladines de la democracia y la historia se encarga de olvidarlos, aquellos mantienen una dignidad de

500 años. Algunos periodistas de la prensa internacional que llegaron a Quito se sonríen al comentar la sesión del Congreso del sábado 22. Casi no lo pueden creer. “Qué engrazados sao esos diputados”, dice un colega brasileño y agrega “difícil de encontrar en alguna otra parte”.

Un periodista de Venezuela habla del “lamentable papel que jugaron los canales de televisión mostrando solo una cara de la moneda” y acota “la imagen que me queda del periodista ecuatoriano es la del canciller Benjamín Ortiz, periodista acusado de golpista”. Un escritor argentino asegura que la danza de las acusaciones “demuestra la pobreza de esos tipos”.

Mendoza acusa a Mahuad, Gallardo y Ortiz, de haberle propuesto un golpe tipo Fujimori. Gallardo acusa a Mendoza y al actual Jefe del Comando Conjunto, Telmo Sandoval, de haber estado preparando un golpe contra Mahuad desde hace tiempo. Febres Cordero dice que sabía que se venía preparando un golpe. Sin embargo no hizo nada por evitarlo porque quería que se fuera Mahuad y entrara Noboa. Los diputados de derecha acusan a [general Paco] Moncayo, de golpista por haber apoyado a los coroneles y al Movimiento Indígena y lo destituyen. El Parlamento es una entidad en la que no cree nadie pero será la encargada de poner en marcha la dolarización. Los sectores de derecha en general dicen que el golpe fue de los coroneles y el Movimiento Indígena, aunque prefieren echarles la culpa a los coroneles y evitar las críticas al Movimiento Indígena. Para ellos con la sucesión presidencial se restituyó la democracia, aunque no dicen que la destitución de Mahuad la decretó el alto mando militar para poner a Noboa que entró a la presidencia sin que Mahuad renunciara. Moncayo dice que tanto [León] Febres Cordero como [Jaime] Nebot y [Fabián] Alarcón varias veces le pidieron que diera un golpe contra Bucaram cuando él era Jefe del Comando Conjunto y dice que son unos hipócritas porque en aquella época no hablaron de golpismo y ahora se llena la boca con democracia. La fiscal de la Nación inició juicio contra Moncayo, Yandún, Vargas y Solórzano, pero no contra Mendoza o Telmo Sandoval. Ecuador es campeón en romper constituciones [si es que aquí existe alguna] y decir que todo fue hecho dentro del marco constitucional.

En fin, Macondo es un chiste.

Enero 25 de 2000 (martes). Entre la persecución y el diálogo. El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, alerta ante la posibilidad de una guerra civil en caso de que el nuevo gobierno no tome medidas a favor de los más necesitados y profundice el mismo modelo económico de Mahuad. “No quiero asustar a nadie pero la realidad golpea demasiado y la gente ya está cansada de tanta mentira”, argumentó Vargas. Monseñor Luis Alberto Luna, dice entender muy bien lo que anuncia Vargas. “El país ya vive una guerra civil. No es una guerra a muerte, pero sí priva toda posibilidad de reacción y desarrollo”, asegura.

El religioso señaló que el enfrentamiento no es con armas de fuego ni primitivas, pero es una guerra “más cruel y químicamente preparada por cerebros enfermos”. “Esos cerebros están enfermos de seudodemocracia, seudolegalidad y pseudoconstitucionalidad, han tenido siempre postergado al infeliz y han salido victoriosos”, afirma Luna. También, dice que es parte de esa guerra las acusaciones de unos a otros y la búsqueda de víctimas y victimarios con estrategias muy poco nobles. “Entre las estrategias de esa guerra está la de hablar de los indígenas ganando en dólares por la dolarización, sin entender su idioma de necesidades y preocupaciones, de hambre y miseria”, argumenta.

Según el obispo cuencano, lo ocurrido el viernes 21 de enero es una lección para todos, porque “hay que oír al pueblo y no quejarse después de las consecuencias”. Luna Tobar asegura que la salida de Mahuad fue pedida por todas las fuerzas políticas y hoy algunas se “lavan en seco” de lo que habían propuesto, para tener participación en el nuevo gobierno. “No sé en qué tiempo el gobierno pueda solucionar los problemas sociales y económicos, pero tiene la obligación de hacerlo. Es lógico decir tiene 6 meses, lo ilógico es pedir que mañana se arregle”, concluye.

Enero 26 de 2000 (miércoles). Indígenas dispuestos al diálogo. El Movimiento Indígena anuncia su disposición a dialogar con el gobierno de Gustavo Noboa, a condición de que las autoridades no persigan a los líderes de la insurrección de la semana pasada. La Conaie, que encabezó

la insurrección junto con oficiales militares comunicó que está abierta al diálogo.

Noboa recibe hoy la banda presidencial en el parlamento tras el derrocamiento de su antecesor, Jamil Mahuad, el viernes pasado. La Co-naie deja claro que si el gobierno “hace un llamado a una tregua política, debe expresarse en actos de justicia plena, en políticas económicas y sociales equitativas, y que no se trate de buscar culpables entre líderes y militares patriotas”. Las autoridades están empeñadas en castigar a los líderes rebeldes que el viernes ocuparon el Congreso legislativo y la Casa de Gobierno para formar una Junta de Salvación Nacional. La detención de los coroneles insurrectos y el pedido de enjuiciamiento y prisión para Vargas, Solórzano, los diputados Paco Moncayo y René Yandún y todos los civiles identificados como participantes en el alzamiento agrega leña al fuego.

Vargas pide a la Corte Suprema de Justicia que le informe cuándo debe presentarse en la cárcel. “Aquí estoy. No voy a correr, porque no soy banquero, ni empresario, ni uno de los que robaron plata del pueblo y corrieron a Estados Unidos”, dice. El dirigente argumenta que para encarcelar a todos los que participaron tendrán que construir cárceles gigantes, “porque somos millones en el campo y en las ciudades”. De momento, se conocen las detenciones del coronel Gutiérrez, líder de la revuelta, y de sus pares Celso Andrade y Jorge Brito, aunque se iniciaron juicios contra 300 oficiales que apoyaron la insurrección. Esto ha creado más división y malestar en filas militares, ya que, además de ser muchos los oficiales a ser juzgados, son muy apreciados por la tropa, se han destacado como líderes y tienen buenas calificaciones. “Lamentablemente, lo ocurrido ha debilitado a la institución armada”, que vive “una situación muy delicada”, dijo el nuevo ministro de Defensa, almirante retirado Hugo Unda.

El ministro asegura que los militares insurrectos serán juzgados por la justicia castrense y que tendrán garantizada su integridad, así como el legítimo derecho a la defensa. Noboa acepta que la crisis que afecta “a las grandes mayorías” dio origen a la “inconformidad popular” que se

“acentúa en el pueblo indígena” y “merece ser atendida” con urgencia. La Conaie propone al nuevo gobierno que llame a un plebiscito junto con las elecciones municipales del 21 de mayo, para preguntar a la ciudadanía si aceptan a Noboa como presidente, así como la dolarización y las privatizaciones que propuso Mahuad y mantiene como proyectos el nuevo gobierno, informó Vargas.

Noboa asumió la Presidencia el sábado en la sede del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas luego de un Golpe de Estado de la cúpula militar, que desconoció al gobierno de Mahuad y a la Junta de Salvación Nacional constituida por los indígenas y coroneles sublevados. Al recibir la banda presidencial, el nuevo presidente hace un llamado a “la unidad, reconciliación y solidaridad entre ecuatorianos”. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador y ex diputado socialdemócrata, Paco Moncayo, asegura que se ha instaurado una ‘caza de brujas’ contra los insurrectos que “evidencia el temor de los grupos poderosos” y puede traer “consecuencias muy lamentables para el país”. “Esta es la venganza de una derecha enferma mental y espiritualmente que busca salir del gran susto que tuvo de ver al pueblo con capacidad de llegar al poder”, señala Moncayo.

Moncayo renunció el viernes a su banca de diputado ante la Junta de Salvación Nacional y ratificó hoy su decisión, ante las presiones de legisladores de derecha que intentan expulsarlo arguyendo ciertos leguleyos y acusándolo de golpista por su participación en la rebelión. Propone además a los movimientos sociales iniciar una campaña de recolección de firmas para solicitar “la anulación del mandato de los diputados”.

Para Monseñor Luna Tobar, solo el perdón puede sanar las heridas “que no son de ahora sino que se profundizaron con la situación económica y pueden empeorar si no se buscan salidas mediante el diálogo”. Diversos analistas afirman que solo el diálogo del gobierno con las organizaciones indígenas y con la sociedad civil podría evitar en Ecuador la profundización de los antagonismos que provocaron la sublevación popular de la semana pasada. La crisis que generó la insurrección sigue latente y amenaza con desatar un nuevo conflicto, agregaron. El editorial

del diario *El Comercio*, de Quito, pone de manifiesto el peligro de una fractura social de consecuencias impredecibles si el nuevo gobierno mantiene el proyecto de dolarización propuesto por el derrocado Mahuad, sin escuchar al Movimiento Indígena. “La dolarización no solo alineó a las élites. Se convirtió en el símbolo, para los movimientos indígena y sociales, de un sistema que no están dispuestos a dejar pasar”, afirmó *El Comercio*. La dolarización se ha convertido en frontera divisoria entre los movimientos sociales y “buena parte de las elites de poder”, agregó. “Poner los relojes a la hora es doloroso. Pero ni las élites, partidarias de la dolarización, ni el gobierno han dicho cómo –y cuándo– piensan hacer un pacto social con el país marginado”, señaló. Para *El Comercio*, si no hay acciones en esa dirección, “la fractura social puede agravarse y servir de caldo de cultivo para acciones irracionales y extremistas”.

Enero 27 de 2000 (jueves). Remezón a los políticos. Varios analistas coinciden que la movilización indígena produjo un quiebre en el sistema político tradicional del Ecuador. En ese contexto entrevistado a Antonio Vargas, oriundo de la provincia amazónica de Pastaza. Pertenece a la nacionalidad kichwa y fue dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). Llegó a la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en 1996, cuando esta sufría una aguda división entre las organizaciones de la Amazonia y las de la Sierra, fomentada por el gobierno del entonces presidente Abdalá Bucaram. Fue reelecto en el último Congreso realizado en noviembre del año pasado, por pocos votos de diferencia sobre Ricardo Ulcuango, entonces presidente de Ecuarrunari, la organización más poderosa de la Conaie que integra a todos los pueblos kichwa de la Sierra. Luego Ulcuango fue electo vicepresidente por unanimidad. Durante su período al frente de la Conaie, Vargas buscó mantener la unidad del Movimiento Indígena y que las decisiones fueran compartidas con Ecuarrunari. Pero ha tenido algunos cuestionamientos de las bases del movimiento en la Sierra. Fue un factor importante en la alianza del Movimiento Indígena y los oficiales de la Fuerzas Armadas durante la rebelión popular del 21

enero de 2000 y el indígena que estuvo más cercano a la presidencia cuando integró la Junta de Salvación Nacional junto a un militar y un juez. Converso con él, en la sede de la Conaie cuando todavía están presentes los hechos del 21.

Al hablar de los logros del último levantamiento indígena, Vargas afirma que para el Movimiento Indígena todos los levantamientos, desde 1990, han servido para demostrar al Ecuador y al mundo que hay un pueblo que ha vivido rezagado, marginado, que ha decidido luchar por sus derechos y construir un país distinto.

Creemos que se ha cumplió el objetivo de bajar los tres poderes. Pero sobre todo poner en el centro del debate el desprestigio que tienen ante la sociedad esos poderes. Muchos dijeron que eso era un sueño, un suicidio una locura de los dirigentes y demostramos que no. A pesar del apartheid a que se vieron sometidos nuestros hermanos cuando todos los que tenían poncho eran bajados de los buses por los militares, igual caminado llegaron. Y lo importante es que se dio una gran unidad en las distintas acciones que llevamos adelante.

Explica también que no fue una derrota porque no solo sirvió para fortalecer al Movimiento Indígena sino profundizar en la unidad de los ecuatorianos que quieren cambios. “También sirvió como motivación para que la gente se vaya dando cuenta que esta lucha no es solo de los indios sino de todos. Desde julio la Conaie se transformó en el eje de la unidad de los sectores sociales con el mundo indígena. Tal vez un error es no haber podido socializar mucho más nuestro plan político, pero también es verdad que la prensa nos golpeó duro”. Agrega además que en ningún momento se sintieron utilizados durante el levantamiento. “Nosotros lo que hacemos es fruto de nuestras reflexiones, no nos dejamos utilizar nunca. A veces surgen discrepancias con algunos sectores que quieren caminar muy de apuro, y ese apuro termina en algunas marchitas y enfrentamientos con la policía sin que se mueva nada porque el gobierno ya les tiene cogida la caña”.

Cree que los medios de comunicación han intentado afectar al movimiento intentando dividirlo.

Buscando que haya peleas entre nosotros dando espacio a ciertos dirigentes que no representan a nadie para marcar diferencias y abrir heridas. También se prestaron para difundir un documento claramente falsificado en el que aparecía una supuesta firma de Salvador Quishpe, que decía ‘mate a los mestizos’ y después para desmentirlo nunca dan el mismo espacio. También criticaron el hecho de que algunos compañeros pintaran algunas personas, lo que no está bien, pero no dijeron nada cuando a eso mismos compañeros se les bajaba de los buses, o cuando en julio eran recibidos con bombas lacrimógenas.

Para Vargas la importancia de la alianza indígena con los oficiales de las Fuerzas Armadas es muy importante porque de aquí nace un nuevo militar que ve que es posible un cambio. “Son una esperanza que no hay en los generales porque están más metidos en la corrupción y defienden sus intereses. Hay una semilla y algún día se dará un cambio en todas las Fuerzas Armadas. Al igual que los oficiales y la gente de tropa, fue importante el apoyo de los padres y las monjitas aunque la cúpula de la Iglesia no estuviera con nosotros”.

Al ser consultado si no fue un error lanzarse a tomar el Palacio de Gobierno y dejar el Congreso al descubierto explica que hubo mucha presión por parte de la gente que quería ir a tomar la presidencia porque era otro símbolo importante de la corrupción junto al Congreso y la Suprema Corte de Justicia.

Tal vez fue un error y si nos hubiéramos quedado en el Congreso el desenlace hubiera sido diferente, pero eso hay que analizarlo y en todo caso los hechos ya están dados. Cuando llegamos a Carondelet los generales tenían preparada una proclama y un telegrama donde anunciaban que asumían todos los poderes. Nosotros no lo aceptamos y ahí se dieron las conversaciones. Tal vez fue un error aceptar que Mendoza participara en la Junta, pero si no se hacía iba a correr mucha sangre. Mientras tanto, algunos diputados muertos de miedo preparaban su Congreso en Guayaquil.

Pero, ¿qué significa para el pueblo indígena haber estado tan cerca del poder?

Nuestra lucha no es por el poder en sí, responde. Hay muchas cosas más importantes que el poder en sí, como que la sociedad vaya cambiando por dentro y vaya construyendo días más coloridos, más vivos, y además vaya entendiendo que aquí hay un problema de fondo y hay que hacer un cambio. Claro que cuando se va caminando hacia los cambios es necesario que desde el gobierno también se cambie. Una lección que debe quedar es que realizamos un levantamiento que estuvo cerca del poder, pero si hubiéramos estado empeñados en el poder, había enfrentamientos con muertos. Como no lo estuvimos, decidimos dar la oportunidad a otro camino. Lo importante es que hemos provocado una remezón en la clase política. Quedó claro que aquí hay un pueblo rebelde que sin violencia hará los cambios.

Sin embargo, queda la duda si ese remezón provocará cambios en políticos tan racistas. El dirigente cree que habrá cambios en la sensibilidad, “por lo menos de algunos, porque tendrán que darse cuenta que tienen en contra a las mayorías y ya las cosas no las pueden hacer solo a su manera sin buscar otras alternativas. Igual tendremos que seguir luchando para llegar a nuestro objetivo”.

Sobre el gobierno de Gustavo Noboa dice que “si tuviera voluntad de hacer cambios podría hacerlos sin ningún problema, si no caerá en lo mismo que Mahuad”. Y agrega que “si piensa que nosotros queremos unos contratitos para algunas comunidades está errado y no entendió nada de lo que pasó, porque lo nuestro es mucho más profundo, no pedimos limosnas. Muchas veces las autoridades son eso por ilustradas, pero en la práctica son ignorantes porque no entienden la situación del pueblo, entonces fracasan”.

En cuanto a la relación de la Conaie con los legisladores indígenas, que ha sido otro tema de debate, Vargas afirma:

Hay que ver como se procesan los hechos pero yo creo que la experiencia de ellos también es muy válida pero no es la salvación. Las cosas a largo plazo y en ese sentido hay que buscar también salidas distintas, experiencias como

los parlamentos provinciales que se constituyan en una especie de control de las autoridades. Nuestros legisladores deberían estar mucho más vinculados al movimiento y a la sociedad en general, pero muchas veces son absorbidos por el sistema.

A pesar de la derrota dice que la esperanza en el futuro es luchar y no desanimar.

El cambio algún rato se va a dar. Cambio que llegará sin violencia, pacíficamente, orientando a las comunidades. Esto que ha pasado ha sido un ensayo para nosotros, hizo sentir en el corazón de la gente que se puede, que no hay que mantenerse callados porque es una forma de estar al servicio de los políticos de siempre. La lucha con violencia no lleva a mucho, movilizar grandes masas con organización es el mejor camino para buscar los cambios. Claro que si estos no llegan se puede desembocar en la violencia, pero siempre hay que manejarse con prudencia para que eso no ocurra. Hay que moverse con paciencia para no ir a eso. Pero hay que saber que en el futuro puede darse una gran explosión social, inclusive una guerra civil. La gente puede salir a saquear si no tiene para comer.

Enero 28 de 2000 (viernes). Reflexión y autocrítica indígena. La Asamblea Nacional de la Conaie, reunida hoy con delegados de las distintas nacionalidades y pueblos indígenas reflexionó sobre la insurrección popular que lideraron junto a un grupo de oficiales progresistas. Serenidad, a pesar de la derrota. “Nuestro camino es largo, no se termina en un día, y esto fue un avance dentro de ese camino”, señalan algunos dirigentes. Según ellos ese pequeño paso en una ruta de siglos no deja de ser gigantesco. “A veces los mestizos son muy apurados creen que las cosas se logran con una marchita disuelta por la policía. Las cosas se logran con tiempo”, comenta Vargas.

La Asamblea destacó las acciones del 21 de enero en distintas provincias con ocupaciones de alcaldías y gobernaciones, como sucedió en Carchi, Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Guayas, la toma de pozos petroleros en Napo y el corte de carreteras en todo el país. Para los participantes la movilización en Quito también fue un éxito, sin embargo surgen

algunas interrogantes. Hay quienes dudan si no fue demasiado fuera de la realidad marchar hacia la Casa de Gobierno. Algunos se preguntan si no hubiese sido mejor quedarse en el Congreso y negociar con el nuevo presidente una consulta popular desde una posición de fuerza. Otros creen que fue un error negociar con el alto mando cuando nunca habían mostrado su oposición frontal al sistema. También están aquellos que aseguran que la movilización indígena puede haber sido utilizada para sacar a Mahuad y que se diera el desenlace conocido y querido por los sectores de derecha y la embajada de Estados Unidos.

Hay un grupo que se pregunta sobre la participación como asesor de la Conaie desde hace un buen tiempo de determinado personaje cuestionado éticamente por haber estado demasiado vinculado a la policía como soplón. Hay quienes quieren que renuncien los diputados de Pachakutik y quienes aseguran que sería perder un espacio político ganado.

Hay un clima de autocrítica entre los indios, de reflexión, de intentar rescatar todo lo positivo de una derrota y fortalecer esa férrea unidad que se evidenció en las movilizaciones de 1999 y de las últimas semanas. Hay muchas interrogantes y mucho que reflexionar, pero más allá de los errores, la insurrección del 21 de enero confirma algo que todos los gobiernos dicen pero no ponen en práctica: Ecuador no puede caminar sin contar con el Movimiento Indígena.

La Asamblea resuelve pedir al presidente de la República, Gustavo Noboa, que convoque a una Consulta Popular para el 21 de mayo, cuando se realizan las elecciones seccionales, y “así afirmar la democracia”.

Las preguntas que plantea la Conaie son las siguientes: ¿Está usted de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo que el 21 de enero de 2000 determinó la salida del presidente Jamil Mahuad y con el cese de los diputados del Congreso y los ministros de la Corte Suprema de Justicia?; ¿Está de acuerdo con que el Ecuador mantenga su soberanía monetaria y que el sucre siga siendo la moneda oficial, y se descarte la dolarización?; ¿Está usted de acuerdo con la devolución inmediata de los depósitos congelados al valor correspondiente a la fecha de su congelamiento, y está de acuerdo con la repatriación de los dineros mal habidos

y con el enjuiciamiento de todos los banqueros que han perjudicado al Estado o se han beneficiado ilegalmente de recursos públicos?; ¿Está de acuerdo con que el Estado, en ejercicio de su soberanía, mantenga el control, la operación y la propiedad del petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones y la seguridad social, que se niegue totalmente el proyecto de la Comisión Interventora y se suspendan todos los procesos de privatización?

“Si es que quieren tanto la democracia y se llenan la boca con ella, regresen la soberanía al pueblo en una consulta popular y demuestren que son verdaderos demócratas”, dice Miguel Llucó, y enfatiza: “Si es que la autoridad de las autoridades viene del pueblo que acepten ponerla a disposición de este”.

En caso de que Noboa no acepte recurrir al plebiscito, la Conaie y los movimientos sociales deberían reunir alrededor de 605 mil firmas para llevar adelante un referéndum en lo que puede ser un nuevo reto para el Movimiento Indígena y los movimientos sociales ecuatorianos. Algo muy difícil de lograr.

Febrero 15 de 2000 (martes). Proponen un referéndum. La dirigencia de la Conaie y algunas organizaciones sociales iniciaron hoy la recolección de firmas para promover un plebiscito por el cese de los parlamentarios y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y contra la dolarización, las privatizaciones y la presencia militar estadounidense en el país. En el documento de consulta también se interrogaría a la población si está de acuerdo con el archivo inmediato de los procesos judiciales contra militares y civiles que participaron en la sublevación popular del 21 de enero. Catorce coroneles y 110 oficiales de menor graduación han sido acusados ante la Justicia Militar por haber apoyado a los indígenas, mientras que Antonio Vargas y otros civiles enfrentan procesos en la justicia civil. Las preguntas que habían sido planteadas en un comienzo fueron reelaboradas por constitucionalistas a pedido del Parlamento de los Pueblos, pero en esencia mantienen el mismo contenido.

Una encuesta de opinión de la empresa Cedatos divulgada ayer registró que 70% de los ecuatorianos está de acuerdo con el plebiscito, por lo cual los expertos estiman que la iniciativa tendrá éxito. Sin embargo, es Blanca Chancoso, dirigente de la Conaie, dijo que las interrogantes fueron estudiadas al detalle para que “nadie diga que son inconstitucionales”. Chancoso aseguró que ya existen cerca de 80.000 firmas de apoyo a la convocatoria, porque “muchos han enviado firmas sin que se les enviara las preguntas de la consulta, en respaldo a los dirigentes y a las acciones que se han hecho”.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Villaquirán, solicitó a quienes apoyan el plebiscito que incluyan preguntas que no violen la Constitución. Explicó que la “Constitución aprueba que la ciudadanía llame a consultas populares, pero también exige que estén sujetas a las prohibiciones que ella establece”. Villaquirán informó que los representantes indígenas, si pretenden realizar la consulta junto con las elecciones municipales, a realizarse el 21 de mayo, deberán entregar las firmas 45 días antes. El planteo de plebiscito impactó en los tres poderes del Estado y en las principales fuerzas políticas, que se apuraron a decir que con la propuesta “los indígenas buscan sembrar el caos en el país”.

El presidente del Congreso, Juan José Pons, opinó que el plebiscito provocaría una mayor inestabilidad en el país y defendió la labor de los diputados, cuya credibilidad no llega a 8% de la población, según varias encuestas.

Ante la posibilidad de que se concrete la consulta y que el Parlamento sea disuelto para convocar a nuevas elecciones, los legisladores planean cambios para mejorar la imagen y recuperar la credibilidad perdida. Una de las medidas en estudio para este fin es la contratación de una cadena de radioemisoras que transmitan a todo el país las sesiones legislativas.

Algunos analistas entienden que esta actitud del Congreso estaría demostrando que no “aprendió la lección del 21 de enero”. El arzobispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto Luna, señaló que, por los signos que dan los políticos, casi nadie ha comprendido el significado profundo

del mensaje pronunciado por los indígenas en enero durante la llamada ‘toma de Quito’. “Me permito decir a los grupos que rodean al nuevo mandatario (Gustavo Noboa) que vean con ojos más abiertos, más sinceros y más libres cuánta injusticia hay que resolver en el país. Eso deben hacer los grupos políticos que están aprovechándose del triunfo de los indígenas”, afirmó Luna.

Dirigentes de Conaie informaron que en los próximos días realizarán un recorrido por todo el país con el propósito de recolectar firmas para celebrar el plebiscito. Blanca Chancoso se quejó de que ahora el Tribunal Electoral “exija a los indígenas que se ciñan a la Constitución, cuando hace dos semanas autorizó una consulta inconstitucional para determinar la autonomía política y económica de la provincia de Guayas”. “Todas las preguntas son constitucionales, pero igual es hora de que las autoridades revean sus decisiones y se actualicen, porque no estamos en la época de la colonia española como para que sigan queriendo maniobrar al pueblo”, dijo Chancoso.

Los dirigentes de la Conaie y los movimientos sociales dialogarán este miércoles con el presidente Noboa. Posteriormente mantendrán una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien llegó este martes al país para conversar con Noboa y los diferentes sectores políticos. Vargas señaló que le pedirán a Noboa que cambie su política económica y le manifestarán el rechazo a la dolarización de la economía. “Si Noboa sigue con la misma estructura va a tener graves problemas porque el pueblo no aguanta más la pobreza y las mentiras”, indicó.

La reunión se realizará una semana después que tres dirigentes indígenas denunciaran un atentado contra sus vidas por parte de ‘fuerzas represivas’.

El día 10, el automóvil en el que viajaba Vargas junto a los también dirigentes Ricardo Ulcuango y Salvador Quishpe fue seguido por dos vehículos sin placas identificatorias y vidrios ahumados, que le cerró el paso y obligó a su conductor a realizar una maniobra que lo llevó a un precipicio. El incidente ocurrió cerca de la ciudad de Riobamba, en

la Sierra central, denunció Ulcuango, quien resultó con fracturas en la clavícula y su brazo derecho. También afirmó que “las fuerzas represivas han estado amenazando en varias ocasiones a la Conaie, mediante llamadas telefónicas”. Chancoso responsabilizó “directamente al gobierno” por el hecho y dijo que también “hay sectores interesados en que no se continúe con la lucha iniciada por los indígenas, que llevo a la insurrección de enero”. Lamentablemente el referéndum no será posible, porque Vargas y otros dirigentes sociales urbanos, nunca entregaron los dos millones de firmas que dijeron tener. Muchos indígenas lo tomarán como un engaño.

Febrero 25 de 2000 (viernes). La provocación de las cartas bomba. El fantasma de la violencia política se presentó en Ecuador en la forma de cartas explosivas, la irrupción de una supuesta organización armada y ataques de políticos de derecha a indígenas y a grupos sociales opuestos a la dolarización y las privatizaciones. La primera carta explosiva detonó la semana pasada en la cara del periodista Rafael Cuesta, ex diputado del derechista Partido Social Cristiano, que sufrió pequeñas heridas sin gravedad.

Esta semana, la legisladora socialcristiana Cynthia Viteri y el dirigente indígena evangélico Marco Morillo recibieron sendos sobres explosivos. Ninguno llegó a explotar porque las víctimas fueron alertadas y la policía pudo desactivarlos. Todos los envíos fueron realizados desde la ciudad de Cuenca, con el nombre de Gustavo Méndez como remitente.

Otros ocho sobres similares fueron recibidos por periodistas de Quito y Guayaquil con panfletos de un supuesto Ejército de Liberación del Pueblo (ELP), que se define como una “organización político-militar” de “tendencia marxista” que procura implantar “el socialismo en Ecuador”. En la proclama, el supuesto ELP exige la renuncia del presidente Gustavo Noboa, la conformación de un gobierno popular, la estatización petrolera, el no pago de la deuda externa, la salida de los militares estadounidenses de la Base de Manta y la congelación de los precios de los productos básicos. También advierte que todos los diputados que apoyen

el proyecto de dolarización y privatizaciones, y los empresarios que se beneficiaron durante el gobierno de Jamil Mahuad, son sus objetivos militares. En la supuesta proclama del ELP se dice que atentaron contra Rafael Cuesta porque colabora en un canal que defiende a la burguesía, contra Cynthia Viteri porque su partido votará a favor de la dolarización, y contra Marco Murillo por dividir al movimiento social. En el futuro, sus objetivos político-militares serían todas las personas naturales y jurídicas relacionadas con la base naval 'imperialista' de Manta, donde hay apostados militares estadounidenses, el gobierno y los banqueros.

El envío de los sobres bomba y la proclama constituyen, para algunos analistas, una provocación de sectores de extrema derecha, en procura de desprestigiar el plebiscito que promueve el Movimiento Indígena para revocar el mandato de los legisladores, y contra la dolarización y las privatizaciones. Portavoces de partidos de derecha emitieron declaraciones para involucrar a movimientos sociales en los ataques y en la proclama. El alcalde de Guayaquil y ex presidente (1984-1988), León Febres Cordero, atribuyó los atentados a la izquierda y consideró que si los indígenas toman las armas también deberían ser enfrentados con armas.

La religiosa católica Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señaló que rechaza todo acto de violencia, pero pidió que se investigue muy bien de donde proceden. "Pedimos que no se intente involucrar a gente inocente en estos atentados para después justificar la represión", dijo Monge. Recordó además a las autoridades que muchas veces los parapoliciales vinculados con sectores políticos extremistas "realizan autoatentados para provocar la violencia".

"No acuso a nadie en especial pero pido que se investigue", afirmó. Miguel Lluco, coordinador nacional del Movimiento Pachakutik, atribuyó las cartas explosivas a sectores de extrema derecha. Lluco argumentó que durante el gobierno de Febres Cordero fueron contratados expertos internacionales en terrorismo que capacitaron a la policía en tácticas represivas. El dirigente político hizo un llamado urgente a la policía y las Fuerzas Armadas para que investiguen y presenten a la ciudadanía a los responsables de estos hechos. "El Movimiento Indígena no tiene

recursos económicos ni técnicos para fabricar ese tipo de artefactos. Sospechamos que detrás de esos hechos están los sectores interesados en implantar un modelo económico que favorece a unos pocos, con la dolarización y las privatizaciones”, arguyó Lluco.

También aseguró que esos sectores “temen el plebiscito porque saben que la mayoría de los ecuatorianos están contra ese modelo y entonces buscan desencadenar un espiral de violencia”. Para Lluco, las cartas explosivas pueden ser una excusa para futuros atentados contra líderes indígenas y populares. “El gobierno tiene la obligación de demostrar la autoría de los responsables. De lo contrario, nos quedamos en las meras presunciones”, señaló.

El arzobispo Luis Alberto Luna Tobar, aseguró que “en Ecuador no hay insurrección ni extremismo, hay casos de violencia” por la crisis que vive el país. Raúl Moscoso, de la Defensoría del Pueblo, no descartó que exista algún vínculo entre los autores de las cartas explosivas y grupos parapoliciales que habrían participado en 1998 en el asesinato del dirigente sindical Saúl Cañar. “Hay brigadas de autovigilancia rural, que en unos casos fueron capacitados por la Policía Nacional y en otros por las Fuerzas Armadas”, me dice.

Moscoso mencionó las declaraciones del líder paramilitar colombiano Carlos Castaño según las cuales “73 ecuatorianos fueron adiestrados para la muerte” por sus hombres. Antonio Vargas reitero que el Movimiento Indígena ha optado por buscar los cambios “que el país necesita sin violencia” y que “no tiene nada que ver con estos atentados”. “Ya hemos dicho que la violencia no lleva a ninguna parte. Movilizar grandes masas con organización es el mejor camino para buscar los cambios”, comentó Vargas. También aseguró que si estos cambios no llegan puede desembocar en la violencia, “pero hay que manejarse con prudencia para que ello no ocurra”. “En todo caso, hay que saber que en el futuro puede darse una gran explosión social, inclusive una guerra civil, porque la gente puede salir a saquear si no tiene para comer”, aseguró.

Vargas descartó que el Movimiento Indígena pueda realizar atentados o iniciar una lucha armada por parte de los indígenas. Las organi-

zaciones de derechos humanos también exigieron al gobierno que no queden en la impunidad los crímenes del sindicalista Saúl Cañar y del diputado del izquierdista Movimiento Popular Democrático Jaime Hurtado. Un año después del asesinato de Hurtado, cometido a una cuadra del Congreso Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia y en el que estuvieron involucrados colaboradores de la policía, no se descubrieron los autores y los posibles cómplices del crimen estarían a punto de ser liberados. Mientras, 14 meses después del asesinato de Cañar, quien apareció muerto con muestras de haber sido torturado, no fue detenida ninguna persona sospechosa. Para las organizaciones humanitarias, si no se descubre a los “verdaderos autores” de estos crímenes y de las cartas explosivas “se corre el peligro de caer en una espiral de violencia que le haría mucho daño al país”.

Febrero 28 de 2000 (lunes). Estados Unidos juega su partido en Ecuador. Tres representantes del gobierno de Estados Unidos llegaron a Ecuador para enseñar normas de buen comportamiento a sus gobernantes y advirtieron que las leyes para dolarizar el país no deben sufrir distorsiones que puedan anularla. Los delegados de la Casa Blanca son: Arturo Valenzuela, asesor del presidente Clinton en asuntos de América Latina; Edwin Truman, secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos y Peter Romero, encargado del gobierno norteamericano para Asuntos Latinoamericanos. Romero, que fuera embajador en Ecuador fue, según distintas denuncias, uno de los que trabajó en la sombras durante la rebelión del 21 de enero, presionando a los mandos militares para que se produjera un Golpe de Estado a favor de Noboa.

Los funcionarios brindaron su respaldo al presidente ecuatoriano y felicitaron al Congreso por su empeño en aprobar las leyes que permitirán la dolarización. A esta injerencia económica de Estados Unidos se suma la militar, evidenciada en la presencia norteamericana en la Base de Manta, otras maniobras y en la intención de involucrar a Ecuador en un denominado Plan Colombia que podría regionalizar el conflicto interno colombiano. Teniendo en cuenta esta realidad, el futuro del país

no parece ser bueno, porque se le estaría llevando hacia un incendio que la mayoría de la población no quiere.

El propio ex precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata, Lindon LaRouche, denunció que la actual situación de crisis global que vive el país habría sido precipitada por un muy bien elaborado plan internacional para destruir al Ecuador, en que estaría involucrado el gobierno de los Estados Unidos. La denuncia difundida hoy, fue realizada en un diálogo que mantuvo el pasado 23 de enero con delegados del Partido Demócrata del Estado de California. “A Ecuador se le está destruyendo. Lo destruyen la OEA y el FMI. Lo destruye el Departamento de Estado encabezado por Madeleine Albright, deliberadamente”, apuntó. Y luego añadió que “las condiciones que se le han impuesto a Ecuador y que precipitaron los dos golpes, son el resultado de que el Gobierno de los Estados Unidos respalda que se imponga la esclavitud, la llamada dolarización”. “Esto es genocidio. Hemos creado el caos. Ahora tenemos, por ello, una situación muy peligrosa en ese país, que puede propagarse como un contagio y empeorar la situación de Colombia y agravar la situación de Venezuela”, argumentó LaRouche.

El dirigente de Pachakutik, Virgilio Hernández, señaló que las declaraciones de LaRouche son una muestra de que Ecuador viene siendo utilizado por los organismos internacionales y el Departamento de Estado, como elemento de ensayo para políticas que se irán implementando en toda América Latina, como parte de un nuevo reordenamiento geopolítico de la región. “La dolarización, que busca adherir un nuevo mercado a la zona de influencia norteamericana, y la Base de Manta, que pasó de un simple monitoreo al control de la región, son los indicios de la situación de sumisión del Ecuador”, arguyó Hernández. Más allá de las declaraciones, la realidad muestra que Gustavo Noboa fue impuesto como presidente solo para cumplir las políticas de Estados Unidos en Ecuador.

Febrero 29 de 2000 (martes). Los indígenas y el poder como concepto colectivo. Luis Macas pertenece al pueblo saraguro, uno de los

que integran la nacionalidad kichwa. Fue fundador y presidente de la Conaie y diputado nacional del Movimiento Pachakutik. Actualmente es director del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Participó activamente en la organización y acciones del levantamiento de 1990 que marcó la irrupción de los indígenas en la vida política moderna, en las movilizaciones por los 500 años de Resistencia Indígena y Popular y en muchas movilizaciones dirigidas por la Conaie. Es, tal vez el líder histórico del Movimiento Indígena más reconocido por las bases. Naturalmente estuvo junto a sus hermanos en la insurrección de enero.

Empezamos la entrevista hablando sobre el significado del último levantamiento.

Quiere decir que la historia latinoamericana desde sus primeros habitantes está presente. Que la invasión occidental no ha logrado perfeccionar su cometido liquidando a los pueblos indígenas. Es obvio que la resistencia india a través de varios mecanismos de lucha está vigente. El levantamiento del Movimiento Indígena y los movimientos populares es la demostración fiel de que existe una crisis, y que a través de la democracia y el sistema político vigente no se ha resuelto el problema de la justicia y de la equidad, de la ética y de la moral. Es decir que este levantamiento es el grito al mundo de que la situación de injusticia en el Ecuador y en otros países de América Latina no está resuelta, continúa pendiente. También es una convocatoria a todos los pueblos para que hagamos una minga de acciones y propuestas desde los sectores que realmente sufrimos la crisis del modelo neoliberal, para encontrar salidas juntos.

Quien mejor que él para explicar las diferencias entre el levantamiento de 1990 y el de 2000.

El levantamiento de 1990 fue un hecho histórico que demostró al país y al mundo que los pueblos indígenas no habíamos desaparecido. Y, sobre todo, mostramos que estábamos en condiciones de ser un actor fundamental de la sociedad, realizando aportes y propuestas desde nuestra mirada. Hicimos ver que los cara, los panzaleo, los puruhá, los cañarí, estamos presentes en este país con nuestra sabiduría ancestral, con nuestra música, con nuestros

coloridos diversos. Que no estamos escondidos en los museos como elemento de estudio arqueológico o antropológico, solamente para rememorar la historia que los patriotereros acostumbran contar en sus discursos. El levantamiento de los primeros días de 2000, demuestra que hemos podido caminar sobre las adversidades llevando propuestas en nuestras manos para convocar a todos hacia los cambios que necesita el Ecuador. En el trecho del 90 a 2000, hubo una reflexión profunda, no solo internamente sobre los pueblos indígenas, sino sobre la realidad global de nuestra sociedad, y esto nos ha obligado a tomar decisiones y enfrentar los problemas.

Macas también explica que las alianzas con sectores progresistas de la sociedad y sectores de las Fuerzas Armadas “constituyen una necesidad en la lucha de los pueblos indígenas, pero esta alianza debe estar entendida en la identificación de los problemas estructurales, en su resolución y en la construcción de un Estado distinto”.

Cree que cuando se anuncia sanciones y se quiere juzgar a quienes participaron en el levantamiento se puede provocar una polarización de la sociedad ecuatoriana.

Desde la visión de ‘la justicia’ necesariamente se debe poner un escarmiento, una corrección a los culpables de esta revuelta. Desde nuestro entender es una gran ocasión para entender la dimensión del problema que vive nuestro país, pues los que se han levantado para instaurar la justicia son los culpables y van a ser enjuiciados por el poder. Este hecho cohesionará al pueblo, y sobre todo se constituirá en un elemento de concientización de nuestros pueblos. El poder terminará quedándose con su ‘justicia’, y nosotros nos uniremos cada vez más para acabar con la injusticia.

En cuanto a la participación electoral del Movimiento Indígena luego de la insurrección, argumenta que es un frente más de lucha, no el objetivo final. “Por eso saldremos como siempre con nuestras propuestas de cambio a competir con los partidos políticos, que no son otra cosa que empresas electorales que ofrecen dinero. Nosotros ofrecemos nuestra lucha y nuestra mirada”. Luego agrega que el Movimiento Indígena

no puede esperar nada bueno del gobierno que substituyó al de Jamil Mahuad.

Si el gobierno de Mahuad representó a un sector de la banca y de algunas empresas de la Sierra, el gobierno de Noboa tal como está constituido su gabinete representa también a los mismos sectores, pero con énfasis en la Costa ecuatoriana. Es el continuismo del gobierno anterior, por cuanto en las políticas no representa cambio alguno y seguirá con el mismo proyecto trazado por Mahuad, como es la dolarización, la privatización, y no se erradicará la corrupción. Esto nos hace pensar que para los pueblos indígenas y el pueblo ecuatoriano en general no hay tal cambio.

Sobre el futuro del Movimiento Indígena ecuatoriano explica que desde el espacio político que ha logrado a través de sus luchas históricas “el papel fundamental fue, es y será ayudar a resolver los problemas que aquejan al pueblo ecuatoriano. Es decir que nuestras luchas se han transformado en peleas por cambios fundamentales, como por ejemplo, lo que reivindicamos en este levantamiento: refundar el país rompiendo las viejas estructuras del Estado y del sistema político, que se han agotado”. Argumenta además que al mismo tiempo que los indígenas se fueron organizando para construir la unidad de sus pueblos, conseguir los derechos fundamentales de las comunidades para mejorar las condiciones de vida, tanto a escala individual como colectiva, no han perdido de vista que el Estado donde viven no responde a las exigencias de la mayoría de la población. “Por eso desde el Movimiento Indígena y los movimientos sociales hablamos de la construcción de un Estado distinto, un Estado Plurinacional. Eso significa reconocernos a nosotros mismos y reconocer lo diverso que somos como país, un factor importante para lograr la armonía entre los ecuatorianos”.

Cuando le pregunto sobre el significado del poder para los indígenas, responde que “*Ushay*, el poder, para el mundo indígena es el perfeccionamiento de las condiciones de vida, es un concepto en el sentido colectivo. Es la capacidad de desarrollarnos colectivamente con el aporte de los distintos espacios, como en el caso de la minga, en donde el chico, la

mujer y los ancianos cumplen un papel. Cada papel es importante en la sociedad”.

Reflexiona además, sobre el significado simbólico de la democracia para los indígenas:

Desde la lógica de los pueblos indígenas si bien no existe el término de democracia, existe algo más profundo que es la reciprocidad y la solidaridad, que son los principios fundamentales para la armonía y la convivencia de una sociedad. Es por eso que entendemos la democracia radicada en la justicia, en la equidad y en la armonía. La búsqueda de los consensos nos lleva a los acuerdos, pero sobre todo al diálogo, a la reflexión para lograr los consensos, que son los que conducen y orientan los procesos en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Por eso es que la democracia manejada desde la lógica de quienes ostentan el poder no es entendida por los pueblos indígenas. Cómo entender que en la distribución de la riqueza, un 20% de la población se beneficie y un 80% se debata en la miseria. Eso nunca sería bien visto en una comunidad y no se puede aceptar que pase en el país. Por eso desde nuestras condiciones de pobreza alzamos la voz y nos rebelamos contra los que se han apoderado de la riqueza de nuestros pueblos.

Marzo 1 de 2000 (miércoles). La necesidad de repensar la democracia desde la diversidad. Un mes después del levantamiento y con motivo de la presentación de la primera edición del libro *La rebelión de los indios*, la revista *Semana* del diario *Expreso* me realizó una entrevista en la que analizo el significado de los hechos que se produjeron el 21 de enero. De alguna manera el levantamiento puso en evidencia el desprecio de las élites hacia los pueblos indígenas. El desprecio hacia el otro es humillante. Tal vez sea el momento para repensar y refundar la democracia desde la diversidad. Esta es la entrevista.

¿La rebelión de las poblaciones indígenas que representan el 20% del total de habitantes del país, puede desestabilizar constantemente la democracia, si sus exigencias no son atendidas?

La democracia ecuatoriana está desestabilizada desde hace mucho tiempo, y no es por culpa del Movimiento Indígena si no por las condiciones en que vive la mayoría de la población, por la presencia de gobiernos sin capacidad, por la actitud de los sectores económica y políticamente dominantes, que constantemente imponen sus ideas sin debatir con el resto de la sociedad. El grave problema es que a los sectores que manejan los hilos del poder en este país no les importa la democracia sino solo sus intereses. Entonces ocurre que se intenta imponer un sistema, como la dolarización por ejemplo, que será fatal para la gran mayoría del país, sin debatir con nadie aunque la mayoría de la población esté en contra. La democracia debe ser el diálogo, el intercambio de ideas, no la imposición primero y el diálogo después como se da en ese y muchos casos. Esas actitudes permanentes de imposición son las que empujaron al Movimiento Indígena a la protesta constante y a la insurrección del 21 de enero. Ojalá que este movimiento, tan digno, no caiga en las mismas actitudes que los sectores dominantes, porque sería el principio de su fin.

¿Se puede hablar de acontecimiento histórico al levantamiento indígena, cuando toman por asalto el Congreso y humillan a varios ciudadanos de la capital?

Sin duda que es uno de los hechos históricos más importantes de este fin y comienzo de siglo en América Latina. Un acontecimiento que no solo marca al Ecuador sino al resto de la región. Este levantamiento ha permitido visibilizar la marginación que durante 500 años han vivido los indios de este país. Pero lo más importante es que los muestra como actores fundamentales de la realidad ecuatoriana porque dejaron de consumir política para pasar a crearla. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que pintaran a algunos ciudadanos en las afueras del Congreso, me parece que es bastante reprochable. Pero me parece cómico que se ponga énfasis en eso y ni se mencione la diaria humillación de que son objeto los indígenas. O la poca sensibilidad, falta de profesionalismo y prepotencia de ciertos

periodistas que al tratar de entrevistar a algunos indios que a duras penas logran hablar el español, les gritaban: “estos no saben ni hablar, hay que hablar con los dirigentes”. Ese desprecio hacia el otro es humillante. También hay que entender que para los indígenas esos ciudadanos de traje representaban el poder que están combatiendo. No lo justifico, pero me parece mucho más bochornoso, como me decía un periodista brasileño, que en la sección del parlamento que ratificó a Gustavo Noboa como presidente, ciertos diputados hablaran defendiendo la democracia efusivamente y cuando se sentaban dieran risotadas burlándose de sus propias palabras y demostrando que en realidad no creen en ninguna democracia.

¿Es conveniente orientar a los indios del país, para que acontecimientos como este, no obliguen a autoridades civiles y militares a romper el orden constitucional, cada vez que un gobernante no adopta las medidas necesarias?

Es importante y conveniente establecer un diálogo, pero no ese diálogo de tontos en el que cada uno impone sus cosas sin acordar nada. Tampoco es válido el hecho de sentarse a conversar en situaciones que un sector determinado controla los hilos del diálogo. Lo que se requiere es reorientar el sentido de la política en el país. Crear espacios verdaderos de intercambio de ideas, donde se pueda aceptar la presencia del otro sin preconcepciones. Y sobre todo es necesario apostar a que se desarrolle una política con sentido social y humano.

¿Cree que si el actual gobierno no cumple las expectativas de los indígenas específicamente, puede correr la misma suerte del derrocado presidente Mahuad?

Hay que tener en cuenta que si bien fueron los indígenas los que desencadenaron la posterior salida de Mahuad, no fueron el único factor para su caída. Hubo mucha gente trabajando en las sombras. Aquí se dieron varios Golpes de Estado pero solo uno fue el que triunfó, aunque a quienes manejan el poder solo les guste hablar

de indígenas y coroneles como golpistas. Un golpe fue el que, según denuncias de Mendoza, intentó dar Mahuad; otro es el que, según otras denuncias, intentaba dar el alto mando militar; otro el que finalmente dio el alto mando a favor del vicepresidente Gustavo Noboa sin que Mahuad hubiese renunciado y fue convalidado por la mayoría del Congreso. En definitiva, como dice Vargas Llosa, ese fue el único golpe porque fue el que triunfó. No siempre se dan estas características en un mismo momento histórico como ocurrió en enero. Hay que ver cuál es el desprendimiento del gobierno y, aunque si bien hay un quiebre en el sistema político, no necesariamente se tiene que dar la salida estrepitosa del nuevo presidente como ocurrió con Mahuad. Lo que puede polarizar al país es, como se está observando en el tratamiento de las leyes que llevan a la dolarización, la incapacidad de las élites de comprender los hechos del 21 y su intento por imponer su propuesta de cualquier forma, sin diálogo.

¿Qué hizo desistir a la Junta de Salvación Nacional, cuando el objetivo de los indígenas con la toma de la capital era instaurar un 'gobierno popular'?

No creo que ese fuera el objetivo final del Movimiento Indígena. Su objetivo fundamental es conseguir mejores condiciones de vida para los indios y para la población en general. Creo que los acontecimientos fueron tan vertiginosos que los precipitó en la salida del triunvirato. Tampoco creo que la Junta hubiera durado una semana porque todos los sectores que manejan el poder y la embajada norteamericana, estaban en contra de un posible gobierno popular. Ellos querían una salida como la que finalmente se dio. Cuando sacaron a Bucaram, por ejemplo, fue distinto porque la propuesta del Movimiento Indígena y los sectores sociales terminó coincidiendo con la de los sectores dominantes. Entonces nadie habló de golpistas y muchos patrones, como me consta, obligaron a sus empleados a salir a protestar a la calle. El factor que hizo desistir a la Junta fue

que los mandos militares dieron un Golpe de Estado en favor del vicepresidente. En cuanto a la toma de Quito en sí, hay que tener en cuenta que se trata de un hecho simbólico histórico de los indígenas, que representa el acoso al poder.

¿Cuál fue el factor predominante del derrocamiento de Mahuad? ¿La fortaleza indígena como tal, o la falta de decisión e incapacidad de un gobernante que permitió que los hechos se dieran cómo sucedieron?

Creo que se juntan varios factores. Uno es el Movimiento Indígena con capacidad de movilización y de propuesta; otro es el descontento popular generalizado con un gobierno que no supo atender mínimamente los reclamos de distintos sectores y se entregó a la dictadura del poder financiero. También hubo una mano escondida tras las sombras, una mano de las élites que estaban y están desesperadas porque se implante la dolarización y consideraban que Mahuad era muy débil como para imponerla, por lo tanto era mejor cambiarlo por el vicepresidente. Este fue el sector que finalmente salió venciendo, por lo tanto no creo que ahora le interese desestabilizar como lo ha venido haciendo constantemente en los últimos años.

¿Se podría considerar al Ecuador un país ingobernable cuando desde el 10 de agosto de 1996 hemos tenido 5 presidentes?

La ingobernabilidad del Ecuador está dada por la situación de injusticia del país, ejemplificada en el hecho de que la mayoría de la población viva en situación de pobreza y extrema pobreza. Pero además, este será un país ingobernable mientras las élites no logren un proyecto de desarrollo nacional conjunto o entreguen la posta a otros sectores con proyecto. El grave problema de las élites ecuatorianas es que ni siquiera logran ponerse de acuerdo entre ellas para repartirse el pastel. En otros países, a la hora del reparto durante las privatizaciones, un grupo se llevó una parte otro se llevó otra, y así.

Acá, producto de la angurria y de la falta de proyecto conjunto, todos quieren dar la mordida mayor. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, cómo van a ceder en favor de los que más necesitan. Como consecuencia de esta realidad, el poder político está muy fragmentado.

En la llamada Junta de Salvación Nacional, Vargas representaba a los indígenas que fueron los que iniciaron la rebelión, Mendoza a los militares que apoyaron a Mahuad y a los que no lo hicieron, ¿y Solórzano a quien representaba?

Carlos Solórzano, quien fuera declarado por varios medios de comunicación que ahora lo desconocen, personaje ecuatoriano del año 1995, no sé porque fue elegido. Creo que se debe a lo vertiginoso de los hechos y al apuro de nombrar a alguien que perteneciera a la Costa. Pero yo también me pregunto a quién representa. De igual manera me pregunto a quién representa Francisco Huerta, que también fue mencionado como un posible triunviro costeño por los indígenas. También me interrogaría sobre la representatividad de cualquiera de los que hubiera estado ahí. Como me interrogo a quién representan los ministros, superintendente de bancos, directores del Banco Central. ¿A quién representan aquellos que congelan y recongelan los depósitos bancarios? ¿Qué representatividad tienen quienes imponen algo como la dolarización que, como ya lo verán, beneficia a unos poquitos? ¿Qué intereses están detrás de las actitudes? La representatividad es algo bastante contradictorio y siempre dependerá del cristal con que se mire.

Diciembre 24 de 2000 (domingo). El regreso de los guerreros amazónicos. Indígenas kichwa de la Amazonia ecuatoriana abandonan su hogar por temor a un ataque tagaeri, otro pueblo nativo que en noviembre mató a dos comuneros después de ser desplazados a su vez por compañías petroleras. La mayoría de los 300 habitantes kichwa de Curaray, una localidad de la provincia de Pastaza a la que solo se accede navegando en canoa o en avioneta, decidieron trasladarse a Shell, un

pueblo cercano a Puyo, la capital provincial, y abandonar sus viviendas en medio de la selva.

Los kichwa abandonan su tierra, animales y cosechas porque no tienen seguridad para seguir en la zona, comentó Sebastiana Vargas, de la comunidad de Curaray, quien afirmó: “Salí porque tengo que proteger a mi familia. Allá ya no podemos dedicarnos a la agricultura, ni a la caza ni a la pesca”. Los tagaeri, conocidos como aucas o patas coloradas, conforman uno de los pocos pueblos amazónicos que no mantiene contacto con la cultura occidental ni con otros indígenas. Sus miembros, estimados entre 80 y 150, mantienen un modo de vida nómada internados en la selva, y viven de la caza y de la pesca. Sin embargo, desde hace algunos meses el territorio donde se mueven está siendo ocupado por empresas petroleras, que los han empujado hacia territorio kichwa. Dos ancianos kichwa que el 15 de noviembre cosechaban una chacra y recogían huevos de tortuga fueron sorprendidos por un grupo de tagaeri que los mataron a lanzazos. Luego los clavaron con 14 lanzas “a la tierra que los vio nacer”, cumpliendo así el ritual de la muerte, reconocido en este pueblo amazónico, que vive en guerra permanente por mantener su espacio de tierra, cuando mata a un enemigo. Armando Vargas, otro de los habitantes de la comunidad atacada, aseguró que desde hace 35 años los tagaeri no atacaban a las comunidades kichwa aunque se mantuvieran en un área relativamente cercana. Esto hace pensar que están desesperados ante la penetración imparable de las petroleras a su territorio.

Giovanna Tassi, directora de la Agencia de Prensa ambientalista Tierra en Puyo, considera que el ataque tagaeri es un llamado de atención a la actividad petrolera que se desarrolla en la Amazonia ecuatoriana y podría provocar un fuerte deterioro ambiental. Por la vía Auca, una vía petrolera que corta a la mitad el territorio ancestral de los aucas, avanzan los tubos de los pozos petrolíferos. “Los tagaeri huyen del ruido, del acoso. Ahora se han quedado en la zona de Curaray. Es tiempo de huevos de charapa (tortuga) y los monos están gordos y listos, para ser cazados y comidos. Por lo tanto permanecerán ahí”, dijo Tassi, quien vive en Puyo desde hace 18 años. La periodista, experta en temas ambientales e

indígenas, señaló que las empresas petroleras que podrían estar produciendo ese impacto en los tagaeri son Petrocol, que opera un campo de la estatal Petroecuador, Bintash, YPF y Pérez Companc. Pero la presencia de los tagaeri ya fue noticia internacional en 1987, cuando más de 100 lanzas acabaron con la vida del obispo de Coca, Alejandro Labaka, y la religiosa Inés Arango, que llegaron en helicóptero a territorio awca para conversar con ellos.

Los religiosos intentaban contactarse con los tagaeri para ponerles al tanto de la avanzada petrolera y analizar medidas para ayudarlos. “Los clavaron en el suelo amazónico que tanto amaban, inmolados sobre el altar del petróleo”, comentó Tassi.

Esa fue la primera vez los occidentales escucharon hablar de este “temible pueblo guerrero”, definido por el investigador Miguel Angel Cabodevilla como el último grupo de indígenas no contactados que deambulaban por la selva como fantasmas errantes, armados de lanzas, desnudos, defendiendo su espacio vital. “Ese espacio vital es recorrido incesantemente por los aucas, quienes lo van marcando con sus lanzas y pisadas”, dijo Tassi. “Ahora, 14 años después de lo que ocurrió con los religiosos, se vuelve a repetir el mismo ritual de las lanzas pero esta vez con indígenas de otro pueblo”.

Según el dirigente indígena Luis Awa, los tagaeri se habrían aliado con los taromenane, otro grupo que vive en condiciones semejantes entre Ecuador y Perú. “A través de alianzas selladas con matrimonios, este grupo de casi 80 personas está ahora siendo empujado cada vez más hacia el sur amazónico”, aseguró. Los pobladores de Curaray están asustados porque saben que los tagaeri no se han ido y temen por su vida. “Hemos quedado pocas familias. Salieron a Shell las que tenían dinero para pagar el pasaje en avión. Otras se fueron en sus canoas aguas arriba”, dijo a la prensa Telmo Gualinga, poblador de Curaray. Los que se quedaron solo se mueven en grupos, van armados con escopetas, duermen juntos en una sola casa y no se alejan del poblado para cazar, pescar o realizar tareas agrícolas.

En los últimos meses habían incorporado a sus actividades el ecoturismo, que luego de las muertes ha desaparecido porque las agencias de viaje dejaron de enviar turistas a la zona. Las organizaciones indígenas de la zona se muestran impotentes para resolver este problema. Los tagaeri siguen resistiéndose a cualquier contacto con otros pueblos.

El año 2000 fue un año clave que se podrá analizar en el futuro con las perspectiva de los años. Pero la realidad ecuatoriana está estrechamente vinculada con la de los otros países andinos y con la de América Latina en general. Paralelamente a los acontecimientos sociales y políticos que ocurren en Ecuador, en Washington se están elaborando las bases para la implementación del denominado Plan Colombia y el conflicto interno colombiano amenaza desbordar las fronteras. Desde 1998 la región andina vive un período de conmoción social que involucra a todos los países que la integran. Existe el temor de que Los Andes se ‘vietnamicen’. A través del Plan Colombia se implementa un nuevo modelo geoestratégico. En América Latina no todos están de acuerdo y ya se percibe un nuevo reagrupamiento geopolítico que enfrenta a Estados Unidos con Brasil y Venezuela. La tradicional hegemonía comercial y económica estadounidenses se ha visto erosionada en una región que manejaba a su antojo, lo que se suma a una realidad política adversa. Entonces hace su apuesta a la salida militar. El escenario bélico al que puede precipitarse la región andina ya está montado. Entrar en él no es difícil, difícil será salir y posteriormente desmontarlo.

**Plan Colombia: un nuevo modelo
geoestratégico para la región
(1998-2001)**

Febrero 15 de 2000 (martes). Se inicia el Plan Colombia. ¿Hacia un Kosovo andino? Todo comenzó hoy, a las 10h00 de Washington. En la sede del Subcomité de Justicia Criminal, Política de Drogas y Recursos Humanos del Congreso de Estados Unidos, fueron convocados algunos ciudadanos estadounidenses para defender la necesidad de implementar el Plan Colombia. Los encargados de esa defensa fueron Lawrence Meriage, vicepresidente de la transnacional petrolera Occidental Oil and Gas Corporation; Ana María Salazar del Departamento de Defensa norteamericano; Ted McNamara y Morris Busby, ex embajadores de Estados Unidos en Colombia; William Ledwith, jefe de operaciones internacionales de la Drug Enforcement Administration (DEA); el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur de Estados Unidos hasta octubre de 2000; y el general Barry McCaffrey, director de la Oficina Nacional de Drogas, más conocido como ‘zar’ de la lucha antidrogas. Aunque en realidad todo se inició un mes antes, cuando el presidente de Estados Unidos, William Clinton presentó ante el Congreso de su país la “Propuesta de ayuda de EUA para el Plan Colombia”. El correr de los meses demostrará que el combate a las drogas era solo la punta del iceberg, pero el iceberg ya estará encima.

Diversos sectores políticos y sociales del Ecuador y Colombia temen que el conflicto colombiano se extienda al territorio ecuatoriano y se produzca una guerra aérea similar a la que vivió Kosovo en 1999. El temor surgió de la implementación de este Plan, un paquete de ayuda económica internacional de US \$ 7.500 millones, que estaría destinado al combate del narcotráfico en Colombia y podría atrapar a Estados Unidos en un ‘Vietnam sudamericano’, como lo señalan analistas estadounidenses. En un comienzo el paquete estaba formado por US \$ 4.000 millones del gobierno colombiano, 1.573 millones del gobierno norteamericano, 1.000 prometidos por la Unión Europea (UE) y el resto se completaría con el apoyo de organismos internacionales. Sin embargo, la UE declinó participar porque se pone mucho énfasis en el aspecto militar. Entonces el resto del aporte internacional llegará de Japón, Noruega, España, Naciones Unidas y varios organismos de crédito.

Citando un documento del Departamento de Estado, el diario *El Colombiano* de la ciudad de Medellín aseguró en junio de 2000 que el presidente de Colombia Andrés Pastrana ‘vendió’ su proyecto del Plan Colombia como una estrategia de paz, cuando el debate sobre el tema en el Congreso estadounidense demuestra que las tres cuartas partes de los recursos serían utilizados para la guerra. De cada US \$ 1.000 de la ayuda de Estados Unidos, 700 serán destinados a la cooperación militar.

El presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado norteamericano, el republicano Ted Stevens, preguntó “¿quién intervendrá cuando esto explote?”, y pidió que le aseguraran que Colombia “no es Vietnam de nuevo”.

Charles Wilhelm, un veterano de la guerra de Vietnam, se apresuró a señalar que la participación en el país sudamericano no será igual y que no se transformará en un “pantano bélico” para Estados Unidos.

El Plan propone militarizar la erradicación de las plantaciones de coca desplazando de ese papel a la policía; fortalecer el sistema judicial colombiano mediante la capacitación de cuerpos técnicos de investigación para mejorar el castigo a los sectores involucrados con la coca; neutralizar las finanzas de los narcotraficantes y la guerrilla mediante el decomiso de activos; incorporar medidas antisequestro y combatir a los aliados de los narcotraficantes, que para esos efectos sería la guerrilla y los agricultores cocaleros; realizar operativos conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, y compartir datos de inteligencia con agencias de seguridad de otros países. La meta hasta el año 2005 es reducir en un 50%, el cultivo, procesamiento y distribución de la coca colombiana, apostando a fumigaciones masivas en las zonas cocaleras. Además propone la implementación de planes de desarrollo alternativo en las áreas afectadas por la erradicación de cultivos, aunque no queda claro cómo se puede cultivar mientras se mantengan las fumigaciones masivas que obligarán a desplazamientos forzados de los campesinos. También contiene algunos puntos acerca de la protección a los derechos humanos que, a pedido del presidente norteamericano Bill Clinton, a la hora de entregar su partida a Estados Unidos no los tuvo en cuenta, lo que el subsecretario

de defensa para operaciones especiales, Bryan Sheridan justificó al afirmar que “la ayuda en sí perdería eficacia si se agregan condiciones para garantizar el respeto a los derechos humanos por parte de los militares [...] podría inhibirse o reducir la eficacia general”.

Para algunos analistas este plan pone de manifiesto que cada vez está más lejos una posible “solución pacífica para el conflicto colombiano” y que el proceso de paz que abrió una esperanza en la mayoría de la población está muy deteriorado. De hecho, desde septiembre de 2000 y por el momento se han suspendido las conversaciones que venían desarrollando el gobierno y la guerrilla. De esa forma, el principal objetivo anunciado por el presidente Andrés Pastrana al asumir su gobierno en agosto de 1998, estaría fracasando.

Desde junio de 2000, el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos parece prepararse para un desenlace de impredecibles consecuencias que podría involucrar a los países vecinos. El analista Robert White, en un artículo del diario *Washington Post* aseguró que la asistencia militar masiva a Colombia podría empeorar la guerra interna de ese país y producir un nuevo Vietnam.

White señaló que el presidente Bill Clinton no ha explicado en forma coherente qué se negocia en Colombia. También criticó el hecho de que uno de los componentes más importantes de la primera fase del Plan, titulada “Golpe en el sur de Colombia”, sea la solicitud de US \$ 600 millones para entrenar a dos batallones especiales en contra del narcotráfico y dotarles de 30 helicópteros Black Hawk y 33 helicópteros Huey, para que puedan tener acceso a las remotas selvas productoras de coca.

Según White, la ayuda económica que Estados Unidos entregará a Colombia mediante el Plan podría ser más efectiva en la construcción de haciendas productivas, mercados y carreteras. Un experto en estrategia militar ecuatoriano que prefirió mantener el anonimato aseguró que está descartada una intervención norteamericana por tierra porque costaría muchas víctimas al propio Ejército estadounidense, al colombiano y sus posibles aliados peruanos y ecuatorianos.

Sin embargo, el esquema planteado por Estados Unidos demuestra que lo que no está descartado es una guerra ‘aérea’ como la de la OTAN contra Yugoslavia. “Una guerra por aire desde las bases norteamericanas en países vecinos y desde el mar, donde los aviones y los misiles tengan un importante papel como en Kosovo, parece ser la salida a la que apunta Estados Unidos y para la que trabaja el propio gobierno colombiano”, arguyó la fuente.

Para eso sería indispensable una base militar a una distancia prudente del teatro de operaciones como la que el gobierno ecuatoriano cedió a Estados Unidos en Manta, y toda la logística necesaria en las cercanías del lugar, lo que se estaría adecuando desde la base de Tres Esquinas, en el departamento colombiano del Caquetá, y otras bases en Ecuador y Perú ubicadas en la Amazonia.

Para este experto militar, conocedor de la frontera ecuatoriano-colombiana, la posibilidad de una guerra de este estilo, se estaría confirmando con el fomento de un éxodo masivo de la población desde las zonas afectadas hacia Ecuador. “En Yugoslavia se demostró que los misiles no solo van hacia los objetivos militares sino también hacia la población civil, por lo tanto es mejor retirar la población cercana a los objetivos con antelación, y así disminuir el riesgo sobre los civiles que puede provocar un costo político catastrófico”, señaló la fuente.

Según el experto militar, el éxodo de colombianos desde las zonas fronterizas hacia Ecuador, que se inició en los primeros meses de 2000, es solamente un síntoma de lo que puede ocurrir. “El retiro de la población civil podría significar un aislamiento para las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y una posibilidad mayor de que sus tropas sean detectadas y aniquiladas por una tecnología de guerra similar a la empleada en Yugoslavia”, señaló.

¿Cómo se promueve ese éxodo masivo? En las zona bajo el control de las FARC con las fumigaciones a las plantaciones de coca para terminar con la base social de ese movimiento guerrillero. Mientras que en las que se ubica el ELN mediante matanzas masivas de campesinos por parte

de los grupos paramilitares. El propio ministro de Defensa del Ecuador, Hugo Unda, aseguró que cuando se intensifique el combate al narcotráfico con el Plan Colombia, se puede dar un desplazamiento de miles de refugiados colombianos hacia Ecuador, además de narcotraficantes y guerrilleros.

La fuente militar consultada también aseguró que la denominada zona de despeje, en la que se llevan a cabo las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano “es parte del mismo plan para determinar claramente territorios guerrilleros”. “Las conversaciones son parte del propio esquema militar para ganar tiempo”, enfatizó. El análisis del militar plantea la interrogante sobre si realmente se produjo un cambio en la posición del gobierno colombiano, que en un comienzo aseguró su apuesta a la paz, o todo ha sido parte de una estrategia concertada con Estados Unidos desde un inicio. Para el experto es una pregunta de difícil respuesta, aunque cree que “el apoyo abierto y el reconocimiento norteamericano al gobierno de Pastrana por su lucha antidrogas, certificación mediante, no es gratis”. “Son solo conjeturas, pero algún secreto acuerdo parecen tener el Departamento de Estado y el gobierno colombiano actual, que no se pudo implementar con el anterior presidente (Ernesto Samper, 1994-1998)”, subrayó.

Pero las prácticas utilizadas en los Balcanes no se limitan a la guerra aérea, el informante también asegura que ya estarían actuando en Colombia mercenarios internacionales expertos en guerra de alta tecnología como los que montaron todo el aparato de comunicaciones para inteligencia en Croacia y apoyaron a este país en su conflicto con Serbia. “No son los mercenarios antiguos tipo Rambo, aunque algo de eso les quede. Son soldados especializados en alta tecnología que incluso muchos de ellos se pueden contratar en empresas de seguridad internacionales que ofrecen sus servicios por internet”, señaló.

Corporate Soldiers, Military Professional Resources, Inc. (más conocida como MPRI) y The US Special Forces son algunas de esas empresas que contratan soldados profesionales para enviarlos a distintas partes del mundo como Benin, Ghana, Malawi, Mali, Senegal, Uganda, y

ahora a Colombia. National Defense Concl Foundation es otra de las compañías de reclutamiento, con oficinas en Fairfax, Virginia. Pero es Dyn Corp la más conocida, y tiene siempre disponibles hasta 30 pilotos veteranos de guerra para enviarlos donde lo soliciten. Según la fuente militar mencionada, esta compañía es la que trabajó en Croacia y Kosovo y ahora opera en Colombia. Para muestra un botón. El 15 de agosto de 2000, en un hospital de Florencia, capital del departamento de Caquetá, morirá el mercenario norteamericano Michael A. Demons, de 34 años, quien había llegado gravemente herido desde la Base Militar de Tres Esquinas luego de combates con la guerrilla de las FARC. Demons, que fue sepultado el 30 de agosto como ‘mártir de la democracia’ en Massachusetts, había llegado a Colombia en abril de 2000, contratado por Dyn Corp como asesor militar del Ejército colombiano.

Para la fuente ese tipo de ‘paramilitares posmodernos’ tienen la capacidad de rastrear objetivos para secuestrar o atacar, como helicópteros o campamentos guerrilleros, y además realizar la acción. “Hace un par de meses tuve la oportunidad de tener contacto con uno de estos jóvenes mercenarios de 27 años que había trabajado en la guerra de Yugoslavia, era italiano y me decía que ahora iban a requerir los servicios de gente especializada como él para el Plan Colombia, con buena paga”, dijo. Sin embargo tanto el gobierno colombiano como el estadounidense niegan que el Plan sea parte de una salida bélica para el conflicto. Altos funcionarios y militares estadounidenses, como Barry McCaffrey, han descartado sistemáticamente una posible intervención militar directa de los Estados Unidos en Colombia.

Voceros del Departamento de Estado, aseguraron que la idea es combatir al narcotráfico, y ‘no a la guerrilla’. Además señalaron que Estados Unidos solo da apoyo logístico, entrenamiento y equipos a las Fuerzas Armadas colombianas, lo que para muchos dista de la verdad porque la mayoría de la ayuda destinada a Colombia es para tecnología y armamento de combate destinados a Tres Esquinas. Esta unidad militar casi inaccesible está ubicada al sur de Colombia, en medio de 77 mil hectáreas de cultivo de coca. Sus instalaciones, habitadas por 10.000 efectivos del

Ejército y la Policía Antinarcóticos, tienen los más modernos equipos de inteligencia, tecnología de punta y comunicaciones instaladas por militares estadounidenses.

Tres Esquinas fue cuestionada por la institución humanitaria Human Rights Watch, por su estrecha vinculación a grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, dirigidas por Carlos Castaño. La denominada Enmienda Leahy de 1997, prohíbe al gobierno de Estados Unidos asistir financiera y militarmente a Fuerzas Armadas que estén involucradas en violaciones de los derechos humanos lo que, sin embargo, no fue tenido en cuenta a la hora de brindar ayuda económica para iniciar el Plan Colombia. Human Rights mostró pruebas de que el Ejército colombiano no ha cortado sus lazos con los paramilitares, al contrario de lo que afirman los jefes de las Fuerzas Armadas de ese país. La organización humanitaria acusó a quienes dirigen Tres Esquinas de entregar armas, uniformes y datos de inteligencia a un grupo paramilitar que se formó en el Valle del Cauca.

Tras el informe, varios senadores estadounidenses cuestionaron el aumento de la ayuda militar a Colombia si el Plan no incluía estrictas condiciones de que los militares que violen los derechos humanos o ayuden a los paramilitares no sean enjuiciados por tribunales militares sino civiles.

El vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, encargado de la política de defensa y promoción de las garantías fundamentales, reconoció que la situación de los derechos humanos en su país es 'delicada' y la política para mejorarla es todavía 'insuficiente'. El presidente Andrés Pastrana aseguró que los militares que estén involucrados en el apoyo a paramilitares serían enjuiciados, lo que sonó a una simple declaración si se tiene en cuenta que los mandos del Ejército siguen sin reconocer ese apoyo. También Pastrana aseguró que la matanza de seis niños en Pueblo Rico, departamento de Antioquia, en agosto de 2000 por parte del Ejército, no quedaría impune, pero luego de permanecer detenidos por unas semanas, los militares implicados fueron absueltos por un tribunal militar. La denuncia de Human Rights sobre la connivencia entre

militares y paras solo retrasó algunas semanas la ayuda norteamericana, pero el presidente Bill Clinton se las ingenió para que finalmente se apruebe. Al firmar un *wavier* (excepción) a Colombia en la defensa de los derechos humanos antes de reunirse con Andrés Pastrana en Cartagena el 30 de agosto de 2000, Clinton dijo que seguía muy preocupado por los derechos humanos, pero antepuso una razón suprema: “El interés para la seguridad nacional” de Estados Unidos.

Jorge Rojas, director de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes) con sede en Bogotá, aseguró que la ayuda de Estados Unidos no resolverá el problema del narcotráfico, sino que profundizará y trasladará el conflicto a otras regiones de la Amazonia colombiana e incluso a los países vecinos. “Esta ayuda ampliará la crisis humanitaria del desplazamiento forzado, aumentando los refugiados. Afectará directamente a Perú y Ecuador que pueden ser involucrados en el conflicto, y producirá un impacto irreversible sobre el medio ambiente”, sentenció Rojas. Sin embargo, cree que todavía hay posibilidad de revertir esa realidad y “evitar una conflagración en Colombia”. Codhes, es una organización colombiana que trabaja hace nueve años con los desplazados por la violencia e integra junto a otras cien organizaciones sociales y no gubernamentales la red Paz Colombia que intenta informar a las autoridades latinoamericanas de los peligros que encierra el Plan Colombia.

Mayo 13 de 2000 (sábado). De las provocaciones a los decires del canciller Moeller. En el centro oriente ecuatoriano una patrulla del Ejército del Ecuador interceptó un grupo armado que sería el responsable del múltiple secuestro de Tarapoa y se produjo un tiroteo con muertos y heridos. El canciller del Ecuador, Heinz Moeller se apresuró a decir que se había producido el primer enfrentamiento de militares ecuatorianos con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en territorio ecuatoriano. El ministro dijo que en el intercambio de disparos habían resultado muertos ‘dos guerrilleros’, y otros cinco fueron ‘heridos y detenidos’. También aseguró que no existió ninguna

baja del lado ecuatoriano, aunque se evidenció una situación de extrema peligrosidad. “No vamos a permitir que se intervenga en nuestro territorio y este hecho demuestra que ejercemos el control para impedir que elementos subversivos se asienten en el Ecuador”, arguyó Moeller.

El líder del supuesto grupo guerrillero ecuatoriano sería el colombiano Herney Hernández de Jesús, conocido como ‘comandante Alex’, quien fuera detenido media hora después del enfrentamiento al evadir una señal de tránsito en Coca. Con el transcurso de las horas la primera versión se fue modificando, y de guerrilleros pasaron a ‘presuntos’. Luego de integrantes de las FARC pasaron a ser de las Fare-dp (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ecuador-Defensoras del Pueblo), similar a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Versiones de prensa aseguraron que las Fuerzas Armadas habrían afirmado que se trataba de un grupo mixto integrado por ex guerrilleros colombianos y delincuentes comunes, y estaba integrado también por ecuatorianos. Días después una supuesta nueva proclama apareció en los medios de comunicación, ya no era del ELP sino de las Fare-dp, que explicaban que se habían “levantado en armas por la injusticia social que vive el pueblo”. La Fuerza Terrestre informó que ese grupo sería una organización mixta, integrada por disidentes de las FARC y delincuentes ecuatorianos. Así lo afirmó el comandante del Ejército, Norton Narváez quien además dijo que todavía no se los puede calificar de guerrilleros, subversivos o delincuentes.

Narváez dijo que el grupo estaría conformado por al menos 100 personas dispersas en las provincias de Sucumbíos y parte de Orellana. Negó que este sea el inicio de la internacionalización del conflicto colombiano, pero consideró cierta la amenaza de que el problema se pueda expandir al Ecuador. Aclaró que no hay todavía evidencia de que exista guerrilla en el país. Arguyó que el verdadero origen del grupo se lo conocerá luego de las investigaciones. Finalmente no se lo conoció.

Según versiones de prensa los presuntos guerrilleros primero se habrían acercado al poblado Los Ribereños donde jugaban al billar y buscaron el apoyo de los habitantes, pero al no recibirlo se marcharon.

Un mes después dejaron en una de las viviendas del caserío unas mochilas que no regresaron a retirar. Cierta día a las 23h00, llegó un comando militar que alineó a toda la población y le repitió que la subversión es un delito. También habrían dicho que todo el pueblo estaba acusado, pues habían llegado informes hasta los militares de que los pobladores estaban apoyando a un grupo guerrillero. Las mujeres fueron encerradas en sus propias casas y los hombres llevados a la selva cercana. Las mochilas serían tomadas como evidencias. “No podíamos ni siquiera salir a orinar”, comentó una mujer, quien aseguró que su esposo y el resto de sus vecinos fueron golpeados para lograr confesiones que llevaran hasta los dueños de las mochilas. Al constatar que no sabían nada, los militares habrían abandonado la población.

Un análisis del diario *Hoy* de Quito decía por aquellos días:

Mala noticia. Un tal ‘comandante Alex’, disidente de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, lidera un grupo armado que contactó a tiros con una patrulla del Ejército ecuatoriano, en la Amazonia. Según versiones de las FFAA, el grupo se autodenomina de un modo que induce a creer que estamos frente al primer chispazo de un brote guerrillero en territorio ecuatoriano. Versiones provenientes de las provincias de Sucumbíos y Orellana revelan que, desde hace varias semanas, grupos de encapuchados interceptaban los vehículos en las carreteras para intimidar a los viajeros al grito de “¡Viva la guerrilla! ¡Ya estamos en el Ecuador!” ¿Se trata, en efecto, de un grupo guerrillero? ¿Es la temida ‘derivación’ de la violencia de Colombia en nuestro país? ¿Acaso es una hábil manifestación de un grupo delincencial que estuvo asaltando o cometiendo secuestros? La noticia fue difundida, inicialmente, por el ministro de Relaciones Exteriores, Heinz Moeller; fue ‘corregida’ de inmediato con comunicados de las FFAA. Moeller, a quien se criticó enseguida por el uso de un lenguaje guerrillero y prepotente en un asunto tan delicado, estuvo, aparentemente, mal informado. El incidente no fue en Cononaco. Corrección: fue en La Andina, en el kilómetro 84 de la vía Coca-El Auca. No fueron las FARC. Corrección: se trata de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias Ecuatorianas-Defensores del Pueblo (Fare-dp)”.

A propósito de ese suceso y de la Base de Manta, Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hizo públicas algunos interrogantes que pueden ser pertinentes para profundizar en el análisis del tema:

¿Por qué el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Heinz Moeller, se apresuró en señalar que los supuestos guerrilleros ‘son de las FARC’, a sabiendas que una versión de este calado, dada nada menos que por el canciller de un país limítrofe con Colombia, inmediatamente tendría efecto a nivel interno y externo? ¿Por qué el Dr. Moeller dio esa primera versión, a sabiendas que informaciones de este tipo debían ser procesadas y dadas a conocer única y oficialmente por el Frente Militar o la Policía Nacional? ¿Existe realmente y cuál es el contenido íntegro, forma de escritura, logos y fuente electrónica del fax enviado por el grupo ‘Fare-dp’ a la prensa, como lo publicaron algunos diarios del país? (La APDH solicitó a amistades de las redacciones de dos de los principales periódicos del país copia de ese fax, pero gentil y extraoficialmente se nos indicó que se trató de un error y que no se tenía el citado fax) ¿Es admisible creer que guerrilleros ingresen a poblados gritando –entre otras cosas– ‘ya venimos al Ecuador’, cuando más bien la experiencia internacional recuerda que ese tipo de personas y movimientos en su primera fase clandestinizan su preparación y accionar, para precisamente evitar el aniquilamiento al llamado ‘embrión’ o ‘foco’ guerrillero? ¿Se puede suponer con ligereza, como lo hizo un programa nocturno de televisión, que un conocido partido político de izquierda es el que ‘está detrás’ del grupo Fare-dp? ¿La intolerancia política puede llevar a extremos tan peligrosos a conductores de la ‘amiga opinión pública invisible’? Definiendo categóricamente nuestra postura de rechazo a los métodos de violencia o guerra, así como nuestra neutralidad activa en el conflicto interno de Colombia, preguntamos: ¿por qué el doctor Moeller, el Ingeniero León Febres Cordero y analistas de la gran prensa apuntan su acusación únicamente hacia guerrilleros o, más aún, hacia la izquierda política del país y no a otros sectores? ¿Por qué algunos sectores no pueden admitir que, efectivamente, la tesis de nuestras Fuerzas Armadas, es cierta y que se podría tratar de grupos delincuenciales falsamente autodenominados como ‘políticos’, en el que incluso pueden participar disidentes de un conflicto tan degradado como el colombiano, toda vez que esas mismas autoridades

reconocen el crecimiento inusitado de la violencia delincuencial con formas nuevas y del secuestro con fines delictivos y no políticos en el Ecuador?

Según un dato proporcionado por el coronel Jorge Brito, entre 1994 y 2000, en Ecuador se habrían pagado US \$ 200 millones en rescates por secuestros.

Junio 2 de 2000 (viernes). ¿Hacia la reestructuración de las Fuerzas Armadas? El proceso que involucra a Ecuador en la guerra colombiana iría acompañado de una reestructuración de las Fuerzas Armadas del país. Una alta fuente militar que prefirió permanecer en el anonimato me informó que los coroneles que acompañaron en enero al Movimiento Indígena del Ecuador en la insurrección contra el gobierno, serían dados de baja como parte de una ‘reorientación’ del Ejército impuesta por Estados Unidos. Tras haber estado detenidos en diversos cuarteles por la insurrección, los coroneles fueron liberados luego de una amnistía aprobada por el Congreso ecuatoriano el día 1 de junio de 2000, y se presentaron ante el comandante del Ejército, Norton Narváez. Según versiones de prensa, Narváez los reprendió y les habría dicho que ya no merecían la confianza de las Fuerzas Armadas. Luego de la reunión, los mandos del Ejército pusieron a los 18 oficiales más comprometidos con la rebelión a disposición del Ministerio de Defensa por 90 días, con la previsión de pasarlos a disponibilidad por seis meses, instancia previa a la baja. De acuerdo con la medida, los militares no tendrían ningún cargo o función castrense durante tres meses.

La alta fuente militar aseguró que la represalia contra los coroneles responde más a presiones de Estados Unidos que a la intención real de castigarlos por la rebelión de enero contra el gobierno de Mahuad. “Está muy claro que los mandos no temen un cisma en el interior de las Fuerzas Armadas, como se puede producir, porque así empiezan a cumplir el objetivo de reestructuración impuesto por Estados Unidos”, aseguró el militar consultado.

El ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Charles Wilhelm, aseguró que tras el convenio que cede la Base Militar y el puerto de Manta a Estados Unidos, uno de los objetivos de los militares en Washington es ‘reorientar’ las Fuerzas Armadas ecuatorianas. “Parte de esa reorientación es modificar la formación de los militares ecuatorianos por una como la de los ejércitos del Cono Sur o del colombiano, dentro de una doctrina represiva teniendo en cuenta la realidad de la región”, dijo la fuente. También aseguró que para cumplir ese objetivo “es necesario eliminar a los elementos progresistas que puedan oponerse, y esto (la baja de los oficiales rebeldes) es solo el comienzo”. Algunos de los oficiales involucrados pidieron directamente su pase a disponibilidad para que no sean sancionados los subalternos que habían participado en la rebelión, otros apelaron la decisión de los mandos apoyándose en leyes militares. El coronel Jorge Brito, uno de los que pidió disponibilidad, aseguró que una de las bases argumentales de quienes apelaron sería el hecho de que la decisión fue tomada sin haber escuchado previamente la posición de los oficiales insurrectos. También señaló que no están de acuerdo con la expresión de desconfianza manifiesta por los mandos y lo reflejarían “en los documentos pertinentes”. El coronel Lucio Gutiérrez, líder de los rebeldes, quien tras ser amnistiado cumplió un arresto de 96 horas por haber dado declaraciones a la prensa sin autorización de los mandos, se mostró contrario a ceder la Base de Manta a tropas extranjeras y a la participación ecuatoriana en el Plan Colombia. Gutiérrez recomendó, incluso, consultar a los ecuatorianos mediante un plebiscito para definir la actitud del gobierno respecto de Manta y del Plan Colombia. El militar afirmó en esa oportunidad que, para ser justos, se debería sancionar a todos los militares que de una u otra forma participaron en los hechos del 21 de enero, y no solo a los coroneles. “Si se sanciona a quienes apoyamos la rebelión indígena también debe sancionarse a los que trabajaron en las sombras hacia otros objetivos”, aseguró.

Para la Cedhu, el incumplimiento de la amnistía constituye una nueva violación a la Constitución. “Esperamos que los intérpretes de la Constitución no inventen nuevos argumentos que desconozcan el principio legal

de una amnistía”, aseguró su directora Elsie Monge. Para la religiosa, es ilegal que se pretenda hacer valer las leyes internas militares para sancionar a los coroneles. “Parece que la amnistía permite olvidar la actuación de los mandos y del presidente Gustavo Noboa, que asumió ilegalmente. ¿Se acepta amnistiar a quienes participaron en el verdadero golpe de Estado, pero no se puede olvidar la rebelión de los coroneles?”, señaló. A Monge también le preocupa la afirmación de Wilhelm, porque representa “una intromisión estadounidense para reformar las Fuerzas Armadas ecuatorianas”.

La fuente del Ejército consultada aseguró que el gobierno de Estados Unidos conoce la escalada en la guerra que acarrea el Plan Colombia y no quiere tener ningún tipo de oposición en Ecuador. Sin embargo, los mandos militares no escucharon los argumentos de los oficiales rebeldes y los organismos humanitarios, y el malestar se propagó a varios cuarteles del Ejército del Ecuador a causa de que las sanciones impuestas por la rebelión del 21 de enero aumentaron a 76 militares más, y se anunció el posible arresto de otros 204 subalternos. Las sanciones de tres, cinco y nueve días de arresto por insubordinación decretadas por el comando del Ejército despertó el rechazo de la oficialidad hacia los mandos superiores y ahondó en el quiebre de la unidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los militares sancionados con cinco y nueve días de arresto no podrían participar en el curso denominado Juegos de Guerra, último paso para concluir los estudios en la Academia del Ejército, lo cual les impediría obtener ascensos. Esos militares serían asignados a unidades del Ejército para realizar actividades administrativas hasta que cumplieran los 20 años de la carrera y pudieran retirarse sin ascender. En tanto, los efectivos que sufrieron tres días de arresto tendrían más posibilidades de continuar en la carrera militar, porque podrían participar en los Juegos de Guerra. Sin embargo, la sanción que constará en sus hojas de servicio influiría en forma negativa ante eventuales ascensos. Los arrestados, que en su mayoría tienen 17 años de servicio en el Ejército, fueron ubicados en tres cuarteles ubicados en las cercanías de Quito.

Un alto oficial activo del Ejército, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que el malestar llega a muchas unidades que no se verían representados por los mandos de la fuerza terrestre y estarían en contra de que las Fuerzas Armadas sean dirigidas por la marina. “Parece que la idea sería destruir a la fuerza terrestre y fortalecer, sobre todo, a la marina, un arma más vinculada a las élites de Guayaquil. No se entiende cómo los jefes del Ejército pueden permitir eso y, además, no se dan cuenta que están jugando con fuego”, señaló el informante. Oficiales consultados en cuarteles cercanos a Quito lamentaron que estas sanciones puedan ser el comienzo de un “duro enfrentamiento interno”, que no se sabe a dónde puede conducir. “Parece que los mandos están más preocupados por sus automóviles que en la unidad militar”, señalaron. Según los coroneles se esperaba que con la sanción a los 18 oficiales que lideraron la rebelión terminaran los enfrentamientos y se iniciara una reconciliación de las Fuerzas Armadas, pero el arresto de los subalternos volvió a abrir las heridas.

Lucio Gutiérrez, uno de los que pidió el retiro, dijo que las órdenes de arresto han generado intranquilidad en la Fuerza Terrestre. “El 21 de enero, antes de entregar el poder para concretar la sucesión presidencial, los generales se comprometieron en el Palacio de Gobierno a no sancionar. Pero rompieron su palabra y, en definitiva, la amnistía fue solo para los generales y civiles”, arguyó. Gutiérrez reveló que el 21 de enero hubo generales que “ordenaron la detención de Jamil Mahuad y del actual presidente, Gustavo Noboa”. Advirtió que, “si se continúa con la persecución a los oficiales jóvenes, nos veremos obligados a decir una serie de cosas que la opinión pública no conoce”. Brito, por su parte, dijo que “hubo un compromiso de no sancionar a nadie y lo que estamos viendo es que las palabras del alto mando militar no tienen ninguna credibilidad”. Agregó que “la amnistía sirvió solo a los generales que, incluso, fueron condecorados, pero no pasa lo mismo con los oficiales que perdieron su carrera y son sancionados”. Tras las presiones, los mandos accedieron a retrasar el inicio de los Juegos de Guerra para que los arrestados pudieran participar, pero las sanciones no fueron levantadas.

Paco Moncayo, por su parte, se mostró contrario a una reestructuración de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y que se modifique la educación de los militares de su país. “Si quieren unos monstruos encerrados y fuera del contacto de la realidad para luego soltarlos y reprimir al pueblo cuando reclame por justicia, van a hacerle el mayor daño al país y a la institución militar”, afirmó Moncayo.

La modificación del tipo de educación que se imparte a los militares es apoyada por León Febres Cordero, quien aseguró que los militares no están para pensar como sociólogos sino para actuar. Para el ministro de Defensa, Hugo Unda, las Fuerzas Armadas “están desangrándose”, pues un numeroso grupo de sus miembros se ha retirado o ha sido castigado tras la rebelión de enero. “Las Fuerzas Armadas son la única institución afectada, sin ser un problema militar. Es un problema político en el que desgraciadamente se vieron involucradas”, expresó. Respecto de la formación militar, Unda cree que el apoyo que brinda la institución al desarrollo del país debe ser regulado. Agregó que uno de los factores a ser considerados en el cambio de formación militar es el de inculcarles más responsabilidad con el Estado, para que los oficiales “sepan diferenciar entre las obligaciones y las vinculaciones de carácter emocional”. También aseguró estar preocupado por la tendencia política que se marca en los institutos y academias militares. “Comparto la idea de las libertades académicas, pero lo malo está cuando las tendencias ideológicas se dirigen en una sola dirección”, argumentó.

Junio 22 de 2000 (jueves). Buque de Estados Unidos intercepta pesquero con emigrantes. La captura de un pesquero ecuatoriano con 190 emigrantes ilegales que pretendían llegar a Estados Unidos, efectuada por el buque de guerra estadounidense Hali Burton, determinó nuevos cuestionamientos sobre la concesión a Washington de la Base de Manta. El Hali Burton interceptó al pesquero Elizabeth I y lo llevó al puerto de Esmeraldas, en la Costa norte del Ecuador, donde los viajeros fueron detenidos durante algunos días. Las 190 personas viajaban en la embarcación rumbo a Guatemala, y desde allí pensaban ir por tierra a Estados

Unidos. Esos emigrantes pretendían sumarse a la columna de miles de ecuatorianos que intentan llegar mensualmente a Estados Unidos llevados por los denominados ‘coyotes’, gente que se encarga de introducir ilegales en ese país cobrando entre US \$ 5.000 y 10.000. La mayoría de los viajeros procedía de las provincias sureñas de Loja y Cañar y habían vendido todas sus pertenencias para pagar el viaje. El Hali Burton habría recibido la información de un avión de guerra estadounidense que despegó de la Base de Manta. Las críticas que provocó el caso tienen fundamento en las cláusulas de la concesión obtenida por los militares estadounidenses, que solo los faculta a utilizar la Base para reprimir el narcotráfico.

El embajador Francisco Suéscum, director de Soberanía Marítima y de Espacio de la Cancillería ecuatoriana, cuestionó los operativos militares estadounidenses dentro del espacio marítimo exclusivo del Ecuador de 200 millas y en aguas internacionales, porque “no hay tratados o convenios que lo permitan”. Aseguró además que la detención de emigrantes ecuatorianos es una violación de los tratados internacionales, porque “los Estados Unidos solo pueden calificar y capturar naves extranjeras cuando estén infringiendo dentro de su territorio”. “Es imperdonable que, a pretexto del convenio para la lucha antidrogas, en la Base de Manta se realicen patrullajes y detenciones en aguas ecuatorianas”.

El embajador Juan Pablo Valdiviezo, director de Tratados de la Cancillería, observó que la Base de Manta fue cedida en forma exclusiva para la lucha antinarcóticos y no “para otros menesteres”, como la detención de ecuatorianos que, ante la grave crisis, buscan mejores días en el extranjero.

El canciller Heinz Moeller, uno de los más fervientes defensores del convenio, declaró que el despegue de un avión militar estadounidense de esa Base “para ayudar a interceptar un barco cargado de [emigrantes] informales” es violatorio del acuerdo. También aseguró que se tratase de un tema delicado que merecía un análisis detallado, para lo cual la Cancillería recabaría información de las operaciones que se realizan desde Manta. “Si ese tipo de sobrevuelos viola los acuerdos, presentaremos

nuestras formales protestas”, aseguró Moeller. Y como de las palabras a los hechos hay un buen trecho, un boletín de la Cancillería justificó la intervención del buque Hali Burton contra el pesquero, señalando que no es la primera vez que un barco estadounidense detiene emigrantes ecuatorianos frente a las costas del Ecuador. Según el comunicado, las detenciones realizadas en aguas internacionales lo fueron de común acuerdo con la marina del Ecuador, pero cuando se realizaron en aguas ecuatorianas “violando el espacio marítimo del país, la cancillería emitió una nota de protesta”. También informó que este tipo de detenciones “no tiene relación con las actividades de la Base”, aunque no las cuestionó, sino que llamó la atención a los ciudadanos que intentan viajar ilegalmente, pues “cometen una infracción”.

La respuesta del gobierno muestra falta de soberanía. El comunicado de la cancillería no cuestiona la intervención de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Ecuador y justificar la intervención de buques estadounidenses en la detención de emigrantes basados en la infracción cometida por estos. Los ecuatorianos se van del país por las condiciones económicas que son consecuencia de políticas gubernamentales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es como decir Estados Unidos. Es necesario castigar a los ‘coyoteros’ e implementar políticas de empleo para evitar la emigración irregular y rechazar la intervención de barcos y aviones estadounidenses en Ecuador.

La Embajada de Estados Unidos en Quito emitió un comunicado afirmando que el buque estadounidense intervino al saber que la armada ecuatoriana había pedido la detención del pesquero y que fuera llevado de regreso al puerto de Esmeraldas. La Embajada señaló que el barco “realizaba un patrullaje antinarcóticos de rutina en aguas internacionales cuando su helicóptero avistó una embarcación sospechosa que resultó llevar inmigrantes ilegales”. “De acuerdo con las leyes internacionales”, Estados Unidos y cualquier otro gobierno tienen derecho a abordar a cualquier embarcación que se encuentre navegando en aguas internacionales, dice la nota diplomática. La Embajada también aseguró que la intervención norteamericana “fue un acto humanitario que

posiblemente salvó 200 vidas”, pues el pesquero llevaba a los emigrantes “en desesperantes condiciones de hacinamiento”. Según la Embajada, el Hali Burton solo permaneció en aguas ecuatorianas para abastecerse de combustible y alimentos, y luego partió hacia el Norte, con sus 60 tripulantes.

Durante el año 2000, varios barcos estadounidenses han arribado al puerto de Manta para cumplir tareas de rastreo y control del espacio aéreo y marítimo. Organizaciones humanitarias también han denunciado que en los Memorandos 281, 282 y 283 de la Dirección General de Soberanía Marítima, Aérea y Espacial de la Cancillería Ecuatoriana (Dgsmæ), se informa de la captura de 12 barcos ecuatorianos por parte de navíos de guerra norteamericanos durante la primera mitad del año 2000. Paradójicamente y a pesar de las palabras de Moeller, Francisco Suéscum, quien denunció el hecho del pesquero, fue suspendido temporalmente en sus funciones por orden del propio Canciller, debido a la denuncia que hiciese pública respecto del incidente, según informó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero la entrega de la Base de Manta y la participación ecuatoriana en el conflicto colombiano también tiene algunas razones económicas. Según el profesor Charles Calomiris, un reconocido analista estadounidense, Ecuador fue presionado económicamente para que se involucre en el Plan Colombia, con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, tan promocionados durante el año 2000. Calomiris aseveró que estos créditos son “un medio para enviar sobornos políticos al gobierno ecuatoriano, en momentos en que Estados Unidos quiere estar seguro de que podrá seguir utilizando las bases militares ecuatorianas” para supuestamente vigilar el tráfico de drogas.

El doctor Julio Prado Vallejo, ex canciller del Ecuador y experto en derecho internacional, confirmó que el convenio que cede la base ecuatoriana además de ser inconstitucional por no haber sido aprobado por el Congreso, lesiona la soberanía porque permite a un país extranjero utilizar libremente los puertos, bases, aguas territoriales y espacio aéreo sin ningún requisito previo. Prado Vallejo también llama la atención sobre un segundo convenio que complementa el principal, que fue firmado

por un alto oficial de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, mediante el cual la dirección de la Base está a cargo de una comisión integrada por cinco militares estadounidenses y tres ecuatorianos y el administrador de la Base es norteamericano. “Lamentablemente Ecuador ya está involucrado en el Plan Colombia porque allí se menciona específicamente la participación de la ‘Base norteamericana de Manta’, y la ciudadanía ni está enterada. Nosotros lo que queremos es que se revean el convenio principal y el segundo, que son ilegales, para que se respete nuestras normas jurídicas, porque no somos una colonia para que nos impongan este tipo de tratados, somos un Estado soberano”, concluyó.

Distintas organizaciones sociales y políticas del Ecuador presentaron una demanda de inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre Ecuador y Estados Unidos para el acceso y utilización de la Base de Manta, ante el Tribunal Constitucional basándose en el hecho de que ese documento violenta la soberanía nacional y fue suscrito sin que se haya cumplido la norma constitucional de aprobación previa por parte del Pleno del Congreso Nacional. Por su parte, distintas organizaciones humanitarias y ambientalistas ecuatorianas que formaron el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, decidieron ejecutar una “estrategia ciudadana de resistencia pacífica y acción civil no violenta a corto, mediano y largo plazo”, semejante a la que la población puertorriqueña usara en Vieques, Puerto Rico, contra las bases norteamericanas instaladas en esa isla caribeña, “la idea es visibilizar internacionalmente el peligro de la presencia militar norteamericana en Ecuador, particularmente en Manta y la región del Coca, en la zona fronteriza amazónica, y para oponerse al Plan y sus consecuencias de regionalización del conflicto colombiano”.

En julio de 2000, dentro de esa estrategia colectiva de desobediencia civil y resistencia pacífica, activistas de los derechos humanos y la defensa del ambiente que llegaron a Manta para participar en un encuentro internacional decidieron entrar a la Base para colocar la bandera ecuatoriana. Si bien las carreteras aledañas y las zonas periféricas estaban con resguardo militar las activistas se las ingeniaron para llegar a la playa a

través de pequeñas embarcaciones y de la playa llegar hasta el centro de la pista, a pocos metros de donde estaba el P3 Orión “Al iniciarse el evento se nos informó que para evitar problemas con la fuerza pública, la decisión previamente acordada de movilizarnos desde la sede del encuentro hasta la Base, había sido reemplazada con otra marcha de clausura hacia la playa para allí plantar las banderas tricolor de la nación”, comenta Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Quienes se quedaron esperando en la sede del encuentro “casi se caen de espaldas” al anunciarles vía celular que solo regresaban dos de las tres lanchas, pues los integrantes de la tercera habían decidido ingresar a la Base. Luego del desembarco le dijeron al lanchero que los transportaba que retornara porque iban a entrar a la Base y “regresarían caminando”. Dentro de la Base, los once activistas estaban sorprendidos por las facilidades para llegar hasta el avión norteamericano, pues ninguno de los militares se había percatado de quienes eran. Recién se darían cuenta cuando quienes permanecieron afuera se presentaron en la puerta de la Base y les informaron que adentro estaban sus compañeros y querían retirarlos. En ese momento se produjo la alerta total y la movilización de militares ecuatorianos y estadounidenses para “detener a los invasores”. Cuando se encontraron con los activistas con la bandera del Ecuador no lo podían creer. “Tal vez la vulnerabilidad evidenciada por la Base llevó a que los medios ecuatorianos no difundieran la noticia”, comentó Ponce.

Junio 30 de 2000 (viernes). Justificativos para involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano. Con la Base de Manta en manos de Estados Unidos y la participación de militares estadounidenses en las bases amazónicas Ecuador ya está involucrado en la guerra. Sin embargo, todavía faltan justificativos claros para que los ecuatorianos acepten involucrarse en una escalada bélica provocada por Estados Unidos. El secuestro de doce extranjeros en la zona de Tarapoa provincia de Sucumbíos, en septiembre de 1999, pudo ser uno de esos justificativos, cuando se quiso involucrar en el hecho a presuntos guerrilleros de las FARC accionando

en Ecuador. En esos días el gobierno de Mahuad consideró que el caso estaba “fuera de su alcance” y un ex jefe militar denunció el hecho como una provocación para involucrar al país en el conflicto colombiano.

En efecto, el general Paco Moncayo, actual Alcalde de Quito, ex diputado de la Izquierda Democrática y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, consideró en ese entonces que si el secuestro fue cometido por la guerrilla se trataría de un grave error político, porque podría dar la excusa para una intervención directa de los países fronterizos con Colombia en el conflicto interno de ese país. Moncayo, máximo jefe militar ecuatoriano durante el conflicto armado con Perú en 1995, aseguró: “o los dirigentes guerrilleros colombianos declaran una cosa y hacen lo contrario, o puede ser una provocación que venga de otros orígenes para involucrar a las FARC e involucrarnos a nosotros en un conflicto con ellos”. El general Carlos Mendoza, en ese entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, dijo que no estaba claro si los secuestradores eran guerrilleros o paramilitares. Días después del plagio se notaban contradicciones en las versiones oficiales. Mientras se apuntaba que el grupo se encontraba en territorio ecuatoriano, altos funcionarios del gobierno consideraban que ya estarían en Colombia, por lo que no se podría hacer nada para rescatarlos. Sin embargo, un comandante de las FARC negó que hubieran secuestrado a los doce extranjeros en Ecuador. La guerrilla desmintió su participación en el secuestro y aseguró que no operaba en Ecuador. El comandante Iván Ríos, dijo a un grupo de periodistas en la zona de despeje del Caquetá, que querer involucrar a las FARC en el secuestro “es un cuento alejado de la realidad”.

Las declaraciones de Ríos deslindando responsabilidades totalmente, dieron más fuerza a la hipótesis de Moncayo sobre una posible provocación de un sector interesado en involucrar al Ecuador en la guerra. Raúl Reyes, encargado de relaciones internacionales de las FARC, advirtió que hay sectores que están cumpliendo las tareas de Estados Unidos para justificar la intervención en el conflicto colombiano, y arguyó que Ecuador no puede “servir de carne de cañón a una guerra que no es suya”.

Las autoridades de Colombia no descartaron que detrás estuviera Carlos Castaño, jefe de los grupos paramilitares, quien en esos días anunció la creación de un bloque paramilitar en la zona fronteriza con Ecuador, según el diario *El Tiempo*, de Bogotá. El entonces presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, se reunió en forma urgente con los ministros de Defensa, José Gallardo, y de Gobierno (Interior), Vladimiro Álvarez, para analizar el secuestro y la situación de la frontera con Colombia. Tras la reunión se decidió crear un ‘comité de crisis’ que estaría a cargo de las investigaciones sobre el secuestro y sería el encargado de mantener contacto con la prensa y los posibles secuestradores. El secuestro colectivo fue realizado por un comando de 25 personas vestidas con traje militar y la cara pintada. Los secuestradores tuvieron un enfrentamiento en el que murió un soldado ecuatoriano. Entre los secuestrados había siete ciudadanos canadienses y un estadounidense que trabajan para la empresa petrolera canadiense United Pipeline, subsidiaria de la Compañía City Investing; tres españoles y una belga que trabajan para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), una organización internacional vinculada a radios populares de América Latina que tiene su sede en Ecuador.

Los españoles y la belga fueron liberados en primera instancia, mientras que los funcionarios de la petrolera fueron dejados en libertad tres meses después, luego de que esta pagara US \$ 3,5 millones por la liberación. Ken Foster, gerente general de United Pipeline, agradeció a los gobiernos del Ecuador y Canadá por ayudar en el proceso de liberación. “Los ejecutivos de la empresa no podían discutir los esfuerzos realizados para obtener la libertad de los rehenes. Nuestra única preocupación era la seguridad y la liberación de nuestros empleados para reunirlos con sus familias”, señaló.

Vladimiro Álvarez aseguró que por órdenes del presidente Jamil Mahuad se “precauteló la integridad física de los ciudadanos extranjeros”, pero se apresuró a señalar que el Ejecutivo no había participado en ninguna negociación con los captores. El Ejército ecuatoriano movilizó 400 soldados expertos en combates de selva, mientras que otro grupo

de 500 pasó a resguardar el cordón limítrofe con Colombia. A ellos se sumaron efectivos de la Fuerza Aérea, que patrullaron la provincia de Sucumbíos, y 500 marinos que patrullaron los ríos amazónicos. A raíz del secuestro, las Fuerzas Armadas ecuatorianas incorporaron nuevos efectivos a los 5.000 soldados que desde marzo custodian los 600 km de frontera con Colombia.

A pesar de la movilización no pudieron dar con el paradero de secuestrados y secuestradores que según el general José Gallardo, habrían permanecido en la selva. “Puede ser en territorio ecuatoriano o colombiano, pero muy próximo al límite político internacional”, aseguró Gallardo en esa ocasión. Tras la liberación de los extranjeros secuestrados en la región amazónica, los campesinos del Ecuador denunciaron una ola represiva del Ejército en busca de los secuestradores y alertaron sobre la posibilidad de que la zona se transforme en escenario de guerra. Sobre los posibles autores, el gobierno mantenía la misma hipótesis que cuando se produjo el plagio. “Podría ser la guerrilla colombiana o delincuentes comunes con antecedentes guerrilleros. Esto lo vamos a descifrar mediante la investigación”, dijo Gallardo.

Vladimiro Álvarez señaló a su vez que luego de la liberación de los ocho extranjeros, correspondía a las unidades de inteligencia del Estado obtener la información que permitiera “identificar, ubicar y capturar a los responsables del secuestro colectivo”. Esas afirmaciones crearon preocupación y temor en los campesinos de la región, quienes habían denunciado tortura y malos tratos por parte de efectivos del Ejército que buscaban a los secuestradores. Los agricultores tenían un mal recuerdo de Gallardo, que desempeñaba el mismo cargo en 1993 cuando el Ejército desató una dura represión en busca de guerrilleros colombianos. En esa ocasión fueron detenidos doce colonos acusados de pertenecer a la guerrilla, quienes permanecieron presos durante ocho meses hasta ser liberados luego que la justicia los encontró inocentes de los cargos. Tiempo después, el Estado ecuatoriano tuvo que indemnizarlos por la detención y las torturas de que fueron objeto.

Tras el secuestro de Tarapoa, el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, reveló que los pueblos amazónicos pidieron al gobierno que declare zona neutral a la provincia de Sucumbíos ante un eventual choque de fuerzas militares internacionales contra las guerrillas de Colombia. Abad aseguró que había temor de que militares estadounidenses, ecuatorianos y peruanos “que al parecer trabajan en algún plan para enfrentar a la guerrilla colombiana” protagonicen una “verdadera carnicería humana en territorios amazónicos”. También apuntó que es normal ver en la selva y ciudades amazónicas a soldados estadounidenses, aunque el ministro Gallardo repitió que eso se debía a “convenios de intercambio entre Ecuador y Estados Unidos”.

Para Paco Moncayo, las fuerzas guerrilleras no amenazan la seguridad interna del Ecuador, y muchas poblaciones fronterizas ecuatorianas se benefician económicamente de la gran actividad que dejan tanto guerrilleros como paramilitares colombianos. “Existe el peligro de que el conflicto de ese país sea trasladado al Ecuador, pero yo conozco que las FARC no tienen esa intención”, afirmó el ex militar. Meses después, cuando son capturados los supuestos secuestradores, los hechos irían mucho más allá que la imaginación sobre la creación de justificativos para involucrarse en la guerra. Pero antes fueron los sobres bombas, en febrero de 2000, y el invento de un supuesto Ejército de Liberación del Pueblo (ELP). Los autores de los sobres bombas no fueron detectados y el ELP no quedó ni siquiera en el recuerdo porque después alguien más imaginativo se le ocurriría crear las Fare-dp.

Julio 20 de 2000 (jueves) Estados Unidos abre la puerta al fuego. El escenario en que se puso en marcha el Plan Colombia corresponde a los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo, y el de Nariño en la Sierra sur, donde se calcula que hay 77.000 hectáreas de las 175.000 sembradas con coca en todo el país.

El general Mario Montoya Uribe, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (FTCS), aseguró al diario *New Herald* de Miami, que

la primera fase del Plan corresponde a una estrategia antinarcóticos y antiguerrilla, que se inició en septiembre de 2000, tras la visita de Clinton a Colombia, con las primeras fumigaciones masivas de cultivos ilícitos como coca y amapola en los departamentos de Nariño y Putumayo. Montoya atribuye el financiamiento de las FARC al narcotráfico, de donde se desprende que la guerra contra los cultivos de coca va dirigida expresamente hacia ese movimiento guerrillero.

Para apoyar esa ‘guerra del Sur’, que se irá profundizando a partir del primer año de los seis en que se desarrollará el Plan Colombia, la administración Clinton ha entregado recursos para la conformación y entrenamiento de dos batallones antinarcóticos. Cada uno contará con 1.000 hombres que encabezarán la ofensiva inicial con el apoyo de 10.000 efectivos más de la Policía, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército de Colombia asentados en la Base de Tres Esquinas. Uno de los batallones está listo para entrar en combate y el otro permanecerá hasta diciembre de 2000 en ejercicios de entrenamiento que le imparten 86 instructores militares del Comando Sur de Estados Unidos. El tercero entrará en la etapa de conformación a fin del año 2000, lo que incluye un minucioso examen de los antecedentes de cada uno de los soldados por parte de los instructores militares norteamericanos.

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Fernando Ramírez, aseguró que Clinton con su viaje a Colombia y el reconocimiento al gobierno de Pastrana ha dado una señal muy importante del apoyo que Estados Unidos brinda a la región andina “porque muestra su preocupación y su afán por reconocer que el tema del narcotráfico es un problema transnacional y obviamente lo que se trata es que la estabilidad democrática en nuestros países no se ponga en peligro por unos grupos al margen de la ley que tienen un poder económico muy grande a causa del negocio del narcotráfico”.

También dijo que se debe privilegiar una solución negociada del conflicto colombiano, aunque dejó entrever que el Plan Colombia es una forma de presionar a la guerrilla para que ceda en las negociaciones. “El verdadero peligro de que el flagelo del narcotráfico se expanda a países

vecinos es cruzar los brazos. Entonces, cuando la guerrilla se convenza de que no puede llegar al poder por las armas, encontrará que la negociación política es el camino que tiene para ganar”, señaló. Para reafirmar ese argumento aseguró que el fortalecimiento de las fuerzas del Estado impedirá que los grupos rebeldes puedan crecer.

Sin embargo la congresista norteamericana Cynthia McKinney, puso en entredicho la implementación del Plan y el papel de los Estados Unidos. “Nuestras relaciones con el pueblo de Colombia están a punto de cambiar drásticamente y espero que seamos conscientes de ello ahora que nos dirigimos hacia una masiva proyección de fuerza estadounidense en ese país”, dijo la legisladora. McKinney aseguró que su preocupación fundamental estaba basada en cómo el Plan Colombia afectaría los derechos humanos en ese país y cuál será la idea que los colombianos afectados tendrán de Estados Unidos.

Como ciudadanos del país más poderoso del mundo, estamos en el deber de asegurar que este poder sea usado responsablemente y que no estemos confusos cuando hagamos uso de él. Bobby Kennedy dijo una vez que solíamos ser una fuerza para hacer el bien en el mundo. Me gustaría esperar que los pueblos del mundo siguieran viéndonos como hacedores de bien. Sin embargo, me temo que esto se aleja bastante de las impresiones de los colombianos que me han llegado. Aproximadamente el 80% de la ayuda prevista en el Plan Colombia lo es para armamento militar [comentó la congresista norteamericana].

Para ella sería más correcto hablar de este plan como de un paquete de ayuda militar.

De hecho, el Congreso votó a favor de financiar un contra ataque contra un Ejército de 20.000 guerrilleros en la selva amazónica. Esto lo hicimos solos, sin el apoyo de nuestros aliados europeos. La Unión Europea no respalda una implicación nuestra de esta naturaleza en Colombia. Y porque hemos votado a favor de conceder aproximadamente US \$ 1.000 millones

al Ejército colombiano, no hay muchos otros donantes que quieran verse asociados con este tipo de ayuda.

La legisladora también afirmó que si bien el Plan Colombia fue inicialmente concebido por Pastrana como un paquete de ayuda multinacional, luego se convirtió en una nueva operación militar de los Estados Unidos que será rechazada por los presidentes de los doce países latinoamericanos que se reunirán por vez primera en una cumbre histórica en Brasilia, los primeros días de septiembre de 2000.

Si bien no era el tema pretendido de la reunión, los líderes resolvieron oponerse al paquete de ayuda estadounidense. El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, habló en contra del Plan; el de Venezuela, Hugo Chávez, también. En Ecuador creen que decenas de miles de refugiados van a cruzar la frontera a causa de la violencia que este plan generará. Esto es lo que los vecinos de Colombia piensan del Plan [comentó Cynthia McKinney].

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on Latin América, denunciaron la decisión de Clinton de renunciar a las cláusulas sobre la defensa de los derechos humanos impuestas por el Congreso como condición para la entrega de la ayuda.

Los grupos de derechos humanos esperaban que poniendo estas condiciones a la ayuda, Colombia se vería obligada a optar entre la moderna maquinaria armamentística y la guerra sucia de asesinatos en la que está envuelta en la actualidad. Me ha decepcionado enormemente el hecho de que la administración Clinton haya sacado una vez más a los derechos humanos de la mesa de negociaciones. Ahora no existe incentivo alguno para que Colombia reforme su Ejército y abandone su estrategia paramilitar.

También aseguró que el “Push into southern Colombia” (Golpe en el sur de Colombia: primera etapa del Plan), viola las Convenciones de Ginebra, las cuales prohíben el desplazamiento forzoso de la población civil como táctica de guerra.

En el mundo, tan solo el Congo cuenta con más población desplazada que Colombia. En un foro recientemente auspiciado por mi oficina, me enteré con bastante tristeza de que la gran mayoría de los desplazados son afrolatinos. Dos terceras partes son menores de edad. Solo uno de cada ocho tienen acceso a la educación. Solamente uno de cada tres tiene acceso a la atención sanitaria. Estos pobres niños sufren el abandono del Estado colombiano y la indiferencia de los congresistas de Washington.

Además aseguró que el Plan, no solo es inmoral, sino que no es nada práctico y se torna ineficaz. “Fumigar productos químicos sobre los campesinos del tercer mundo no es una manera eficaz de disuadir a la gente en los Estados Unidos de que no consuman cocaína”, indicó.

La parlamentaria también cuestionó la farsa puesta de manifiesto por la justicia norteamericana cuando mantuvo detenido solo cinco meses al coronel estadounidense James Hiatt y su esposa, quienes habían traficado cocaína de Colombia a Estados Unidos, cuando en 1999 aquel estaba encargado de supervisar las operaciones antidrogas del Comando Sur en Bogotá:

Ni siquiera nosotros somos inmunes al señuelo del dinero fácil y rápido de la cocaína, como se ha dejado claro de manera vergonzosa recientemente. ¿Cómo puede olvidarse al coronel James Hiatt, practicando el contrabando de cocaína y el lavado de dinero con su esposa mientras estaba encargado de supervisar las operaciones antidrogas del Comando Sur de los Estados Unidos en Bogotá? ¿Cómo pudo este narco zafarse con cinco meses de cárcel cuando hoy hay más afroamericanos en la cárcel que en el instituto [colegio]?

Además afirmó que mientras Estados Unidos está a punto de implementar un plan para fumigar productos químicos sobre el campesinado de subsistencia de los países del tercer mundo y ametrallarles desde helicópteros, el gobierno colombiano permite a los grupos paramilitares que los masacren.

Hay una cosa segura en este plan: no es para el control del consumo de drogas y no ayudará a mis amigos que están enganchados. Preferiría tener un informe verídico de la CIA (Central de Inteligencia Americana) sobre cómo el crack (droga sintética) llegó a inundar cada comunidad de color en América y cómo afecta a cada familia negra. Decir la verdad sobre las relaciones entre las agencias federales, los bancos multinacionales norteamericanos y las élites de este país y del extranjero servirá más para erradicar el azote de las drogas en América que el propuesto Plan Colombia.

Este testimonio da cuenta que las críticas al Plan no solo llegan desde los grupos guerrilleros o la extrema izquierda colombiana como han señalado algunos de los defensores. También es rechazado por congresistas norteamericanos, gobiernos europeos y latinoamericanos, y distintos analistas colombianos para los cuales significará una vietnamización de la región. El analista político Antonio Caballero en la revista colombiana *Semana*, hizo un peculiar análisis sobre la intervención estadounidense en Colombia. “Esto no es Vietnam, aseguró Clinton. Luego, sí lo es. Cuando un presidente de los Estados Unidos niega algo, se puede tener la certeza de que es cierto. (No tuve sexo con esa mujer, dijo el mismo Clinton sobre sus relaciones genito-bucales con Mónica Lewinsky). Mientras Andrés Pastrana sea presidente no habrá intervención militar extranjera en Colombia, aseguró Pastrana. ¿No la habrá? Ya la hay”, comenta Caballero, y añade que en el mismo momento en que él presidente colombiano decía eso:

El Pentágono norteamericano le contaba al diario *The Miami Herald* que el general Keith M. Huber del Comando Sur había sido nombrado para supervisar la implementación de la parte militar del Plan Colombia. Y aquí hay ya, desde hace meses, años, centenares de asesores militares de los Estados Unidos.

¿Qué fue Vietnam? Para empezar, fue una mentira de un presidente de los Estados Unidos. Esto no es Corea, aseguró John Kennedy cuando ya los asesores militares en Vietnam rondaban el millar. A continuación, fue una incesante, aunque siempre insuficiente, escalada de la ayuda militar (la palabra escalada se inventó entonces), que llegó a alcanzar el medio millón

de soldados con el paso de los años, pero no sirvió para ganar la guerra, sino solo para prolongarla. El presidente survietnamita Ngo din Diem quiso suspenderla para entrar a negociar: lo asesinó la CIA [Mientras Ngo din Diem sea presidente].

Vietnam quedó deshecho. La guerra produjo dos millones de muertos, tres millones de mutilados, tres millones de hectáreas de bosques del sur del país fueron arrasadas por el Agente Naranja una combinación de herbicidas tóxicos fumigados por la Fuerza Aérea norteamericana, una economía quebrada. Y en el poder, las guerrillas comunistas que Estados Unidos quería eliminar.

Si hoy los vecinos de Colombia se preocupan por las consecuencias del Plan Colombia que con tan babosa zalamería agradece la Colombia oficial, es porque recuerdan cuáles fueron las consecuencias del Plan Vietnam para los vecinos del ayudado Vietnam. Tailandia, Laos, Birmania, sometidos a eternas juntas militares de ultraderecha y entregados al comercio de la droga y a la prostitución infantil para turistas occidentales. Camboya: No habrá intervención en Camboya, aseguraba el presidente Nixon mientras caían sobre Camboya las bombas norteamericanas que en cuatro años iban a transformar a la pequeña guerrilla selvática de Pol Pot en una fuerza de medio millón de hombres que procedió a adueñarse del país y asesinar a la tercera parte de la población que había sobrevivido a la intervención extranjera: esa intervención que, sin haber ocurrido (fue una guerra secreta de Nixon y de su secretario Henry Kissinger), había dejado dos millones de muertos. Y la secuela de guerras regionales: Vietnam-Camboya, Vietnam-China. En fin: Vietnam fue eso. Un crimen de los Estados Unidos. Una derrota de los Estados Unidos. Y una catástrofe para toda el Asia suroccidental [arguye Caballero].

El argentino Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, expresa que una eventual intervención de Estados Unidos en Colombia “incendiaría el horizonte en América Latina a fin y comienzo de siglo”.

Julio 22 de 2000 (sábado). En el país de las FARC. Desde 1998 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno

de Andrés Pastrana llevan adelante los diálogos de paz en una zona desmilitarizada de 42.000 km² cedida a la guerrilla y ubicada en el suroriente del país. Sin embargo, desde mayo de 2000 aumentó el peligro de que se quiebren los diálogos, y la puesta en marcha del Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos, hacen temer por una profundización de la guerra. En sus treinta y seis años las FARC han construido un Ejército con gran movilidad, capacidad de reacción y poder que cuenta con 15.000 efectivos, pero ahora en la zona de despeje se encuentran ante el desafío de ser gobierno y administrar la justicia en una región que había sido abandonada por el Estado central, cuyo pueblo principal es San Vicente del Caguán, en el departamento amazónico del Caquetá.

San Vicente del Caguán se caracteriza por sus bares oscuros donde los ganaderos vestidos al estilo de los vaqueros del lejano oeste toman cerveza y escuchan rancheras. En las calles y carretera se distinguen los camiones que transportan el ganado.

En el tiempo que los rebeldes están en San Vicente, este pueblo amazónico de 40.000 habitantes se constituyó en un experimento de convivencia pacífica. El gobierno y las FARC establecieron que la zona desmilitarizada para las conversaciones de paz sería administrada por la guerrilla y los municipios de la zona seguirían en manos de los alcaldes.

Para las labores ejecutivas conjuntas con la alcaldía, las FARC nombraron al comandante Mauricio García, quien se muestra orgulloso de haber asfaltado 75 calles en este lapso y tener todo listo para 40 más. “En 60 años de administraciones tradicionales nunca se interesaron en asfaltar las calles. A pocos kilómetros hay una mina de asfalto y los costos para traerlo y colocarlo son mínimos. También se han hecho miles de metros en cunetas, zanjas de desagüe y otras obras civiles necesarias”, indica García.

Jorge Ángel, un ganadero de la zona, dijo que “antes de que la guerrilla asumiera una administración conjunta con la alcaldía las calles de San Vicente eran de barro, pero ahora se puede caminar”.

García informó que las FARC han coordinado una serie de actividades sociales, económicas y culturales con el alcalde de San Vicente.

“Creamos, primero que todo, una cultura de convivencia, de integración y de participación de todos los sectores de la población. Hicimos una reunión, con todos los líderes sociales y barriales del municipio y creamos los comités de gestión”, declara el dirigente guerrillero. Luego de las reuniones se crearon los comités de precios, pesas y medidas, de tránsito y transporte, de salud, de seguridad y de cultura. “El comité de precios se encarga de la defensa del consumidor, el de tránsito ha organizado el tránsito vehicular que era un caos porque el perímetro urbano es muy pequeño para la cantidad de autos, motos y carros con caballo que circulan diariamente”, señala García.

El comité de salud, con el apoyo de organizaciones sociales y religiosas, ha llevado a cabo jornadas de educación en salud y vacunación para prevenir enfermedades tropicales comunes en la región. El comité de cultura se encarga de promover actividades artísticas y culturales en el pueblo. “En cada una de esas instancias que creamos desarrollamos un programa de acción con una serie de actividades dirigidas a buscarles solución a los problemas en esa área, y se nota una participación directa de la comunidad en la toma de decisiones”, dice García. El comité de seguridad tiene a su cargo la policía civil, que está integrada por 30 personas propuestas por la Alcaldía y 30 por las FARC. “Es una policía que ante todo tiene que respetar a las personas antes de reprender y eso ha quedado claro porque se ha dado una formación para eso. Pero al mismo tiempo se mantiene la seguridad de los habitantes”, indica García.

Una comerciante del pueblo destacó el asfaltado y la disminución de la delincuencia en un pueblo que era uno de los más violentos de Colombia. “Antes mínimo había tres o cuatro asesinatos por semana, ahora en un año y medio se habrán dado cinco o seis. Eso se debe al respeto que hay en el pueblo hacia la guerrilla”, afirma.

Consultada sobre si se trata de respeto o de miedo, aseguró que “es lo mismo, pero acá no se ha dado intimidación a la gente. Creo que ellos están experimentando de hacer un buen trabajo acá para que no creamos en lo que dicen las noticias sobre las muertes que causan”. Según García, la policía civil constituye un mecanismo de convivencia pacífica.

“Para nosotros tiene un marcado contenido político porque se está mostrando en la vida práctica que es posible constituir un mecanismo con la participación del gobierno y la insurgencia armada, y convivir en un clima de tolerancia”, arguye.

Periodistas colombianos coinciden en que dentro de la zona desmilitarizada hay un clima de seguridad y distensión. “Uno se siente como protegido por ellos (las FARC) que no quieren que pase nada porque los desprestigiaría. Uno siente mucho más temor viajando hacia San Vicente por tierra, por los retenes del Ejército o la posibilidad de que aparezcan los paramilitares”, dice un periodista que prefiere el anonimato. “Aunque todos sepan muy bien que uno es contrario a toda violencia, que rechaza el hecho de que las FARC secuestren personas y ataquen pueblos utilizando pipetas de gas, solo con reconocer algo bueno puede estar en la mira de los paramilitares”, arguye el periodista.

La llegada de las FARC al pueblo creó temores que se fueron diluyendo con la convivencia. Según García, la forma de romper el hielo con los habitantes fue realizar reuniones en los barrios, “escuchar los diferentes puntos de vista y pedir a la gente que cualquier procedimiento incorrecto de algún guerrillero lo denunciara para establecer responsabilidades y llamarlo al orden”.

Un transportista de la zona señaló que si bien la guerrilla había estado en las zonas aledañas durante mucho tiempo, “otra cosa era tenerla en la ciudad y eso causó muchas dudas en los habitantes. Durante este año y medio hemos aprendido a convivir con ellos y esta zona es una zona de paz donde no hay los enfrentamientos de otras partes. Ojalá algún día todo el país sea una zona de paz”, concluye.

En junio de 2000 los rebeldes anunciaron la promulgación de la Ley 003 que castiga con destitución, multas y hasta la expropiación de bienes a funcionarios corruptos. A fines de abril, las FARC dieron a conocer otras dos leyes, una estableciendo el cobro de un impuesto a personas y empresas cuyo patrimonio supere US \$ 1 millón y otra que establece su propio sistema de justicia en los 130 municipios que controlan en el sur del país. Según analistas, la promulgación de ‘leyes’ es un esfuerzo de las

FARC para que se les otorgue la categoría de ‘fuerza beligerante’ que les permitiría tener el reconocimiento de otros Estados. Según voceros de las FARC, la medida se aplica no solo a los funcionarios gubernamentales, sino también a quienes traten de sobornarlos. Según la ONG Transparencia Internacional, que investiga y combate la corrupción a escala mundial, Colombia es uno de los 20 países más corruptos del mundo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron fundadas en mayo de 1964, a partir de un foco guerrillero compuesto por campesinos asentados en la región de Marquetalia, departamento del Tolima. Luego de ser cercados y bombardeados por más de 10.000 soldados del Ejército quedaron 48 rebeldes vivos bajo la dirección de Manuel Marulanda Vélez, en lo que se conoció como ‘la resistencia de Marquetalia’, que serían los primeros integrantes de las FARC. En sus 36 años, esta fuerza guerrillera enfrentó distintos operativos militares que intentaron exterminarla, como la Operación Colombia, Operación Exterminio, Tenaza, Destructor, y otras que no lograron su objetivo. Aquellos 48 hombres hoy se han convertido en un articulado de 15.000 combatientes organizados en ocho bloques y sesenta frentes guerrilleros a lo largo de todo el país, con un armamento de punta, entre el que se cuenta un arsenal antiaéreo de misiles RPG y SA, de fabricación soviética, que podrían ser utilizados en caso que la guerra al sur lo exija.

Julio 23 de 2000 (domingo). Las historias de Manuel Marulanda. El jefe de las FARC, cuyo verdadero nombre es Pedro Antonio Marín, asumió la actual identidad de Manuel Marulanda Vélez en 1953, en homenaje a un líder obrero de Medellín asesinado en 1930 por agentes del Servicio de Inteligencia.

La propuesta de utilizar ese nombre se la hicieron integrantes del Partido Comunista en el que Marulanda militaba por esa época. “El nombre me parece muy bueno, pero que lo pueda llevar yo no sé, es demasiada responsabilidad. Sin embargo, con tal de que me quiten el apodo de Tirofijo”, dice el líder guerrillero en esa oportunidad. Desde ese momento

su vida estuvo ligada a la actividad clandestina, y en 1964 fundó las FARC, que en la actualidad es el grupo guerrillero más importante de Colombia.

En 1983, las FARC, dirigidas entonces por Marulanda y Jacobo Arenas, establecieron negociaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y fundaron la Unión Patriótica como su expresión política. Sin embargo, tras el asesinato de miles de integrantes y candidatos presidenciales y legislativos de ese grupo político legal por parte de los paramilitares, las tratativas fueron abandonadas y recrudecieron los enfrentamientos entre la guerrilla, el Ejército y los paramilitares. Ahora, 36 años después de la fundación de las FARC, y tras asumir Pastrana la Presidencia del país en 1998, Marulanda volvió a dialogar de paz y a participar en actos públicos dentro de la zona desmilitarizada. A sus 70 años, se ha convertido en el guerrillero más antiguo del mundo, sobreviviente a 50 años de enfrentamientos en uno de los países más violento de la tierra.

Según Marulanda, la guerrilla abandonará el diálogo con el gobierno solo si sus posiciones en la zona desmilitarizada son atacadas. “Tenemos voluntad de paz y solo nos retiraremos de la mesa de diálogo cuando caigan las primeras bombas”, sentencia el líder de las FARC, en Los Pozos, pueblo de la Amazonia donde se llevan adelante los diálogos de paz. También señaló que el proceso de paz “se le volvió una papa caliente” al presidente Andrés Pastrana, “porque los altos mandos militares y el gobierno de Estados Unidos quieren la guerra. Ayer fue el collar-bomba (mató una hacendada en junio de 2000 y habría sido colocado por los servicios de inteligencia con ayuda paramilitar), hoy son las acusaciones contra la zona desmilitarizada, mañana será otra cosa, ya que la presión de los militares y de Washington es muy fuerte”, comenta con énfasis. “Entonces, Pastrana parece distanciarse de un proyecto político democrático”, arguyó el jefe de la guerrilla, conocido popularmente como Tirofijo.

El comandante en jefe del Ejército, Jorge Mora Rangel, aseguró que la zona administrada por la guerrilla en el sur del país “era un campo de concentración de secuestrados”. Marulanda señala que las acusaciones

forman parte de los tantos pretextos que se utilizan “para clausurar la zona desmilitarizada y hasta el diálogo”.

El jefe guerrillero dice sentirse satisfecho por el apoyo que le brindan los habitantes del área a las FARC y puso como ejemplo el acto de lanzamiento del llamado Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, realizado el 29 de abril de 2000 en San Vicente del Caguán. “Hicimos un acto político-cultural con participación de 40.000 personas que terminó en una tremenda rumba (baile) a la que no me dejaron ir por razones de seguridad, sin que se presentara una riña y ninguna persona saliera lesionada”, narra Marulanda, orgulloso del respaldo campesino. Además, comenta que tal vez dentro de algunos años, “si existen condiciones para la actividad política abierta”, la guerrilla pueda realizar un acto en una ciudad grande. “El reto será movilizar 100.000 personas”, aunque precisó que falta aún para ello. “No es momento porque ni siquiera se ha evacuado el primer punto de la agenda común que tenemos con el gobierno, que corresponde al desarrollo económico y generación de empleo”, arguye.

Para Marulanda, con respecto a los temas candentes como el cese al fuego el gobierno se está manejando con evasivas.

Por ejemplo, en este momento está prácticamente paralizada la Mesa y no es nuestra responsabilidad; estamos a la espera de propuestas sobre el canje de prisioneros y el cese de fuego. Los representantes oficiales siempre dicen que ya va a llegar un documento con las propuestas y que lo traerá Camilo Gómez, pero hasta el momento nada ha llegado. Vamos a ver si en las próximas reuniones previstas llegan las tan anunciadas propuestas.

El jefe guerrillero cree que por el momento las posiciones en torno al cese al fuego son difíciles de conciliar, “sobre todo cuando el gobierno no demuestra interés en abordar con seriedad el tema de los paramilitares”. Marulanda expresa mucha inquietud por el tono de los comentarios de algunos generales colombianos luego de conocer que el llamado Plan Colombia, tenía el apoyo estadounidense. “Me preocupa el lenguaje

guerrillista de algunos. Si somos bandidos, bandoleros y secuestradores como dicen quienes nos atacan, ¿para qué dialogar con nosotros?”, afirmó. Para Tirofijo, el Plan Colombia es un programa de guerra, porque impulsa una salida militar al conflicto, “contraria de la que han pedido los países europeos que se pronunciaron en favor de una salida política mediante el diálogo. En el gobierno pesa el hecho de que la paz no es gratis, ya que son necesarias reformas políticas y sociales que no quiere la clase dominante. En el interés del gran capital no está la democratización del país y mucho menos una apertura política y social”, sentencia.

Los cierto es que con la puesta en marcha del Plan Colombia los diálogos corren el riesgo de romperse definitivamente y la visión de Marulanda es un tanto pesimista.

Muy poco espacio le queda a la Mesa de Diálogo, porque cualquier pretensión de buscarle soluciones a los temas de la Agenda Común, choca con los propósitos guerrillistas del Plan Colombia. A nadie le cabe ninguna duda que este plan es contrainsurgente y que a pocos kilómetros del Caguán está la Base Militar de Tres Esquinas, donde 12.000 soldados esperan acuartelados, para actuar no propiamente contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. El esfuerzo que hemos hecho se está perdiendo, porque una vez más la clase dominante colombiana se echa en brazos de la potencia norteamericana. Siempre los gringos han estado detrás de los obstáculos en los intentos para buscar la paz en Colombia.

Para el guerrillero, en las circunstancias actuales es muy poco lo que ofrece el gobierno en la Mesa de Diálogo. “En estas condiciones qué modelo alternativo puede surgir de la Mesa y qué reformas avanzadas y progresistas le darán fuerza y perspectiva a la solución política del conflicto”, concluye Tirofijo.

Julio 24 de 2000 (lunes). Raúl Reyes y los posibles bombardeos a las FARC. Está en la guerrilla hace más de treinta años y actualmente es integrante del Secretariado, máxima instancia de esa organización rebelde,

portavoz de la misma y reconocido como la figura política más importante junto a Manuel Marulanda y Alfonso Cano, es Raúl Reyes.

El dirigente guerrillero expresa que las conversaciones con el gobierno solo prosperarán si el presidente Andrés Pastrana impulsa cambios políticos, económicos y sociales. “Este proceso tiene enemigos muy grandes, pero también enormes posibilidades en la medida que el gobierno colombiano tenga la decisión de resolver los problemas sociales que están en las raíces del conflicto”, expresó. Al hablar de las posibilidades de que se llegue a un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno Reyes comenta:

Las conversaciones que venimos adelantando con el gobierno tienen inmensas posibilidades en la medida de que haya de parte de la clase política gobernante la decisión, no solamente de mantener los diálogos, sino de entrar a resolver los problemas que la gente reclama. Es decir, los problemas de la injusticia social, del desempleo, de la carencia de vivienda, de salud, educación, vías de comunicación. Que se haga una reforma agraria auténtica, no solamente para entregarles la tierra a los campesinos sino para prestarles asistencia técnica, darles créditos, y así se sientan estimulados para producir y trabajar en el campo. La paz es posible si logramos todo esto, y los diálogos van a ser un descanso para la gente en la medida que ayudan a solucionar sus problemas.

Alcanzar ese objetivo se ve como bastante utópico si se tiene en cuenta que el gobierno de Andrés Pastrana no va modificar su política económica porque se lo pida la guerrilla.

Es verdad, y también hay otros aspectos como la represión indiscriminada contra todo el movimiento popular, por parte del Ejército, la policía y el paramilitarismo. Por eso tenemos más de 2 millones de desplazados internos y centenares de colombianos en el exilio porque están amenazados de muerte. Hay periodistas que estuvieron en esta zona informando sobre el estado de las conversaciones y por eso fueron sindicados de ser amigos de la guerrilla, por lo que recibieron amenazas y fueron obligados al exilio. En Colombia no hay libertades para que la gente pueda trabajar y mucho

menos hacer oposición al régimen político. Y si no se resuelve eso no va a ser fácil alcanzar la paz.

El jefe de uno de los retenes militares ubicados antes de llegar a la zona de distensión que pidió anonimato porque no tenía permiso para realizar declaraciones, dijo que la paz solo llegará con el Plan Colombia porque “la paz es cuestión de plata”. “Con ese dinero nuestros soldados podrán tener mejores instrumentos, vestimentas y estarán más preparados para lograr la paz”, añadió el militar. Pero Raúl Reyes asegura que si el régimen del presidente Andrés Pastrana lleva adelante la idea militar del Plan Colombia, el país tendrá como respuesta el peor conflicto de su historia.

Tendrán el peor conflicto que este país haya visto. Y nosotros estamos preparados para él. Creen que el Plan acabará con nosotros, pero estamos luchando hace 36 años, y no van a derrotarnos. Quien está llamando a las partes para la confrontación, reduciendo el diálogo, es el gobierno, al negociar el Plan Colombia con Estados Unidos. La paz está en riesgo, y el gobierno no quiere la paz sino nuestra rendición. Están engañados si piensan que vamos a repetir lo que hizo el M19 (Movimiento 19 de Abril, grupo que entregó las armas en 1990). Las FARC están preparadas física, psicológica y moralmente para hacerle frente a cualquier Ejército ajeno que pise nuestro suelo.

No obstante, admite que “es posible un acuerdo haciendo cesar los choques armados directos entre guerrilleros y soldados, por un plazo definido. Eso sería un paso hacia la paz, pero no significa paz. Para ello, el gobierno debe renunciar al Plan Colombia y actuar radicalmente contra los paramilitares”.

Los Estados Unidos dicen que el Plan Colombia fue creado para enfrentar el narcotráfico, pero en la realidad es una intervención gringa en América Latina. No se dirige contra las FARC, sino contra la soberanía de Colombia. Estamos avisando a todos los que viven cerca de cuarteles del Ejército y la Policía que se vayan a otros sitios, porque esos serán nuestros blancos prioritarios al iniciarse el Plan Colombia [alerta el dirigente guerrillero].

Por sus palabras, las FARC han asumido que con el Plan se viene una escalada del conflicto.

Independientemente del gobierno que tengamos en Colombia, nosotros apostamos a los diálogos porque entendemos que mediante ese mecanismo se puede conseguir la solución a los problemas de todos los colombianos. Pero consideramos que si no hay de parte del gobierno el interés de invertir recursos en la paz, no vamos a avanzar mucho en ese objetivo. Colombia está en este momento ante dos alternativas, lograr la paz con justicia social, no la paz de la rendición o de la claudicación (porque las FARC no plantean ni la rendición ni la claudicación), o ir a una guerra de impredecibles consecuencias que es la que queremos evitar.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos aplique en Colombia una estrategia semejante a la empleada en Yugoslavia, utilizando su tecnología a partir de las bases norteamericanas en la región con bombardeos selectivos a campamentos guerrilleros, Reyes comenta que “esa alta tecnología que nos muestran, puede que dé resultados en Kosovo, o en Panamá, pero en esta selva y estas montañas de Los Andes pierde mucha efectividad, y cuando los combatientes se sienten seguros de la justeza, entonces la lucha es el camino, y no importa si nos empujan por el camino de las armas, a pesar de que quisiéramos que sea por el diálogo y los acuerdos nacionales como encontremos las soluciones”.

Cuando le remarco la posibilidad de que los campamentos guerrilleros puedan ser objetivo de misiles o bombardeos como en Kosovo, insiste que no es posible en la geografía colombiana. En todo caso le dejo la duda planteada. Al consultarlo si las FARC siguen teniendo como su meta principal la conquista del socialismo, enseguida enfatiza que sí.

Pero nosotros de ninguna manera podemos pensar que eso se va a desarrollar ahora. Nosotros lo que planteamos, ante todo, es que haya espacios de participación, que la gente tenga el derecho a protestar, a reclamar por sus problemas, porque eso se podría llamar democracia. Pero hoy en Colombia hay democracia para los que tienen todo. Eso es lo que ellos llaman Estado

de derecho y defensa de la democracia, pero es la democracia de ellos, y lo que hay es la represión y la intolerancia hacia otros sectores. Lo primero es lograr la paz con justicia social, después vendrán otras etapas distintas. Estamos planteando participación, no para las FARC sino para el pueblo en general.

Con la aprobación del Plan Colombia parece que Estados Unidos no apuesta mucho a la paz y el discurso de la paz parece estar vacío de contenido cuando todos los hechos apuntan a la guerra.

Este es un plan de guerra, no contra las FARC, sino contra el pueblo colombiano. Es que los campesinos que están en las regiones donde están las plantaciones de coca o amapola no son guerrilleros, ni narcotraficantes sino trabajadores de la tierra. Pero esos trabajadores que cultivan la coca o la amapola generan también trabajo. De ellos vive indirectamente mucha gente. Desde el dueño de la tienda, el dueño del almacén, el que vende la gasolina, el transportador. Producto de esos recursos educan a sus hijos, luego los maestros reciben pagos de ahí. La misma iglesia católica y otras iglesias de dónde cobran los diezmos o las limosnas, pues de los recursos de esos dineros. De dónde recibe el propio Estado, el propio gobierno el pago de los impuestos, de esos dineros. Entonces los planes de fumigación como están concebidos dentro del Plan vienen a destruir la economía del país, y provocar más necesidades a los trabajadores del campo, y a todas las personas que tienen pequeños negocios para subsistir en esas apartadas regiones del país. Rechazamos el Plan en la parte represiva, pero no estamos en contra de la parte social, y los recursos deberían asignarse a resolver los problemas sociales. En la medida que hay una mesa de diálogo, ésta debería ser la encargada de controlar los recursos de cualquier ayuda de la comunidad internacional. Así se evitaría que la mayoría de recursos vayan a fortalecer las operaciones militares del Ejército contra el pueblo o al bolsillo de cuatro o cinco corruptos.

Hay una tesis según la cual la Base de Manta cumplirá un importante papel en la implementación del Plan Colombia con lo que puede convertirse en objetivo militar de las FARC.

En la parte represiva del Plan Colombia está contemplado todo eso que tiene que ver con agredir al pueblo colombiano, pero nosotros no nos vamos a quedar sentados. En lo que tiene que ver con la Base de Manta, hace poco oíamos las declaraciones de representantes del gobierno ecuatoriano y de la misma embajadora de Estados Unidos en Ecuador diciendo que desde Manta no iban a realizar ningún tipo de operaciones contra la insurgencia colombiana. Sabemos que en Ecuador hay importantes sectores que se oponen a que su territorio sea utilizado por una potencia extranjera para agredir a un país hermano, y nosotros agradecemos muchos esa posición. Sabemos que la mayoría de los ecuatorianos como lo han demostrado las propias encuestas no está de acuerdo en que su país, que también tiene muchas necesidades producto del modelo neoliberal, la dolarización de la economía, la deuda externa, y las desigualdades sociales, se meta en un conflicto interno que no es de ellos sino de los colombianos.

Reyes descarta enfáticamente que su organización vaya a actuar militarmente en Ecuador y en cualquiera de los países vecinos, pero exige reciprocidad.

Las FARC tienen una política de fronteras que define la no intervención en territorios fuera de Colombia. En ese sentido hemos hablado con autoridades del Ecuador, de Venezuela y Panamá para informarles que no tenemos como política intervenir militarmente fuera de nuestro territorio. También se lo hicimos saber a peruanos y brasileños. Nuestro conflicto es interno, las FARC se alzaron contra el Estado colombiano y no contra otro Estado. Les hemos pedido a los gobiernos y pueblos vecinos de Colombia una reciprocidad en ese sentido, para que ellos tampoco intervengan con su fuerza en un problema de Colombia. Si lo hacen nos estarían obligando a actuar de otra manera y no tendría sentido.

La propuesta política inmediata de las FARC hacia los colombianos se resume en la organización del Movimiento Bolivariano.

Este tiene el fin de rescatar el pensamiento de Simón Bolívar en beneficio del pueblo colombiano. El pensamiento bolivariano tiene hoy plena vigencia, sobre todo en los países andinos. Nos estimula mucho lo que está pasan-

do en Venezuela, que el presidente Chávez con un apoyo muy importante de su pueblo quiere también rescatar ese pensamiento. En el propio Ecuador hay unos patriotas muy interesados en continuar la obra bolivariana y ya lo han demostrado en el levantamiento de enero. En Bolivia lo mismo, en el propio Perú. En la medida que podamos desarrollar ese pensamiento y contribuir a concretarlo en organización y conducción, vamos a conseguir la integración y la emancipación de nuestros pueblos.

Al lanzamiento del Movimiento Bolivariano en San Vicente del Caguán concurrieron miles de personas de los alrededores e incluso de municipios situados fuera de la zona de despeje, pero el desafío mayor es la organización en el resto del país.

En su nacimiento los militantes deben ser clandestinos para que no sean víctimas del terrorismo de Estado y no ocurra lo que pasó con la Unión Patriótica, A Luchar, el Partido Comunista y tantas organizaciones sindicales y sociales. Pero el movimiento es público y busca disputarle en la plaza pública a los partidos Liberal y Conservador, el favor de las masas populares, y de la población colombiana en su conjunto. Intenta dar la posibilidad a los colombianos de que puedan pertenecer a una agrupación política distinta, comprometida con los cambios que requiere el país. En su parte inicial está creando las bases de apoyo, está estructurándose hasta que tenga tanta fuerza en las ciudades, en las universidades, en los centros de producción, en los sindicatos, en los no sindicalizados, en la docencia, para que en cierto momento pueda hacer una gran concentración en la capital de la República o en las principales ciudades del país, y a partir de ese momento deje de ser clandestino y se transforme en un movimiento político abierto, respetado por las autoridades colombianas y protegido por sus militantes y simpatizantes.

Desde esa perspectiva se podría pensar que existe la posibilidad de que las FARC participen en próximas elecciones. “En el futuro si existen las condiciones necesarias para que se participe en las elecciones, el Movimiento debe hacerlo porque eso es parte del trabajo político al lado de las luchas del pueblo colombiano”, dice. Pero Reyes asegura que la guerrilla no piensa diluirse en el Movimiento Bolivariano.

Las FARC como Ejército del Pueblo sigue siendo el Ejército y lo que ha hecho es proponerle a los colombianos una opción organizativa mediante el Movimiento Bolivariano. Hasta hoy el Movimiento tiene como su máxima dirigencia al Estado Mayor Central de las FARC, con el Secretariado a su cabeza. Y ha designado a uno de sus cuadros principales, Alfonso Cano, para que sea el coordinador. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Movimiento sea tan grande y tenga tantos cuadros que pueda tener su propia dirección y pueda tener vida independiente.

Cayó el muro de Berlín y la mayoría de los partidos comunistas de América Latina se quebraron porque se terminó la Unión Soviética. Fue como si a los católicos se les terminara Dios y parecía entonces que ya no tenían razón de ser, pero Reyes señala que ese hecho no afectó a las FARC.

El muro de Berlín cayó y fracasó el modelo socialista soviético porque sus dirigentes lo traicionaron y los pueblos de allá no tuvieron la capacidad de levantarse a defender su obra. Pero con ese derrumbe no desapareció el hambre, ni la miseria, ni la represión, ni el imperialismo que se hizo más violento porque se considera el rey y dueño del mundo e implanta por la fuerza, el modelo neoliberal que ha generado más pobreza. Las FARC han tenido desde el momento que surgen como organización política vida propia. No dependió de los soviéticos, ni de los cubanos, ni de los vietnamitas, ni de los chinos. Ha ido creando en sus 36 años de existencia, sus propias condiciones de vida y construyó internamente todo lo que requiere una organización para la lucha revolucionaria. Por eso cuando se derrumba el campo socialista, las FARC continúan su lucha, y en la medida que el partido comunista tiene problemas porque dependía de los soviéticos, nosotros no los tenemos.

A pesar de los cambios producidos en el mundo, las FARC siguen reivindicándose marxistas y no se han planteado reformular esa definición. “Las FARC siguen siendo marxista-leninistas pero tienen claro que esa definición no puede ser un dogma o una religión, sino una guía para la lucha, la acción y la organización del pueblo. Pero nosotros no copiamos ningún modelo porque Colombia no es Rusia, China, Vietnam o Cuba.

Esas son experiencias completamente distintas, son otras historias, y se produjeron en otro momento histórico”, comenta.

En otros procesos latinoamericanos se notaba una mayor vinculación entre la propuesta de la guerrilla y la de diferentes sectores sociales como los sindicatos, por ejemplo. En Colombia no parece ser así, aunque tampoco el movimiento sindical y los movimientos sociales parecen tener importancia.

Se ha dado cierta manipulación a través de algunos medios de comunicación que quieren mostrarnos alejados del pueblo. Es innegable que el movimiento sindical colombiano atraviesa una crisis terrible, no está unificado, y en él se han apoltronado unos corruptos que han utilizado el movimiento sindical para subsistir. Aunque hay un sector importante de las bases que son luchadores y pelean por mejores condiciones de vida. Pero la demostración de la relación estrecha que mantenemos con la población colombiana se ha visto en las audiencias públicas convocadas para que brinden aportes a los temas discutidos por la mesa de diálogo. A las audiencias llega gente de todos los rincones del país: trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, representantes del movimiento de mujeres, de los jóvenes, de las negritudes, de los campesinos. Llegan porque hay un poder de convocatoria de las FARC y encuentran en la mesa de las audiencias públicas un escenario para denunciar las políticas gubernamentales y hacer propuestas.

Según Raúl Reyes, las FARC no piensan a Colombia como una expresión aislada dentro de las luchas sociales y políticas de América Latina.

Hay una crisis muy grande en nuestros países como consecuencia de la aplicación del modelo neoliberal. La famosa apertura económica ha hecho más difícil la vida de nuestros pueblos porque nos impusieron un modelo económico que no correspondía con nuestro desarrollo social. Dejamos de ser exportadores de nuestros productos y nos convertimos en importadores de lo que nosotros podemos producir. Pero ese hecho ha forzado la protesta. Es lo que se ve en los indígenas y otros sectores del Ecuador, en los campesinos de Brasil, en México y en otros países. En Venezuela la gente está muy esperanzada en lo que pueda hacer Chávez. En Uruguay se da un fenómeno importante con el Frente Amplio que ha podido nuclear a

distintas tendencias progresistas y de izquierda. Son procesos que apuntan en dirección de una globalización de las luchas.

A veces parece que las FARC no tienen en cuenta que las luchas sociales son diferentes de acuerdo a los países y se mezclan muchos factores. Parece que todo lo explicaran con la lucha de clases cuando los procesos sociales son mucho más ricos e influyen factores culturales, étnicos y otro tipo de hechos que no se pueden explicar tan linealmente.

Nosotros explicamos nuestra razón de ser dentro de la lucha de clases y tal vez hemos puesto demasiado énfasis en eso porque es el motor principal, pero eso no quiere decir que la lucha sea homogénea y que no tengamos en cuenta diversos factores que tienen mucho peso en la emancipación de un pueblo. También hay distintas maneras de luchar para alcanzar ese objetivo. En Colombia es decisivo lo que puede hacer el movimiento armado. Pero todas las formas de lucha son válidas y aunque somos un movimiento guerrillero, no podemos decirle a cada pueblo lo que tiene que hacer. Somos respetuosos de las formas que busquen para lograr los cambios. Cada pueblo hace su lucha de acuerdo a las condiciones que tiene, por eso nosotros no tenemos el interés de ahondar en los problemas particulares de cada país, pero sí podemos decir que en la crisis que hoy se vive, tarde o temprano se deben globalizar las luchas.

La dirigencia de las FARC ha señalado que podía aceptar que los jefes del Ejército participaran en los diálogos aunque descartó la presencia del paramilitarismo.

Un elemento de la lucha de nuestros pueblos en esta nueva etapa es que ciertos sectores de los ejércitos de nuestros países van entendiendo que no pueden continuar siendo los verdugos de la población, que no pueden seguir defendiendo intereses de los corruptos o del Fondo Monetario Internacional y la banca mundial, o de los gringos. Pero todavía es una minoría. En Colombia hay un sector pensante dentro del Ejército que está cuestionando el papel que le han obligado a cumplir los altos mandos militares basados en la doctrina de la seguridad nacional. Esa tendencia se dio primero en Venezuela, pero también se dan expresiones de este pensamiento bolivariano

en el Ecuador, en el Perú, en Bolivia, y aquí en Colombia. Lo que pasa es que les toca hacer un trabajo muy sesgado porque si los detectan, mínimo los acusan de traición a la patria y los obligan a salir del Ejército.

La guerrilla ha sido acusada de haber secuestrado niños que supuestamente habrían permanecido retenidos en la zona de despeje, pero Reyes lo desmiente. “Las FARC no secuestran a niños. Cuando en alguna oportunidad fueron retenidos niños junto a sus padres, enseguida fueron liberados. Las retenciones, en la medida que avancemos hacia la paz y hacia un cese al fuego, tienen que terminarse”. Las FARC también fueron cuestionadas por la violación del derecho internacional humanitario, al utilizar tanques de gas en el ataque a cuarteles de policía y el Ejército ubicados en zonas habitadas por población civil.

En la guerra a veces se cometen errores terribles como el que cometió la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando en su guerra de Kosovo disparó un misil contra un tren de civiles o la Embajada China. Esa es la guerra, por eso tenemos que buscar de cualquier manera llegar a la paz. Solo así se puede terminar con los errores y los horrores. Pero cuando nos cuestionan a nosotros, se olvidan de cuestionar las matanzas realizadas por los paramilitares con la participación del Ejército, y esos no son errores sino hechos premeditados.

Julio 27 de 2000 (martes). Las FARC descubren la sociedad civil. Sobre cada punto de los que serán discutidos durante el diálogo entre el gobierno y las FARC, los distintos sectores de la sociedad pueden presentar propuestas directas vía fax, correo electrónico y carta o mediante la participación directa en las Audiencias Públicas convocadas por la Comisión Temática de apoyo a los diálogos, que se llevan a cabo en Los Pozos. El primer punto de la agenda de diálogo que se venía discutiendo hasta septiembre cuando los diálogos quedaron en suspenso, es “Desarrollo económico y generación de empleo”, sobre el que diferentes sectores están aportando propuestas en distintas audiencias. Participaron los trabajadores sindicalizados y empresarios, el Movimiento Indígena

y Afrocolombiano, los delegados internacionales que aportaron sobre el efecto de la substitución de las plantaciones de coca en el empleo, el Movimiento de Mujeres, la juventud y movimientos estudiantiles, el sector informal de la economía; el de la salud; empresarios y microempresarios que lograron sobrevivir a la crisis económica y los que quebraron, los trabajadores de la cultura, representantes del sector energético y minero y las ONG. Todas las propuestas reunidas en la audiencia son analizadas y ordenadas por el Comité Temático, en el que participan diez representantes del gobierno y diez comandantes de la guerrilla, y son entregadas para que las discutan en la Mesa de Diálogo integrada por cinco miembros del Secretariado de las FARC y cinco gubernamentales. “Todas las audiencias nos han aportado mucho y nos han demostrado que la sociedad colombiana quiere participar en los diálogos de paz para que después no les vendan una paz mentirosa”, asegura la comandante Mariana Páez, integrante del Comité Temático por la guerrilla. Una de las audiencias que tuvo mayor repercusión se realizó el 25 de junio con la participación del Movimiento de Mujeres de Colombia con representantes de organizaciones llegadas de todo el país, lo que sorprendió a la guerrillera que no imaginaba la capacidad de organización del Movimiento de Mujeres colombiano.

Fue la primera vez que nosotros tuvimos un vínculo directo con el Movimiento de Mujeres de Colombia y nos enseñó mucho, no solo por sus propuestas sino por la capacidad de respuesta que nos demostraron. Pero también ellas se sorprendieron ante nuestra apertura y todas nos dimos cuenta de que en las organizaciones de mujeres había un desconocimiento mutuo, que no imaginaban cómo éramos las mujeres guerrilleras, y de nosotras que tampoco habíamos dado importancia a ese movimiento.

Para Páez un hecho importante de esa audiencia es haber permitido un acercamiento, un intercambio y un conocimiento mutuo. “Creo que lo raro para ellas fue descubrir que detrás de este fusil, de estas fornituras, de este uniforme existe una mujer como cualquier otra, que sueña, que

ama, que es vanidosa, que le gusta que la consientan, y que busca hacer escuchar su voz”, señala Páez.

También asegura que desde la guerrilla pudieron percibir que el Movimiento de Mujeres en Colombia es muy fuerte, que tiene raíces profundas en todas las regiones del país, y que es importante comenzar a crear más canales y vínculos, algo que no tenían claro hasta la audiencia.

Es imprescindible crear puntos de acuerdo como se manifestaron en la audiencia, donde las mujeres nos comprometimos a fortalecer este proceso de diálogo, a escuchar nuestros puntos de vista, a luchar por conseguir la paz. De pronto muchas no están de acuerdo con la propuesta política total de las FARC, pero sí llegamos al acuerdo que por medio de la guerra no vamos a conseguir nada. Entonces nos comprometimos a crear desde las mujeres un ambiente más democrático en este país.

Para Mariana Páez no deja de ser una novedad hablar de las cuestiones de género ya que recién ahora las FARC se están dando cuenta que las luchas sociales no se pueden reducir exclusivamente a la lucha de clases, sino que son mucho más complejas.

Al interior de las FARC existe la formación general de los combatientes, que es política e ideológica, que busca crear mayor conciencia. Y en ese proceso se recalca mucho la igualdad en general, donde está la igualdad entre el hombre y la mujer. Aquí no se acepta ningún tipo de discriminación. En las filas nuestras hay indios, hay negros, hay bajitos, hay grandes, hay gordos, hay todo tipo de personas que pueden de pronto en la vida social normal ser víctimas de discriminación, pero en las FARC no.

La guerrillera asegura que la lucha específica del Movimiento de Mujeres no había sido tratada.

Las luchas que se están llevando a nivel del sector de mujeres en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de género nosotros en sí como tal no las hemos tratado porque toda lucha particular la tratamos desde la perspectiva de la lucha de clases. Entonces estas audiencias nos han ense-

ñado mucho y abrieron la mirada. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrada al nuevo vocabulario que hay como parte de la lucha de género, pero no estoy cerrada a eso.

A raíz de la audiencia, el Movimiento de Mujeres de Colombia creó una coordinación nacional que mantiene vinculadas a la gran mayoría de organizaciones y se estableció un compromiso de seguir aportando a los diálogos. “Lo que se busca con las audiencias es la participación de la sociedad con sus propuestas. Por eso en el sector minero y energético la idea es que participen los representantes de las transnacionales, de las empresas estatales que todavía no han sido privatizadas y los trabajadores, para que cada sector presente propuestas”, argumenta Páez.

Para los integrantes del Comité Temático es fundamental:

Que el gobierno ponga más empeño en brindar condiciones para que los representantes de distintos sectores que quieren participar en las audiencias puedan trasladarse a la región del Caguán y tengan condiciones para hospedarse. Nosotros creemos que el gobierno debe garantizar la participación de todos los sectores como se comprometió al iniciar el diálogo, porque nosotros no tenemos condiciones de correr con todos los gastos. Las FARC han brindado la alimentación pero es necesario que el gobierno aporte para el traslado de la gente porque los viajes desde distintos puntos del país hasta el Caguán cuestan dinero y mucha gente no tiene como pagárselos [asegura la guerrillera].

Sobre el punto de “Desarrollo económico y generación de empleo”, las FARC también han presentado su propuesta para ser discutida que se resume en modificar el modelo económico con una mayor protección a la industria nacional frente a la competencia extranjera; revitalizar los sectores estratégicos de la economía con una mayor y mejor participación estatal; estimular a la pequeña y mediana industria con exoneración de impuestos y otras facilidades para generar empleo; y fortalecer el campo mediante una reforma agraria y crediticia para los campesinos.

Para Mariana Páez, de la participación de la sociedad dependerá el futuro de los diálogos. “Estos van a prosperar en la medida que los sectores se vinculen con los mismos y participen para que ya no se puedan echar atrás. Pero si los sectores sociales no apoyan el proceso es muy fácil que se rompa porque tiene enemigos muy fuertes, empezando por Estados Unidos”, culminó. Por su parte, los partidos políticos integrantes del Grupo de Apoyo a la Mesa de Negociación y Paz, reunidos el 3 de agosto de 2000 en San Vicente del Caguán defendieron el proceso de paz y respaldaron la solución política del conflicto. Participaron en la reunión Camilo Gómez Alzate, Alto Comisionado para la Paz; Horacio Serpa, del Partido Liberal; Noemí Sanín, del Movimiento Sí Colombia; Omar Yepes, del Partido Conservador; Jaime Caycedo, del Partido Comunista; los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Mario Uribe y Basilio Villamizar; Manuel Marulanda Vélez, Iván Márquez y Raúl Reyes por las FARC; y Alfonso Cano, por el Movimiento Bolivariano.

En el comunicado emitido destacaron que coincidían en que:

La solución política negociada es el camino adecuado para lograr la reconciliación de los colombianos y solucionar el conflicto que atraviesa el país desde hace más de tres décadas. En las etapas transcurridas en el actual proceso de diálogos y negociaciones se han logrado avances como la consolidación de la confianza entre las partes; la definición de una agenda; la vinculación de la comunidad internacional, que ha dado su pleno respaldo al proceso; los acuerdos sobre la metodología para avanzar en la negociación y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso a través de las audiencias públicas.

También acordaron que estas reuniones se siguieran realizando periódicamente en el futuro para seguir fortaleciendo el proceso de paz. Coincidieron, ante la situación social y económica por la que atraviesa el país, en la importancia de alcanzar acuerdos concretos acerca de los temas que se encuentran en estudio por parte de la Mesa de Negociación y Diálogo como son el crecimiento económico y empleo, el análisis de las

propuestas sobre cese de fuegos y hostilidades y en la generación de los hechos de paz que los colombianos anhelan.

Los máximos dirigentes de las distintas fuerzas políticas de Colombia afirmaron, además, que es de la mayor importancia avanzar en los compromisos y acuerdos que permitan el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Se ratificó el respaldo a los diferentes mecanismos de participación creados por la Mesa de Negociación y Diálogo para impulsar el concurso de los colombianos en el proceso de paz. Así mismo se ratificó el respaldo a los acuerdos que sobre diferentes temas ha suscrito la Mesa en la búsqueda de soluciones al conflicto. Coincidieron en que pese a las dificultades y problemas, era necesario “construir un futuro en el que quepa la esperanza de una Colombia en paz con justicia social”. Los colombianos esperan que de las palabras se pase a las acciones concretas para lograr la paz.

En julio de 2000, en el diario *El Mundo* de Madrid, el sociólogo y politólogo norteamericano James Petras, hizo un análisis muy peculiar al comparar los procesos de paz que se dieron en Centroamérica en la década del noventa y el que se lleva a cabo entre el gobierno de Colombia y las FARC.

La historia de los anteriores programas militares norteamericanos en América Central pone de manifiesto unas pautas de intervención destructiva generalizada, seguida del abandono político. En América Central, Washington ha volcado más de US \$ 15.000 millones de ayuda militar en favor de la Contra de Nicaragua y de los Ejércitos guatemalteco y salvadoreño, que han asesinado a más de 75.000 salvadoreños, 50.000 nicaragüenses y 200.000 guatemaltecos. Posteriormente, con los así denominados ‘Acuerdos de Paz’, estos países devastados se transformaron en paraíso de especuladores, los pobres campesinos se quedaron sin tierras, los que atropellaban los derechos humanos se mantuvieron en el poder y los oligarcas volvieron a reclamar sus propiedades desde Miami.

Petras también ironiza sobre la posición asumida por la dirigencia guerrillera centroamericana en la nueva coyuntura.

Los antiguos comandantes guerrilleros se adaptaron sin gran esfuerzo a sus nuevos cargos en el Parlamento, llegaban a acuerdos con los políticos de la derecha, se sacaban unos sueldos sustanciosos, vivían protegidos por las alambradas de espino y los altos muros de sus villas, mientras las clases populares se abstienen de participar en los procesos electorales (más del 65% en las recientes elecciones salvadoreñas). La estrategia centroamericana de guerra destructiva, organizaciones guerrilleras y acuerdos de paz que protegen el statu quo neoliberal es el objetivo estratégico de Washington detrás del acuerdo de paz para Colombia. El único problema es que el grupo guerrillero más importante, las FARC, no es un socio complaciente en una solución ‘centroamericana’ orquestada por Washington.

Petras explica esa actitud de la guerrilla colombiana en que ha colocado los temas socioeconómicos como centrales de las negociaciones, entre ellos la reforma agraria; y que ya tienen la experiencia de un acuerdo de paz fallido en la etapa 1984-1990, cuando más de 5.000 activistas y tres candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, a la que respaldaban, fueron asesinados. También cree que “los cabecillas de las FARC y, en particular, su secretario general, Manuel Marulanda, son campesinos (y no profesionales dispuestos a ascender en la escala social, como fue el caso de América Central) y no es probable que se avengan a un arreglo cualquiera que dé continuidad al programa neoliberal de Pastrana respaldado por Washington”.

Además argumenta que las FARC han convertido la región desmilitarizada en la que se celebran las negociaciones de paz en un foro público sin precedentes, “con el fin de debatir las grandes cuestiones socioeconómicas, políticas y culturales que nunca se someten a discusión en el Parlamento colombiano o en el norteamericano”. Los foros de las FARC han atraído a dirigentes sindicales y campesinos, a expertos en banca de inversiones de Wall Street, a diplomáticos de Bruselas y a periodistas de todos los rincones del mundo.

¿Estarían Washington y Pastrana dispuestos a permitir un debate abierto sobre las conexiones de importantes banqueros y traficantes de drogas con la financiación de campañas electorales al Senado norteamericano o

al colombiano, en el que pudieran participar representantes de las FARC, activistas de Seattle y organizaciones no gubernamentales de Europa? Una de las grandes paradojas es que, a medida que las FARC se disponen a un mayor diálogo político y se debaten públicamente nuevas alternativas al neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos, y a medida que estas ideas se difunden más profusamente por toda Colombia, Pastrana y Washington aceleran y profundizan la militarización de la política pública.

En cuanto al Plan Colombia, dice que a diferencia de anteriores intervenciones estadounidenses en Latinoamérica, esta no pretende pasar por una operación encubierta sino que “es un intento militar, público y flagrante de destruir el diálogo. Esperemos que la colaboración de los europeos no consista en pasar la fregona al suelo después del baño de sangre», concluye.

Septiembre 1 de 2000 (viernes). Hegemonía estadounidense en duda.

La implementación del Plan Colombia forma parte de un nuevo modelo geoestratégico que intenta implementar Estados Unidos para mantener su hegemonía política y económica en América Latina, ante un reagrupamiento geopolítico liderado por Brasil y Venezuela en lo que siempre fue considerado su Patio Trasero, y la creciente influencia de la Unión Europea en la región.

Una victoria militar en Colombia podría significarle a Estados Unidos el control de una zona petrolera todavía no suficientemente explotada por la presencia guerrillera con lo que significa eso en lo económico y estratégico, además del manejo de una región rica en biodiversidad y recursos hídricos. Pero además le serviría para reafirmar y mantener un liderazgo conquistado con intervenciones e invasiones a lo largo de la historia. Dentro de ese esquema el combate a las plantaciones de coca se presenta solo como una excusa y una forma de socavar las bases sociales de la guerrilla.

La inestabilidad política en Ecuador, Bolivia y Perú (países directa o indirectamente involucrados en el Plan Colombia), que se mantiene latente y amenaza desembocar en estallidos sociales de trascendencia

debido a la profunda crisis social y económica que viven, no parece tener solución a corto plazo, responde a un nuevo alineamiento de fuerzas y a la emergencia de ciudadanías movilizadas que exigen participación en los asuntos públicos. Ecuador, con un Movimiento Indígena fuerte y organizado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y una crítica situación económica que hizo estallar la rebelión protagonizada en enero de 2000 por indígenas y oficiales progresistas de las Fuerzas Armadas, que a la postre significó la caída del ex presidente Jamil Mahuad. Perú con un descontento creciente de la ciudadanía y un aumento de la movilización social ante el fraude electoral del presidente Alberto Fujimori, la corrupción en su entorno y la represión planificada por su asesor Vladimiro Montesinos ahora escapado a Panamá. Bolivia, que en abril de 2000 vivió un levantamiento popular con bloqueos de carreteras para oponerse a la privatización del agua y el gobierno tuvo que dialogar, vio un estallido social mucho mayor en septiembre y octubre provocado por un modelo económico que hace agua.

Cortes de carreteras provocados por campesinos e indígenas, movilizaciones y paros de profesores, estudiantes, transportistas y funcionarios públicos en todo el país eran la respuesta al gobierno, que utilizó las Fuerzas Armadas para reprimirlo causando varios muertos y heridos. Todas las carreteras que dan acceso a La Paz fueron cercadas y tomadas por campesinos, interrumpiendo la circulación de productos agrícolas y de primera necesidad. De esa forma la capital boliviana comenzó a tener problemas de abastecimiento.

Los campesinos dijeron “no a la privatización del agua y no a la intervención militar contra los campesinos cocaleros” con la instalación de tres cuarteles del Ejército en la región de Chapare, ‘recomendada’ por Estados Unidos para controlar la erradicación de plantíos y garantizar una producción mínima de coca por cada familia. Para Bill Clinton, el presidente boliviano Hugo Banzer “está en el camino correcto” y promete un nuevo paquete de ayuda financiera, que se sumaría al que recibirá Bolivia por su apoyo al Plan Colombia. Banzer, conocido por sus violaciones a los derechos humanos cuando fue dictador no electo entre 1971 y

1978 es uno de los presidentes andinos que más apoya el Plan y adhiere a la estrategia de Washington. Esos ejemplos ponen de manifiesto que los países andinos asisten a la descomposición de sectores importantes de las élites políticas, la división de las Fuerzas Armadas y la movilización de la ciudadanía que desborda los limitados cauces democráticos porque no ofrecen espacios de participación a grandes sectores organizados.

Si a esa realidad se suma la de Venezuela que en diciembre de 1998 vio colapsar el sistema de partidos políticos abriéndole las puertas de la presidencia a Hugo Chávez y la situación colombiana donde la guerrilla controla gran parte del país, tenemos configurado un mapa andino sumamente agitado que preocupa a Washington y quiere controlarlo. Para eso apuesta a su injerencia a través del Plan Colombia que amenaza con desatar una guerra regional de impredecibles consecuencias. Pero todo eso ha ido acompañado de un deterioro del papel de Estados Unidos en América Latina con un distanciamiento político y económico de Brasil que convocó a una cumbre de presidentes latinoamericanos sin la presencia estadounidense para marcar las críticas al intervencionismo y buscar alianzas regionales que permitan enfrentar en mejores condiciones un futuro tratado de libre comercio en las Américas.

Otro factor influyente y una piedra en el zapato de Clinton es el papel jugado por Venezuela en la revitalización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el aumento en el precio del barril de petróleo. Desde que Chávez llegó al gobierno, el precio del crudo se multiplicó por tres obligando a Estados Unidos a sacar parte de sus reservas al mercado.

Son datos que ilustran intereses, pero parece que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos no las tiene todas para sí y debe enfrentar una realidad económica y política adversa. Como dice Raúl Zibechi, analista uruguayo de política internacional, la tradicional hegemonía comercial y económica del país más poderoso del mundo comenzó a erosionar en la segunda mitad de los años noventa. Las inversiones de la Unión Europea en la región igualaron y sobrepasaron a las estadounidenses. Brasil empezó a ejercer un creciente liderazgo regional y emerge

como potencia mundial capaz de competir en toda la zona, promoviendo una política que ha demostrado sus potencialidades para atraer al resto de los países de la región.

Aunque, la Secretaria de Estado (canciller) norteamericana, Madeleine Albright, visitó en agosto, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador buscando apoyo para el Plan Colombia quedó claro que la mayoría de los países no lo ve con buenos ojos y no quieren involucrarse. Albright intentó presentarlo como un plan integral que no solo trata el problema de la droga, sino busca solucionar los problemas sociales y económicos en Colombia, apoyar el proceso de paz y ayudar en un mayor respeto a los derechos humanos. También insistió en la necesidad de que los países de la región cierren filas en torno a la propuesta porque para erradicar la coca es fundamental el apoyo de los países de la región.

El gobierno brasileño señaló a Albright que no participará en ninguna acción conjunta que tenga relación con el Plan Colombia. Argentina y Chile aceptaron cooperar si no implicaba involucrarse militarmente. Bolivia y Ecuador comprometieron apoyo político y tecnológico. Albright, consiguió el apoyo brasileño para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, pero no se logró respaldo al Plan Colombia para la lucha contra el tráfico de drogas y la guerrilla en lo que se vio como un llamado de atención hacia las políticas norteamericanas para Latinoamérica. Los tiempos cambian y algunos países que fueron hasta hace poco fieles aliados de Washington presentan ahora gobiernos menos proclives a someterse a su lógica y defender sus intereses. Ante esa pérdida gradual de hegemonía en la región, la respuesta estadounidense es una apuesta a la intensificación de la guerra, terreno en el que confía que puede aventajar a sus rivales e involucrar a otros países en la estrategia del Pentágono.

De ahí que detener la escalada bélica, o circunscribirla, sea la tarea prioritaria para algunos países que como Venezuela y Brasil pretenden contrarrestar la hegemonía estadounidense. Según Zibechi “ya no es un secreto la conformación de un eje Brasilia-Caracas con la finalidad de parar los planes norteamericanos”. Sin embargo, ¿quién asegura que no ocurrirá en los países fronterizos de Colombia algo similar a

lo que ocurrió en Vietnam cuando meses antes de las elecciones estadounidenses algunos generales survietnamitas fueron sobornados para recrudecer la guerra? ¿Quién puede asegurar que no se intentará llevar la guerra a Brasil para que este intervenga, aunque su gobierno se muestre contrario? Estados Unidos tiene mucha experiencia en crear excusas. ¿Y las Fuerzas Armadas del Ecuador y Perú que rol finalmente jugarán?

La puja entre el modelo unipolar promovido por Estados Unidos y el multipolar al que apuestan algunos países latinoamericanos, amenaza con desestabilizar a toda la región andina porque Washington no permitirá que la zona se le escape de las manos. La guerra de Colombia también puede transformarse en un ‘pantano bélico’ y las ciudadanías movilizadas ante la crisis económica que agobia a los países y su posible intervención en un conflicto también podrían jugar un papel desestabilizador para los propósitos estadounidenses.

Por ahora el gobierno colombiano es un aliado estratégico y el fatídico Plan una carta en la manga para afirmar su hegemonía rumbo a una zona de libre comercio de las Américas. El año 2001 puede ser un año en el que se empiece a vislumbrar a dónde van estas nuevas alianzas y dónde queda el poder militar y político norteamericano. También veremos las primeras consecuencias del Plan Colombia.

Por ahora las autoridades estadounidenses creen que el Plan es la carta más poderosa que tiene el gobierno colombiano para negociar con la guerrilla y obligarla a aceptar sus planteamientos, o sea derrotarla. Eso es lo que aseguró, Thomas Pickering, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, para quien “una exitosa implementación del plan acercará más el proceso hacia la solución” que espera Estados Unidos. El funcionario también dijo que si el proceso de paz se encaminaba hacia “los objetivos de Pastrana en la negociación”, Washington podría considerar “alguna modificación en la implementación”. Quedó claro que eso lo decidiría el gobierno estadounidense, aunque las posibles modificaciones no tendrán que ver con el cambio de gobierno. El Plan Colombia es parte de una política de Estado que se desarrolla en el marco de una campaña presidencial a definirse en noviembre de 2000. Así gane el

actual vicepresidente y candidato del Partido Demócrata, Al Gore, o el postulante por el Partido Republicano, George W. Bush, se reafirmará el apoyo al Plan que busca la solución militar del conflicto por encima de la política. ¿Qué solución?

Andrés París, vocero de las FARC y miembro de su dirección aseguró que el “Plan Colombia es más que una intervención militar. Es una filosofía sobre cómo resolver problemas sociales”. Analizando la operación militar más grande de Estados Unidos en América Latina en muchos años desde el sur de Colombia donde ya comenzó la ‘ofensiva del sur’, el comandante guerrillero sostiene que el objetivo de la operación poco tiene que ver con el narcotráfico. “Lo que sí tiene que ver es con las amenazas a los intereses norteamericanos en la región. El propósito antinarcóticos expresado sirve para facilitarle al gobierno de Estados Unidos una cobertura política”, dice París.

Según París el sentido contrainsurgente del Plan se debe a la presencia de guerrillas fuertes en estas zonas de interés estratégico, pero agrega que las FARC en el momento son solamente un dolor de cabeza más para el gobierno de Estados Unidos.

El carácter antiimperialista de la revolución bolivariana encabezado por el Presidente Hugo Chávez en Venezuela, la permanente inestabilidad del Estado en Ecuador y la entrega de la Zona del Canal a Panamá son otros factores que han sido determinantes para la creación del Plan Colombia. La invasión en un futuro muy próximo en el sur de Colombia por batallones especialmente entrenados y apoyados por la aviación estadounidense es solo un primer paso en una marcha más larga.

También indicó que el Plan busca “reforzar las Fuerzas Armadas que vienen perdiendo la confrontación con la guerrilla”. De esa forma, según el guerrillero, el gobierno estadounidense aspira a aplazar la fecha de una intervención masiva y evitar el avance de la guerrilla. Simultáneamente vendría creando las condiciones en las bases fronterizas para que en determinado momento puedan recibir decenas de miles de soldados. “En la Base de Manta en Ecuador se está consolidando un puerto de aguas

profundas para poder abastecer la fuerza de intervención. Desde Manta también se cubre gran parte del espacio aéreo de la zona de conflicto en Colombia”, arguyó. Pero fue mucho más allá y aseguró que reforzando las Fuerzas Armadas colombianas, aumentando el número de asesores militares y la cooperación directa en espionaje, tecnología y comunicaciones, “Estados Unidos pretende también desequilibrar la correlación militar entre Colombia y sus vecinos para poder desarrollar una política intervencionista hacia Venezuela y Ecuador”.

Según París la idea del Plan es que los colombianos se familiaricen con que los soldados norteamericanos llegarán a Colombia y se enfrentarán con la guerrilla. Para el vocero del grupo insurgente, esas circunstancias que intenta imponer el Plan los lleva a declarar que “todo personal militar colombiano o extranjero que está en las áreas de combate es objetivo militar de las FARC”.

Septiembre 6 de 2000 (miércoles). Los mensajes de Bill Clinton en Colombia. La visita oficial de ocho horas realizada por Bill Clinton el mes pasado a Cartagena, además de marcar el inicio operativo del Plan Colombia, tuvo un fin político claro dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y fue mostrar que es capaz de aplicar mano dura en la guerra contra las drogas, para indirectamente respaldar a su vicepresidente Al Gore en la contienda electoral.

Para algunos analistas Clinton utilizó su permanencia en Cartagena para enviar algunos mensajes específicos al pueblo americano y latinoamericano, y para eso escogió una coyuntura importante yendo a Colombia pocos días antes de la implementación del Plan, un día antes de la Cumbre de Brasilia citada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, a tres semanas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a dos meses de las elecciones presidenciales de su país. Miguel Ceballos, director del Programa Colombia para Georgetown University, aseguró que Clinton quiso dejarle un mensaje al pueblo americano: “El narcotráfico es, y seguirá siendo en el futuro próximo, un problema

para la seguridad de los Estados Unidos. Es imperativo seguir atacándolo dentro y fuera del país”. Ese mensaje iría acompañado de otro que deja claro que el apoyo al Plan es parte de una política de Estado ya que lo acompañó en su viaje el propio Dennis Hastart, hombre influyente dentro del Partido Republicano y tercer hombre en la línea de poder de los Estados Unidos.

La visita también le sirvió para despejar la duda en los electores estadounidenses de que Colombia no se convertirá en otro Vietnam, temor que ha ido creciendo en los meses previos al inicio del Plan. Según Ceballos, con Hastart en la comitiva de primera línea, Clinton quiso demostrar que tiene un “compromiso bipartidista para la búsqueda de la paz en Colombia mediante soluciones negociadas y no militares, y la responsabilidad es compartida”.

El analista cree que el mandatario norteamericano quiso dejar allanado el camino para que el próximo presidente se sienta comprometido a continuar su misma acción política hacia el país andino amazónico. “Hace más de un año le pedí al presidente Clinton que trabajara con el presidente Pastrana y el Congreso Republicano para delinear e implementar este paquete de ayuda. Desde que asumimos la mayoría, los republicanos del Congreso hemos renovado el compromiso americano de mantener la droga lejos de nuestras calles, colegios y vecindarios”, afirmó Hastart. “Este compromiso va desde apoyar los programas comunitarios de los colegios hasta proveer de recursos al Gobierno democráticamente elegido en Colombia. La firma del *waiver* por parte del Presidente muestra que se puede progresar mucho cuando el Congreso y la Casa Blanca trabajan juntos”, agregó el político republicano entregando en bandeja la victoria a Clinton sobre la opinión pública estadounidense. Por su parte, Thomas Pickering aseguró que “Estados Unidos está interesado no solo en parar el flujo de los narcóticos que llegan desde Colombia, también quiere asegurar la estabilidad de una de las democracias más antiguas del hemisferio”. Pickering añadió: “Creo que el viaje del presidente Clinton demostró que Estados Unidos está resuelto a ayudar a que Colombia solucione las dificultades y regrese a una normalidad

que le posibilite hacer parte del naciente consenso democrático en el hemisferio”.

El viaje también sirvió para tranquilizar a los gobiernos de los países vecinos asegurándoles que a pesar de los efectos que producirá el Plan, les goteará algún dinero para enfrentarlos. El mandatario estadounidense también quiso decirle a los presidentes que se reunirían en Brasilia: “Estados Unidos sigue manteniendo el liderazgo político, económico y militar en América Latina, y no sueñen con que perderá esa hegemonía”. Clinton también dio un mensaje de la necesidad de un gobierno bipartidista para enfrentar el futuro de Colombia, al entrevistarse con el líder liberal colombiano Horacio Serpa y lograr que comprometiera su apoyo al Plan, con lo que se habría asegurado una coalición Partido Conservador-Partido Liberal para tener éxito. Se podría decir que Clinton con su viaje de pocas horas a Cartagena, mató varios pájaros de un tiro.

Septiembre 20 de 2000 (miércoles). El conflicto colombiano y la irrupción de Venezuela en la geopolítica latinoamericana. Noam Chomsky, reconocido científico social estadounidense, ha estudiado la realidad de Colombia y las posibles consecuencias de la intervención norteamericana en ese país. Días atrás, en una entrevista con el sociólogo alemán Heinz Dieterich publicada en el diario *La Jornada* de México, Chomsky desmenuzó la historia-realidad andina y colombiana a partir de la implementación del Plan Colombia.

Colombia tiene una terrible historia de violencia, que ha durado más de un siglo. En los años sesenta, esa violencia tomó un nuevo rumbo debido a una fuerte intervención del gobierno de John F. Kennedy, con misiones de las fuerzas especiales estadounidenses que asesoraron a las Fuerzas Armadas colombianas. Eso fue parte del proyecto general de Kennedy de convertir a los ejércitos de América Latina en fuerzas de seguridad que controlaran a su propia población mediante la violencia. Se trataba del cambio de la estrategia de defensa hemisférica (reminiscente de la Segunda Guerra Mundial) en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, hacia la seguridad interna, es decir, hacia la guerra contra su propia población.

También asegura que en Colombia, “la misión de las fuerzas especiales estadounidenses instruyó específicamente a las fuerzas militares a formar grupos de paramilitares, para llevar a cabo lo que llaman el ‘terror paramilitar’ contra ‘conocidos proponentes comunistas’” (*known communist proponents*).

El investigador aclara que ‘proponentes comunistas’ es un término muy amplio que puede incluir campesinos organizados, líderes sindicales, activistas de los derechos humanos, intelectuales independientes, candidatos políticos, “y esta política de organización del terror paramilitar, que incluía el entrenamiento respectivo, llevó a una nueva fase de violencia organizada del Estado: en parte a través de los militares y, en parte, a través de los paramilitares, y esto ha continuado desde aquella fecha”.

La década de los años noventa es clave porque Colombia tiene, con creces, el peor récord de violación de los derechos humanos en el hemisferio occidental. “Esto se debe a que el terrorismo de Estado masivo en los otros países se redujo de tal manera que Colombia saliera en primer lugar. De los casi 10 asesinatos políticos que se cometen cada día, el Departamento de Estado atribuye la gran mayoría, entre 70 a 80%, a los paramilitares, que son muy cercanos a los militares. El resto se atribuye a la guerrilla”, dice Chomsky. Además asegura que la guerrilla ha logrado desarrollar una base sustancial en gran parte de la población, a tal grado que el gobierno le ha cedido básicamente una parte del país que, por otra parte, nunca ha estado integrada a Colombia. “En esas regiones, los campesinos han estado obligados, básicamente, a la producción de coca; no porque alguien les haya puesto una pistola en la cabeza, sino porque simplemente no hay otra forma de sobrevivir”, dice el estudioso y luego explica que el problema de la coca se remonta a los años cincuenta.

Colombia tenía producción de trigo que fue socavada por agroexportaciones subsidiadas de Estados Unidos, bajo la fachada de los ‘alimentos para la paz’ (*food for peace*). En los sesenta, el Movimiento de Países No Alineados (Grupo de los 77) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio

y Desarrollo (Unctad por su sigla en inglés) impulsaron la idea de formar un marco de referencia para un nuevo orden económico internacional, que beneficiara a la producción de los campesinos pobres. Uno de los primeros programas que la Unctad trató de implementar fue la estabilización de los precios de sus productos, que oscilan en gran medida según la oferta y demanda, entre otros factores y son devastadores para pequeños productores. La propuesta de estabilización de precios que concuerda con lo que sucede en los países industriales ricos, como Estados Unidos y los de la Unión Europea, que estabilizan constantemente los precios internos, no fue permitida para el Tercer Mundo: se bloqueó. Uno de los efectos fue que la pequeña producción campesina se hiciera inviable, y entre ella la de café. Naturalmente, de hecho casi necesariamente los campesinos se volcaron hacia productos que eran viables, básicamente coca, mariguana y los productos que en Occidente se llaman drogas ilegales. Después llegó la represión, lo que llaman 'la guerra contra las drogas', y ahora todo esto es una parte considerable del sistema socioeconómico colombiano.

También señala que el problema principal en Colombia no son las plantaciones de coca sino una situación muy represiva en lo político y socioeconómico.

Básicamente, es un país muy rico, pero gran parte de la población vive en una pobreza miserable. Tiene un sistema muy brutal y represivo. Hace alrededor de una década, el intento de permitir partidos políticos independientes, la Unión Patriótica por ejemplo, terminó en un desastre. Sus candidatos a alcaldes, presidenciales etc., fueron simplemente asesinados. Estados Unidos no se dio cuenta de esto. Llamen a Colombia una democracia floreciente, sin importar que el único partido político independiente fuera aniquilado por la violencia. Lo llaman democracia, porque los partidos que sobreviven son los de los empresarios (*business parties*), los que se adecuan a los intereses de Estados Unidos.

Chomsky cree que esa situación empeoró mucho más durante los años noventa y afirma que fue el gobierno de Clinton el que inundó el país con armas e instructores militares. "Colombia recibe más armas y entrenamiento militar que cualquier otro país del hemisferio, y junto

con estos suministros aumentan, por así decirlo, de manera normal las atrocidades”, arguye. Asegura que el Plan Colombia consiste en extender esa realidad, y el pretexto es la guerra contra las drogas, pero es difícil encontrar un analista que tome este pretexto muy en serio porque los paramilitares, al igual que los militares, están metidos hasta las narices en el narcotráfico y la guerra no se dirige contra ellos.

La guerra se dirige contra comunidades campesinas que se han vuelto parte de las regiones dominadas por las FARC. Estas levantan impuestos sobre el narcotráfico, pero han indicado que estarían muy contentas de implementar un programa con cultivos alternos; de hecho, tienen un programa social de este tipo. Recientemente, líderes gubernamentales y de las FARC fueron a Europa. Esto fue presentado aquí en el sentido de que las FARC tenían que ser civilizadas y tenían que presenciar cómo funcionan los países civilizados. Esto no es precisamente lo que pasó. Lo que pasó es que el gobierno colombiano, y el estadounidense también si aceptara, mostraron que tienen que ser civilizados para entender cómo las democracias sociales funcionan. Yo no sé si esto se logró, pero si se lograra, sería un gran paso adelante para Colombia y Estados Unidos, a fin de que implementaran políticas económicas y sociales más constructivas. Sin embargo, el camino que emprenden es el financiamiento de los paramilitares y militares, lo que llevará a un mayor desastre.

Para el investigador Venezuela va rumbo a convertirse en mediano y largo plazo en el país más importante de la región en lo político y económico lo que no es bien visto por Washington y eso tendrá influencia sobre el conflicto colombiano.

Es un país muy rico, con enormes reservas de petróleo. Fue un dominio de los británicos, hasta que Estados Unidos los expulsó en los años veinte, bajo el presidente Woodrow Wilson. Desde entonces, Estados Unidos ha sido el poder dominante en Venezuela. De hecho, Venezuela fue el principal exportador de petróleo hasta los años setenta y todavía es uno de los más importantes para Estados Unidos. También tiene recursos importantes en otras materias que Estados Unidos ha explotado y, por lo tanto, no verá con buenos ojos que las cosas se salgan de control. De hecho, una de las

informaciones poco conocidas sobre la crisis de los misiles en Cuba revela que una de las principales preocupaciones de los hermanos Kennedy consistía en que si Cuba se volvía demasiado independiente, podía impedir los planes para una invasión estadounidense a Venezuela que se contemplaba en aquellos tiempos, debido a los movimientos guerrilleros y populares. Es decir, esto no es un asunto que Estados Unidos toma a la ligera. Parte de la preocupación sobre Colombia está vinculada, de hecho, a Venezuela.

El sociólogo cree que en este momento la posición de Washington frente a Venezuela es ambivalente porque nadie sabe con exactitud hacia dónde se dirige el proceso venezolano.

Nadie sabe qué parte del discurso de Hugo Chávez es populista y qué parte refleja una tendencia hacia reformas sustanciales. Estados Unidos está preocupado. También existe un serio problema con las inversiones en la industria petrolera, que han sido bajas, debido a la corrupción y a la mala administración de los últimos años, de tal manera que no puede aumentarse la producción con la velocidad que le gustaría a Estados Unidos. Es decir, es una situación compleja que Washington querrá mantener bajo control y asegurarse de que no vaya en la dirección equivocada.

Venezuela puede jugar un papel importante en el nuevo agrupamiento geopolítico que describía antes, por eso importa mucho hacia dónde pueda ir el gobierno del presidente Hugo Chávez. Chomsky también deja entrever eso en su entrevista con Dieterich.

Venezuela es un país rico e importante, que tiene muchos problemas. Sus problemas económicos son muy serios y existe una deuda interna socioeconómica que tiene que resolverse. Mucha gente sufre seriamente, porque la riqueza del país no llega a ellos. Si hay esfuerzos serios para cambiar esto con un programa popular de reformas, y si este programa incluye tomar el control sobre los recursos del país y usarlos para tales fines, entonces Estados Unidos no estaría muy contento. Washington siempre ha estado en contra de esto. El grado de su descontento dependerá del nivel de cooptación que logre. Ha habido situaciones de este tipo antes. Por ejemplo, en los años cincuenta la CIA estimó que las dos peores crisis para Estados Unidos

eran Bolivia y Guatemala. Ambos países tenían gobiernos populares. En Bolivia, el gobierno estaba en manos de un grupo trotskista-laborista; en Guatemala, se trataba de los gobiernos democráticos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Y a Estados Unidos no le gustó ninguno de los dos. Quería neutralizar y destruir a ambos. Pero lo hizo de maneras muy diferentes. En el caso de Guatemala, simplemente organizó una invasión militar que derrumbó al gobierno y comenzó 40 años de terror masivo. En Bolivia usó un camino diferente: esencialmente cooptó al gobierno, lo que en cierto sentido fue sorprendente, porque técnicamente se trataba de un gobierno marxista, de una dirigencia trotskista. Pero, lentamente los integraron al sistema estadounidense y terminaron subordinados al poder estadounidense. De hecho, éstas son decisiones tácticas.

La opinión del científico social estadounidense aporta algunos elementos a tener en cuenta a la hora de analizar una posible regionalización del conflicto colombiano con la implementación del Plan Colombia. El gobierno venezolano también se mostró preocupado por eso y realizó críticas al Plan por su contenido altamente militar. Venezuela ve con preocupación el ‘acento militar’ que tiene el Plan Colombia versión ‘estadounidense’, porque puede ser contraproducente para los fines de paz en ese país y tener efectos negativos sobre la región, aseguró el canciller José Vicente Rangel.

Esa preocupación se origina en que hay aspectos del Plan Colombia norteamericano, (no del Plan Colombia ‘Colombia’) que ponen el acento en el aspecto militar, tiene un fuerte componente militar. Venezuela, a través de varios funcionarios, ha expresado que para la paz es contraproducente intentar resolver el problema a través de métodos militares.

Otro punto es el desequilibrio bélico que podría producir en la región andina el refuerzo militar que plantea el Plan Colombia; la contaminación de las cuencas hidrográficas por efecto de fumigaciones a las plantaciones de coca y, sobre todo, la eventualidad de que haya un desplazamiento del narcotráfico y la guerrilla hacia su territorio. Esto despertó reacciones de parte del gobierno colombiano que días antes del encuentro de presidentes realizado en Brasilia, apuntó sus cartuchos

hacia Chávez. “Aspiramos a que Venezuela no vuelva a la diplomacia del micrófono”, dijo el canciller colombiano Guillermo Fernández de Soto y agregó: “El gobierno de Colombia ha entregado todas las informaciones en relación con el Plan Colombia, lo que el gobierno no puede aceptar es que se estigmatice el Plan por parte de ningún país o que se pretenda ponerle adjetivos. Eso es una falta de respeto con Colombia. Colombia no se lo acepta a nadie porque es un plan de los colombianos para los colombianos”. El canciller venezolano, José Vicente Rangel, respondió con ironía luego de señalar que su gobierno ha sido sumamente moderado, pero que no puede dejar de expresar su preocupación frente al tema de los miles de desplazados que provocará el Plan. “Con el gobierno de Colombia somos amigos y creo que muy pronto nos vamos a ver en Brasilia en la cumbre de mandatarios latinoamericanos y allí vamos a bailar samba”, señaló.

Octubre 22 de 2000 (domingo). Intento de regionalizar el conflicto no tiene muchos adeptos. Durante la Cuarta Conferencia de Ministros de Defensa de América, realizada en Manaus, Brasil, entre el 18 y el 21, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, insistió en obtener el aval sudamericano para la intervención militar norteamericana a través del Plan Colombia, lo que fue rechazado por los representantes de Brasil y Venezuela, y no encontró mucho eco en los demás ministros. Tal vez la mayor adhesión, fuera de la colombiana, fue la del ministro de Defensa del Ecuador, almirante Hugo Unda, que dijo ser partidario de una solución regional al problema planteado por el narcotráfico y la guerrilla en Colombia.

“Mantengo la idea de que el problema interno de Colombia o el narcotráfico asociado a la guerrilla es un problema regional. Todos los países vinculados al problema tenemos que cooperar entre nosotros para encontrar o plantear la solución”, aseguró Unda. Aunque enseguida descartó una posible intervención del Ecuador en Colombia argumentando: “tenemos que tener en cuenta la independencia y soberanía de cada Estado”.

Desde que Clinton solicitó los fondos para el Plan Colombia se vislumbró una apuesta regional. En la guerra que plantea se involucran todas las fuerzas beligerantes de Colombia y se amplían los escenarios de violencia.

El senador Mitch McConnell (republicano por Kentucky), durante la sesión que aprobó el Plan Colombia señaló el esfuerzo que hizo la comisión que trató el pedido para hacer gotear algunos dólares a los gobiernos del Ecuador, Perú y Bolivia para que se involucren en la estrategia regional estadounidense.

La administración (Clinton) solicitó US \$ 1.073 millones. El Comité ha asignado 934 millones. Este nivel menor de financiación es, básicamente, el resultado de suministrar un paquete diferente de helicópteros. Se solicitaron 30 Black Hawk por un coste de US \$ 388 millones. Hemos concedido 60 Huey IIs a un costo de US \$ 118.5 millones. Estas cifras incluyen los costes de funcionamiento del primer año. Con el ahorro en el paquete de helicópteros hemos podido destinar fondos a la inversión en una estrategia regional y aumentar considerablemente la ayuda a Bolivia, Ecuador y Perú. Mi impresión era que el singular énfasis de la administración en Colombia garantizaba que el problema de la producción y del tráfico sencillamente se traslada al otro lado de la frontera colombiana. El énfasis regional de esta ley en materia de prohibición y desarrollo evita que los traficantes colombianos se conviertan en un blanco móvil. Hemos más que doblado la solicitud regional de US \$ 75 millones y suministrado US \$ 205 millones. Estos niveles nos permitieron atender en su totalidad la solicitud de financiación de Bolivia de US \$ 120 millones, tanto para el desarrollo alternativo como para los programas de prohibición. Con unos antecedentes impresionantes en erradicación de coca y desarrollo alternativo, Bolivia merece nuestro apoyo continuado en tanto en cuanto el gobierno complete su tarea. Los resultados en Bolivia merecen ser resaltados, incluso hasta el punto de ser sorprendentes. En línea similar, casi triplicamos la ayuda a Ecuador al tiempo que también aumentamos al gobierno peruano. Hemos añadido US \$ 50 millones a la solicitud de US \$ 93 millones para el seguimiento de derechos humanos. Como la presión militar se intensifica, también lo hará el número de abusos, con lo que hemos aumentado el apoyo a los programas de protección de testigos, fiscales y jueces, así como el apoyo a los

grupos que hagan seguimiento. También hemos condicionado la ayuda en el sentido de que la Secretaria de Estado ha de certificar que los militares colombianos cumplen en todo con la legislación por la que se requiere que los oficiales del Ejército sean enjuiciados en tribunales civiles por sus violaciones contra los derechos humanos. Esto debiera contribuir a poner término a la tendencia de permitir que estos casos sean substanciados en tribunales militares.

La impunidad de los militares que asesinaron a seis niños en Pueblo Rico estaría desmintiendo al senador. Pero lo más importante de su exposición de motivos es la visión regional del Plan Colombia y, por lo tanto la tendencia a regionalizar el conflicto. Eso quedó claro cuando habló de mejorar la ayuda a los países andinos embarcados en la estrategia.

La posición enunciada por McConnell se complementa con las declaraciones del delegado especial para las Américas de la Casa Blanca, Kenneth H. 'Buddy' Mac Kay, que en una visita a Colombia señaló: "nosotros sabemos que si tenemos éxito aquí, la presión va a ser mayor en países como Perú, Ecuador y Bolivia".

Colombia comparte fronteras con Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela y Brasil. El propio Clinton y autoridades norteamericanas sugirieron que estos países podían tener problemas por el alto flujo de desplazados que podrían buscar refugio, así como el traslado de la guerrilla o los paramilitares hacia sus zonas de frontera y la delegada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Bogotá, Leila Lima, confirmó que esas naciones "obviamente deben prepararse para atender el impacto humano que esta situación pueda generar", en alusión a una eventual migración masiva de colombianos, principalmente hacia Ecuador y Venezuela. Según Adam Isacson, del Centro de Política Internacional con sede en Washington, si la ofensiva en el sur de Colombia tiene el éxito esperado, los cultivos de coca pueden cruzar la frontera hacia los países vecinos donde la presencia del Estado en zonas limítrofes es débil. También existe temor por una intensificación de la guerra interna en Colombia que podría hacer que el conflicto desbordara las fronteras.

Más allá de su posición de apoyo o rechazo al Plan, todos los países han movilizado miles de soldados a sus fronteras para prevenir las consecuencias que se puedan presentar con la guerra al sur contra la guerrilla y el narcotráfico.

Desde que firmó la paz con Ecuador, en octubre de 1998, Perú tiene movilizados 2.000 efectivos a lo largo del río Putumayo que fueron reforzados con el inicio del Plan Colombia, y montó además una 'fuerza de intervención rápida' con sede en Iquitos, integrada por soldados de élite con capacidad para intervenir en cualquier circunstancia, según anunció el ministro de Defensa, general Carlos Bergamino. Paralelamente, el presidente Alberto Fujimori junto a su ex asesor Vladimiro Montesinos montaron un novelesco descubrimiento de un contrabando de 10.000 fusiles para las FARC procedente de Jordania por vía aérea. Fujimori, sostuvo que ese hallazgo dejaba claro que el Plan Colombia va a producir una escalada del conflicto y que Perú debía prepararse para ello, por el riesgo que implica. Fujimori y Montesinos, en medio de la crisis social y política que vive su país se presentaron en televisión para informar al mundo que el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) había descubierto una red de traficantes de armas, integrada por árabes, rusos, franceses, peruanos y colombianos, que, burlando toda la inteligencia que se mueve en la zona lanzaban desde el aire, en el sur colombiano, cajas cargadas de fusiles.

Según el informe, en el último año habrían entrado más de 10.000 armas por esa vía. En Colombia, el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, adjudicó el descubrimiento a la inteligencia militar colombiana dirigida por el general Jorge Mora Rangel, que habría detectado el tráfico de armas desde Jordania a principios de 1999 y habría facilitado la información a la inteligencia peruana y la Interpol, lo cual fue desmentido por Perú y evidenció un conflicto de intereses entre los organismos de investigación de los dos países. En Bogotá, los mandos de las Fuerzas Armadas colombianas reivindicaron el 'descubrimiento' de la red de traficantes de armas como una 'derrota' a las FARC, pues habría evitado el ingreso de otras 40.000. Fujimori desmintió a los colombianos y aseguró

que el descubrimiento y desarticulación del contrabando para las FARC, lo hizo el SIN. Sin embargo, tanto las autoridades peruanas como las colombianas quedaron fuera de juego cuando desde Jordania se aseguró, con documentos, que las armas habían sido vendidas legítimamente al Estado peruano por medio de oficiales del Ejército de ese país. Estados Unidos apoyó la tesis Jordana y aportó datos que involucraban a altos oficiales peruanos en el tráfico. Toda la información conducía a Montesinos, Washington perdió la paciencia y el gobierno peruano quedó al borde del abismo. La inestabilidad política generada por un tercer mandato de Fujimori surgido de elecciones fraudulentas podía soportarse, pero el tráfico de armas a gran escala en su patio trasero para la guerrilla colombiana era demasiado, señaló una fuente política a Pablo Biffi, enviado especial a Lima del diario *Clarín*, de Buenos Aires.

El armenio Sarkis Soghanalian, el traficante de armas más famoso del mundo, también conocido como ‘mercader de la muerte’, aseguró al corresponsal en Miami del diario *La República* de Perú que los diez mil fusiles Kalashnikov que fueron a parar a manos de las FARC los vendió originalmente al gobierno peruano y que en todo el proceso de la negociación se entrevistó con oficiales del Ejército y del Servicio de Inteligencia de ese país.

“Cuando se enviaron los diez mil fusiles, detuvimos el resto de envíos”, dijo Soghanalian, y agregó que entre el 12 y 18 de enero de 1999, se reunió en Lima con altos mandos militares y de inteligencia para discutir los términos del contrato para la adquisición de los fusiles y otro tipo de material de guerra.

Además aseguró que:

Jordania es un aliado de los Estados Unidos y todo lo relacionado al tema es de conocimiento de los norteamericanos. Si la venta hubiese sido ilegal, Jordania simplemente no habría aceptado participar. Cumplimos todas las exigencias de la ley. No violamos ninguna norma. Fue una venta de gobierno a gobierno. Yo solo facilité la operación. Jamás vendí armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como dicen los señores Fujimori

y Montesinos: Nosotros no vendemos armas a movimientos ni gobiernos de izquierda. No tengo en mis registros ningún antecedente que diga que yo hice ventas ilegales. Yo soy conocido en el mundo porque vendo armas dentro de la ley.

A la venta de los fusiles se suma otra denuncia de que también se habrían enviado a Colombia para la guerrilla y los paramilitares miles de granadas que habrían sido sustraídas de los cuarteles de la primera Región Militar, limítrofe con Ecuador y de la quinta Región Militar limítrofe con Colombia, por lo que se ha iniciado una investigación a escala castrense. El 3 de septiembre el Ejército colombiano interceptó un camión que trasladaba 200 granadas, mientras otro lote habría sido introducido a través del Ecuador y el cargamento más importante por mar vía Panamá donde el 7 de septiembre fue descubierto un cargamento de 8.032 granadas rusas. El gobierno de Perú, que también recibirá dinero a través del Plan, ya fue llamado al orden por la Embajada de Estados Unidos en Lima que presionó para que se desprendiera de Montesinos buscándole lugar seguro en el exterior con lo que se supone no se volverán a repetir deslices como el del tráfico de armas hacia la guerrilla. ¿Y hacia los paramilitares?

Venezuela, cuyo gobierno rechazó la instalación de una base militar norteamericana en su territorio y se opone al Plan Colombia, mantiene sus fuerzas militares alerta y crea un dispositivo para movilizar en un solo día a más de 1.500 efectivos hacia cualquiera de los 76 puestos de control fronterizo que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina mantienen en la frontera con Colombia. Brasil, que también rechazó la propuesta norteamericana y mostró preocupación por los efectos que podría tener en su frontera el Plan Colombia, reforzó sus tropas fronterizas. Para eso el Ejército brasileño compró cuatro helicópteros franceses Cougar AS-532 que serán utilizados para patrullar la región amazónica donde en coordinación con la Policía Federal implementó el Plan Cobra, que pretende militarizar los 1.644 km de frontera compartida.

La frontera trinacional entre Brasil, Perú y Colombia es una importante zona de producción, procesamiento y salida de la cocaína. En esa zona hay presencia guerrillera por lo que será uno de los blancos del Plan Colombia, y existen grupos paramilitares que según los habitantes están formados por los mismos policías de Leticia, capital del departamento de Amazonas. En el lado de Tabatinga, en Brasil, los habitantes ya se han acostumbrado a que guerrilleros de las FARC vayan a comprar alimentos y ropa 'sin causar problemas' pero temen que la guerra al sur 'cambie la realidad'. Tras la militarización total con el Plan Cobra, en Tabatinga está uno de los comandos centrales de esas tropas y hay otros cuatro destacamentos fronterizos que dependen de Manaus, capital del Estado brasileño de Amazonas.

Panamá solicitó a Estados Unidos US \$ 30 millones en equipos para custodiar la región fronteriza del Darién, zona de presencia guerrillera, militar, paramilitar y de narcotraficantes. El gobierno de ese país decidió reforzar la policía (no tiene Ejército desde la invasión estadounidense, en diciembre de 1989) ubicada en la frontera con Colombia porque, según las autoridades policiales, temen que los campesinos cocaleros y los guerrilleros sean arrinconados por las fuerzas militares colombianas y quieran ocultarse en territorio panameño. Jacinto González, funcionario de Asistencia Legal Alternativa de Panamá, que socorre a desplazados colombianos en la región del Darién, dijo que prevén para los meses finales de 2000 y primeros de 2001 que "una gran cantidad de colombianos cruzará a Panamá".

En Ecuador ya desde 1999 hay un refuerzo de las tropas militares en la frontera con Colombia. Con el apoyo del gobierno al Plan Colombia y la utilización de la Base de Manta se cree que el país se involucrará directamente en el conflicto, lo que ha llevado a un debate al interior de las Fuerzas Armadas entre oficiales que no estarían de acuerdo con precipitarse en una guerra para la que no están preparados y los mandos, particularmente de la marina, para los cuales la participación en el Plan es una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué seguridad?

Octubre 25 de 2000 (miércoles). Las armas del petróleo. Los países andinos y Brasil, en los últimos meses han movilizado tropas a sus fronteras con Colombia lo que seguramente provocará una carrera armamentista, ‘justificada’ en el componente militar del Plan Colombia y los posibles ataques de la guerrilla, el narcotráfico y los grupos paramilitares. Según información extraoficial, Perú y Ecuador, por ejemplo, tienen equipamiento militar como para sostener una guerra prolongada por diez años. Sin embargo, en caso de que esa guerra se expanda y diversifique en distintas zonas geográficas, no solo tendrían que mejorar mucho su arsenal sino que deberían aumentar los efectivos militares dispuestos para la acción. Por lo tanto, la regionalización de la guerra significa también mantener el siempre floreciente negocio de armas, del cual Estados Unidos es el país que más lucra.

El paquete de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia fue catapultado por las industrias norteamericanas del armamento y el petróleo. Un dato interesante que mide la preocupación de las petroleras norteamericanas, y particularmente la Occidental Petroleum, que han presionado por el Plan Colombia es el hecho de que el oleoducto de Limón Coveñas, de 600 km de longitud, fue bombardeado y destruido por la guerrilla 79 veces en 1999. Voceros del consorcio US Columbia Business Partnership, que incluye a Occidental, Texaco, British Petroleum, Caterpillar, Bechtel y Pfizer, argumentaron en Washington que “importantes negocios existentes y posibilidades futuras de empresas de Estados Unidos están siendo amenazadas por el tráfico de drogas, y por eso las petroleras han sido líderes en proponer el Plan Colombia”. La Occidental gasta US \$ 20 millones en seguridad al año, pues mantiene una base militar en sus instalaciones y habría perdido US \$ 1,5 billones por ataques a su oleoducto en Colombia. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore, es accionista de la compañía. La Occidental es una de las empresas petroleras más cuestionadas por la contaminación de territorios indígenas y la persecución a comunidades del pueblo U’wa que se oponen a la explotación en su región. Ismael Uncacia, presidente del Cabildo Mayor U’wa, asegura que por su lucha contra la compañía

han “recibido agresiones físicas y morales, desapariciones, muertes y en general violencia jurídica, política y económica”. “Se ha profanado nuestra tierra, la cultura y las leyes de nuestros mayores, como consecuencia de la actitud del gobierno de Andrés Pastrana y la barbarie y voracidad de la OXY que representa los intereses norteamericanos”, argumenta Uncacia.

El militar retirado estadounidense Stan Goff, que en 1992 como parte de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos brindó entrenamiento militar en Colombia a batallones antinarcóticos, en declaraciones al diario *El Espectador* de Bogotá aseguró que el objetivo secreto de Estados Unidos en el Plan Colombia es el petróleo.

El principal interés de Estados Unidos es el petróleo. Se trata de defender operaciones de la OXY (Occidental), la British Petroleum (hoy fusionada con la norteamericana Amoco) y la Texas, y asegurar control en los futuros campos colombianos. Los geólogos dicen que la producción empieza a disminuir y la demanda sigue ampliándose, de modo que las reservas son asunto crítico estratégico. En este recurso reside el poder del sistema capitalista, y en su control están las claves para sostener la dominación económica, política y militar de Estados Unidos.

Durante su estadía en Colombia Stan Goff fue sargento de inteligencia en el 7° Grupo, que hoy entrena los Batallones Antinarcóticos del Ejército y desarrolla la estrategia de ‘guerra al sur del país’. Desde su retiro del Ejército en 1996 trabaja para Democracy South, una organización no gubernamental de Carolina del Norte que busca reformar el sistema de financiación de las campañas políticas, para evitar que luego las empresas que financian determinen la política norteamericana como el caso de las petroleras o las de armamento.

Para el ex militar las operaciones antinarcóticos de entrenamiento son una mentira de las fuerzas especiales estadounidenses en Colombia.

No hay cambios sobre lo que enseñamos en Vietnam, Guatemala, El Salvador u Honduras, donde siempre entrenamos para pelear contra guerrillas

comunistas. Aunque el gobierno norteamericano presentó una operación antidrogas, nunca mencionamos las palabras coca o narcotraficante en nuestros entrenamientos. El objetivo de Estados Unidos [fue y] sigue siendo el petróleo. Mire dónde están las fuerzas norteamericanas: en Irak, el Mar Caspio, Colombia, lugares donde se piensa encontrar reservas petroleras.

Para Goff, Estados Unidos empezará a perder la guerra en el momento que los estadounidenses empiecen a ver muertos y heridos de su nacionalidad. “La opinión pública norteamericana no está capacitada para aceptar heridos y muertos en Colombia. Los norteamericanos todavía creen que se trata de asesoría para fumigar cultivos de coca. Aún no creen que se trata de negocios para empresas de exportación de armas y protección de intereses petroleros”, concluyó.

Las FARC tienen una percepción similar respecto a las ambiciones de Washington en la región. El comandante Andrés París arguye que es “apropiarse de la selva amazónica como fábrica de agua más importante del planeta y el principal productor de oxígeno”, y “asegurar el control sobre los importantes yacimientos de petróleo en la frontera colombo-venezolana, que abastece al mercado estadounidense”. Por eso desde agosto los rebeldes decidieron intensificar los ataques a la industria petrolera para rechazar su presencia y disminuir la producción. Los ataques de la insurgencia a la infraestructura petrolera se iniciaron el 15 de agosto y dejaron fuera de funcionamiento los oleoductos Transandino y San Miguel-Orito, por donde se transportan más de 50.000 barriles de crudo.

Al negocio petrolero se suma el de las armas, pues con el Plan serán beneficiadas varias empresas norteamericanas. United Technologies, por ejemplo, ganará US \$ 234 millones por la venta de 18 helicópteros Black Hawk. La empresa Textron, de Texas, obtendrá US \$ 84 millones por la venta de 42 helicópteros Huey. Al grupo Lockheed Martin, le tocan US \$ 68 millones por la venta de radares.

Durante 1999 Estados Unidos incrementó su presencia militar y operacional en Colombia. Un informe sobre la presencia norteamericana en América Latina, preparado por los investigadores Adam Isack-

son y Joy Olson para la ONG estadounidense NG Latin America Working Group y el Center for International Policy, señala que antes de entrar en vigencia el Plan Colombia ese país ya recibía más asistencia militar y policial de Washington en entrenamiento, armas, equipos y asistencia, que todos los países de América Latina y el Caribe juntos. De los US \$ 30 millones que recibía Colombia hasta 1995, para el combate contra el narcotráfico, se pasó a US \$ 83 millones en 1998 y de ahí pegó el salto a US \$ 294 millones en 1999, y en 2000 la cifra se duplicó.

Gracias a este aumento, la Policía y las Fuerzas Armadas vieron incrementar sus aviones A-37 Dragonfly, helicópteros, lanchas de combate, equipos de comunicaciones, municiones y entrenamiento. También las misiones de las fuerzas especiales de Estados Unidos aumentaron en 1999 a 34 de las 20 en promedio que tenían en 1998. Mientras, el número de efectivos estadounidenses presentes en forma permanente en el país llegó a 300 en 1999 y se incrementó en 2000 aunque no hay cifras exactas en qué porcentaje. Todos estos gastos fueron y serán financiados por Colombia que además 1999 gastó US \$ 28 millones en compras a través del programa de Ventas Militares Estados Unidos y US \$ 40 millones en compras directas a compañías autorizadas por Washington. Colombia está entre los tres principales clientes directos del gobierno estadounidense y entre los 5 primeros de las compañías estadounidenses. Según el informe, en 1999 se incrementó la cooperación de Estados Unidos para acciones de inteligencia y ayudó a montar el Centro Conjunto de Inteligencia en Tres Esquinas, que funciona como soporte para operaciones del 'empuje hacia el sur'.

El último balance mundial de armas de la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el documento del International Institute For Strategic Studies, muestra que la venta de armas en el mundo subió en 1999 a US \$ 30.300 millones y Estados Unidos consolidó su posición como mayor vendedor con US \$ 11.800 millones (frente a US \$ 7.700 millones en 1997 y US \$ 10.300 millones en 1998). Según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso, citado por el diario *The New York Times*, las dos terceras partes de todas las armas fueron vendidas a naciones

subdesarrolladas. Estados Unidos, también encabeza esa lista, con US \$ 8.100 millones en ventas, especialmente a Latinoamérica y particularmente a Colombia y la zona andina. La Guerra Fría terminó, pero sigue en auge el negocio del ‘complejo militar-industrial’, como fue bautizado por el general-presidente Dwight D. Eisenhower.

El informe dado a conocer por el diario neoyorquino prevé para los próximos años una intensificación de la competencia entre los proveedores de armamento. Se refiere ante todo a Rusia, que expandió sus ventas de armas en 1999 a US \$ 4.800 millones, casi el doble de los US \$ 2.600 millones del año anterior. El arsenal del Ejército ruso se comercializa en Asia, Africa y Oriente Medio. Por su parte, China obtuvo US \$ 1.900 millones (más del doble de los US \$ 925 millones de 1998), por sus ventas a Asia y Africa, siendo considerado Pakistán ‘un cliente clave’.

Sin embargo el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS por su sigla inglesa) maneja otras cifras e informaba a fines de 1999 que la venta mundial de armas había alcanzado US \$ 55 mil millones en 1998, con escasa variación sobre los US \$ 56 mil millones del año precedente. El coronel Terence Taylor, subdirector del instituto con sede en Londres, decía que las cifras reflejaban la tensión en la península de Corea, entre China y Taiwan –el segundo importador de armas del mundo, después de Arabia–, en el Golfo Pérsico y el África Central. “Esto demuestra que los conflictos políticos llevan a la venta de armas”, concluía. El Plan Colombia va en el mismo sentido. Estados Unidos había ampliado su liderazgo, según ese estudio, con envíos de armas y servicios militares en 1998 por US \$ 26.500 millones, es decir el 49% del mercado. Pero el total de gastos militares es muchísimo mayor al del comercio de armas. En 1999 la facturación global de la industria armamentista subió a US \$ 780.000 millones, el 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del mundo entero, según informó a mediados de 1999 el Instituto de Investigaciones de la Paz de Estocolmo. Con solo el 16% de esa cifra que corresponde a US \$ 130.000 millones se aseguraría vivienda y servicios básicos a los 1.300 millones de seres humanos que viven en la pobreza absoluta. ¿Cuáles son las armas del petróleo?

Octubre 30 de 2000 (lunes). La importancia económica de la coca para América Latina. La hoja de coca se ha transformado en una de las materias primas latinoamericanas de mayor importancia económica debido a su utilización en la creación de la cocaína, una de las drogas prohibidas más codiciadas en Estados Unidos y otros países desarrollados. La siembra de la coca ha dado a los campesinos de algunas regiones de Colombia, Perú y Bolivia la posibilidad de cosechar un producto agrícola que tiene una rentabilidad segura lo que no obtenían con otros sembríos. La demanda de la cocaína ha creado un mercado que genera más de US \$ 50 mil millones al año, que en su mayoría queda en los grandes bancos estadounidenses. Todas las políticas tendientes a erradicar ese mercado apuntan a eliminar la oferta y se olvidan de la demanda. Para atacar la oferta se piensa fumigar las plantaciones de coca e indirectamente a los campesinos que la siembran pero no a los traficantes. La posible aplicación del hongo *Fusarium oxysporum* para destruir las plantaciones de coca en Colombia puede acabar con el ecosistema amazónico y contribuir a que se profundice la guerra.

Por un lado, la fumigación masiva de las zonas donde se produce coca va a crear un quiebre económico en los campesinos porque perderán su trabajo que está basado en la producción para unos y en la recolección para otros. Se supone que 500.000 campesinos, recolectores y pequeños comerciantes, viven directa o indirectamente del dinero que deja la producción y venta de la hoja de coca en esas zonas. Entonces lo primero será el quiebre económico de esas regiones agrícolas y el quiebre económico individual de esos agricultores, y comerciantes, porque no existe ningún otro producto que les de cierta rentabilidad como para substituir a la coca. Incluso si quisieran plantar enseguida otro producto no lo podrán hacer porque las fumigaciones masivas no lo permitirán.

Ante esa situación ¿qué puede hacer esos campesinos? Tal vez quedarse en el lugar y plantar para autosubsistencia los que tienen terreno, irse a otras regiones de Colombia o hacia Ecuador o enrolarse en la guerrilla. Hay que tener en cuenta que muchos de esos campesinos cocaleros

son parte de la base social de la guerrilla y la guerrilla además de no dejar que los narcotraficantes los explote se beneficia cobrando un impuesto a estos. Es decir que la guerrilla no produce ni trafica pero cobra un tributo en una zona donde es poder y gobierno, lo que le reporta una buena entrada anual. Visto desde el mercado, solo cobra un impuesto a los exportadores de coca, más conocidos como traficantes. Visto desde lo social, la coca es un producto que da trabajo a quienes de otra forma no lo tendrían. Alberto Martínez representante de las FARC en Europa señaló a la prensa española que ellos le han dicho a los narcotraficantes “teniendo claro este concepto de que la cocaína es un derivado como cualquier otro producto, que mata desde luego, que nosotros le vamos a cobrar a todas las multinacionales del narcotráfico un impuesto para la paz”.

De los US \$ 50 mil millones que genera la coca colombiana solo 500, el 1%, fluye hacia la guerrilla y los campesinos. Otros US \$ 2.500 entran a la economía colombiana a través del lavado en la construcción, industria, comercio, generando empleo y cierta producción. Todo el resto se queda en los bancos norteamericanos lo que demostraría una cierta hipocresía cuando se habla de terminar con el narcotráfico atacando los cultivos sin combatir la actividad bancaria con dinero proveniente del tráfico y el secreto bancario. Y si volvemos a la terrible ley del mercado, según la cual algo se vende cuando hay demanda, y tenemos en cuenta que en Estados Unidos en lugar de disminuir crece la demanda, se podría pensar que ahí está otra parte del problema para atacar porque, según el mercado, si no se corta la demanda no se podrá cortar la oferta. Se dejará de producir coca y los narcotraficantes distribuirán drogas sintéticas, como ya lo están haciendo, cuyos productores son laboratorios norteamericanos.

Para destruir las plantaciones de coca se ha pensado en aplicar el hongo *Fusarium oxysporum*, un transgénico que puede acabar con el ecosistema amazónico, según un informe reservado. Los expertos Jeremy Bigwood y Sharon Stevenson, detallan la aparición del hongo, su uso posterior, sus efectos en distintos países y el daño que podría causar liberado en el ambiente amazónico, en una investigación a la cual tuve

acceso en San Vicente de Caguán. El *Fusarium oxysporum* ya demostró su poder destructor en Perú, y zonas de Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela podrían sufrir esos efectos en los próximos meses, agregaron los expertos. Conjuntamente con el informe, campesinos de los departamentos de Putumayo y Caquetá presentaron fotos de plantaciones de plátano, yuca y arvejas totalmente quemadas por la utilización del hongo en algunos lugares de esa región. El gobierno colombiano aseguró que no permitirá la utilización del hongo dentro de su territorio, pero no desmintió las denuncias de los campesinos. Los campesinos colombianos pidieron que la coca sea eliminada manualmente y sin utilizar el *Fusarium*. “Si utilizan el hongo, miles de cocaleros tendremos que irnos a otro lugar porque ya no podremos ni siquiera realizar otra cosechas. Eso ya lo vemos en el Putumayo”, dijo Pedro, un campesino cocalero.

El hongo, creado en laboratorio, fue liberado por primera vez en Hawaii, en la década del sesenta, donde investigadores estadounidenses estudiaron sus efectos sobre matas de coca que se marchitaban y morían sin un motivo aparente. Las investigaciones determinaron que el *Fusarium oxysporum* se transmitía por suelo y agua, y se empeñaron en aislar los agentes químicos de la plaga y en desarrollar su reproducción masiva, con el fin de emplearla contra plantas de coca y otras como la adormidera (amapola), materia prima de la heroína.

A comienzos de los años noventa, 25 años después del brote del primer hongo en Hawaii, la epidemia de *Fusarium oxysporum* llegó a Alto Huallaga, en el oriente de Perú. Los pobladores llamaron a la plaga ‘seca-seca’, porque marchitaba todos los cultivos. Para los investigadores que elaboraron el estudio fue mucha coincidencia que uno de los epicentros de la plaga se encontrara cerca de la Base Antidrogas de Estados Unidos en Santa Lucía. “Los campesinos de la zona se quejaron de que se estaba fumigando sus cultivos desde helicópteros”, asegura el documento.

En 1991, en un viaje realizado al Valle del Huallaga, los miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú se sorprendieron de la devastación provocada por la plaga de hongos que marchitaba los cultivos de coca y distintas especies vegetales. “En casi cada sitio que

visitaron tuvieron que enfrentar muchas versiones de aviones de la DEA diseminando hongos por encima de los campos de coca”, señala el informe. Según el documento, en la última década la plaga se extendió hasta Yurimaguas, límite norte de los cultivos de coca en Perú, y más allá de Pucalpa hacia el este. “Durante este período, revelaciones inquietantes acerca de las características del hongo fueron documentadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por medio de la Embajada en Lima en los informes que presentaba a Washington”, argumentan Bigwood y Stevenson.

La Embajada informó que la plaga del *Fusarium oxysporum* no solo marchitaba específicamente la coca sino a casi todos los cultivos. “Tres mil campesinos de la zona de Tingo María y Leoncio Prado tuvieron que buscar otros medios de subsistencia a duras penas, incluso lavar oro, cuando la seca-seca atacó cultivos alternativos sembrados en antiguos viveros de coca”, según el estudio.

La plaga también provocó la emigración de la población selva adentro y hacia otras regiones, en un intento por evitarla. El gobierno estadounidense contrató investigadores que constataron en sus ensayos que el *Fusarium oxysporum* mataba también al tomate, achiote y papaya.

El proyecto de convenio entre Estados Unidos y Colombia para la utilización del *Fusarium oxysporum* dice que el hongo “causa una plaga debilitante y persiste en el suelo durante varios años”. David Strughs, del Departamento de Protección Ambiental del Estado de Florida donde se lo quiso aplicar pero fue prohibido, aseguró que “el hongo puede persistir en el suelo durante 40 años”. Strughs aseguró en abril de 1999 que las especies de *Fusarium oxysporum* son capaces de evolucionar rápidamente. Las mutaciones genéticas permanentes constituyen el factor más preocupante en la utilización de alguna especie de *Fusarium oxysporum* como bioherbicida.

“Es difícil, sino imposible, controlar la diseminación de las especies de *Fusarium oxysporum*. Los hongos mutados pueden provocar plagas en un gran número de cultivos, entre ellos tomate, pimentón y flores”, argumentó Strughs. Los cambios genéticos pueden referirse “a las características

físicas, toxicidad y la especificidad del huésped, entre otras”, señaló el experto estadounidense.

La mutagenicidad ha sido el tema central de estudio en las investigaciones sobre el *Fusarium oxysporum* y llevó a que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibiera liberar los hongos mutados en ese país. El Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia (Cinep) denunció que en la provincia amazónica de Sucumbíos, en la frontera del Ecuador con el departamento colombiano de Putumayo, se están liberando los hongos como a principios de la década del noventa en el peruano Valle del Huallaga. Según la denuncia difundida por el diario *New Herald* de Miami, Washington ya está desarrollando experimentos científicos con el peligroso hongo en territorio ecuatoriano.

Fuentes militares ecuatorianas confirmaron la información al diario *Expreso* de Guayaquil. Según la noticia los experimentos se habrían cumplido sin la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y fueron detectados con radar. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente del Ecuador, Rodolfo Rendón, aseguró que su país no permitirá experiencias con el hongo.

Diego Pérez, investigador del Cinep, aseguró tras recorrer la provincia de Sucumbíos que los experimentos se estaban cumpliendo a 5 km de la capital provincial, Nueva Loja, también conocida como Lago Agrio. Según el informe de Bigwood y Stevenson existen amplias pruebas de la toxicidad de compuestos producidos por las especies de *Fusarium oxysporum* en animales y seres humanos.

Las toxina Fumonisina B1 producida por el *Fusarium oxysporum* causa edema pulmonar en los cerdos, cáncer de esófago en los seres humanos y cáncer generalizado en las ratas. Pero algunas especies del *Fusarium oxysporum* contienen toxinas mucho más peligrosas. “Se sabe que contienen nivalenola, causa de vómitos, diarrea, sangrado y lesiones en la piel. También contienen desoxinivalenola o vomitoxina que se ha utilizado como agente de guerra química”, asegura la investigación. La fusariotoxina posee niveles de toxicidad todavía mayores, porque el

contacto directo puede causar inflamaciones y ha provocado la muerte de todos los animales utilizados en experimentos.

Según los investigadores la fusariotoxina es también considerada un agente de la guerra biológica y puede ir cambiando su toxicidad de acuerdo al huésped que albergue al hongo. “Es demasiado riesgoso utilizar en una zona cuyo ecosistema suministra gran parte del oxígeno del planeta, infusiones masivas de un hongo que puede mutar cientos de veces, habitar en los suelos varias décadas y producir cantidades indeterminadas de toxinas que afectan la vida y matan gran cantidad de especies”, finaliza el estudio.

Decenas de científicos colombianos de distintas ramas de la investigación radicados en el país y en el exterior solicitaron, entre los que se encuentran varios expertos en ingeniería genética, en una carta dirigida a las autoridades colombianas, pidieron que permitan y promuevan “el libre, oportuno y transparente acceso a la información” sobre los productos biológicos o químicos a utilizar en la erradicación de cultivos ilícitos, las estrategias de aplicación y a todo tipo de información técnica calificada que haya considerado el gobierno para su selección y aplicación, porque “eso permitiría a la comunidad científica colombiana avalar cuando hubiere lugar y aportar sus puntos de vista respecto a estrategias de control de estas prácticas agrícolas”. También pidieron al gobierno de ese país que promueva foros, “en donde la comunidad científica del país pueda opinar y dar su asesoría calificada sobre las medidas que se quieran aplicar tanto en este, como en otros casos de interés global”. Concluyeron la misiva señalando que basados en las experiencias negativas para otros ecosistemas, no están de acuerdo con la utilización del *Fusarium* “sin antes efectuar pruebas debidamente controladas, que permitan verificar que la naturaleza altamente variable de este tipo de organismos y sus efectos a largo plazo, no van a causar un daño irremediable a la comunidad y a los ecosistemas del país”.

La organización ambientalista Acción Ecológica del Ecuador junto a otras organizaciones humanitarias y ecologistas viene realizando una campaña de información y rechazo a la utilización del hongo o

de herbicidas químicos como el glifosato en la erradicación de cultivos de coca. La activista Lucía Gallardo Fierro realizó una investigación sobre las consecuencias de la utilización del hongo y de una posible guerra química y biológica. En la investigación se hace un paralelo sobre el uso intensivo del Agente Naranja, un herbicida tóxico, en la guerra de Vietnam; y la utilización del Agente Verde, un agente biológico en la guerra colombiana. “A la destrucción de las selvas tropicales vietnamitas y sus ecosistemas, le sumamos graves enfermedades como cánceres, afecciones cutáneas y trastornos hepáticos, de norteamericanos que no sufrieron una exposición permanente al Agente Naranja. En Vietnam, por el contrario, algunos datos hablan de 500.000 los niños nacidos desde los sesenta con deformaciones relacionadas con las dioxinas, un subproducto de la elaboración del Agente Naranja”, dice el estudio.

En cuanto al glifosato asegura que es uno de los herbicidas más importantes de la transnacional Monsanto, que fue introducido hace casi 25 años y se comercializa principalmente con el nombre de Roundup. Las ventas de glifosato alcanzan US \$ 1.200 millones al año y es un herbicida de amplio espectro para acabar con las malas hierbas en las cosechas. La Monsanto, es la empresa más fuerte del mundo en lo que tiene que ver con semillas transgénicas resistentes a su propio herbicida, con lo que indirectamente están obligando a los campesinos que las compran a utilizar sus propios productos químicos. El glifosato es el octavo pesticida más usado en la agricultura, el segundo herbicida en usos no agrícolas y está clasificado en la Categoría Tóxica III, que exige cautela en su utilización. Los científicos aseguran que los grandes problemas tóxicos relacionados con el glifosato no provienen de su componente activo, denominado glifosato, sino de sus componentes inertes, que componen el producto en su 99,04% para hacer que opere más fácilmente y sea más eficiente. Estos componentes son los que pueden provocar problemas gastrointestinales, vómitos, ensanchamiento de los pulmones, neumonía, obnubilación de la conciencia, destrucción de los glóbulos rojos, destrucción del tejido de la membrana mucosa y para las vías respiratorias superiores. Exposiciones agudas al glifosato

podría producir dificultades respiratorias, pérdida del control muscular, convulsiones y depresión cardíaca.

Entre los efectos ambientales el informe señala que podría causar la muerte masiva de peces, crustáceos, lombrices de tierra, bacterias y hongos beneficiosos. Los científicos han descrito una serie de efectos fisiológicos directos que el Roundup provoca sobre los peces y fauna salvajes. Se han reportado efectos secundarios, como la defoliación de los bosques, aberraciones en el comportamiento reproductivo, reduce la fijación de nitrógeno en el suelo, la fertilidad del mismo, afecta a mamíferos, aves e insectos tales como las avispas parasitarias, las mariquitas y otros.

La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, aseguró que el glifosato no causaba problemas graves y era “como tomar una aspirina”. Por otra parte, en la audiencia pública internacional organizada en la zona de despeje como parte de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, participaron embajadores y representantes extranjeros que hicieron conocer el criterio de sus gobiernos en cuanto a la eliminación de los cultivos de coca.

El asesor del gobierno suizo, Jean Pierre Gontard, expresó que “para nosotros, los académicos, los cultivos ilícitos son problemas sociales que no se pueden resolver por la fuerza, o solo con la técnica o la química; requiere soluciones de tipo social”. Jean Egeland, delegado de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia, aseguró que la erradicación de cultivos ilícitos es más eficaz cuando es manual y se combina con programas de desarrollo alternativo.

Gunkatsu Kano, embajador de Japón en Colombia, manifestó que la erradicación de cultivos ilícitos debe hacerse con inversión social como, por ejemplo, la construcción de escuelas, la capacitación técnica y préstamos a la comunidad con bajo interés. Arne Aashim, delegado del gobierno de Noruega, argumentó que es mucho más importante la inversión social. “Vemos problemas de medio ambiente y también cierta arbitrariedad en la fumigación”, dijo.

Peter Von Jagow, embajador de Alemania, afirmó que no es suficiente darles a los campesinos cultivos alternativos. “Hay que ayudarles

a llevar sus productos al mercado, lo que significa el fortalecimiento del nivel institucional”, concluyó.

Las FARC hicieron conocer una propuesta para erradicar la coca, que se basa en un modelo piloto a implementar en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, con un territorio de 1.316.100 hectáreas, una población de 36.621 habitantes, y 8.765 hectáreas de coca, que debería ser desmilitarizado.

El Plan de sustitución de cultivos ilícitos se basa en la posibilidad de prevenir la siembra y erradicar los cultivos de coca mediante el mejoramiento de la rentabilidad agropecuaria, incrementando las 17.000 hectáreas laboradas en cultivos de pan y reduciendo las 155.200 hectáreas cultivadas en pastos que no son aprovechadas por la escasez de ganado. También se basa en el mejoramiento de las condiciones básicas con inversiones orientadas hacia infraestructura social, física, productiva y para el suministro de servicios complementarios, con el fin de que la población beneficiada con la acción del proyecto tenga oportunidades económicas lícitas que garanticen su subsistencia y desarrollo sostenible.

También se argumenta que para eso es necesario:

Implementar un sistema organizativo integral de base y autoridad en todos los puntos cardinales del Municipio, para lo cual, las FARC-Ejército del Pueblo proponen conformar una estructura participativa con organizaciones comunitarias, integrando a los 36.621 habitantes de la jurisdicción municipal; que mancomunadamente estudie, analice, decida, ejecute y evalúe el proceso demostrativo de sustitución de cultivos ilícitos junto con un equipo técnico especializado en las ciencias agropecuarias, económicas y sociales, contratado para tal fin. El gobierno nacional nombrará 3 emisarios: uno del Ejecutivo, otro del legislativo y otro del Judicial, la Comunidad Internacional nombrará cinco: uno de Francia, uno de Inglaterra, uno de España, uno de las Naciones Unidas y otro de Estados Unidos, para que cada 6 meses visiten el Municipio y constaten el avance o retroceso de la experiencia.

Por su parte el Ejército de Liberación Nacional también entregó al gobierno colombiano una propuesta de sustitución de cultivos ilícitos. El

comandante Nicolás Rodríguez de la dirección del ELN, aseguró que ese grupo planteó “iniciar programas conjuntos de prevención y sustitución de cultivos en el sur del departamento de Bolívar, pero eso choca con las mafias poderosas de narcotraficantes y sus aliados de la Quinta Brigada del Ejército porque se afectaría un negocio redondo como es el de sus exportaciones de cocaína, pero insistiremos en ponerlo en práctica”.

Los efectos de los narcocultivos se podrían trasladar a Ecuador, porque con la aplicación del Plan Colombia, el narcotráfico podría utilizar una táctica similar a la que utilizó en la década del ochenta cuando promovió el traslado de las plantaciones de Perú y Bolivia hacia otras zonas de la selva amazónica, principalmente de Colombia. Incluso ya existen rumores de la instalación de fincas cocaleras en la provincia de Sucumbíos. No sería difícil encontrar mano de obra interesada, ya que en la actualidad hay más de 5.000 ecuatorianos que cruzan la frontera para laborar en plantaciones cocaleras colombianas y con las fumigaciones podrían quedar desempleados. ¿Quién fumiga las calles de Nueva York?

Noviembre 2 de 2000 (jueves). El saldo de la guerra en Colombia. Las raíces del conflicto armado que atraviesa Colombia desde hace cuatro décadas se pueden encontrar en su realidad social, política y económica, con una situación de extrema pobreza a nivel urbano y rural, una democracia que no brinda espacios de participación y unos ajustes estructurales que mejoran los indicadores a nivel macro pero empeoran las cifras de la cotidianidad. La posibilidad de solución a corto o mediano plazo parece estar cada vez más lejos y se llegó a un nivel de guerra sucia que derivó en constantes violaciones a los derechos humanos, matanzas masivas, persecución a los pueblos indígenas, asesinatos a campesinos, secuestros de niños, persecución a defensores de los derechos humanos y cientos de hechos que muestran la degradación de un conflicto que tiende a intensificarse. Según entidades privadas, unas 35 mil personas murieron en Colombia en la última década en hechos relacionados con el conflicto armado. Al costado del Plan Colombia están los rostros de una población acosada por las balas de la economía y la economía de las

balas. Pero la gente se acostumbró a la muerte, y la imagen de Drácula podría ser la de un país que vive de su propia sangre. Las acciones que apuntan en ese sentido son miles, hablar de cada una es imposible. Tal vez el asesinato de seis niños en Pueblo Rico, departamento de Antioquía, sea la mejor imagen de un país que, como los niños, espera. La guerra afecta a 17,5% de la población infantil, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y causó 460 muertes de niños y niñas en 1999.

Ese hecho demuestra el estado de indefensión en que se encuentra la infancia colombiana, indicó Ana Bernal, directora de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), que reúne a cerca de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan por una solución política para el conflicto armado.

“No es posible ni aceptable seguir viendo lo que estamos viendo a diario en los noticiarios de televisión, niños y niñas heridos por granadas, niños y niñas muertos por cruce de balas o vinculados con la guerra y portando armas” dijo Bernal y agregó que era necesario que los grupos armados “se comprometan a no vincular menores a sus filas y a detener de inmediato los enfrentamientos en cualquier lugar donde se ponga en riesgo la vida de un niño”.

Beatriz Linares, defensora delegada para la niñez, consideró ‘aberrante’ que la población civil no involucrada en conflictos, y en especial los niños y niñas “sigan cayendo bajo el fuego cruzado de la violencia”. Según Unicef cerca de 6.000 niños integran las filas de la guerrilla y los paramilitares, y otros participan en el conflicto en forma indirecta, como infiltrados, mensajeros o señuelos. Un informe de Codhes, indica que de los 2 millones de desplazados internos que hay en Colombia, el 55% son niños y niñas. “Primero fue la guerrilla la que nos hizo salir porque teníamos un familiar en el Ejército. Nos fuimos para una hacienda en Turbo (al noroeste). Allí llegaron los paramilitares y también nos tocó salir”, dijo a Codhes una niña que ahora vive en Ciudad Bolívar, una de las zonas más deprimidas del sur de Bogotá y cuyo nombre se omite por seguridad. El director de esa entidad, Jorge Rojas, señaló que el

desplazamiento forzado destruye el ‘imaginario y entorno’ de los niños y niñas, “tensiona y fragmenta la familia y el tejido social, impacta negativamente en la calidad de vida e incide en el comportamiento psicosocial”.

La Defensoría del Pueblo dio a conocer datos provenientes de entrevistas con niños y niñas participantes de modo directo en el conflicto armado.

De ellos, “18% confesaron haber matado por lo menos una vez, 60% han visto matar, 78% han visto cadáveres mutilados, 25% han visto secuestrar, 40% han disparado alguna vez sobre alguien, y 28% han sido heridos”, indica la información.

La hermana Celina Otalvora, Misionera de La Consolata y presidenta del Comité de Paz de San Vicente del Caguán, se ha dedicado a convencer a la dirigencia de las FARC que no acepte reclutar niños menores de quince años y aquellos que estén con la guerrilla sean entregados a sus familias. Tras el pedido de algunas madres la religiosa recorrió campamentos de la guerrilla y contó “con la ayuda del comandante Jorge Briceño”, jefe del Bloque Oriental y más conocido como ‘Mono Jojoy’. La comandante Mariana Páez explicó que “el reglamento de las FARC establece claramente que no se puede reclutar menores de quince años, pero a veces no se cumple estrictamente porque muchos chicos insisten en querer ingresar a la guerrilla porque pertenecen a hogares quebrados. O puede ocurrir como el caso de tres niños que habían sido devueltos por Briceño y regresaron por sus propios medios a los campamentos”.

Briceño explica porque aceptan niños de quince años cuando no se corresponde con las normas de Unicef.

Nosotros no podemos comparar los niños europeos con los niños colombianos. La edad de desarrollo de un niño colombiano es muy diferente a la edad de desarrollo de un niño europeo. La edad de desarrollo del niño en el campo de Colombia es muy diferente a la edad de desarrollo de los niños de las ciudades colombianas. El niño del campo a los 12 años de edad en muchos sectores que nosotros hemos detectado mantiene a la familia porque al padre lo han asesinado y le toca trabajar. A los 12 años de edad ya

cumple con ese deber familiar. Un niño colombiano de 15 años es un niño de 18 años en Europa.

Para la religiosa, la tarea de reincorporar a los niños es muy difícil porque no basta con eso sino que debe encontrarles una opción para sus vidas y el Estado no ayuda. En todo caso su actividad ha sido destacada por el importante aporte que significa en la humanización del conflicto. Dalila Vanesa Benavidez, de 14 años, delegada de la conflictiva región del Putumayo ante el Consejo Asesor de Niños y Jóvenes de Colombia llamó la atención sobre la realidad de la infancia en un país conmocionado por el conflicto armado y destacó que en un encuentro denominado “Sueños y Voces”, realizado en octubre de 1999 en Bogotá, 500 niños, niñas y jóvenes de las diferentes regiones hicieron conocer sus propuestas. “Nos reunimos para soñar con el país que queremos y escribir esos sueños en cartas que luego fueron lanzadas en botellas al mar, para ver si alguien algún día las recoge”, informó.

Educación, salud, paz, comunicación y ambiente fueron los temas recurrentes en los sueños que los niños colombianos expusieron en la reunión de octubre. La infancia y los jóvenes de Colombia quieren “cambiar las armas por el papel y los disparos por hermosos e interesantes textos que aporten a todos y todas”, dijo Benavidez. “Queremos salir a nuestras calles y parques, visitar nuestros ríos, contemplar tranquilos el paisaje y nuestros familiares. Deseamos saltar, reír, caminar, jugar, correr sin sentirnos acorralados por la violencia. No es justo que se calle a niños y jóvenes con la desaparición y muerte de nuestros seres queridos”, concluyó la niña.

Los indígenas, amenazados por las petroleras que toman sus territorios y la guerra que toma sus vidas también esperan. Los pueblos nativos del noroccidental departamento colombiano de Chocó, en la frontera con Panamá, son amenazados por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y el Ejército. “Los indígenas de Chocó pedimos a los pueblos del mundo que ayuden a detener el etnocidio que se registra en Colombia”,

declararon dirigentes de la etnia embera, que prefirieron no ser identificados por razones de seguridad.

En Chocó viven 20.055 nativos embera, 11.308 wounaan y 387 cunas, etnias que han sido víctimas de varias masacres desde 1998. La última fue en agosto de 1999, cuando fueron asesinados 22 dirigentes embera de la comunidad de Avive. Los dirigentes dijeron que el gobierno, los grupos de poder económico, las Fuerzas Armadas, los paramilitares y la guerrilla son contrarios a los indígenas. “Los actores de la violencia en Colombia, a pesar de ser enemigos, se unifican en torno de cómo tratar a nuestros pueblos. Somos objetivos militares porque quieren expulsarnos de nuestros territorios, apoderarse de nuestras riquezas, imponer sus leyes y darnos órdenes como si fuéramos robots”, comentaron. El mayor peligro, dijeron, son los paramilitares, presentes en diversos lugares del departamento sin que la policía ni el Ejército los reprima. “Nadie hace nada. Incluso hay operaciones conjuntas entre el Ejército y los paramilitares en varias zonas del departamento de Chocó, como el retén que instalaron en la carretera Quibdó-Medellín”, afirmaron. También aseguraron que los paramilitares y el Ejército ponen en peligro la existencia de las comunidades, al impedir el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible. Varios indígenas murieron por epidemias y desnutrición a raíz de esta situación. Además, acusaron a empresas multinacionales de impulsar proyectos de centrales hidroeléctricas en territorio indígena con apoyo de grupos armados que amenazan a los nativos para que abandonen el lugar.

Las partes involucradas en el conflicto colombiano consideran zona estratégica el territorio indígena de Chocó, por su ubicación en la frontera con Panamá, de donde pueden llegar armas y municiones. “Por si fuera poco, el narcotráfico utiliza la zona para embarcaciones que transportan droga”, señalaron los entrevistados. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exige hace años al gobierno que condene a paramilitares y militares implicados en asesinatos a nativos. Además, pidió al Ejército que no bombardee territorios indígenas y que garantice la seguridad de los desplazados de las comunidades como consecuencia

de la guerra. “También hemos pedido, sin que se nos escuche, que los paramilitares liberen a nuestros hermanos que mantienen prisioneros y que la guerrilla se retire de la zona”, aseguraron los dirigentes embera en Quito.

Los nativos de Chocó también pidieron a Carlos Castaño, jefe de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que entregue a José de la Cruz, un miliciano requerido por la justicia indígena por su participación en varias masacres. “Pedimos que se desplace a Jurado una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Organización de las Naciones Unidas, el episcopado colombiano y la Presidencia de la República para verificar lo que está ocurriendo”, agregaron. Otro pedido al gobierno es que asigne recursos a la titulación, saneamiento y ampliación de los territorios indígenas, como mecanismo para ir construyendo una verdadera paz.

Colombia tiene 1,5 millones de indígenas divididos en 94 pueblos, que ocupan 280 mil de los 1'150 mil km² del país. En 1998 fueron asesinados, en masacres o crímenes selectivos realizados por paramilitares, 700 dirigentes indígenas. Más de 3.000 personas debieron abandonar este año sus comunidades a causa de la guerra civil, según cifras oficiales. Los pueblos indígenas más afectados por la guerra civil son los embera de Chocó y Antioquía, los korewaje del suroriental departamento del Cauca, los paeces y guambianos, del suroccidental departamento del Cauca.

La Constitución de 1991 declaró a Colombia país multiétnico y pluricultural. Pero los indígenas siguen sin ser reconocidos. La ONIC señala que la guerrilla y el gobierno los han excluido del diálogo de paz. Los indígenas arguyen que su participación en el diálogo aportaría el saber de sus culturas milenarias sobre convivencia pacífica entre los pueblos y entre los seres humanos y la naturaleza. Reclaman, además, el reconocimiento oficial por parte del Estado de la jurisdicción interna de los pueblos indígenas y derecho al territorio como propiedad colectiva.

Según una leyenda de los embera, Jiti, el primer hombre, se frotó los ojos con polvo de pupila de jaguar y vio que algunos cóndores que bajaban hasta la orilla del mar tenían cuerpo de mujer. Los cóndores

dejaban sus ropas en la playa, se bañaban, luego se vestían y subían de nuevo a su mundo. Pero una vez Jiti escondió el vestido a una de las aves para que no pudiera regresar con sus compañeras. La mujer se quedó en la tierra y tuvo con Jiti muchos hijos, que poblaron el mundo. Los dirigentes embera creen que si la realidad no cambia, “la leyenda será al revés, porque todas nuestras tierras quedarán despobladas”. Tal vez ese sea el objetivo de los paramilitares que realizan matanzas a diario y sin embargo muchas veces no son difundidas por los medios de comunicación.

En las primeras semanas de octubre los ataques paramilitares contra campesinos, las amenazas a defensores de los derechos humanos, las fumigaciones, los combates en el Putumayo y el aumento de los desplazados que empezaron a llegar a Ecuador, parece demostrar que tal vez la espera no termine nunca. ¿Qué espera Estados Unidos con el Plan Colombia?

Noviembre 7 de 2000 (martes). El reto de conquistar la paz. Los diálogos de paz que iniciara el gobierno con la guerrilla de las FARC y del ELN han quedado en suspenso, y no parece que vayan a prosperar. Las FARC se mantienen en la zona desmilitarizada del departamento de Caquetá, pero el ELN no pudo lograr su zona de despeje. Desde el acuerdo suscrito entre el ELN y el gobierno para iniciar las conversaciones de paz y realizar una Convención Nacional con representantes de la sociedad civil en una zona controlada por este grupo en el sur del departamento de Bolívar, se inició una fuerte ofensiva paramilitar sobre la población del lugar que tuvo como consecuencia más de 500 campesinos asesinados y más de 3.000 desplazados.

Para el comandante Nicolás Rodríguez del ELN, el gobierno está en deuda al no concretar la zona de despeje para realizar los diálogos con ese grupo rebelde y señaló que en septiembre su movimiento realizó en esa zona el quinto pleno de la dirección nacional con la participación de veinte comandantes de distintas regiones del país en el que realizaron una planificación para enfrentar el Plan Colombia.

Este es un plan para escalar la guerra y está encaminado a combatir a la insurgencia y al movimiento popular. Creemos que en la unidad de la nación entera, en la unidad de los revolucionarios, de los demócratas y de los patriotas de Colombia está la esencia de la preparación necesaria para este reto que significa el Plan Colombia como plan de guerra. Nosotros nos inscribimos en este punto de vista unitario para encontrar la fortaleza necesaria para enfrentarlo. Pensamos que también la comunidad internacional tiene un imperativo moral de respaldar a Colombia en su derecho de autodeterminación.

Rodríguez aseguró que desde hace 34 años la Serranía de San Lucas es un territorio de su organización insurgente. “La realización de este pleno y este campamento estable donde hay más de 200 compañeros es el fruto de un poder que se conserva. Para eso se necesita control de territorio, respaldo de la población, fuerza militar y acción de organización popular, y eso es lo que seguimos conservando en el sur de Bolívar y en la Serranía de San Lucas”, argumentó el dirigente guerrillero. Además aseguró que los 5000 combatientes que cuentan en sus filas solo aceptarán una paz que ataque las consecuencias sociales de la guerra y no aceptarán condiciones. “Aquí ya mucha gente ha dicho que la paz se traduce en hechos concretos y no en retórica. Nosotros nos inscribimos en ese pensamiento. La única manera en Colombia, o quizás en el universo entero de conquistar la paz es resolviendo los problemas que originaron la guerra. Aquí hay profundas contradicciones de clase y está demostrado que el origen de la violencia fue precisamente la profundización de estas desigualdades”, arguyó.

La unidad de la que habla Rodríguez no parece posible con las FARC porque desde hace meses existen importantes discrepancias que ha llevado a los dos movimientos a mantener duros enfrentamientos con saldo de varios muertos y heridos. Para algunos analistas ese subconflicto es parte de una lucha por territorios que no tiene sentido entre sectores que supuestamente son compatibles ideológicamente, para otros forma parte de la degradación de la propia guerra. Esos enfrentamientos llevaron a que muchos sectores de la izquierda latinoamericana plantearan un

rechazo a este tipo de prácticas. “Es un imperativo desechar la confrontación entre los hacedores de la Nueva Colombia. Hoy, cuando las dos organizaciones levantamos la bandera de la solución política y salidas de paz, sin que por nuestras mentes rondan las ideas de desmovilización y entrega de armas, la cooperación y solidaridad entre nosotros sigue siendo un imperativo para avanzar. Mas ahora cuando los Estados Unidos intervienen de manera directa en los asuntos del país”, aseguró el guerrillero.

La Unión Europea no se involucró en el Plan Colombia como esperaban los gobiernos de Bill Clinton y Andrés Pastrana, pero no solo se opone a él sino que aporta con algunas propuestas a tener en cuenta si se quiere empezar a construir la paz. Atendiendo al informe y pedido de ONG, sindicatos, organizaciones sociales, ambientalistas, humanitarias, periodistas y profesionales europeos todos los países miembros con la excepción de España decidieron no aceptar la propuesta estadounidense. Paul Emile Dupret, delegado del Parlamento Europeo para América Latina, definió al Plan como Drácula, porque no soporta la luz. “Tú le pones luz y tan solo con cinco preguntas básicas se cae rapidísimo, por eso de la UE no saldrá dinero para él”, arguyó Dupret.

Para las organizaciones de la sociedad civil europea y la UE, el Plan responde exclusivamente a los intereses de Estados Unidos y se corre el riesgo de agravar la situación de violencia en la región. Los europeos no creen que Washington contribuya al Plan de forma gratuita y argumentan que el 70% de los US \$ 1.300 millones aprobados en ayuda a Colombia son de uso estrictamente militar. Con la compra de los helicópteros de combate, la formación y el equipamiento de batallones del Ejército especializados en la lucha antidrogas, el suministro de materiales sofisticados a los servicios de inteligencia colombianos y la destrucción de los cultivos ilícitos de coca y amapola se irían cerca de US \$ 900 millones que estarían retornando directamente a los Estados Unidos, ya sea a los fabricantes de material de guerra, al Pentágono, que garantiza la formación de los militares colombianos, a las empresas productoras de los herbicidas utilizados en las fumigaciones de las plantaciones de coca y

a las encargadas de realizar las fumigaciones. Para algunos países de la Unión Europea “Washington elabora planes de paz a su medida y pide a las demás naciones que los financien”, pero esta vez no están dispuestos a aceptarlo. Por otra parte, creen que la situación humanitaria se va a deteriorar mucho más de lo que está. “Supondrá un atentado contra los derechos humanos a causa de los nuevos desplazamientos forzosos masivos de población y de los efectos tóxicos que sobre las personas y el medio ambiente acarrearán las campañas de fumigación en las zonas de narco-agricultura”, dicen.

También aseguran que se otorga prioridad a los planes militares represivos en las zonas de narco-agricultura y no se ocupa de la construcción de una economía agrícola de sustitución. “Arremete, ante todo, contra los cultivadores, y no supone amenaza alguna para las causas del narcotráfico ni para sus principales instigadores que, en Colombia, son los narcotraficantes. Este plan es un plan de ajuste estructural que puede incluso provocar un agravamiento de la situación social”, dicen. Además afirman que no contribuye a la estabilidad de la región en la medida en que a los Estados vecinos de Colombia se les solicita tomar parte en una empresa militar, desplegada en una zona de seguridad transnacional, por la presión del gobierno de los Estados Unidos.

Cuestionan que el Plan haya sido elaborado unilateralmente sin la participación de las contrapartes en las negociaciones de paz como son las guerrillas de las FARC y el ELN, así como las organizaciones sociales, campesinas e indígenas. “Elude el problema de los derechos humanos, desconociendo que el paramilitarismo, juntamente con el narcotráfico son reconocidos como actores fundamentales en la extensión y profundización de la violencia que opera libremente en gran parte del norte de Colombia. Si se aplica el Plan Colombia, los paramilitares podrán extender su radio de acción a nuevas regiones del país”, argumentan. Sin embargo hacen un llamado a realizar esfuerzos para sustituir cultivos de coca con la participación directa de los coccaleros por medio de políticas integrales sustentables, “en lugar de legitimar que se les bombardee con herbicidas o se les envenene con productos químicos o biotecnológicos

que destruyen todo lo que está a su paso como el hongo *Fusarium oxisporum*".

También creen que es imprescindible intensificar el esfuerzo internacional de control de capitales provenientes del tráfico de droga que circula en el sistema financiero internacional.

En forma repetida en estos últimos años, los campesinos colombianos se han movilizado masivamente y han firmado acuerdos con el gobierno de Colombia, por ejemplo en las regiones del Putumayo, del Caquetá, del Macizo colombiano, de Arauca, del Sur de Bolívar, del Cauca. Estos acuerdos no han sido cumplidos, y al contrario los líderes de estas movilizaciones han sido a menudo víctimas de desaparición forzada o asesinato. Sin embargo, estos acuerdos concertados constituyen una materia prima esencial para la comunidad internacional para completar los programas de sustitución de cultivos, y para construir la paz.

De igual forma aseguran que la situación actual en Colombia exige la puesta en marcha, con el acuerdo de todas las partes concernidas en la búsqueda de la paz, de un plan real de desarrollo que debiera comprender todos los aspectos de un desarrollo sostenible.

Urge que los países del Norte piensen en acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que favorezcan la paz y no la inestabilidad y la miseria en países como Colombia. La apertura comercial indiscriminada ha golpeado duramente la estructura agraria del país, y aún las facilidades comerciales otorgadas a Colombia por la Unión Europea al principio de los años noventa para luchar contra el narcotráfico debe ser evaluada con el fin de determinar si ha beneficiado a los pequeños campesinos, o si ha favorecido modelos agrícolas que excluyen a grupos vulnerables pero esenciales, para la seguridad alimentaria de Colombia, como son los campesinos y los indígenas.

También rechazan:

Los megaproyectos económicos, en particular energéticos y mineros, porque son una de las mayores causas por los cuales los campesinos y los indígenas están siendo expulsados a sangre y fuego por grupos paramilitares. En materia de derechos humanos, nos preocupa y nos indigna la timidez de la reacción internacional, aun cuando dos informes norteamericanos, uno no gubernamental (Human Rights Watch) y otro oficial (State Department) reconocen que los grupos paramilitares, que en veinte días de septiembre y octubre perpetraron varias matanzas de campesinos para demostrar su apoyo al Plan Colombia, coordinan sus acciones con el Ejército de Colombia y sus acciones siguen en la más completa impunidad.

Crean que los países ‘amigos del proceso de paz’ pueden jugar un papel esencial en la vigilancia de las garantías para el ejercicio de la oposición política, y la reducción de la corrupción que mina la democracia colombiana.

Paul Emile Dupret estima que para contribuir al proceso de paz, la UE debería generar una cooperación real.

Que no haya inversiones que se asemejen a saqueos. Lo que perseguimos es un tipo de cooperación a nivel económico y avances en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Europa se enfrenta a una encrucijada: o acepta la propuesta del Plan Colombia, lo que aquí ya se llama humanitarismo militarizado, y las consecuencias serían similares a las de Kosovo, o se construye una alternativa, que sería el sistema de cooperación para el desarrollo, para invertir en la reconstrucción de Colombia.

¿Quién la reconstruirá después del Plan?

Noviembre 9 de 2000 (jueves). Ecuador, un trampolín para la guerra.

El convenio que cede la Base Aérea y el puerto de Manta, sobre la costa del océano Pacífico, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para realizar tareas de inteligencia contra el narcotráfico y la guerrilla colombiana, así como la actividad de militares norteamericanos en bases ecuatorianas de la Amazonia involucran directamente a Ecuador en el conflicto colombiano. Aunque las autoridades niegan esa posibilidad los hechos

demuestran que la Base de Manta “sería los ojos y oídos” del Plan Colombia, y desde ese momento un posible objetivo militar de la guerrilla colombiana. También se vislumbra que un importante flujo de desplazados colombianos de las zonas de guerra llegará a Ecuador para escapar de la violencia. Según las encuestas, la mayoría de la población ecuatoriana quiere que su país se declare neutral, y no encuentra justificativos para involucrarse en una escalada bélica, pero los datos ya están echados.

En 1999, la instalación de una Base Militar de Estados Unidos en el puerto de Manta, Ecuador, con el propósito de monitorear con radares y aviones los movimientos del narcotráfico y la guerrilla colombiana, tuvo el aval del gobierno de Jamil Mahuad y la oposición del Movimiento Indígena, y grupos de derechos humanos. Luego de ser derrocado Mahuad en enero de 2000, el nuevo gobierno de Gustavo Noboa con Heinz Moeller –Ministro de Relaciones Exteriores– al frente, pasó a defender con entusiasmo tal destino para ese puerto sobre el océano Pacífico con el argumento de que servirá de respaldo a sus Fuerzas Armadas.

La necesidad inminente de un lugar para las fuerzas militares apostadas durante un siglo en el canal de Panamá llevó al gobierno estadounidense a acelerar las gestiones para trasladar sus bases a Ecuador, en América del Sur, Aruba y Curazao, en el Caribe. Estados Unidos entregó el canal a la soberanía de Panamá el 31 de diciembre, en cumplimiento del tratado firmado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos.

Voceros indígenas y de otros movimientos sociales rechazan la instalación de la Base militar argumentando que se está lesionando la soberanía ecuatoriana y que se involucrará al país en el conflicto colombiano. La Base en Manta “es una ofensa muy grande a nuestra libertad, nuestra autonomía y, sobre todo, nuestra soberanía”, dijo el ex obispo de la ciudad de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar.

El ex ministro de Defensa de Mahuad, general retirado José Gallardo, percibe en la presencia militar estadounidense un respaldo para las Fuerzas Armadas ecuatorianas ante posibles incursiones de la guerrilla colombiana. Gallardo aseguró que a las Fuerzas Armadas le “preocupan

profundamente” la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las plantaciones de coca en la zona del Putumayo, fronteriza con Ecuador.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) teme que el fuerte acento militarista puesto en el combate al narcotráfico y a la guerrilla de Colombia involucre a Ecuador en estrategias continentales que “redefinen el papel de los ejércitos nacionales de la región”. Para la comisión, también debe tomarse en cuenta el posible impacto ambiental de la instalación de la base militar. “Se desconoce el tipo y la cantidad de explosivos y otros elementos contaminantes utilizados en las bases militares y en las prácticas de tiro, así como el costo de la tecnología para sanear totalmente estas áreas”, señaló el organismo humanitario.

En 1997, Rick Stauber, experto a quien el Departamento (Ministerio) de Defensa (Pentágono) de Estados Unidos encomendó un estudio sobre el impacto ambiental de las bases militares en el canal de Panamá, denunció que en el lugar se habían efectuado pruebas con armas químicas y uranio empobrecido. La Cedhu se preguntó “quién puede asegurar que no ocurrirá lo mismo en Manta” y “quién descontaminará después”.

El ex jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Charles Wilhelm, se reunió en Ecuador en 1999 con el ex ministro Gallardo y otras autoridades militares del país. También condecoró al ex jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas del Ecuador, general retirado Carlos Mendoza, “por su labor profesional desempeñada en la cooperación” entre los militares de ambos países. Wilhelm inspeccionó directamente los resultados de las primeras operaciones aéreas realizadas en Manta durante un período de prueba, y participó en las negociaciones con Ecuador para que luego de terminado ese período se cediera la base por diez años.

Pero el coqueteo militar de Estados Unidos con Ecuador no es de ahora. En 1998, el Pentágono programó la realización de 186 operaciones militares en la región, 21 de las cuales en Ecuador. A mediados de ese mismo año, militares ecuatorianos y estadounidenses participaron en ejercicios contra el narcotráfico en la selva amazónica. En julio de

1999, las Fuerzas Armadas de ambos países proyectaron la construcción en conjunto de un cuartel antidrogas y se anunciaron otros tres para la Amazonia y siete para otras zonas del país.

El historiador ecuatoriano Jorge Núñez recuerda que el interés de Washington por concesiones territoriales y facilidades para operar en Ecuador no es nuevo. “En 1812, Estados Unidos estableció en las islas Galápagos una primera base naval para atacar a los barcos ingleses en el Pacífico. Más tarde, intentó conseguir la venta o arriendo de las islas. En la Segunda Guerra Mundial levantó una base en el archipiélago, la que abandonó en 1946”, comenta Núñez. También recuerda que la flota estadounidense en el Pacífico Sur llegó en 1834 a Guayaquil “para apoyar al general venezolano Juan José Flores, primer presidente del Ecuador republicano, y aplastar la revolución popular de Chihuahuas”.

En 1986, la presencia en el país del general John Galvin, entonces jefe del Comando Sur, y la denuncia sobre un supuesto convenio entre las Fuerzas Armadas de los dos países para establecer la Escuela de las Américas e instalar bases militares despertaron manifestaciones de oposición. En 1987, durante la presidencia de León Febres Cordero (1984-1988), 6.900 militares estadounidenses supervisados por el Comando Sur integraron el grupo “Fuerza de Tarea 1169”, que durante seis meses participó en la operación militar “Abriendo Rutas” en la provincia amazónica de Napo.

Para Gallardo, la presencia militar estadounidense en Ecuador “no afecta a la soberanía del país” y es solo un acto de reciprocidad. “Nuestras naves militares pueden usar los aeropuertos militares estadounidenses, para abastecerse de combustibles y cambiar sus tripulaciones. Es algo semejante”, aseguró Gallardo.

El actual Ministro de Defensa, almirante Hugo Unda también dijo que la base, cedida a Estados Unidos el 10 de noviembre de 1999, no involucra al país en el conflicto colombiano. Sin embargo el Ministro de Defensa de Colombia, Luis Fernando Ramírez, aseguró que sí está involucrada en el Plan Colombia. “Yo sé que ese es un tema sensible en Ecuador y tengo que respetar las decisiones que autónomamente tome el Ecuador.

En la región no existen sistemas para comunicación en tiempo real. No basta con una radio o un teléfono. Con un sistema de alta tecnología, si un avión que vuela por la frontera sur o por el Pacífico no es detectado por los radares colombianos, lo pueden detectar los ecuatorianos”, señaló el ministro y agregó que la Base ayudará a las acciones militares que se realicen en Colombia. “La Base de Manta va a permitir poder intercambiar más información en tiempo real”, dijo.

Para el teniente coronel Edison Sánchez, uno de los oficiales ecuatorianos que apoyó el levantamiento indígena de enero de 2000 contra el gobierno de Jamil Mahuad, y que posteriormente pidió su disponibilidad, la participación del Ecuador en el Plan lo puede precipitar en una guerra para la cual no está preparado. Sánchez estuvo encargado junto a otros militares de la Escuela de Guerra del Ejército, de elaborar un informe sobre los escenarios posibles en los que entraría Ecuador al ceder la Base de Manta e involucrarse en el Plan Colombia. El documento que fue presentado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no habría sido tomado en cuenta. Según el oficial, “la decisión de entrar en una guerra ajena no es militar, sino política” y la participación en este conflicto podría significar para el país tener en un día las mismas bajas que tuvo durante el conflicto con Perú en 1995. “En la guerra del Cenepa tuvimos 35 muertos y 200 lisiados, eso lo podríamos tener en un día. Pero además nuestra Amazonia tampoco tiene condiciones de sobrellevar un impacto ambiental tan grande como el que se puede producir con una guerra en la zona”, argumentó Sánchez.

Noviembre 14 de 2000 (martes). Manta, ojos y oídos del Plan Colombia. El Convenio que otorga la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue firmado por el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, el ex canciller Benjamín Ortiz Brenann y el ex presidente de la comisión de relaciones internacionales del Congreso, Heinz Moeller, que casualmente después se transformó en Canciller. El documento no fue conocido por el pleno del Congreso y mucho menos por la ciudadanía

ecuatoriana en general. Sin embargo fue ratificado por el gobierno de Gustavo Noboa.

Para la Hermana Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, el convenio es inconstitucional. “De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 161, numeral 2 establece que es el Congreso en pleno el que aprobará o desaprobará los tratados y convenios internacionales que establezcan alianzas políticas o militares, como sucede en este caso. Sin embargo, el convenio se firmó violando esta norma constitucional y sin la existencia de un tratado bilateral discutido y analizado con la participación ciudadana”, asegura la religiosa. El convenio deja claro que el gobierno del Ecuador permite a las Fuerzas Armadas estadounidenses el uso de la “Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta así como el puerto de Manta e instalaciones relacionadas con la Base o en su vecindad”, argumenta Monge. También se permite “la entrada y salida de la República del Ecuador al personal de los Estados Unidos con solo la adecuada identificación estadounidense”, quienes están exentos del requisito de visa, tarifas de entrada y salida y de otros impuestos. Como si eso fuera poco, los militares norteamericanos también están exonerados de “todos los procedimientos de importación y exportación, aranceles, impuestos directos o indirectos y de otros cargos que de otra manera impondría el Ecuador a los productos, equipos, materiales, provisiones y otros bienes importados y exportados a la República del Ecuador en relación a este acuerdo”. Además, “el Gobierno del Ecuador, como una contribución al esfuerzo antinarcóticos acuerda establecer una cuenta con el fin de proporcionar control administrativo y apoyo, y de evitar a los Estados Unidos las cargas que le impondría dicho sistema fiscal”. Otro párrafo interesante es el que dice que “las autoridades de la República del Ecuador otorgarán a los Estados Unidos sin costo, el uso de las instalaciones necesarias para las actividades acordadas incluidas las obras en construcción en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta”.

El contrato también establece que el gobierno del Ecuador se compromete a “facilitar al gobierno de los Estados Unidos la obtención

oportuna de permisos y otros requisitos administrativos necesarios en relación con este acuerdo. Las autoridades gubernamentales de la República del Ecuador exonerarán en el grado de lo posible de cualquier costo o derecho asociado con tales requisitos”. Por otra parte, los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República del Ecuador renuncian a todo reclamo por “daño, pérdida o destrucción de bienes gubernamentales a consecuencia de actividades relacionadas con este acuerdo o por concepto de lesiones o muertes sufridas por el personal de cualquiera de los dos gobiernos en el desempeño de sus obligaciones”. También se le permite a Estados Unidos instalar “una estación de satélite para la recepción de programas de radio y televisión y otras telecomunicaciones” y se establece que todas las actividades a que se refiere este artículo “estarán exentas de inspección, licencia, regulación, derechos, impuestos (directos e indirectos), cargos y tarifas gravadas por la República del Ecuador”. Por otra parte, los dos gobiernos se comprometen a que “con miras a fortalecer los esfuerzos regionales para combatir el narcotráfico, los gobiernos del Ecuador y de los Estados Unidos emprenderán consultas con otras naciones de la región para intensificar la cooperación en esta materia”.

Para la Hermana Elsie Monge “No existen explicaciones para tantas facilidades y obsequios de parte del gobierno ecuatoriano, así como tampoco se explica por qué decidieron incluir en el acuerdo el uso del puerto de Manta, cuando se ha insistido en el uso únicamente de una Base de control aéreo”.

La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Gwen Clair, a propósito de un recorrido de inspección que hicieron ocho congresistas de su país a esas instalaciones, explicó los trabajos y las inversiones que según ella se realizarán. Previamente, indicó que esto es posible luego de que Ecuador facilitó esa pista aérea, como un puesto de avanzada, para el aterrizaje y aprovisionamiento de combustible para los aviones P3 Orión. El primer trabajo que realizan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es el mejoramiento de la pista, a un valor de US \$ 5 millones. La idea es ampliar y reforzar la capacidad de las instalaciones tanto en la zona de

aeropuerto como en la Base Aérea. “Esto obedece a que, una vez que culminen los trabajos, aterrizarán hasta tres aviones por semana. Estas adecuaciones fomentarán el interés de compañías aéreas extranjeras para ocupar esta terminal. Esto permitirá el desarrollo turístico y comercial de Manta, así como su incorporación al espectro internacional”, enfatizó la embajadora.

Expertos militares señalaron que las adecuaciones en la pista, no servirán solamente para el uso de los aparatos encargados de monitoreo, seguimiento electrónico y de radar en la lucha regional antinarcóticos, sino que posibilitarían el despegue y aterrizaje de aviones caza y bombarderos de combate. Sobre las medidas de seguridad para la Base, Gwen Clair señaló que incorporarán nuevos equipos contra incendios y se entrenará al personal ecuatoriano que realiza trabajos administrativos y de abastecimiento de combustible a las naves, en el uso de tecnología moderna para esos fines. La tripulación de los aviones y barcos guardacostas tendrán inmunidad diplomática, como se establece en el acuerdo y la inversión global para el mejoramiento de la Base será de US \$ 80 millones, financiada por el gobierno norteamericano.

El coronel Jorge Brito, otro de los militares rebeldes de enero se muestra preocupado por las implicancias militares que puede tener este convenio. “La Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la Base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando Estados Unidos, y que estarán integrados por 1.000 hombres cada uno”. Brito, uno de los estrategas militares del Ecuador durante el conflicto fronterizo con Perú en 1995, asegura que la Base es parte de una regionalización del conflicto colombiano y está estrechamente vinculada a la estrategia militar del Plan Colombia. “Eso es conocido por la guerrilla que dentro de su estrategia también tendría que pensar en cortar esos ojos y oídos, y para eso solo necesita un grupo comando bien entrenado, lo que muestra el peligro que corre Ecuador involucrándose en el conflicto a través de la Base”.

El coronel señala que la implementación del Plan recién se está iniciando con la fumigación de plantaciones de coca en el sur de Colombia, pero ésta “es una estrategia de seis años de guerra que se irá profundizando con el correr de los meses, y lo mejor que puede hacer el país es declararse neutral”.

Ecuador no solamente se puede transformar en una Base Militar estadounidense para la intervención en Colombia como fue Honduras durante el conflicto centroamericano, también puede recibir una enorme cantidad de desplazados que movilizaría la escalada militar provocada por el Plan.

Durante 1999 y 2000, el aumento de los enfrentamientos en Colombia entre Ejército, guerrilla y paramilitares provocó un crecimiento de la emigración masiva de colombianos hacia Ecuador. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ecuatoriano, en el primer semestre de 1999 se incrementó el ingreso de colombianos, de los cuales 70% se han quedado a vivir en distintas regiones del Ecuador, y especialmente en las provincias fronterizas con Colombia. La Embajada ecuatoriana en Bogotá informó que durante ese año las solicitudes de visas para trabajar en Ecuador se incrementaron 45%.

El número exacto de residentes colombianos en Ecuador no ha sido aún determinado por la Dirección Nacional de Migración ecuatoriana, pero se estima que son más de 300 mil los que viven en el país de forma legal o ilegal. Esa cifra representa casi 3% de los 11,5 millones de habitantes del Ecuador. En las ciudades predominan los profesionales u hombres de negocios, y en la zona rural los campesinos. Según la información, pueden distinguirse dos grupos entre quienes llegan a Ecuador desde Colombia. Por una parte, están aquellos desplazados por la violencia directa porque vivían en regiones conflictivas, como los habitantes de algunas zonas limítrofes con Ecuador que cruzaron la frontera para escapar del fuego cruzado. También están los otros que no son víctimas de la violencia directa pero sufren la intranquilidad cotidiana causada por los enfrentamientos y el estrés colectivo, entonces decidieron marcharse a un país cercano. La emigración masiva comenzó en 1992, cuando

140 mil colombianos ingresaron a Ecuador y 35.000 de ellos se quedaron a vivir en el país. Las cifras de inmigrantes colombianos fueron semejantes en los años siguientes, hasta 1997 cuando registraron un significativo aumento. Según el INEC, ese año ingresaron a Ecuador 162.000 colombianos, de los cuales 114.000, es decir 70%, se quedaron a vivir. La cifra no varió mucho en 1998, pero volvió a incrementarse en 1999. Para la Dirección Nacional de Migración, es difícil saber cuántos colombianos habitan en las poblaciones ecuatorianas fronterizas, porque la mayoría reside en ellas ilegalmente. Según un censo reciente realizado en la provincia de Sucumbíos, viven allí 8.000 familias colombianas, pero 7.200 de ellas no están registradas en ninguna dependencia del Estado ecuatoriano, y ni siquiera cuentan con documentos que identifiquen a sus integrantes. Algo similar ocurre en las otras provincias limítrofes, como Carchi (en la región de la Sierra) y Esmeraldas (en la de la Costa).

En un informe publicado por la revista colombiana *Semana* se señaló que el desempleo sin precedentes y el incremento de la violencia están llevando a los colombianos a abandonar masivamente su país. La mayoría de los emigrantes se dirigen a Estados Unidos (en especial a la ciudad suroriental de Miami), Ecuador, Canadá, Costa Rica y Argentina, se indicó en el informe periodístico, basado en estadísticas de las autoridades migratorias. En otro informe de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), se aseguró que en julio de 2000 unas 530 personas huían cada día de las zonas en conflicto colombianas. Pero esa cifra se incrementó a partir de septiembre con la puesta en vigencia del Plan Colombia, y en octubre cientos de personas provenientes de Putumayo comenzaron a pedir refugio en Nueva Loja. Entre 1985 y 2000 se registraron 2 millones de desplazamientos forzados, que representan un promedio de 11.000 mensuales. Un récord mundial poco alentador.

Noviembre 16 de 2000 (jueves). Primeros efectos del Plan Colombia.

En agosto y septiembre, la fumigación de plantaciones de coca con el herbicida glifosato por parte de las Fuerzas Antinarcóticos de Colombia

provocó los primeros efectos colaterales del Plan Colombia en el ambiente de las provincias ecuatorianas fronterizas. Habitantes de General Farfán y Puerto El Carmen, pueblos de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos, ubicados junto al río San Miguel, aseguraron que tras escuchar avionetas fumigando en el vecino departamento colombiano de Putumayo varios árboles comenzaron a secarse. “Las consecuencias se sienten de este lado de la frontera porque muchos árboles amanecen semisecos y no se sabe qué es, lo que se explica por la aplicación de algún herbicida como los que utilizan en las fumigaciones colombianas”, comentó Tito Piedra, habitante de Puerto el Carmen.

Bolívar Botina, alcalde de Puerto Guzmán, en Putumayo, confirmó la información y agregó que en la zona ya han muerto siete personas por intoxicaciones provocadas por las fumigaciones masivas que se realizan desde hace cuatro meses con el glifosato. “La última semanas de septiembre pararon de fumigar, tal vez por las protestas que realizó la población de Putumayo en rechazo del Plan Colombia, pero se presume que en los próximos días retornarán”, indicó Botina. Sin embargo, fueron las fumigaciones realizadas en una zona del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con la provincia serrana de Carchi, las que tuvieron peores efectos para la población del lado ecuatoriano. “Desde agosto el aire que respiramos ya no es el mismo y hay vecinos que han tenido dolores en los ojos y la cabeza, que no son normales”, dijo Juan Cruz, un agricultor de Tobar Donoso, un pueblo de Carchi.

Para algunos médicos, los síntomas que presentaron varios habitantes de la zona son similares a los que presentan los campesinos que llegan “intoxicados por la ingestión de algún pesticida”. Los campesinos de Tobar Donoso aseguraron que en octubre se realizaron solo pequeñas fumigaciones, pero temen otras masivas, como la realizada el 21 de agosto para destruir 5.000 hectáreas de plantaciones de coca. En esa oportunidad, las fuerzas antidrogas colombianas utilizaron tres aviones Turbo Thrush de fumigación escoltados por tres helicópteros Black Hawk y 200 soldados de un comando de selva, entrenado y equipado por Estados Unidos. El director de la Policía Antinarcóticos, general Ismael

Trujillo, dijo que con la destrucción de esas plantaciones y de laboratorios en Nariño se evitó la producción de unas 29 toneladas de cocaína destinada al mercado estadounidense. “Mientras los aviones se lanzaban sobre las plantaciones, dejando una estela de glifosato en el aire, y los helicópteros los escoltaban para evitar ataques de la guerrilla, los soldados se internaban en el bosque para buscar a los campesinos que se escapaban”, dijo un coccalero que prefirió el anonimato.

Del lado ecuatoriano, algunos agricultores aseguraron que aproximadamente seis horas después de la fumigación se observaban extensas áreas de yuca quemada. En Putumayo, mientras tanto, en octubre aumentaron los enfrentamientos entre la guerrilla, el Ejército y los paramilitares quedando el departamento prácticamente aislado del resto del país y cientos de desplazados comenzaron a llegar a Nueva Loja. Pedro Alzate, uno de los colombianos refugiados señala que después el 21 de septiembre recrudecieron los combates en La Dorada y en otros municipios de Putumayo vecinos a Ecuador. Aquel día, a las 5h00, “llegaron a La Dorada los ‘paracos’ disparando y gritando que todos nos juntáramos en la plaza, y ahí nos dijeron que habían llegado para acabar con la guerrilla, y que quienes no colaboráramos seríamos considerados enemigos”, dice Alzate.

El primer muerto de La Dorada habría sido un joven llamado Omar Piedrahita, a quien los paramilitares integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia confundieron al parecer con un comandante guerrillero, según la versión del refugiado. “Desde que llegaron las Autodefensas hay más de 30 desaparecidos en la zona, porque ellos hacen desaparecer los cuerpos de los que matan”, asegura Joaquín, otro desplazado.

El departamento del Putumayo tiene una población de 280.000 habitantes que se distribuyen en una superficie de 24.885 km cuadrados dividida en tres regiones: el Alto Putumayo, con reciente presencia de la guerrilla, el Medio Putumayo con importante presencia y control de la guerrilla, y el Bajo Putumayo, conformado por los municipios de Orito, Puerto Asís, Valle del Guames, la Dorada y Puerto Leguizamo, donde la situación de violación a los derechos humanos y al derecho internacional

humanitario es muy grave, por la presencia de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia intentando disputarle territorios a las FARC. Los indicadores de la violencia político-social en el Putumayo evidencian esa realidad, pues solo en 1999 se registraron en ese departamento 68 ejecuciones extrajudiciales, 39 desapariciones forzadas, 150 persecuciones a comunidades por parte de grupos paramilitares y la fuerza pública, y más de 70 violaciones al derecho internacional humanitario por parte de todos los actores del conflicto. Según cifras estimativas, con el comienzo de las fumigaciones a las plantaciones de coca y el aumento de los combates entre la guerrilla, el Ejército y los paramilitares en el segundo semestre del año 2000, esas cifras se multiplicarían por cuatro. Como consecuencia también aumentaría el flujo de refugiados hacia Ecuador que podrían ser 15.000 o, dependiendo del conflicto, entre 30 y 50.000.

Ante esa posibilidad, Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Defensa Civil, la Cruz Roja Ecuatoriana y la Iglesia de Sucumbíos crearon un Plan de Contingencia que se pondrá en marcha para recibir a los desplazados. Mientras que el gobierno ecuatoriano creó la Unidad de Desarrollo del Norte, un ente burocrático que se encargará de ejecutar proyectos de rehabilitación de las provincias fronterizas con Colombia, que han permanecido un tanto olvidadas por el Estado central. Pero hasta el momento, los únicos recursos para desarrollar proyectos se encuentran en una promesa de US \$ 15 millones, ofrecidos por la Secretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, cuando visitó Ecuador en agosto de 2000, que serían donados a través de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación (Usaid), Acnur y la Cruz Roja.

El canciller, Heinz Moeller aseguró en septiembre a cuarenta delegados de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos y al representante de Acnur, que “la reactivación social y económica de la frontera son prioritarias para evitar que la metástasis del narcotráfico llegue al Ecuador”. Moeller dijo que el gobierno ecuatoriano estaba gestionando US \$ 30 millones adicionales a los prometidos por la señora Albright,

para invertirlos en Sucumbíos. El dinero llegaría en noviembre de 2000 y se invertiría en vialidad, electrificación, puentes, infraestructura educativa, subcentros de salud y proyectos agrícolas. Enfatizó que lo primero será fortalecer militarmente la provincia de Sucumbíos.

No en toda la extensión nororiental podemos hablar de que limitamos al norte con el gobierno colombiano. Allá en ciertas zonas tienen predominio fuerzas informales como las FARC, paramilitares, narcoguerrilleros que son grupos desprendidos de los sectores químicamente puros de las FARC, y también hay los que protegen las plantaciones de coca pagados por los capos de la mafia y los carteles. Esa es una realidad. Nosotros no queremos introducirnos ni nos vamos a introducir en el conflicto colombiano, pero no vamos a permitir que fuerzas informales colombianas penetren en el Ecuador. Habrá un control militar reforzado en la frontera y un control policial, porque en la región los actos delincuenciales se han multiplicado con excesiva frecuencia.

Señaló Moeller, quien luego aseguró que el fortalecimiento militar será complementario a la ejecución de un proyecto de desarrollo que él denomina Plan Ecuador, para el cual el gobierno recibiría US \$ 300 millones hasta el año 2004.

Según el documento que crea el Plan de Contingencia su propósito es “enfrentar las condiciones de inseguridad, ingreso, recepción, asentamiento, transporte, alimentación, vivienda, infraestructura, condiciones sanitarias, salud, educación y repatriación de ciudadanos colombianos, producto de un flujo considerable hacia Ecuador por la frontera norte de la provincia de Sucumbíos en calidad de refugiados».

Para algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos es fundamental que Acnur y las organizaciones humanitarias vigilen el fiel cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano emanadas de la suscripción y ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. De la Vega, cuya organización integra el Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, cree que es imprescindible

puntualizar que “los refugiados tienen el derecho a ser protegidos contra una devolución, incluido el no rechazo en la frontera”, por lo que exhorta a la Cancillería ecuatoriana y a la Oficina de Enlace del Acnur, “a agotar todos los recursos posibles para asegurar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procedan en la frontera colombo-ecuatoriana de acuerdo a este principio del derecho internacional de los refugiados”. Sobre la situación de los niños y las niñas refugiadas, De la Vega considera que el Plan de Contingencia “invisibiliza la prioridad que el Estado ecuatoriano debe conceder a este grupo humano vulnerable, en virtud de su propia normativa jurídica nacional. La responsabilidad legal de los niños refugiados no acompañados recae en el gobierno del país de asilo”. Según ese plan, “el tiempo de permanencia de los refugiados” en el área asignada “tiene que ser un máximo de seis meses ya que en este período se identificarán alternativas de solución duraderas”. Para De la Vega es aventurado predecir si las condiciones sociopolíticas y la situación humanitaria y de derechos humanos en el Putumayo, mejorarán significativamente, a tal punto que permitan la repatriación en seis meses. También considera que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Acnur deben tomar en cuenta que la integración indefinida o permanente de los refugiados colombianos a la sociedad ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos o en otro lugar, es una de las posibles ‘soluciones duraderas’ a esta crisis humanitaria, “pues escapa a las voluntades institucionales ecuatorianas y de los organismos intergubernamentales garantizar que la violencia político-social en el departamento del Putumayo, agudizada por la crisis de la economía cocalera y las fumigaciones de las plantaciones de coca, permita la repatriación voluntaria de los refugiados en seis meses”.

Según el Grupo Civil de Monitoreo otro de los aspectos que debería tomarse en cuenta es el posible quebrantamiento de las leyes penales ecuatorianas, por parte de los refugiados colombianos, adultos o niños. Por esa razón piden que la policía ecuatoriana y las autoridades judiciales de la provincia de Sucumbíos se familiaricen con las normas y derechos internacionales en ese sentido y tengan en cuenta que los refugiados solo pueden ser detenidos “para proceder a la verificación

de la identidad; determinar los elementos que sirven de base a su asilo; verificar a quienes han destruido sus documentos de identidad o han hecho uso de documentos falsos y para preservar la seguridad nacional o el orden público”. En el caso de los niños y las niñas refugiados que están en conflicto con la ley penal ecuatoriana, deben aplicarse las normas de respeto establecidas en el Código de Menores.

Las autoridades gubernamentales y el Acnur deben considerar que, lamentablemente, la provincia de Sucumbíos carece de infraestructura penitenciaria y de un Centro de Recepción Temporal, para el caso de los niños y niñas en conflicto con la ley penal, por lo que en innumerables oportunidades las organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones inhumanas de privación de libertad de adultos y niños en las instalaciones policiales en Nueva Loja, capital provincial.

Además recomienda que se implementen mecanismos de coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) y la Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos-Ecuador (Foise), puesto que 20 comunidades y centros educativos comunitarios kichwa se encuentran en la línea de frontera. Del mismo modo cree que es necesario coordinar mejor con el Frente de Defensa de la Amazonia que está presidido por el alcalde Máximo Abad; Leonardo Ordoñez, defensor del pueblo de Sucumbíos; Luis Bermeo, prefecto provincial; un representante de las Cámaras de Industria, Comercio y Turismo; delegados de la Policía, Fuerza Aérea, Marina y Ejército. De igual manera, debería procederse con las organizaciones especializadas en la defensa y protección de la ecología, por el impacto ambiental en las zonas asignadas para los campos de refugiados.

De la Vega asegura que el Estado, la sociedad civil ecuatoriana y la comunidad internacional, pueden enfrentar esta crisis humanitaria en las zonas de frontera, en el marco de una política pública de transparencia, cooperación y ayuda mutua, en el que predominen los principios y normas constitucionales, las libertades públicas, el derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, la paz y

la solución alternativa de conflictos como sistema de convivencia. Los militares ecuatorianos serán los encargados de trasladar los refugiados a los albergues que se instalarán para recibirlos en Sucumbíos. Para eso colocarán puestos de control militar en lugares de posible llegada masiva como La Punta, el puente sobre el río San Miguel, los Tetetes (en donde se incrementó la migración en los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2000), y Cantagallo. “No es que vamos a poner a cada kilómetro una caseta de control, sino solamente en sitios estratégicos –aseguran las autoridades del gobierno central–. Para ello, necesitamos equipos de comunicación, helicópteros –si las circunstancias lo ameritan– para sacar rápido a la gente de la zona del conflicto”. Este trabajo se planificará desde Quito, a través de la Unidad Ejecutora del Norte.

El obispo de Sucumbíos, Gonzalo López, se muestra en desacuerdo con la instalación de un campamento para desplazados como propone el Plan de Contingencia, porque lo considera degradante. “Nos gustaría que si eso ocurriera no se implantaran campamentos, así como se dice, para recoger a un mundo de apestados, sino que fueran las propias estructuras existentes en la sociedad las que pudieran darle a esa desgracia un sesgo humanitario”, asegura el religioso. Su planteamiento es utilizar centros comunitarios existentes en la zona, que se podrían adecuar para la emergencia. “Tenemos en la zona Colombia un centro de comunidades con finca y todo, por qué no consultar a las comunidades: ¿Están dispuestas a recibir a un grupo de 100 familias? Que es diferente a decir: les vamos a instalar un campamento donde van a tener agua potable y listo”. Según el obispo, la iglesia de Sucumbíos trabaja por una participación ciudadana en la solución de la crisis humanitaria que se produzca. “Nuestra mentalidad –dice– es que ojalá sepamos acoger a los refugiados, si nos vemos obligados, como tiene que ser, como hermanos y como humanos, y no como elefantes blancos. Esta Iglesia ha estado siempre conviviendo de forma pacífica, porque así lo imponen cerca de 500 km de frontera. Ha sido una vida fraterna, positiva, constructiva”. López también apuesta a la neutralidad ecuatoriana y espera que Ecuador no se meta directamente en la guerra, para que no se llegue a un

nuevo Vietnam. “Deberíamos confiar en que el Ecuador tenga ese talante pacifista y que no se meta en más problemas. Si ya tenemos tres buenos batallones en Puerto El Carmen, aquí y en Santa Cecilia, que nos metan otro montón de militares sería hacer el juego a una cosa que no queremos que suceda”, argumenta. Máximo Abad coincide con el obispo y plantea que en lugar de crear los centros para refugiados “se fortalezcan los albergues que ya existen en las cabeceras parroquiales, dotándoles de sistemas de alcantarillado, agua potable y otras condiciones”.

Las autoridades locales de las provincias fronterizas con Colombia resolvieron por unanimidad en un encuentro realizado en septiembre, oponerse a la aplicación del Plan Colombia “por ser contrario a la Constitución del Ecuador, al derecho internacional, así como a los acuerdos de buena vecindad y no agresión, firmados entre Ecuador y Colombia”. También acordaron demandar del Congreso ecuatoriano la inmediata nulidad del convenio que cede a Base de Manta a Estados Unidos y rechazar la creación de la Unidad Ejecutora de Desarrollo del Norte, exigiendo que se fortalezcan los gobiernos locales. “Para que puedan cumplir los municipios y consejos provinciales con las obras locales es necesaria la entrega oportuna de los recursos presupuestarios que por ley nos corresponden”, dice Luis Bermeo. “Además decidieron crear el Comité de Coordinación de los gobiernos seccionales del Norte integrado por alcaldes y prefectos de las 5 provincias de la frontera Norte”. La instancia buscaría generar acciones de contingencia y desarrollo para la región que “vayan más allá de las repercusiones que deje el Plan Colombia”.

Noviembre 20 de 2000 (lunes). ¿Paramilitares en Sucumbíos? La Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habrían intentado en vano mantener una conversación con el gobierno ecuatoriano a través de su cancillería, para poner a su disposición cierta información reservada que manejan sobre la actuación de grupos paramilitares que estarían instalándose en Ecuador comprando fincas y propiedades, y buscarían involucrar a la guerrilla en supuestas acciones de sabotaje o atentados. Ese dato se correspondería con otro según el cual los paramilitares en

alianza con ciertos narcotraficantes buscarían trasladar el cultivo de la coca hacia la región amazónica del Ecuador. Las autoridades fronterizas también manejarían la información de que los paramilitares quieren instalarse en Sucumbíos para cortar el posible repliegue de la guerrilla y sus líneas de abastecimiento. En la línea de esa información estaría otra según la cual diversas personas que tendrían datos al respecto, estarían siendo amenazadas de muerte. A eso se suma las denuncias de la actuación de sicarios en la zona. Pocos días antes de iniciado el Plan Colombia, la noche del 20 de agosto, dos niños que vivían en las calles de Lago Agrio fueron asesinados con un tiro en la nuca y otro en el pecho.

Los médicos que recogieron los cuerpos, hicieron la autopsia y los enterraron, tras hacer la denuncia correspondiente fueron amenazados de muerte y recibieron un mensaje de que estaban en la mira de los paramilitares. Pedro, un campesino que pidió refugio en Ecuador, afirma que guerrilleros de las FARC le dijeron a un grupo de personas desplazadas del sur colombiano que si venían a Ecuador no se quedarán en Sucumbíos, porque ‘es zona paramilitar’. “Uno de los comandantes nos dijo que tratáramos de irnos a otra parte, mejor a la Sierra, porque aquí (en Sucumbíos) están los ‘paracos’ y en poco tiempo, si esto sigue así, será lugar de combates”, comenta Pedro, quien asegura que los paramilitares lo expulsaron junto con la familia de su finca en Putumayo.

Estas advertencias se conocieron unas semanas antes de que 40 hombres fuertemente armados secuestraron un helicóptero que transportaba funcionarios extranjeros de la compañía petrolera hispano-argentina Repsol-YPF, radicada en la provincia de Orellana, vecina de Sucumbíos y a 100 kilómetros de la frontera. El helicóptero fue encontrado un día después en territorio colombiano sin los pasajeros, aunque los dos tripulantes de nacionalidad francesa aparecieron en forma sorpresiva el lunes en Quito luego de haberse fugado de sus raptores, según informaron portavoces del gobierno. El vicepresidente y actual presidente en ejercicio del Ecuador, Pedro Pinto, en un principio atribuyó el secuestro a las FARC, porque el grupo se había presentado “ejecutando una acción en rechazo de la participación ecuatoriana en el Plan Colombia”. Pero el

comandante Joaquín Gómez, jefe del bloque sur de las FARC, principal guerrilla colombiana, aseguró que nada tenían que ver con el secuestro y confirmó la decisión de ese grupo de no intervenir militarmente en los países vecinos. Horas más tarde de que Gómez hiciera las declaraciones, fuentes del propio gobierno ecuatoriano deslindaron la responsabilidad de la guerrilla, tras lo cual surgió la versión de que el hecho habría sido protagonizado por delincuentes comunes, paramilitares o mercenarios internacionales.

El Grupo Civil de Monitoreo llamó a las autoridades ecuatorianas, a los mandos militares y al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a que se realice un levantamiento de información catastral en las riberas surorientales del río San Miguel, limítrofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar la información acerca de la adquisición de tierras en esa zona por parte de ciudadanos colombianos vinculados a las “Autodefensas Unidas de Colombia” de Carlos Castaño. Semanas antes de iniciado el Plan Colombia aumentó el control militar a los colombianos que llegan a los pueblos ubicados junto al río San Miguel, fronterizo entre Ecuador y Colombia, como General Farfán a 40 minutos de Lago Agrio, y Puerto El Carmen a seis horas de la capital provincial. Los militares ecuatorianos exigen la cédula y realizan un interrogatorio sobre los motivos del viaje, trabajo que realizan y tiempo de permanencia en el país. En esos pueblos también está prohibida la venta de gasolina, cemento y tanques de gas a los colombianos, y a los ecuatorianos se permite un tanque por familia. Según los militares la medida se debe a que la gasolina y el cemento se utilizan como precursores para procesar la coca y los tanques se usan como bombas para atacar objetivos militares.

El teniente coronel Felipe Burbano, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales N° 24 Rayo, hizo un llamado a la tranquilidad porque “la frontera con Colombia está resguardada con personal especializado en selva y en técnicas y tácticas de contrainsurgencia”, y enfatizó que no han “recibido refuerzos de ninguna otra unidad militar del país ni de Estados Unidos”. Agregó además que en la línea de frontera hay puestos avanzados de combate y destacamentos que realizan patrullajes

y operativos de control y seguridad fronteriza, así como la vigilancia a pozos petroleros tubos de transporte del crudo. Juan Berdales, sacerdote español que trabaja con la pastoral de Sucumbíos, se muestra preocupado por la guerra que se acerca. “La Iglesia ve con preocupación la actuación de algunos medios de comunicación, porque distorsionan las cosas. La verdad es que estamos preocupados por el Plan Colombia, pues no es un plan de desarrollo, sino de muerte para toda una zona y eso nos va a afectar a todos. Pero estamos abiertos a una solidaridad, si es que fuera necesaria, para acoger a nuestros hermanos colombianos”.

El martes 26 de septiembre de 2000, dos días antes de que los presidentes de Colombia y Ecuador, Andrés Pastrana y Gustavo Noboa, habilitaran un puente sobre el río San Miguel, construido años antes, el Ejército ecuatoriano detuvo un cargamento de municiones y explosivos que supuestamente se iban a utilizar para volar el puente. En el operativo fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. Al día siguiente algunas fuentes militares manejaban la posibilidad de trasladar la ceremonia al aeropuerto de Nueva Loja y en Quito, el comandante de la Policía, Mario Cevallos, aseguraba que los detenidos eran miembros de un grupo subversivo colombiano, que opera en la zona. También se manejaba la posibilidad de un montaje paramilitar para involucrar a la guerrilla.

Noviembre 27 de 2000 (lunes). ¿Limosnas a Ecuador para involucrarse en el Plan Colombia? De los US \$ 1.573 millones aportados por Estados Unidos al Plan Colombia, 47 irían directamente hacia Ecuador. A pesar de que, según fuentes del Ejército, ese dinero sería utilizado para controlar la entrada de guerrilleros al país sin contemplar rubros para desarrollo social fronterizo, en el ámbito militar es considerado insuficiente, lo que es visto por alguno como una limosna por involucrarse en el Plan. Por otra parte, para algunos observadores, la ayuda financiera prometida por Estados Unidos al nuevo gobierno del Ecuador, que asumió el 22 de enero tras el derrocamiento de Jamil Mahuad, habría sido condicionada a una participación activa en el Plan Colombia.

Primero llegó a Ecuador, en febrero de 2000, el Secretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Pickering, quien prometió al presidente Gustavo Noboa, ayuda financiera y habló “sobre la necesidad de una colaboración más estrecha en la región” para combatir al narcotráfico. También analizó el impacto del narcotráfico y la guerrilla en el país y la ‘colaboración’ norteamericana para desarrollar actividades de ‘prevención’. A principio de marzo llegaron a Ecuador Arturo Valenzuela, asistente del presidente Clinton; Peter Romero, secretario para América Latina del Departamento de Estado y Edwin Truman, secretario adjunto para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, quienes trajeron un mensaje de apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano.

Los tres emisarios respaldaron la dolarización de la economía ecuatoriana emprendida por Noboa y las privatizaciones que intenta implementar, y volvieron a prometer ayuda financiera, lo que para algunos analistas estaba estrechamente relacionado con la ‘necesidad’ de que Ecuador se involucrase más estrechamente en el conflicto colombiano. Casualmente, meses después con la llegada de los primeros préstamos de los organismos internacionales se profundizó el compromiso ecuatoriano con el Plan Colombia a través de las varias reuniones que mantuvieron los presidentes ecuatoriano y colombiano. El ex presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso ecuatoriano, Osvaldo Molestina, calificó como riesgoso y perjudicial que su país se involucre en un conflicto regional. “Si la ayuda financiera prometida por Estados Unidos a Ecuador forma parte del Plan Colombia estaríamos entrando en un juego peligroso”, dijo el diputado. Martín Corena, comandante del Bloque Sur de las FARC, con 2.500 hombres a sus órdenes, declaró a la cadena de televisión CNN, que si el gobierno del Ecuador sigue apoyando a Estados Unidos desde la Base de Manta será blanco militar. Según noticias de prensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que tiene conocimiento de esta ‘advertencia’, estaría preocupado con la posibilidad de enfrentamientos con la guerrilla colombiana.

Corena también denunció un plan norteamericano para atacar los campamentos de las FARC apoyados en las bases de Manta, y Tres Esquinas.

En la frontera del Ecuador con Colombia, la presencia de guerrilleros que cruzan para adquirir alimentos y trajes de combate es admitida por los pobladores de la zona y aceptada como una forma de ‘turismo no tradicional’ que genera divisas. Según datos de prensa se calcula que un alto porcentaje de la población de Sucumbíos, tiene relación directa o indirecta con la guerrilla y el narcotráfico.

El Ministro de Defensa, Hugo Unda, tras hacer un recorrido por esa provincia señaló que esa presencia en la zona es un “problema político y administrativo, que ha generado inseguridad en el área por falta de participación y apoyo estatal a las provincias amazónicas”. Hasta 1998, Ecuador era neutral ante los conflictos internos de otros países, incluido Colombia, pero eso cambió con la llegada de Estados Unidos a la Base de Manta. El canciller ecuatoriano, Heinz Moeller, mantiene que el hecho de cederla para “combatir el narcotráfico” es una obligación moral de todo país en favor de la juventud. “El acuerdo es irreversible y si es necesario más acuerdos no habrá reparos en firmarlos”, señaló orgulloso. Sin embargo aceptó desconocer las actividades que cumplirán 150 soldados norteamericanos que se instalarán en Manta, cuando el convenio entre los dos países “establece un tope máximo de 80 personas que pueden estar en la Base”. “Yo siempre entendí que la presencia de personal, en la Base de Manta y en términos rotativos, no puede exceder de 80”, dijo Moeller. También aseguró que si Ecuador no asume los riesgos que implica la lucha contra el narcotráfico, será inevitablemente víctima de él.

La inauguración del puente sobre el San Miguel y la posterior visita de Pastrana a Quito y Guayaquil, habría significado la aceptación ecuatoriana de involucrarse en el Plan Colombia y explícitamente el fin de la neutralidad. Pastrana se encargó de confirmar ese temor al asegurar: “A Ecuador le pedimos que nos ayude con la eliminación de armas y precursores químicos y la reducción de la oferta”. Heinz Moeller dijo que “Ecuador tiene que mantener un estado de constructiva alerta” y “desear intensamente” que el Plan “tenga éxito”. Informó también que se

reforzarían los controles militares en la frontera Norte para controlar el contrabando de químicos para procesar la coca y el tráfico de armas. Este operativo implica un mayor número de efectivos militares y policiales en la zona fronteriza con el Putumayo lo que estaría demostrando que Ecuador se transformaría en una especie de yunque donde se golpearía la guerrilla como parte de la estrategia de empujarla hacia el sur de Colombia. No obstante, el ministro aseguró que de parte del Ecuador “hay un apoyo político pero no apoyo militar” al Plan. También aseguró que decir que no quedan motivos de preocupación respecto al Plan Colombia sería irresponsable. Entre los resultados de la visita está el establecimiento de “un mecanismo permanente de comunicación fluida entre los dos gobiernos”, afirmó.

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Fernando Ramírez, dijo que las Fuerzas Militares y la Policía del Ecuador y Colombia actuarán en coordinación. Alfredo Molano Bravo, reconocido editorialista del diario *El Espectador* de Bogotá, que vive asilado en Europa debido a las amenazas paramilitares, analiza la participación ecuatoriana como un error histórico y señala que “Ecuador ha sido el único país de la región andino-amazónica que no ha estado comprometido con cultivos ilegales. Sin duda la Reforma Agraria, realizada por los militares y la Iglesia en los años sesenta, está en el origen de este milagro. Por eso parece tan injusto que hoy esté siendo involucrado paso a paso en nuestro conflicto”. Y más adelante enfatiza:

Tan asustado estará el gobierno ecuatoriano que tiene listo un Plan de Contingencia [verdadero Plan Ecuador], con características más militares que sociales. En dos palabras, se trata de defenderse de la invasión impidiendo que los refugiados lleguen a sembrar coca, a competir en rebusque con los nacionales –que bien negra la están viendo con el ajuste del FMI– o a crear bases de apoyo de las guerrillas o de los paracos. Tiene previsto el Plan de Contingencia –por valor de US \$ 2 millones– crear campamentos vigilados, donde nuestros compatriotas se pueden mover, pero no mucho; ‘limitadamente’ ha dicho el gobierno. Es decir una especie de campos de concentración. La partida aprobada por el Congreso americano destina US

\$ 30 millones para reforzar los efectos del Plan Colombia en Ecuador, y con esta coima comprometer a sus gobernantes a legitimar el desplazamiento forzado de campesinos colombianos.

En medio de ese contexto andino y colombiano, continúan las luchas sociales en Ecuador. Un nuevo levantamiento indígena se produce en enero de 2001, al cumplirse un año de la gran movilización anterior.

*Este libro se terminó de imprimir
en octubre de 2015, siendo
Director General de CIESPAL
Francisco SIERRA CABALLERO*

